

**UNIVERSIDAD DE MADRID**  
**FACULTAD DE DERECHO**



**TESIS DOCTORAL**

**Autonomía y fuentes del derecho comunitario  
centroamericano : la supranacionalidad en dicho derecho**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR  
PRESENTADA POR

**Julio Roberto Bermejo González**

**Madrid, 2015**

FACULTAD DE DERECHO

DIRECTOR

UNIVERSIDAD DE MADRID

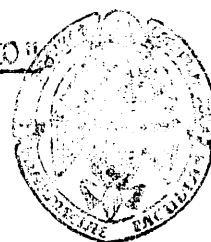
DR. LUIS GARCIA ARIAS

TESIS DOCTORAL

"AUTONOMIA Y FUENTES DEL DERECHO

COMUNITARIO CENTROAMERICANO. LA

SUPRANACIONALIDAD EN DICHO DERECHO"



BIBLIOTECA  
DE DERECHO

AUTOR

JULIO ROBERTO BERMEJO GONZALEZ

MADRID, ENERO DE 1970.



I N D I C E

Página.

<u>INTRODUCCION.</u> . . . . .	VII
--------------------------------	-----

TITULO IDE LOS DERECHOS INTERNACIONAL Y FEDERAL AL DERECHO  
COMUNITARIO.CAPITULO INOCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO INTERNACIONAL  
CONTEMPORANEO.

A) NOCIONES BASICAS DEL DERECHO INTERNACIONAL CON- TEMPORANEO. . . . .	1
a) EN RELACION A LOS SUJETOS. . . . .	1
b) LA SOCIEDAD INTERNACIONAL. . . . .	5
c) RELACIONES ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DE- RECHO INTERNO. . . . .	9

CAPITULO IIORIGEN INTERNACIONAL Y FEDERAL DEL DERECHO COMUNITA-  
RIO.

A) BREVE REFERENCIA AL SISTEMA DEL DERECHO FEDERAL Y A LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN EL MISMO	16
B) ORIGEN INTERNACIONAL DEL DERECHO COMUNITARIO...	20
C) DIFERENCIAS Y ANALOGIAS ENTRE EL DERECHO FEDE- RAL Y LOS DERECHOS INTERNACIONAL Y COMUNITARIO.	26

Página.

D) TRANSFORMACION DEL CONCEPTO DE SOBERANIA. ..	33
E) EL DERECHO PUBLICO CENTROAMERICANO. ....	54

TITULO IIDERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANOCAPITULO I.AUTONOMIA Y CARACTERISTICAS DE UN DERECHO COMUNITARIO.

A) ENFOQUE DOCTRINAL SOBRE SU REALIDAD Y AUTONOMIA. ....	65
B) CARACTERISTICAS DE UN DERECHO COMUNITARIO...	83

CAPITULO IIFUENTES DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO

A) CLASIFICACION DE LAS FUENTES. ....	92
B) LOS TRATADOS COMO FUENTE DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO. ....	95
a) VALOR DE LOS TRATADOS. ....	95
b) TRATADOS BASICOS. ....	101
c) CONCLUSION DE LOS TRATADOS. ....	103
1) EL PROBLEMA DE LA ADHESION. ....	119
2) LA CUESTION DE LAS RESERVAS. ....	123
3) LAS CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA. ....	124
4) LAS CLAUSULAS DE DESARROLLO EQUILIBRADO. ....	128

	<u>Página.</u>
d) APLICACION DE LOS TRATADOS. ....	131
e) DURACION Y DENUNCIA DE LOS TRATADOS. ....	136
f) INTERPRETACION DE LOS TRATADOS. ....	143
C) LOS REGLAMENTOS COMO FUENTE DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO. ....	163
a) EL PODER REGLAMENTARIO. ....	163
b) FORMACION Y VALOR DE LOS REGLAMENTOS. ...	167
D) LA ACTUACION DE LOS ORGANISMOS COMO FUENTE DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO. ...	173
a) OBSERVACIONES GENERALES. ....	173
b) PROCESO DE FORMACION DEL ACTO COMUNITARIO	179
c) LAS RESOLUCIONES DE LOS CONSEJOS COMO FUENTE DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO	186
d) LAS RECOMENDACIONES DE LOS CONSEJOS COMO FUENTE DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO. ....	193
e) AMBITOS DE VALIDEZ DE LOS ACTOS DE LOS ORGANOS COMUNITARIOS. ....	195
E) LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO COMO FUENTE DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO. ....	203
F) LA DOCTRINA COMO FUENTE DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO. ....	207

TITULO IIIPágina.LA SUPRANACIONALIDAD EN EL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO.CAPITULO IANTECEDENTES Y TEORIAS ACERCA DE LA SUPRANACIONALIDAD.

A) ANTECEDENTES DEL TERMINO SUPRANACIONAL. ....	210
B) TEORIAS ACERCA DE LA SUPRANACIONALIDAD .....	219
C) LA SUPRANACIONALIDAD Y LA SOBERANIA DE LOS ESTADOS.	264

CAPITULO IICOMPETENCIAS DE LOS ORGANOS COMUNITARIOS CENTROAMERICANOS.

A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA COMPETENCIA SUPRANACIONAL. ....	270
B) LAS COMPETENCIAS "IMPLICITAS" Y LAS COMPETENCIAS "INHERENTES". ....	280
C) LA COMPETENCIA REGLAMENTARIA: .....	285
a) COMPETENCIA REGLAMENTARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO.	287
b) COMPETENCIA REGLAMENTARIA DEL CONSEJO ECONOMICO CENTROAMERICANO. ....	292
D) LA COMPETENCIA NORMATIVA GENERAL. ....	294

	<u>Página.</u>
E) LA COMPETENCIA EJECUTIVA. ....	298
F) LA COMPETENCIA PARA EL ARREGLO DE CONTROVER- SIAS. ....	309
G) LA COMPETENCIA PARA VELAR POR LA INTEGRIDAD DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO. ....	340
CONCLUSIONES. ....	353
CITAS. ....	366
ANEXOS. ....	430
BIBLIOGRAFIA. ....	481

---

## I N T R O D U C C I O N

Nuestra profunda fe y esperanza en el destino integrado de Centro América nos ha impulsado a estudiar y dedicar nuestra Tesis Doctoral al análisis de ese aspecto, el jurídico, que está llamado a jugar un papel de singular importancia dentro del proceso integracionista centroamericano, no solo en su básico aspecto económico, sino en la amplia esfera de la cultura y en ese ideal supremo, tantas veces exaltado y también tantas veces vituperado, de la unión política.

Destacamos la posición de lo jurídico dentro de nuestro ideal de integración, porque la experiencia histórica nos ha demostrado que no puede pretenderse una integración duradera por los derroteros de la imposición hegemónica, sino que en todo caso, el movimiento de integración solo podrá concebirse con pretensiones de que perdure como un esfuerzo duradero y positivo, como un proceso voluntario y de derecho.

No puede dejar de mencionarse, a diferencia de lo que puede constituir este enfoque en procesos de integración como el europeo, que todo el mecanismo, estructura y funcionamiento de la integración hispanoamericana, y dentro de ésta la que constituye nuestro motivo de estudio, la centroamericana, debe y está llamada a cumplir, dentro del contexto del progreso general, una finalidad de desa-

rrollo nacional, en la que al mismo tiempo que pueden descubrirse horizontes más amplios de progreso regional, se alcancen niveles adecuados de desarrollo económico, social y cultural en las esferas más estrechas formadas por las áreas nacionales.

Las relaciones económicas entre los países se han caracterizado por una profunda evolución histórica, en las que las diferencias y semejanzas de tipo geográfico, extensión territorial, riquezas naturales, población, niveles de conocimiento técnico y desarrollo industrial, han determinado que las naciones comprendan y acepten que deben buscar relaciones económicas y culturales cada vez más estrechas, que les permitan satisfacer en mejor forma las crecientes necesidades humanas. Este cambio de mentalidad que se está produciendo, quizás en forma algunas veces lenta, pero decidida, puede permitir afirmar, que la estructuración de economías autárquicas de tipo tradicional es algo superado, y constituye un tipo de organización históricamente archivado.

Es ya una idea firme en el pensamiento de los grupos políticos y de los económica y culturalmente activos, que la interdependencia entre las naciones es algo incontrovertible, y que como consecuencia no solo debe superarse el aislacionismo, sino que también la fase de simple cooperación bilateral, insuficiente ésta para el cumplimiento de ciertas metas históricas, y que en un esfuerzo colectivo, coordinado y justamente equilibrado, se deben lanzar hacia la consecución de metas y realización de

proyectos comunes, que representen un beneficio y una posibilidad de desarrollo también común, en el que el hombre, razón e inspiración de estos esfuerzos, pueda alcanzar adecuados niveles de bienestar material y pleno ejercicio de sus derechos humanos, a través de una efectiva incorporación a la vida política, económica, cultural y social de cada uno de los países participantes en el esfuerzo regional.

La realización de lo anterior supone un estado mental, una conciencia especialmente acondicionada para recibir e impulsar el cambio y cuya primera manifestación a nivel de los Estados debe ser, la de crear especiales mecanismos regionales y adaptar sus instituciones jurídicas internas a los mecanismos que la nueva situación regional demande, lo cual supone, apartarse definitivamente de la concepción clásica de un Derecho individualista y asimismo, una fundamental transformación del concepto de soberanía, decidiéndose por la aceptación, en cuanto a su existencia y realización, de las metas propias del nuevo Derecho Comunitario, reconociendo no solo la existencia de este Derecho, sino creando la correspondiente estructura regional comunitaria. Constituye un imperativo, en tal orden de ideas, el reconocimiento y posibilidad de actuación de órganos e instituciones con competencias verdaderamente supranacionales, que puedan hacer posible, la formulación y subsiguiente ejecución al nivel de los Estados participantes, de los lineamientos de beneficio colectivo y proyección integracionista que en el seno de los mismos



se conciban.

No ignoramos los obstáculos y problemas que esto tiene planteado en su base, y dentro de ellos, la diversidad legislativa existente entre los países, lo que supone, que se determinen previamente dichas diversidades y en que medida las mismas afectan el logro de los objetivos comunitarios e integracionistas. Es evidente que los mejores esfuerzos en este aspecto, deben orientarse a hacer realidad una coordinación, armonización, aproximación y en la última instancia del esfuerzo integracionista, uniformar, no solo las legislaciones básicas existentes, sino algo más de singular importancia, como son las políticas económicas y sociales de los países.

Nuestra vocación jurídica y fundamentalmente nuestra preocupación por el éxito del proceso integracionista centroamericano, nos han impulsado a tratar de hacer un análisis de ciertos aspectos jurídicos e institucionales que consideramos de singular importancia.

A la anterior preocupación responde este estudio, en el que sin ninguna pretensión de decir la última palabra, exponemos una serie de ideas acerca de ese gran fenómeno regional que es la integración centroamericana y dentro de ésta, de aspectos singulares como es la autonomía científica del Derecho que rige los procesos integracionistas, las fuentes de donde emana la juridicidad comunitaria centroamericana y finalmente, el análisis de las varias formas de actuación de los diversos órganos e instituciones comunitarias creadas y el grado en que las mismas están dotadas de competencias supranacionales.

Quedaremos honrados y con sentimiento profundo de una misión cumplida, si este trabajo en algo contribuye al progreso del estudio de la interesante problemática de la integración centroamericana, o por lo menos, si estimula en alguien un afán de estudio e investigación de este singular fenómeno jurídico regional constituido por el Derecho Comunitario Centroamericano.

## TITULO I

### DE LOS DERECHOS INTERNACIONAL Y FEDERAL AL DERECHO COMUNI- TARIO.-

## CAPITULO I

### NOCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPO- RANEO.-

#### A) Nociones básicas del Derecho Internacional contemporáneo:

La delimitación del Derecho Internacional puede o-  
perarse estableciendo cuales son los sujetos del Derecho In-  
ternacional Público. En estas circunstancias puede definirse  
a este Derecho, en forma relativamente simple y general, co-  
mo "el conjunto de las reglas que determinan las relaciones  
entre los sujetos del Derecho Internacional Público".

Los sujetos constituyen una sociedad; el Derecho  
Internacional es el Derecho de esta sociedad, a la que se  
le designa también bajo la expresión "Comunidad Internacio-  
nal".

Ya con este encuadramiento será más sencillo pre-  
cisar los caracteres del Derecho Internacional Público,  
las diferencias que presenta en relación con el derecho in-  
terno y asimismo, las relaciones que existen entre ambos.

#### a) En relación a los sujetos.

Cuando se le atribuye a una entidad la calidad de  
sujeto de Derecho Internacional, es porque se le reconoce:

- 1) - Derechos y obligaciones definidas y sancionadas direc-  
tamente por el Derecho Internacional;
- 2) - Capacidad de participar, en cierta medida, en la crea-  
ción de reglas de Derecho Internacional Público.

De lo anterior se desprende, que sujetos del Derecho Internacional Público son los Estados y las demás entidades reconocidas por éstos como poseedoras de las calidades necesarias.

De lo expuesto se desprenden las siguientes consecuencias:

- 1) - Los Estados no solo son los sujetos originarios del Derecho Internacional, sino que en las relaciones internacionales actuales siguen siendo los sujetos principales;
- 2) - Dentro de ciertos límites y condiciones, los Estados han reconocido a las Organizaciones Internacionales como sujetos;
- 3) - El Derecho Internacional conoce sujetos de diferente naturaleza. A este respecto el Tribunal Internacional de Justicia <sup>(1)</sup> ha enunciado:

"En un sistema jurídico, los sujetos de Derecho no son necesariamente idénticos entre sí en cuanto a su naturaleza o a la extensión de sus derechos; y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad. El desarrollo del Derecho Internacional, en el transcurso de su historia, ha resultado influido por las exigencias de la vida internacional, de forma que el crecimiento progresivo de las actividades colectivas de los Estados ha hecho surgir

ejemplos de acción ejercida en el plano internacional por determinadas entidades que no son Estados. Este desarrollo desembocó, en Junio de 1945, en la creación de una organización internacional cuyos propósitos y principios se enuncian en la Carta de las Naciones Unidas. Para alcanzar esos propósitos, es indispensable que la organización tenga personalidad internacional".

4) - Cabe la interrogante siguiente: ¿Son los particulares sujetos del Derecho Internacional?. Esto ha suscitado innumerables controversias en las que se trata de ponerse de acuerdo sobre los efectos que se atribuyen a la calidad de sujetos de Derecho Internacional.

Las reglas internacionales pueden, muchas veces y sin mayor dificultad, definir derechos y obligaciones para los particulares. Pero estos derechos y obligaciones, ¿son siempre sancionadas directamente para los particulares por el Derecho Internacional?. En caso de necesidad de defensa de sus derechos el particular puede disponer efectivamente de tres medios:

- 1) - Puede dirigirse a los Tribunales locales del Estado culpable, después de haber agotado la vía administrativa: en este caso el medio es de derecho interno del Estado infractor.
- 2) - Puede dirigirse al Estado de que es nacional y señalarle el tratamiento de que es víctima: su Estado podrá actuar contra el Estado culpable, caso en el cual se ponen frente a frente dos Estados, dos sujetos de Derecho Internacional y la acción que se origina se registrará por el Derecho Internaciou

nal. El resultado que se obtenga, en este supuesto, no habrá sido obtenido directamente por el particular, sino de un modo mediato por el Derecho Internacional, por lo que tampoco puede afirmarse, que los derechos del particular hayan sido sancionados directamente por el Derecho Internacional.

3) - Una tercera vía de solución es, que exista una organización internacional que pueda asegurar la sanción del derecho del particular, caso en el cual, éste se dirigirá a ella para la defensa de su derecho. En nuestro criterio, solo en este caso se podrá hablar, efectivamente, de una sanción directa por el Derecho Internacional. No obstante la afirmación anterior, es preciso señalar, que las organizaciones internacionales solo existen si han sido creadas por los Estados, razón por la cual constituyen una excepción y además, la sanción que aportan es muchas veces imperfecta. Los derechos y obligaciones de los particulares pueden ser sancionados directamente por el Derecho Internacional, pero solo pueden serlo por mediación de una organización internacional (2).

En vía de resumen podemos señalar, que los particulares no son sujetos de Derecho Internacional, más que de un modo doblemente derivado en relación a los Estados; solo recurriendo a una organización internacional fundada por los Estados.

En cuanto a la interrogante ¿en qué medida participan los particulares en la creación de reglas de Derechos Internacionales?. A este respecto puede afirmarse, que si los particulares no son siempre titulares de derechos y obligaciones directamente sancionadas por el Derecho Internacio -

nal y no participan como tales en las relaciones regidas por el Derecho Internacional, tampoco tienen ocasión alguna de participar, de un modo u otro, en la creación de reglas de Derecho Internacional.

Sin embargo, los particulares ocupan un lugar considerable en el Derecho Internacional moderno, fenómeno que es susceptible de apreciarse en dos planos diferentes. En el plano de los valores, en el que se manifiesta un desarrollo de la solidaridad humana. También, en el plano de la técnica jurídica, en el que se caracteriza por un desarrollo del derecho convencional (3), de la institución de la protección diplomática (4); de la aparición de una sanción directa de los derechos y deberes de los particulares por el derecho internacional (5).

Es indudable que una de las contribuciones más importantes que ha hecho el derecho internacional al nacimiento de derecho comunitario, al que haremos amplia referencia más adelante, radica, en los derechos que disfrutaban y en las obligaciones y responsabilidades de que son sujetos en la actualidad los individuos (y también las organizaciones internacionales). En cuanto a los individuos, de la condición de mero objeto del derecho internacional que tenían en el pasado, han ido adquiriendo una personalidad internacional para determinados efectos (6).

#### b) La Sociedad Internacional.

Al tratar este tema lo primero que se plantea es la interrogante siguiente: ¿regulan los Estados con toda independencia sus relaciones internacionales, o, por el hecho de que constituyen una sociedad, se engendran directa --

mente obligaciones que se imponen a ellos? La aceptación del primer supuesto conduce a estimar que las relaciones internacionales no son más que una suma de ajustes individuales y que el derecho internacional es un "derecho de coordinación". Conforme el segundo supuesto, el derecho internacional deriva directamente del hecho de la existencia de una sociedad internacional a la que suele denominársele "comunidad internacional" y la que determina una cierta subordinación de los Estados a la misma. El derecho internacional actual, todavía manifiesta rasgos de conformación al primer supuesto. Sin embargo, la idea de la existencia de una comunidad internacional ha impactado decididamente en el campo del derecho internacional, lográndose avances, desarrollos y formas de organización, verdaderamente significativas. Ejemplos destacados los tenemos en la creación y funcionamiento de las Naciones Unidas, de las Comunidades Europeas y en los diversos procesos de integración que se están desarrollando en diversas zonas geográficas de nuestro planeta, dentro de los cuales menciono en forma destacada, por referirse a él este trabajo, el Mercado Común Centroamericano.

El derecho internacional, en algunas de sus líneas generales, sigue siendo un derecho de coordinación entre Estados. Como la comunidad internacional no está perfectamente organizada como tal, no existe autoridad superior a la de los Estados; no hay legislador, juez, ni fuerza pública ni ejecutiva internacional. Lo anterior no supone que los Estados no estén sometidos a ciertas reglas de derecho internacional, ni que algunas de sus diferencias no sean sometidas a un juez o que no exista coacción de carácter in-



ternacional, pero cuando tales situaciones se presentan, tienen su origen en actos voluntarios de los Estados. Lo anterior conduce a dos comprobaciones complementarias de una misma realidad:

- a) La soberanía de los Estados; y
- b) el carácter voluntario de las relaciones internacionales.

La soberanía no significa, en ningún momento, que los Estados no estén sujetos a las reglas del derecho internacional y tampoco, que estén facultados a determinar libremente sus atribuciones o sus competencias. Su significado exacto radica en que, dentro de la pirámide de grupos humanos, el Estado se encuentra en la cúspide. La afirmación anterior conduce necesariamente al sostenimiento del principio de la igualdad de los Estados.

Se han destacado corrientes de opinión tendientes a reemplazar la **expresión** soberanía por la de "independencia", la que comprendería la exclusividad, la independencia y la autonomía de las competencias del Estado.

La idea de que las relaciones internacionales están enteramente subordinadas a la voluntad del Estado, se manifiesta bajo los aspectos siguientes:

a) Las obligaciones jurídicas de los Estados tienen como fuente, normalmente, una manifestación de voluntad de los Estados. La costumbre y los acuerdos y tratados internacionales constituyen la fuente más abundante de las reglas internacionales;

b) la creación y mantenimiento de las relaciones diplomáticas, las que no dependen más que de la libre voluntad

de los Estados;

c) en derecho internacional no hay autoridad que pueda hacer patente, para todos los sujetos de derecho, la existencia de una regla o de una situación. Son los Estados los que hacen, por sí mismos, estas calificaciones, de las que constituyen una variedad singular los "reconocimientos", de Estados o de gobiernos. Una consecuencia de lo anterior es, la "relatividad" de las reglas y de las situaciones jurídicas, de donde se desprende que una situación puede perfectamente tener una existencia jurídica con relación a un Estado, pero no respecto a otro.

No obstante lo expuesto anteriormente, la práctica internacional pone de manifiesto que existe una cierta subordinación de los Estados a la comunidad internacional, derivado de su solidaridad de hecho, por la que se limitan los unos a los otros y por verse obligados a sufrir cambios en la sociedad internacional. En estos términos, se afirma, que la comunidad internacional es el fundamento de la coexistencia de los Estados y de su mutua solidaridad.

Un ejemplo de la práctica internacional se tiene, en el texto del artículo 30. inciso a) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (7), en el que se señala: "El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas". En esta norma se reconoce implícitamente la existencia de una comunidad internacional y además, se sitúa al derecho internacional, no entre los Estados, sino sobre ellos.

Se puede afirmar, que la validez y límites del orden jurídico de los Estados, deriva del derecho interna-

cional, como orden superior, el que realiza también, un reparto de competencias entre ellos, estableciéndoles "donde" y "cuando" deben actuar y en algunos casos, "como" deben actuar. Puede afirmarse además, que la solidaridad que existe entre los Estados ejerce una cierta coacción sobre los mismos y en virtud de ello es que muchas veces, los Estados se ven ante la necesidad o exigencia de acatar reglas o respetar situaciones que son absolutamente extrañas a su voluntad (8). En concordancia con esto llega a afirmarse, que la voluntad de los Estados no es la única fuente del derecho internacional, sino que una parte de éste deriva de la existencia misma de la Comunidad Internacional.

c) Relaciones entre Derecho Internacional y Derecho Interno.

Alrededor de este tema se han dado numerosas controversias de índole doctrinal. En esta parte nos limitaremos a hacer algunas observaciones.

La expresión "derecho interno" o "derecho nacional", expresa el conjunto de las reglas jurídicas impuestas por las autoridades de un Estado.

El derecho internacional rige, ante todo, en las relaciones entre colectividades; se funda, sobre todo, en la costumbre y en los acuerdos convencionales y su puesta en ejecución, normalmente, no está confiada a órganos diferenciados y conoce todavía sanciones colectivas primitivas. Por el contrario, los derechos nacionales rigen relaciones tanto individuales como colectivas; se fundan en una legislación autoritaria aplicada por organismos diferenciados y sancionada por medidas individuales.

La diferenciación anterior no es tan absoluta, ya que el derecho interno a veces presenta ciertos caracteres análogos a los del derecho internacional; por otra parte, el derecho internacional evoluciona y se aproxima parcialmente al derecho interno. Claro ejemplo del primer supuesto lo tenemos en el desarrollo de ciertas técnicas del derecho del trabajo. Respecto a la segunda situación, la aparición de organizaciones internacionales ha determinado el surgimiento de un derecho en forma legislativa y no ya convencional. Tal desarrollo ha tenido este aspecto, que ya se habla de un derecho "interno" de las organizaciones internacionales, caracterizado por reglamentos interiores, jurisdicción directa respecto a funcionarios internacionales, etcétera.

La esfera de aplicación del Derecho Internacional es, las relaciones entre Estados, de todos los Estados del mundo o de solo unos pocos; su esfera de validez se extiende a los sistemas jurídicos de varios estados.

Por el contrario, el Derecho interno no se aplica por el Estado de que emana más que en su propio territorio. En esta nota singular, consistente en que las reglas internacionales corresponden a intereses superiores a los nacionales, se funda la afirmación de la superioridad del Derecho Internacional sobre el Derecho interno de los Estados.

Sobre el tema de la relación entre el Derecho Internacional y el Derecho interno, Constantinesco (9) afirma lo siguiente:

"La tendencia generalmente aceptada hoy, así como la teoría monista con prioridad del Derecho Internacional, postulan en principio la superioridad del

derecho internacional sobre el derecho interno. Pero, por otra parte, el principio no está afirmado con toda claridad necesaria. Y por otra, faltan los procedimientos destinados a asegurar prácticamente ese principio. Así pues, por lo común, la norma de derecho interno contraria al derecho internacional convencional no es nula, pues no es en modo alguno excepcional que se instauren procedimientos destinados a anularla. Aunque asimilado a los actos ilícitos, susceptibles de acarrear sanciones en derecho internacional, la norma de derecho interno contraria continúa siendo válida, eficaz y ejecutiva en derecho interno. Naturalmente, el Estado lesionado podrá exigir la responsabilidad del Estado que haya violado los compromisos internacionales, ya que elaboró una ley contraria. Pero la sanción será indirecta, pues corresponderá siempre al Estado descubierta en falta el hacer que desaparezca la regla incriminada. Un procedimiento que permita al juez nacional o internacional anular dentro del ordenamiento interno la ley contraria a un tratado internacional, no se encuentra en este sistema fundado en la concepción dualista<sup>2</sup>.

Se señalan como caracteres comunes entre el derecho interno y el derecho internacional, que las fuentes materiales de ambos son idénticas y que los medios técnicos del derecho son siempre de la misma naturaleza. Las sociedades a las que ambos se aplican se influyen recíprocamente y su aplicación está confiada generalmente a los mismos hom

bres o a hombres que han tenido una formación común. No se duda tampoco, que el derecho internacional ha sido en una parte considerable elaborado con nociones y conceptos tomados de diferentes derechos internos, sobre todo, de aquellos que han tenido una proyección mundial.

Las reglas del derecho internacional, aún aquellas que crean derechos y obligaciones en provecho o a cargo de particulares, interesan y obligan a los Estados porque serán éstos, los que en la mayor parte del tiempo tendrán a su cargo asegurar su sanción.

Hay diferencias en la manera como las obligaciones del Estado se formulan, ya que unas veces, en virtud de tales compromisos, se obligan a adoptar dentro del derecho interno disposiciones cuyo contenido no había sido determinado de un modo preciso. En otros casos, los compromisos son redactados en tal forma que pueden dar lugar a una aplicación inmediata y directa. Estos últimos constituyen el grupo de compromisos a los que se les ha denominado auto-ejecutables o utilizando la expresión americana, self-executing. En uno y en otro, siempre es necesaria la formalidad previa, consistente en la publicación regular del compromiso internacional según las reglas constitucionales, legislativas o reglamentarias establecidas por el derecho interno. En algunos casos se ha establecido que la publicación estará asegurada por un órgano internacional.

Se plantea y se seguirá planteando en el futuro, el problema de la "recepción" del derecho internacional en el derecho interno, el que se caracteriza por un procedimiento destinado a hacer aplicable un acuerdo internacional res

pecto a autoridades administrativas, tribunales y particulares. Se señala, que la recepción transforma la naturaleza jurídica de las reglas y que la misma es necesaria para que una regla pase de un sistema a otro.

Los convenios internacionales, aún publicados, si guen siendo convenios de naturaleza internacional y esto conduce al problema de establecer, en caso de conflicto, si el juez interno debe dar la preferencia al derecho internacional sobre el derecho interno. La doctrina se esfuerza en afirmar que el derecho internacional es superior a toda regla de derecho interno, aún siendo esta constitucional. No obstante, son muchas las dudas y las incertidumbres que se plantean a este respecto y las soluciones que se dan al mismo, no presentan necesariamente un carácter lógico y dependen de las singulares tradiciones jurídicas de cada país.

Hace algún tiempo, uno de los problemas que originaban mayor discusión entre los internacionalistas era el suscitado por Triepel, en su célebre tratado "Völkerrecht und Landesrecht", de que el Derecho Internacional y el Derecho interno forman parte de dos sistemas jurídicos distintos e independientes entre sí, y que, por consiguiente, para que un tratado celebrado conforme a las reglas del Derecho de Gentes pudiera tener efectividad dentro de un Estado, se requería que las normas jurídicas del tratado fueran "transformadas" en derecho interno, mediante la actividad de los órganos de dicho Estado. La tesis dualista del jurisconsulto alemán ha sido casi generalmente abandonada, y dentro del respeto intelectual que subsiste por las ideas de Triepel, priva en la actualidad la tesis "monista", como criterio ma-

yoritario, o sea, que ambos derechos configuran un solo sistema jurídico. Las Constituciones Políticas de numerosos Estados así lo consignan expresamente (10).

También en una especie de resumen y para caracterizar más el estado actual de desarrollo del Derecho Internacional, lo que nos ha permitido dejar sentadas una serie de afirmaciones, señalamos lo siguiente:

- 1) - El Derecho Internacional ya no es un ordenamiento jurídico estrictamente "inter-estatal", ya que el Estado ha dejado en gran parte de monopolizar la condición de sujeto de derechos y obligaciones internacionales, ya que en la actualidad no solo es sujeto el Estado, sin que ello signifique que ha perdido su condición de sujeto principal, sino muchas entidades semisoberanas, las organizaciones y organismos internacionales y en cierta forma el individuo como tal, con independencia de su nacionalidad;
- 2) - El Derecho Internacional ya no regula, exclusivamente, las relaciones exteriores de los Estados, ya que en la actualidad el ámbito de aplicación de tal ordenamiento llega a muchos de los asuntos que anteriormente estaban reservados a la jurisdicción interna de los Estados, amparados en el llamado "dominio reservado de los Estados"; asimismo, su ámbito de aplicación llega a las relaciones multilaterales que, dada su condición de miembros de organizaciones internacionales, se efectúan entre los Estados. No puede ignorarse el hecho, de que las dos cuestiones antes señaladas, tienen una acentuada incidencia en la soberanía interna de los Estados y asimismo, en la proyección de la misma hacia el exterior, ya que no solo, en cierta forma, está invadiendo



do la esfera interna de los Estados, por la gradual y progresiva "internacionalización" de muchas relaciones y actividades; también, porque está regulando ese nuevo tipo de relaciones exteriores que tienen los Estados, determinadas precisamente por el fenómeno de la organización internacional;

3) - el derecho internacional tampoco es ya totalmente un derecho de simple coordinación de la voluntad de los Estados, sino que se representa como un sistema normativo que no solo coordina voluntades sino contiene normas que rigen su conducta objetivamente, es decir, independientemente de su voluntad o consentimiento. Este desarrollo no llega a hacer innecesario el consentimiento de los Estados en la elaboración, aceptación y ejecución de las nuevas normas;

4) - ha dejado también de ser un derecho esencialmente individualista, concebido para proteger únicamente intereses nacionales, sino a través de sus nuevos sistemas normativos protege también, los intereses comunes en la paz y la seguridad, en las relaciones económicas y comerciales, en el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, etc.;

5) - finalmente, el derecho internacional de nuestro tiempo ya no es un derecho inorgánico, caracterizado por una estructura institucional subdesarrollado y débil, sino que por el contrario, básicamente a partir de la segunda guerra mundial, está dotado de una estructura institucional desarrollada que le asegura una mayor eficacia en la aplicación de sus normas. Algo significativo y destacado en este aspecto, es el esfuerzo e interés decidido que se manifiesta a diversos niveles, para dotar a órganos internacionales de competencias "supranacionales".

## CAPITULO II

### ORIGEN INTERNACIONAL Y FEDERAL DEL DERECHO COMUNITARIO

#### A) Breve referencia al sistema del Derecho Federal y a la distribución de competencias en el mismo.

Entre el ordenamiento jurídico de un proceso de integración económica y el correspondiente al sistema del derecho federal, existen ciertas analogías y coincidencias, aunque no en la intensidad de las que existen en las relaciones entre el derecho de un proceso de integración y el derecho internacional. Lo anterior hace decir a Catalano (11), refiriéndose a las Comunidades Europeas, que si bien es cierto que no se les puede comparar con verdaderos Estados Federales, las mismas se asemejan mucho más a estructuras de tipo federal que a estructuras del tipo de las uniones internacionales.

Es indudable, que las analogías y coincidencias referidas pueden ser más acentuadas cuando se está frente a un proceso acabado de constitución de un verdadero "derecho comunitario", tal como ocurre en el caso de la "Europa de los Seis" (12), y en un grado bastante menor, en el caso de la integración que se está produciendo en Centroamérica.

Las federaciones han sido caracterizadas como asociaciones de Estados bajo el derecho constitucional. Esto significa que los Estados miembros de esa Asociación carecen de personalidad jurídica internacional, es decir, de los atributos de Estados soberanos desde el punto de vista interna-

cional, es decir, que las relaciones entre los mismos y el centro de poder común no se rigen por normas de derecho internacional, sino por normas de derecho interno, las que regulan la estructura y el funcionamiento de dicha asociación, constituyendo un solo ordenamiento jurídico. En razón de lo anterior, no puede plantearse en el seno de la organización federal la cuestión de derecho internacional referente a la "incorporación" o "transformación" de normas. En el campo del derecho federal no es posible concebir dos ordenamientos jurídicos distintos y separados, uno interno de cada Estado miembro y otro externo o internacional que rija la asociación por ellos mismos constituida. Lo que en realidad existe, son dos centros de producción de normas con competencias constitucionalmente distribuidas. La adjudicación de competencias tiene como fuente expresa o implícita la Constitución Federal, que está en la cúspide del ordenamiento jurídico de la federación y cuya cohesión, armonía y eficacia se aseguran por los principios de competencia, de supremacía federal y de preferencia o prioridad federal.

La distribución de poderes entre el gobierno central y los de los Estados miembros figura en principio en la Constitución Federal. Es propio de algunas constituciones federales, que algunas de sus disposiciones tengan carácter negativo. Así se definen generalmente los poderes que están prohibidos a los Estados, los que están prohibidos al gobierno federal y los que están prohibidos a ambos; asimismo, los derechos expresamente retenidos o reservados por el pueblo. También, se establecen los poderes correspondientes al gobierno federal, a los Estados miembros y los comunes a ambos e igual

mente, los poderes que solamente pueden ser ejercidos por el gobierno federal, los que son ejercidos por los Estados en concurrencia con el gobierno federal y los que son ejercidos exclusivamente por el primero.

En cada Estado miembro de la Federación, se aplican directamente como parte de la legislación del mismo, las normas y actos de autoridad federales emanados del gobierno federal conforme a las competencias asignadas, y las normas y actos de autoridad estatales dictados en ejercicio de las competencias reservadas o atribuidas en forma exclusiva a los Estados (13).

La superioridad del derecho federal sobre el derecho particular de los Estados miembros, constituye un principio fundamental que resulta de la naturaleza de las cosas y de la superioridad del Estado Central.

De la anterior relación de superioridad se siguen dos ideas fundamentales:

- a) Que la regla jurídica perteneciente al ordenamiento jurídico superior no debe ser conforme al ordenamiento jurídico inferior. El corolario es que el orden jurídico inferior no puede controlar ni debilitar una norma perteneciente al ordenamiento jurídico superior.
- b) Que una norma que forme parte del ordenamiento jurídico inferior, puede ser invalidada o anulada en el caso de que fuere contraria a las disposiciones del ordenamiento jurídico superior.

El sistema federal ajusta y encauza su funcionamiento por aplicación de los principios de supremacía y de preferencia o prioridad federales. La consagración del prin

cipio vertebral es la jerarquía del ordenamiento jurídico, cuya efectividad queda preservada mediante adecuados mecanismos institucionales, encuentra una clara manifestación en la redacción del párrafo segundo del artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, el que literalmente dice:

"La presente Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de ella se aprobaren y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la suprema ley del país. Los jueces de cada Estado estarán obligados a observarla aún cuando hubiere alguna disposición en contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado".

En opinión de Constantinesco<sup>(14)</sup>, el problema de las relaciones entre el derecho federal y el derecho de los Estados miembros se resuelve mediante varios principios y procedimientos que se pueden esquematizar de la manera siguiente:

- a) La superioridad del derecho federal sobre el derecho particular de los Estados miembros está habitualmente afirmada por una distribución general de las competencias entre ambos o mediante atribuciones expresas y explícitas de determinadas competencias específicas;
- b) dicha superioridad del derecho federal sobre el derecho particular está asegurada, merced a un procedimiento judicial que permite a una instancia judicial precisa, anular la ley posterior de los Estados miembros que fuese contraria a las disposiciones del derecho federal;

c) el derecho federal no es superior al derecho particular de los Estados miembros, a condición de que éste sea legal, esto es, de que sea conforme a la Constitución federal. Un procedimiento de control constitucional asegura la conformidad del derecho federal a la Constitución.

Para Constantinesco, cualesquiera que sean las variantes y las combinaciones posibles, lo esencial de las relaciones entre derecho federal y derecho particular de los Estados miembros se reduce aproximadamente al esquema antes indicado.

#### B) Origen internacional del Derecho Comunitario.

El ordenamiento jurídico de un proceso de integración económica no configura un sistema de derecho totalmente nuevo, ni tampoco, es autónomo por completo de otros sistemas normativos. Cualquiera que sea su naturaleza o el grado de desarrollo que haya alcanzado, bien por su existencia misma, bien por su estructura y funcionamiento o por las técnicas que emplee, presenta relaciones y evidentes analogías con otros sistemas jurídicos, principalmente el Derecho Internacional Público y el Derecho Federal.

Los procesos de integración son, esencialmente, una expresión moderna de las relaciones internacionales; igualmente, de relaciones federales, ésto último cuando los procesos han evolucionado hacia etapas más avanzadas. Es por esta circunstancia, que ambos sistemas jurídicos están en condiciones de aportar conceptos y principios, técnicas y procedimientos susceptibles de aplicarse o de adaptarse a los ordenamientos jurídicos de integración que se formulen.

En ningún momento puede dejarse al margen la consideración, de que los procesos de integración tienen un aspecto, esencialmente, económico. Sin perjuicio de los factores históricos, culturales, geográficos o de otra índole que puedan considerarse en cada caso, el grado de cohesión que muestre una determinada comunidad dependerá del carácter e intensidad de los vínculos en que descansa; es decir, de la mayor o menor identidad existente entre los intereses de sus miembros.

Evidentemente, existe una distinción básica entre las comunidades de que arrancan los procesos de integración actuales y las de tipo tradicional, y que no siempre, ni únicamente, radica en el grado de identidad de los intereses de sus miembros o en la intensidad de los vínculos que los unen, sino en la naturaleza misma de la comunidad. La integración es en definitiva, un fenómeno que conlleva la idea de la compenetración y fusión de intereses y no solo, la de una mera complementación y coordinación de los mismos.

La diferenciación hecha anteriormente, determina fuertes impactos en las comunidades, no solo en el marco institucional, sino en sus respectivos ordenamientos jurídicos; es decir, se manifiestan las diferencias en las formas que adopta la organización misma de la comunidad, sus modalidades estructurales y el fundamento mismo de las actuaciones. Sin embargo, tales diferencias no siempre resaltan al comparar un tipo de comunidad con otro, ya que en algunos casos, por ejemplo, el marco institucional de un proceso de integración puede presentar un grado de desarro-

llo y fortalecimiento superior, igual o inferior al que presenta una agrupación constituida con otros objetivos.

Es oportuno señalar, que la estructura y funcionamiento institucional de una organización federal presenta ciertas características de similitud con los correspondientes a los procesos de integración. Se señala<sup>(15)</sup>, que a este respecto debe tenerse presente la distinción entre la "federación", el "federalismo" como proceso y la "técnica federal". La primera es una forma que adopta la organización estatal; la segunda, es la expresión de la dinámica de un fenómeno político-jurídico, que no necesariamente desemboca en la creación de un Estado federal; la tercera, es ciertos principios, mecanismos y procedimientos que sirven para asegurar la realización de los objetivos federativos. Dentro de este orden de ideas, se llega a entender a la federación como una forma acabada de federalismo, pero no es la única forma de manifestación de éste. En opinión de Hay<sup>(16)</sup>, la característica común en la organización federativa radica, en constituir una fórmula que persigue solucionar la tensión entre dos tendencias, una hacia la diversidad y otra hacia la unidad.

Cabe también hacer una ligera referencia a las formas que adopta la organización u organismos internacionales en la actualidad. Puede hacerse en base de tres criterios:

- 1) atendiendo a su composición: universales y regionales;
- 2) según su carácter: intergubernamentales, mixtos y no gubernamentales o privadas;
- 3) según sus finalidades: generales y especializados.



Como organización universal y general, el caso más característico es el de la Organización de las Naciones Unidas<sup>(17)</sup>. Como organizaciones regionales, que generalmente responden a razones geográficas, políticas, militares, cultu-  
rales o económicas, podemos citar: la Organización de Esta-  
dos Americanos (18), la Organización de Estados Centroameri-  
canos (19), la Organización de la Unidad Africana (20), la  
Comunidad Económica Europea (21), La Asociación Latinoameri-  
cana de Libre Comercio (22), el Mercado Común Centroamerica-  
no (23), la instituida por el Tratado del Atlántico Norte  
(24), y por el Tratado de Defensa Mutua (25) y muchas otras  
más, ya que a partir de la conclusión de la segunda guerra  
mundial se acentuó la labor de creación de organizaciones  
internacionales, con finalidades diversas, (26), universa-  
les o regionales, la mayor parte intergubernamentales y a  
veces con un alto grado de especialización en cuanto a las  
funciones y esferas de actividad.

No obstante las singulares excepciones, a las que  
nos referimos más adelante en este trabajo, la forma tradi-  
cional d organización internacional es la intergubernamen-  
tal, que se destaca, básicamente, por sus relaciones de coo-  
peración y coordinación de actividades. Una rara excepción  
de organización internacional mixta es la Organización In-  
ternacional del Trabajo (O.I.T.) (27), que si bien fué crea-  
da por los Estados, en su funcionamiento participan repre-  
sentantes laborales y de las Empresas de los países miem-  
bros. En las últimas décadas han tomado también un especial  
desarrollo las organizaciones no gubernamentales, las que  
constituyen una efectiva expresión de cosmopolitismo y que

por vínculos estrechos que mantienen con los organismos intergubernamentales y sus actividades que rebasan muchas veces los límites puramente nacionales, necesariamente se vinculan y aproximan a las actividades que se desarrollan en un proceso de integración.

En el curso de las diversas etapas de construcción y fortalecimiento de los diversos procesos de integración, principalmente los operados en la esfera de América Latina, se han puesto de manifiesto, por parte de sectores diversos, una infundada resistencia y apostión a la aceptación de algunos principios que se consideran básicos en los ordenamientos jurídicos por los que se han de regir los diversos procesos de integración, principalmente aquellos que se proponen impulsar los procesos hacia etapas más avanzadas de desarrollo y que indudablemente tienen su origen en principios y nociones muy propias del derecho internacional o del derecho federal. Respecto a éste último haremos algunas referencias especiales más adelante.

Las observaciones hechas anteriormente pueden impulsar a dudar acerca de la autonomía del derecho de la integración o derecho comunitario, respecto del derecho internacional.

La autonomía del derecho propio de un proceso de integración o derecho comunitario, como usualmente se le denomina, no debe enfocarse como que si ~~se~~ tratara de un derecho completamente nuevo y diferente, ya que en tal caso, se plantearían situaciones y problemas jurídicos que requerirían soluciones también nuevas y diferentes de las que se han aceptado en épocas pretéritas. En la naturaleza

y alcance de las competencias atribuidas a algunos órganos en los distintos procesos de integración radica, precisamente, uno de los pilares básicos de lo que ha provocado la aparición del derecho comunitario. No obstante, si se admite que este nuevo derecho supone el recurso a nuevas y diferentes soluciones, también habría que admitir que dichas soluciones tienen su origen en principios e instituciones del derecho internacional y que el fundamento de su validez coincide, en esencia, con el de éste.

Desde tres enfoques distintos pueden plantearse las relaciones entre el derecho internacional y el nuevo derecho comunitario <sup>(28)</sup>. El primer enfoque que podría llamarse "internacionalista", sería el de quienes conciben al derecho comunitario como un desarrollo y fortalecimiento de determinadas ramas e instituciones del derecho internacional. En el enfoque que podría llamarse "comunitario", se admite, solo por vía de excepción, la existencia de algunas relaciones estrechas entre el derecho comunitario y el ordenamiento internacional, tal como el hecho de que el derecho comunitario arranca de un tratado de tipo tradicional, o las relaciones de las organizaciones comunitarias con terceros Estados, organizaciones internacionales o particulares ajenos a ellas, ya que éstas son relaciones que trascienden la esfera de aplicación del derecho comunitario. Conforme a un tercer enfoque, de naturaleza indudablemente ecléctica, el derecho comunitario aparece como una nueva proyección del derecho internacional, de tal magnitud que está constituyendo un desprendimiento del mismo. Se hace la salvedad, que no es la primera vez que este fenómeno ocu

re en el derecho internacional y en otras disciplinas jurídicas, ya que en virtud de un proceso de gradual desprendimiento y emancipación han llegado a surgir otros. En relación al mismo Derecho Internacional se quiere destacar otro caso, indudablemente menos acabado y completo que el caso del derecho comunitario que ya se ha apartado en un grado apreciable del derecho internacional, y es, el que pretende llamarse "Derecho de las organizaciones internacionales".

El derecho internacional, no solo por ser anterior al derecho comunitario, sino por haber abarcado un vasto campo de acción, continuará contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de los ordenamientos jurídicos de los procesos de integración, ya que se seguirán manifestando relaciones y analogías, tales como las referentes a la estructura y competencias de los órganos, a los sujetos de derechos y obligaciones, a la esfera de validez del ordenamiento jurídico, etc. Cualquiera de los enfoques que se han reseñado puede ser teóricamente correcto, pero se señala (29), que solo el ecléctico permitirá adoptar una posición constructiva para el derecho comunitario.

#### C) Diferencias y Analogías entre el Derecho Federal y los Derechos Internacional y Comunitario.

Con base en lo expuesto anteriormente, podemos establecer una serie caracterizante de diferencias entre el derecho internacional y analogías y diferencias entre el primero y el derecho propio de un proceso de integración, principalmente de aquellos que han logrado niveles más altos de desarrollo. Podemos resumirlos en la forma siguiente:

- a) En relación al derecho internacional, el derecho federal es un derecho interno.
- b) En cuanto al ámbito de aplicación, el derecho federal tiene una esfera de aplicación coercitiva limitada al territorio de un solo Estado. En cambio, un derecho comunitario, que sin lugar a dudas es básicamente internacional, tiene un ámbito de aplicación que se extiende al territorio de varios Estados. Algunos autores señalan, que el derecho comunitario no es otra cosa más que el "derecho interno de una Comunidad de Estados"<sup>(30)</sup>. Interpretando en forma global el pensamiento de la mayoría de los que defienden esta definición, nos permite concluir que la expresión "comunidad de Estados", es entendida como una específica forma de organización internacional, con lo cual, no se excluye el aspecto básicamente internacional que se le asigna al derecho comunitario.
- c) El derecho federal, siendo derecho interno, debe interpretarse conforme a reglas y criterios de derecho constitucional, que no siempre son iguales a los principios que rigen la interpretación de las normas jurídicas internacionales. En este aspecto, las características propias del derecho comunitario imponen soluciones o fórmulas que presentan analogías con las usadas por los intérpretes del derecho federal.
- d) El alcance de la competencia normativa de los órganos comunitarios y el carácter supraconstitucional de los tratados mismos, ésto referido especialmente a las Comunidades Europeas, caracteres ambos que dan lugar a la inserción del orden jurídico comunitario en los órdenes jurídicos nacionales, plantea problemas de armonización de los órdenes ju-

rídicos, que coinciden con los que se presentan en el sistema federal. Respecto a la "interpretación federal" que pretende darse a la estructura comunitaria, Pescatore<sup>(31)</sup> manifiesta:

"En efecto, no hay duda de que la realización de las Comunidades Europeas ha determinado la creación en las relaciones entre las Comunidades y los miembros de ellas, de situaciones típicas de la organización federal: nos referimos a la distribución de las competencias y los poderes entre el nivel central (representado aquí por las instituciones comunitarias) y el nivel descentralizado: en este caso, los Estados miembros. Esa distribución de las competencias implica necesariamente problemas en lo que atañe a la delimitación entre las esferas de las atribuciones respectivas, la participación de las autoridades nacionales en la vida de las instituciones comunitarias, la ingerencia, por el contrario, de las autoridades comunitarias en la vida nacional, con las posibilidades de conflictos que ello implica. Ahora bien, es precisamente todo eso, es decir, esa distribución de los poderes entre el nivel central y el nivel local, así como la articulación de los órdenes de autonomías, lo que constituye lo esencial de la estructura federal. Por esa razón se pueden establecer numerosas analogías entre los problemas que encaran las Comunidades y la experiencia del federalismo. Este estado de cosas explica por qué el funcionamiento de los mecanismos comunitarios lo comprenden mu-

cho más fácilmente aquellos que pueden contar con una experiencia práctica, o al menos con un conocimiento teórico, de los problemas federales, que quienes no están habituados a pensar más que en las categorías de estructuras centralizadas".

e) En cuanto al problema de la armonización entre los sistemas jurídicos, entre el derecho nacional y el internacional se resuelve mediante la aplicación del principio de jerarquía; en el sistema federal, la armonía se asegura a través del mismo principio de jerarquía, complementado con otro. La aplicación efectiva del principio jerárquico se resuelve, en el primero caso, en una cuestión de responsabilidad internacional y en el segundo, se traduce en una cuestión de anulación o de inconstitucionalidad. Las consecuencias son distintas, pues, en el primer caso se tiende solo a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el acto u omisión imputable al Estado. En el segundo, se tiende a la restitución a la situación jurídica anterior.

En este campo de la armonización del orden jurídico existe una gran analogía entre los sistemas de derecho federal y de derecho comunitario, ya que también en éste, se preserva la jerarquía del ordenamiento comunitario ante los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, mediante mecanismos de restitución jurídica; además, tratándose de un ordenamiento integrado en los órdenes jurídicos nacionales, asegura su armonía y cohesión aplicando, aunque con distinto alcance y formulación, otros principios que no tienen aplicación en el orden internacional, como son el de com-

petencia, prioridad federal y fidelidad federal. En la esfera comunitaria, al igual que en el campo federal, se produce una distribución de competencias y un orden de prioridades que tienen su fuente originaria en los instrumentos constitutivos del proceso de integración.

Sobre la cuestión de las analogías entre el sistema comunitario y el federal, el profesor Pescatore<sup>(32)</sup> da una interesante y delimitadora opinión. Al efecto, refiriéndose a las Comunidades europeas, señala:

"El hecho de que haya evidentes analogías entre el sistema comunitario y el régimen federal, no debe inducirnos a establecer una ecuación entre las comunidades y los Estados federales. En efecto, no hay que perder de vista el hecho de que en las Comunidades la plenitud de las atribuciones estatales continúa perteneciendo siempre a los Estados miembros; las Comunidades, como organismos especializados fundados sobre el principio de una atribución limitativa de las competencias y los poderes, no gozan de prerrogativas suficientemente amplias para que pueda aplicárseles el calificativo de estatales, con la plenitud de competencias y de poderes que dicho calificativo comporta. En los Estados federales la distribución de las competencias es tal, que las competencias vitales para la existencia del Estado-- fuerza pública, defensa, finanzas, relaciones exteriores, etc.- están en gran parte concentradas en manos del poder federal, que puede, por tanto, encontrar con una muy distinta plenitud de poderes a



las entidades federadas".

Continúa manifestando Pescatore:

"si las Comunidades participan del federalismo, es más bien por analogía que por identificación. O mejor: las Comunidades Europeas son una aplicación del federalismo concebido como espíritu y como método, pero no del federalismo tal como tiene él su expresión en la organización de los Estados Federales. En una palabra se trata de una forma de federalismo que pertenece todavía al Derecho Internacional".

Según Hallstein<sup>(33)</sup>, interpretando la voluntad de sus fundadores, la Comunidad Económica Europea debe ser parte de una obra de edificación destinada a conducir a una federación, en virtud de considerar que es ya una entidad de carácter prefederal, lo que en su opinión se prueba partiendo de la estructura de su constitución. Señala además Hallstein, que en el ámbito de su competencia, el derecho comunitario europeo debe prevalecer sobre los derechos nacionales, por ser un derecho de carácter superior.

Gatalano<sup>(34)</sup>, al afirmar que los órganos jurídicos de los Estados miembros se caracterizan: a) por un conjunto de normas idénticas contenidas en los Tratados o en las medidas normativas dictadas por las instituciones comunitarias, concernientes a las materias conferidas a la competencia de las Comunidades; b) por un conjunto de normas armónicas dictadas por los Estados miembros, ya sea en ejecución de "órdenes" o en aplicación de obligaciones que les incumben en vir-

tud de las disposiciones de los Tratados; c) finalmente, por un conjunto de normas (que son aún las más numerosas y ciertamente no menos importantes), no idénticas y no necesariamente armónicas que rigen las materias que no conciernen ni directa ni indirectamente a la integración económica europea; se permite afirmar:

"tal situación excepcional y original caracteriza la estructura de tipo federal originada por la creación de las Comunidades europeas. La diferencia esencial con una estructura federal completa reside en el hecho de que el orden jurídico comunitario constituye una excepción a los órdenes jurídicos nacional autónomos, mientras que en un sistema federal clásico la base del orden jurídico es de naturaleza federal, y los órdenes jurídicos autónomos constituyen la excepción en relación al orden jurídico federal".

f) Una diferenciación de singular importancia entre los tres ordenamientos: el internacional, el federal y el comunitario, se establece en razón de los sujetos de derecho de cada uno de ellos. En el primero, los sujetos principales son los Estados, las Organizaciones internacionales y en menor grado los individuos. En el segundo, como derecho interno que es, los individuos desempeñan un papel más importante como sujetos de derecho, tanto del que emana del poder federal central, como del que emana de los poderes estatales; tiene así el derecho federal, una permanente y directa aplicación a los individuos sometidos a la jurisdicción del Estado federal. En el derecho comunitario, principalmente en el europeo

y en menor grado en el centroamericano, es frecuente el fenómeno de aplicación directa e inmediata de las decisiones comunitarias, sin pasar por el tamiz de los órganos legislativos nacionales. Esto constituye una de sus características más destacadas y es en lo que mayormente se funda la afirmación de que es un derecho que se encuentra a mitad del camino entre el derecho federal y el derecho internacional.

D) Transformación del concepto de la Soberanía.

Uno de los más valiosos aportes que el derecho internacional ha hecho en los últimos tiempos al ordenamiento jurídico de los procesos de integración es, esa profunda transformación que se ha experimentado en el concepto de la soberanía, entendida como el conjunto de atributos esenciales inherentes a la personalidad misma del Estado, en la que todo deber y toda limitación debía contar con el consentimiento del mismo y en el que era el propio Estado quien se autolimitaba y obligaba, pudiendo conducir sus asuntos internos y externos libre de toda ingerencia o restricción exterior que no hubiese consentido, se ha modificado sustancialmente. Ya el concepto de la soberanía y el sistema del derecho internacional mismo, ya no gravitan al servicio exclusivo del interés nacional, ya que el aparecimiento de las nociones del "interés general" y más aún la del "interés comunitario", y la comprensión y conciencia del valor social y político de tales nociones, han determinado la desaparición o mengua de tales afectaciones. No obstante, que el concepto tradicional de la soberanía continuó gravitando con cierta fuerza en la doctrina de los publicistas, en la opinión de grandes sectores populares y en el pensamiento y actuar

~~de la soberanía, que se conforma en mayor grado a las nuevas orientaciones y tendencias del Derecho Internacional en general y del ordenamiento jurídico de las Organizaciones internacionales y de los procesos de integración en particular.~~

En el discurso de inauguración de la Mesa Redonda, que para tratar problemas de la integración de América Latina se realizó en Bogotá, Colombia, en 1967, el Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país<sup>(35)</sup> se permitió señalar:

"En el mundo contemporáneo se contempla una verdadera y radical transformación de los conceptos jurídicos y políticos tradicionales en materia de soberanía y de las competencias de los poderes nacionales en cuanto a su órbita de acción internacional, todo lo cual ya ha producido efectos contractuales que vinculan y comprometen a los Estados". Dentro de la concepción moderna trata de entenderse a la soberanía, no ya como una cualidad inherente a la personalidad del Estado, sino como una especie de "competencia" <sup>78</sup>regida por el Derecho Internacional. Bajo tal orden de ideas se afirma<sup>(36)</sup>, que la soberanía, en su concepción moderna, presenta dos aspectos que deben destacarse:

a) que en lugar de ponerse tanto énfasis en los llamados derechos "fundamentales" del Estado, el interés se coloca en el de sus deberes y responsabilidades. Lo anterior se evidencia con la simple lectura del artículo 2.º de la Carta de las Naciones Unidas, que hace referencia a las obligaciones de los Estados miembros; también, al leerse el Capítulo IV de la Carta de la Organización de los Estados America-

nos, que hace referencia a los derechos y deberes fundamentales de los Estados;

b) que la concepción de la institución del "dominio reservado" o de la "jurisdicción interna" de los Estados, expresión ésta última que se usa en los modernos instrumentos internacionales, ya es enteramente distinta de aquella que le sirvió de origen. Se cita como ejemplo, las interpretaciones que se han dado al artículo 2 . párrafo 7 . de la Carta de las Naciones Unidas, que han estado siempre guiadas por el criterio de que la cláusula relativa a los asuntos que son "esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados", no ha impedido, jurídicamente, el desempeño de las funciones confiadas a los órganos de la Organización, ya que se aplica el criterio de que la aplicabilidad de la referida excepción ya no depende del juicio y la decisión del órgano que esté conociendo del asunto en cuestión.

Ante la interrogante de si el sistema comunitario es compatible con la soberanía nacional o si mas bien representa una superación de esa noción, es factible hacer dos observaciones:

1) La primera, es que pueden considerarse las relaciones entre el sistema comunitario y la soberanía nacional en dos niveles distintos. Si se considera a la soberanía como suma de las competencias ejercidas por un Estado independiente, tendrá que decirse que la atribución de las competencias y los poderes a las Comunidades que se formen implicará una restricción correspondiente a la autonomía de la acción de los Estados miembros, ya que se concretarían ciertas materias sobre las cuales los Estados miembros no podrían

disponer unilateralmente, sino solo dentro del marco de una voluntad colectiva; habrían además, reglas jurídicas que se impondrían en el territorio nacional fuera de las fuentes del derecho estatal, constitución, ley, jurisprudencia y costumbres nacionales, así como también, orientaciones y hasta resoluciones obligatorias que emanarían de las comunidades, a las cuales los Estados miembros tienen que ajustar, según los casos, su política, su acción legislativa y su administración nacional.

Si se encara el problema de la soberanía en un nivel más fundamental, allí donde tienen lugar las grandes opciones políticas que determinan el futuro de una nación, las grandes resoluciones acerca de los intereses esenciales del Estado, allí, sobre todo, donde se concibe la soberanía como libre disposición del aparato del poder público, hay que reconocer, sin duda que, pese a su adhesión a una Comunidad, los Estados miembros han retenido en sus manos lo esencial de su poder soberano.

A este respecto cabe hacer alusión al pensamiento de Pescatore<sup>(37)</sup>, quien señala, refiriéndose a las Comunidades Europeas, lo siguiente:

"Las Comunidades Europeas, no obstante la autonomía propia que les ha sido otorgada y aún a despecho incluso, de los límites que imponen ellas a la autonomía de los países miembros, continúan siendo fundamentalmente organismos de Estados soberanos. Cabe formular la misma verdad elemental diciendo que los Estados miembros, al aceptar que se someterán al ordenamiento jurídico de las Comunidades, tal como re-

sulta a la vez de los ~~tratados~~ y de los actos institucionales y tal como está sancionado por la jurisdicción de la Corte comunitaria, han conservado, sin embargo, los medios de potencia necesarios para poder colocarse, en una situación extrema fuera del ordenamiento comunitario. La reciente "crisis europea" lo ha demostrado de un modo indiscutible. Evidentemente, si esa posibilidad se actualiza, la esencia misma de las Comunidades se pone en tela de juicio. Esa virtualidad, no aparente ni reconocida en tiempo normal, influye inconscientemente sobre la marcha de los asuntos comunitarios, ya que las Comunidades no pueden disponer de los Estados miembros con la misma autoridad soberana de que hace uso un Estado al disponer de sus corporaciones territoriales y de sus súbditos".

El Continente Hispanoamericano y dentro de éste Centro América, no obstante la aspiración de una reestructuración de la nación centroamericana que se manifiesta en la mayoría de los textos constitucionales, está dividido entre Estados que tienen un alto concepto de la soberanía y de su independencia nacional. Lo mismo sucede con las Comunidades europeas, que están formadas por Estados que se caracterizan por una fuerte personalidad histórica, cultural y política a la cual, a nuestro juicio, salvo los giros imprevisibles de la historia, no piensan en modo alguno renunciar. La distribución de competencias y poderes definida por los Tratados europeos, desarrollada a causa de innumerables actos institucionales que han intervenido después, aunque a juicio de



muchos estudiosos de este gran fenómeno comunitario esté lejos de representar un estado ideal de cosas, tiene el mérito de permitir a los Estados participar en una obra de importancia vital para ellos sin renunciar por eso a su personalidad política. Sin lugar a dudas, mediante un paciente esfuerzo de ajuste mutuo, los Estados asociados han logrado un equilibrio que les permite situarse, aún conservando lo esencial de su existencia nacional, en el ámbito de un orden económico y jurídico que les permite cosechar los frutos de su pertenencia a un conjunto más poderoso y más próspero de lo que pudieran ser las respectivas naciones particulares.

En opinión del propio Pescatore (38), el problema de si las Comunidades europeas son compatibles con la soberanía nacional, es lo que él denomina un "falso problema", ya que el real es un problema de construcción práctica, donde se trata de ver como se puede hacer que entren en un conjunto más vasto, en cuanto a su extensión geográfica y en cuanto a sus objetivos, unos Estados que desean conservar el principio de su soberanía; en su opinión, la solución está en el fenómeno y organización misma de las Comunidades.

Opina Hallstein (39) a este respecto, refiriéndose a la Comunidad Económica Europea, que solo el tratado de Roma es el fundamento de validez del derecho comunitario y que solo él establece los límites y que la Comunidad no es la delegataria de seis soberanías nacionales, sino que es una entidad política dotada de derechos propios y creada por los Estados miembros de acuerdo a sus Constituciones respectivas.



Además, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (40), señala en una sentencia, que la Comunidad - constituye un nuevo orden jurídico de Derecho Internacional en beneficio del cual los Estados, aunque dentro de campos restringidos, han limitado sus derechos soberanos.

La misma Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (41), afirma en otra sentencia, que la transferencia de poderes efectuada por los Estados, de su orden jurídico interno a favor del orden jurídico de la Comunidad y de los derechos y obligaciones correspondientes a las disposiciones del tratado, entrañan, una limitación definitiva de sus derechos soberanos. En otra parte de la misma sentencia se afirma:

"Al establecer una Comunidad de duración ilimitada, dotada de instituciones propias, de personalidad, - de capacidad jurídica, de capacidad de representación internacional y, lo que es más, de poderes positivos resultantes de una limitación de competencia o de una transferencia de poderes de los Estados a la Comunidad, éstos limitan sus derechos soberanos y crean así un cuerpo de derecho aplicable a sus nacionales y a sí mismos".

El mismo criterio contenido en la sentencia antes citada, es sostenido por la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo (42), la que afirma que:

"la atribución de competencias a las Comunidades ya ha producido una transferencia apreciable de los - poderes de los órganos constitucionales internos a los órganos de la Comunidad".

Haciendo referencia a una verdadera "sustitución" del derecho nacional de los Estados miembros por el derecho propio de la Comunidad, Lagrange (43), expresa lo siguientes

"En los Tratados Europeos, el problema surge también del hecho de las transferencias de competencia emergentes de éstos tratados, en sectores completos, a favor de las Comunidades y sus instituciones que operan dentro del marco de un orden jurídico propio. No se trata de una primacía en el sentido de una "jerarquía" entre un derecho comunitario preeminente y derechos nacionales subordinados, sino de una "sustitución" del derecho nacional por el derecho propio de la Comunidad en los campos en que las transferencias de competencia se han realizado".

Refiriéndose a este problema y concretando sus comentarios a las competencias que a las Comunidades europeas se atribuyen en los Tratados correspondientes, Catalano (44), sostiene el criterio siguiente:

"Mediante dichos Tratados se realiza una transferencia de los Estados miembros a las Comunidades, y especialmente atribuyen a éstos nuevas competencias. Las competencias transferidas o atribuidas ex-novo son por este hecho sustraídas - en principio al menos - a la competencia soberana de los Estados miembros".

Lo anterior constituye a juicio de Catalano - Ex Juez de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas -, una limitación a los poderes normativos propios de los órga

nos constitucionales de los Estados miembros, y en consecuencia, una derogación de las reglas constitucionales aplicables.

Los procesos de interacción ponen, sin lugar a dudas, en evidencia la contradicción entre la doctrina clásica de la soberanía del Estado y la concepción moderna de la soberanía y de la comunidad internacional.

La época presente marca un jalón de complicación de las relaciones interestatales, dentro de las cuales se tiende cada vez más a limitar la autoridad y la autonomía de los Estados, al punto que los instrumentos de relación entre los mismos, aunque teóricamente descansan en la voluntad de los Estados, en la práctica limitan la soberanía de los mismos. Sobre esto fácilmente podemos observar ejemplos en las Comunidades europeas y con un grado de menor intensidad, en el marco mismo del Mercado Común Centroamericano.

En un pequeño pero interesante trabajo, Gaudet - (45) - Director General del Servicio Jurídico de los Ejecutivos de las Comunidades Europeas -, señala que el establecimiento de las Comunidades Europeas resultó de un acto diplomático clásico mediante el cual los Estados contratantes se obligaron recíprocamente con el objeto de mejorar las relaciones internacionales, especialmente por medio de la creación de una organización común con la capacidad de actuar en determinados asuntos. Gaudet, refiriéndose a la soberanía - afirma:

"La soberanía de los Estados se ejerce mediante la libre adhesión a un sistema de obligaciones mutuas

y con un objetivo común.

Gaudet, sostiene también que la originalidad de las Comunidades Europeas no consiste en privar de las prerrogativas esenciales de soberanía a los Estados miembros, ya que la competencia y composición de los órganos comunes, no menoscaban la autonomía política de los Estados miembros.

No está demás señalar, que también se manifiestan limitaciones a la soberanía de los Estados por el hecho mismo del agrupamiento mundial de los países en bloques. Ni los países socialistas pueden negar esto en relación a la Unión Soviética, ni los países llamados del mundo occidental, principalmente los subdesarrollados y dentro de éstos los Estados Centroamericanos tienen clara conciencia de ello, en relación a la política internacional de los Estados Unidos de Norteamérica.

No puede dejar de mencionarse el hecho, de que la aparición misma de los grandes fenómenos de organización internacional, tal como fueron, primero, el de la Sociedad de las Naciones y después, el de la Organización de las Naciones Unidas, han determinado situaciones de verdadera limitación de la soberanía de los Estados en muchos aspectos.

En definitiva, en la época actual, la soberanía clásica de los Estados está en un proceso debilitante debido al desarrollo alcanzado por las organizaciones internacionales y los diversos procesos de integración, pero ese debilitamiento, no significa, en modo alguno, desaparición. Si bien es cierto, que la soberanía absoluta del Estado ha perdido vigencia, también lo es, que las diversas modalidades de organización de la comunidad internacional y de los

procesos de integración en sus diversas modalidades, económica, social, cultural o política, son aún débiles como para constituir una fuerza eficaz de control o de dominio de los Estados, los que sin embargo, han sufrido mengua en todos aquellos aspectos de expresión de un poder absoluto.

La llamada "Mesa Redonda de Bogotá" (46), celebrada en Febrero de 1967, con gran acierto recogió dentro de sus conclusiones dos conceptos básicos para el desarrollo del derecho comunitario, como son, el relativo a la existencia de un "ordenamiento jurídico comunitario", con el que creemos se rebasan ciertos límites que podría suponer el ordenamiento internacional general, universal o regional y se supera el concepto de interés "general", sustituyéndolo por el de interés "comunitario", a efectos de poder concebir en mejor forma, la idea de soberanía nacional y la de supranacionalidad. El segundo, es el relativo al nuevo concepto de la soberanía, que estimamos necesario para poder concebir el funcionamiento eficaz de un ordenamiento comunitario, no solo centroamericano, sino hispanoamericano, a efecto de poder lograr, a través de su aplicación, una protección más efectiva de los intereses involucrados en un proceso de integración, lo que únicamente se logra estableciendo un sistema que permita establecer, valga la redundancia, limitaciones al ejercicio de la soberanía sin el consentimiento de los Estados. Al efecto, dos de dichas conclusiones señalan:

- "1) Las disposiciones constitucionales latinoamericanas vigentes que rigen la actuación internacional del Estado no son incompatibles, en materia de prin

cipios, con la atribución a organismos internacionales de competencias para tomar decisiones "erga omnes", en asuntos relacionados con el ordenamiento económico y social comunitario latinoamericano que se contempla;

2) La atribución de competencias de esa naturaleza a tales organismos en condiciones de igualdad y reciprocidad, lejos de menoscabar o afectar en modo alguno la soberanía nacional, que todas las Constituciones latinoamericanas proclaman, configura, por sí misma, un acto típicamente soberano, propio del ejercicio coincidente de la soberanía de varios Estados para beneficio común de sus pueblos".

Este nuevo concepto de la soberanía y sus nuevas modalidades de ejercicio, permite concebir y asegurar la validez y jerarquía de los actos que realicen los órganos de un proceso de integración, al aplicar éstos las normas y principios de esa nueva modalidad jurídica que indudablemente es el derecho comunitario.

A la altura del desarrollo de este punto referente a la transformación del concepto de la soberanía, estimamos oportuno hacer una ligera confrontación del espíritu y forma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el vigente Derecho Constitucional de los países Centroamericanos. Cada una de las Constituciones Centroamericanas contiene disposiciones que hacen referencia a la soberanía del Estado y a sus diversas modalidades y formas de ejercicio<sup>(47)</sup>.

De la simple lectura de las normas constitucionales contenidas en los artículos 29. de la Constitución de Guatemala, 109 de la Constitución de El Salvador, 69 de la Constitución de Nicaragua y 94. de la Constitución de Honduras (la Constitución de Costa Rica no recoge preceptos con tener similar), se llega a la conclusión, de que son normas inspiradas en un amplio espíritu de confraternidad centroamericana y que recogen todo un ideal y aspiración de una reestructuración de la perdida unidad política centroamericana y que en definitiva puede constituir, el basamento filosófico-jurídico en el que el legislador centroamericano pueda ampararse para impulsar la construcción de un más eficaz programa integracionista o la reorientación del actual hacia metas de mejor porvenir comunitario (48).

Además, del simple análisis de los preceptos correspondientes, se llega, con cierta facilidad, al convencimiento de que en el ámbito de derecho constitucional centroamericano se ha optado por el principio de la independencia nacional y la doctrina clásica de la soberanía del Estado, recogiendo además, los procedimientos clásicos para la elaboración, discusión y ratificación de los tratados.

Respecto a lo anterior constituye ya una excepción, en algunos aspectos, la Constitución de Costa Rica, ya que por virtud de la Ley número 4123 de 30 de Mayo de 1968, que dió una nueva redacción a los artículos 7 y 121, dicha Constitución se incorporó al grupo de Constituciones que tienden a admitir la posibilidad de transferencia de competencias a órganos representativos de organizaciones regionales comunitarias. Con esta reforma, la Constitución de Costa Rica se



coloca a la vanguardia del movimiento centroamericano de reforma constitucional, el que es ya una necesidad, a efecto de que puedan crearse o remodelarse a nivel comunitario, las instituciones y mecanismos que el avance del proceso integracionista exige.

Del análisis del Tratado General de Integración Económica Centroamericana<sup>(49)</sup> puede afirmarse, que en sus disposiciones se contienen limitaciones esenciales a la soberanía de los Estados contratantes, razón por la cual, jurídicamente, el proceso de integración centroamericana debe considerarse como un proceso limitativo de la soberanía de los Estados. La cita de algunos preceptos dará mayor claridad y énfasis a esta afirmación. Al efectos:

El artículo V señala:

"Las mercancías que gocen de los beneficios estipulados en este Tratado, deberán estar amparadas por un formulario aduanero firmado por el exportador que contenga la declaración de origen y que se sujetará a la visa de los funcionarios de aduana de los países de expedición y de destino, conforme se establece en el Anexo B del presente Tratado. Cuando hubiere duda sobre el origen de una mercancía y no se hubiese resuelto el problema por gestión bilateral, cualquiera de las partes afectadas podrá pedir la intervención del Consejo Ejecutivo para que éste verifique el origen de dicha mercancía. El Consejo no considerará como productos originarios de una de las Partes contratantes aquéllos que siendo originarios de o manufacturados en un tercer país



sólo son simplemente armados, empacados, envasados, cortados o diluídos en el país exportador.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior no se impedirá la importación de la mercancía de que se trate, siempre que se otorgue fianza que garantice al país importador el pago de los impuestos y otros recargos que podría causar la importación. La fianza se hará efectiva o se cancelará, en su caso, cuando se resuelva en definitiva el problema suscitado.

El Consejo Ejecutivo establecerá, mediante reglamento, el procedimiento a seguir para determinar el origen de la mercancía\*.

#### El artículo VI preceptúa:

\*Cuando los productos objeto de intercambio estén sujetos a impuestos, arbitrios u otras contribuciones internas de cualquier clase, que recaigan sobre la producción, la venta, la distribución o el consumo en uno de los países signatarios, dicho país podrá gravar con igual monto a las mercancías de la misma naturaleza que se importen de otro Estado contratante, en cuyo caso deberá gravar también por lo menos en igual monto y por los mismos conceptos, la importación procedente de terceros países.

Las Partes contratantes convienen en que el establecimiento de los impuestos internos al consumo deberá ajustarse a los siguientes términos:

- a) Podrán establecerse por el monto que se estime necesario cuando exista producción interna del artí-

- culo en cuestión, o cuando no exista producción de dicho artículo en ninguno de los Estados signatarios;
- b) Cuando no exista producción de un artículo en una de las Partes contratantes, pero sí en cualquiera de las demás, la primera no podrá establecer impuestos al consumo sobre dicho artículo, salvo previa resolución favorable del Consejo Ejecutivo;
- c) Cuando una de las Partes haya establecido un impuesto interno al consumo y posteriormente se iniciare en cualquiera de las demás la producción del artículo así gravado, sin existir esa producción en la Parte que estableció el impuesto, el Consejo Ejecutivo, a solicitud del interesado, conocerá el caso y dictaminará si la existencia del impuesto es compatible con el libre comercio. Los Estados se comprometen a eliminar, de acuerdo con sus procedimientos legales, dichos impuestos al consumo mediante la sola notificación en ese sentido del Consejo E.

El artículo IX establece:

"Los Gobiernos de los Estados signatarios no otorgarán exenciones ni reducciones de derechos aduaneros a la importación procedente de fuera de Centroamérica para artículos producidos en los Estados contratantes en condiciones adecuadas.

Cuando un Estado signatario se considere afectado por el otorgamiento de franquicias aduaneras a

la importación o por importaciones gubernamentales que no se destinen para uso propio del Gobierno o de sus instituciones, podrá someter el problema al Consejo Ejecutivo, el cual lo estudiará y dictará resolución sobre el particular".

El párrafo 1º del artículo XI señala:

"Ninguno de los Estados signatarios concederá, directa o indirectamente, subsidios a la exportación de mercancías destinadas al territorio de los otros Estados, ni establecerá o mantendrá sistemas cuyo resultado sea la venta de determinada mercancía, para su exportación a otro Estado contratante, a un precio inferior al establecido para la venta de dicha mercancía en el mercado nacional, tomando debidamente en cuenta las diferencias en las condiciones y términos de venta y tributación, así como los demás factores que influyen en la comparación de los precios".

El párrafo 1º del artículo XIII preceptúa:

"Si alguna de las Partes contratantes considerara que existen prácticas de comercio desleal no comprendidas en el Artículo XI, no podrá impedir el intercambio por decisión unilateral, debiendo presentar el problema a la consideración del Consejo Ejecutivo para que éste dictamine si en efecto se está incurriendo en tales prácticas. El Consejo rendirá un dictamen en un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de recibo de la comunicación respectiva".

El párrafo 1º. del artículo XV señala:

"Cada uno de los Estados contratantes mantendrá plena libertad de tránsito a través de su territorio para las mercancías destinadas a cualquiera de los otros Estados signatarios o procedentes de ellos, así como para los vehículos que transporten tales mercancías".

La parte pertinente del artículo XVII establece:

"acuerdan suscribir, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Tratado, protocolos adicionales en los que se estipulen las plantas industriales que inicialmente serán amparadas por el mismo, el régimen de libre comercio que le es aplicable a sus productos y las demás condiciones previstas en el Artículo III de dicho Convenio".

El artículo XXV preceptúa:

"Los Estados signatarios convienen en no suscribir unilateralmente con países no centroamericanos nuevos tratados que afecten los principios de la integración económica centroamericana. Asimismo convienen en mantener la "Cláusula Centroamericana de Excepción" en los tratados comerciales que celebren sobre la base del tratamiento de nación más favorecida con países distintos a los Estados contratantes".

El artículo XXVIII señala:

"Las Partes contratantes convienen en efectuar con-

sultas en el Consejo Ejecutivo, con anterioridad a la suscripción entre ellas de nuevos tratados que afecten el libre comercio.

El Consejo Ejecutivo analizará el caso y determinará los efectos que podría tener la celebración de dichos convenios sobre el régimen de libre comercio establecido en el presente Tratado. Con base en el estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo la Parte que se considere afectada por la celebración de esos nuevos tratados podrá adoptar las medidas que el Consejo recomiende a fin de salvaguardar sus intereses".

El artículo XXIX establece:

"Para los efectos de reglamentación aduanera relacionados con el libre comercio, el tránsito de mercancías y la aplicación del Arancel Centroamericano Uniforme a la Importación, las Partes contratantes suscribirán dentro de un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en vigencia del presente Tratado, protocolos especiales mediante los cuales se adopte un Código Aduanero Uniforme Centroamericano y los reglamentos necesarios de transporte".

Al fijarse las atribuciones correspondientes a los órganos, se establecen normas que indudablemente constituyen limitaciones al libre actuar soberano de los Estados contratantes.

El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, establece tres órganos principales: el Consejo Económico Centroamericano, el Consejo Ejecutivo y la Se -

cretaría Permanente. Asus funciones hacen referencia los artículos del XX al XXIV. En resumen, las funcones de cada uno son las siguientes:

- a) Del Consejo Económico Centroamericano: dirigir la integración de las economías centroamericanas y coordinar la política en materia económica de los Estados contratantes;
- b) del Consejo Ejecutivo: aplicar y administrar el Tratado, realizar todas las gestiones y trabajos que tengan por objeto llevar la práctica la unión económica de Centroamérica, dictar las medidas que sean necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos mediante el Tratado, resolver los problemas que se susciten con motivo de su aplicación y proponer a los Gobiernos la suscripción de los convenios multilaterales que adicionalmente se requiera para alcanzar los fines de la integración económica e inclusivo sive una unión aduanera entre sus territorios;
- c) de la Secretaría Permanente: velar por la correcta aplicación del Tratado General y de todos los demás Tratados, protocolos o Convenios, anteriores o posteriores; interpretar supletoriamente los convenios, suscritos o que se suscribieren, que tengan por objeto la integración económica - centroamericana y cuya interpretación no esté específicamente encomendada a algún otro organismo; velar por el cumplimiento de las resoluciones del Consejo Económico Centroamericano y del Consejo Ejecutivo; ejercer las funciones que le delegue el Consejo Ejecutivo; y, la realización de los trabajos y estudios que le encomienden el Consejo Ejecutivo y el Consejo Económico Centroamericano.

Con las funciones atribuídas a los órganos referid

dos, los Estados Centroamericanos contratantes se colocan, indudablemente, ante una nueva modalidad de creación del derecho, que sin lugar a dudas conducirá, paulatinamente y con los ajustes que el mismo proceso integracionista exija, y en esto somos optimistas, a la estructuración de un definido derecho comunitario centroamericano.

Así tenemos, que la clásica forma de iniciativa legislativa recogida en las Constituciones de los Estados Centroamericanos, se ve considerablemente ampliada al atribuírsele esa misma facultad a un órgano administrativo de la integración como es el Consejo Ejecutivo. Además, conforme la mecánica prevista para el ejercicio de esta facultad de iniciativa legislativa, los órganos propiamente legislativos de los Estados, han de limitarse a aprobar o rechazar los tratados y convenios que el Consejo Ejecutivo haya propuesto, no teniendo en la práctica, participación en la fase de preparación y discusión de los mismos.

Debe agregarse, además, que los tres órganos y - especialmente el Consejo Ejecutivo, tienen facultades legislativas. Al efecto, el conjunto de reglamentos y resoluciones que se han dictado, constituyen un verdadero derecho nuevo, de aplicación general, que ha sido el instrumento jurídico dinámico y eficaz que ha impulsado la integración centroamericana, aunque a tal labor, fundadamente, puedan hacerse planteamientos de crítica ciertos, referidos no solo a un mayor otorgamiento de esa facultad a los órganos del programa de integración, sino al grado de obligatoriedad y garantía de cumplimiento de las disposiciones normativas que dicten.

Más adelante, haremos referencia nuevamente a la interesante cuestión de la soberanía y su relación con el principio de la supranacionalidad, cuya aceptación y aplicación es una exigencia que impone la marcha y desarrollo de los actuales procesos integracionistas.

E) El Derecho Público Centroamericano.

El Cuerpo Jurídico contractual del Programa de Integración Centroamericana, arrancó definitivamente con el sistema normativo que establecen el Tratado General de Integración, suscrito en Managua, Nicaragua, el 13 de Diciembre de 1960 y los demás instrumentos, unos anteriores y - otros posteriores a aquel (50).

Valiosos antecedentes acerca de la naturaleza y fuentes del orden jurídico regional actual se encuentran en documentos y tratados que ya están entrando a la historia de Centroamérica y es por ello conveniente y oportuno hacer una ligera referencia a éstos, porque el conocimiento de los mismos, permitirá comprender, en mejor forma, lo que es en la etapa actual el ordenamiento jurídico de la integración centroamericana.

En el artículo XXIV del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica<sup>(51)</sup>, suscrito por los representantes de los cinco países centroamericanos en Tegucigalpa, Honduras, el 10 de Junio de 1958, se estipula:

"Declaran las Partes contratantes que el espíritu que las anima en la celebración del presente Tratado es el de un mayor acercamiento como Estados de Centroamérica regidos en la actualidad por los prin



cipios especiales de un derecho público centroamericano".

Para tratar de encontrar una explicación y justificación a la referencia en el Tratado a esos principios y a ese derecho, se tiene, necesariamente, que recurrir a antecedentes históricos más remotos que los mismos trabajos preparatorios del Tratado Multilateral mencionado.

Después del fracaso de la experiencia federal centroamericana en 1838<sup>(52)</sup>, debido a la falta de un sustrato sociológico y político sólido y a la debilidad del ordenamiento jurídico institucional que se dió a la Federación, se inició un proceso orientado hacia la construcción de una amplia red de interrelación social, sobre la base de tratados bilaterales que afirmaban y reconocían una situación especial entre los Estados centroamericanos, claramente distinta y privilegiada en relación a la que se daba al resto de países extranjeros.

Claros ejemplos de lo anterior se tienen en la redacción de los Tratados siguientes:

a) El "Tratado de Amistad y Alianza entre los Estados de El Salvador y Costa Rica en la República de Centroamérica" (53), firmado en 1845, en cuyo preámbulo se establece como propósito: "la conveniencia recíproca de los dos Estados y el mejor bien para la República"; en el artículo 20. del mismo Tratado se estipula:

"Estos reconocen y respetan la soberanía de que cada uno goza actualmente para gobernarse por sí y arreglar su administración".

b) Otro ejemplo se tiene en el "Tratado de Paz, Amistad y Alianza de los Estados de Costa Rica y El Salvador, en la

República de Centro América" (54), suscrito el 10 de Diciembre de 1845, en cuyo preámbulo se señala:

"Deseando los gobiernos de El Salvador y Costa Rica establecer sólidamente la buena correspondencia y amistad que existe entre ambos Estados, han resuelto fijar por medio de un Convenio varios puntos, cuyo arreglo dé por resultado la conveniencia recíproca de los dos Estados, y el mejor bien para la República".

No obstante que ya se había disuelto la República Federal de Centroamérica, en los dos Tratados a que se hizo referencia anteriormente, seguía operando el espíritu de la misma, como fuerza que impulsaba y guiaba a los Estados en su actuación.

c) Un ejemplo más está, en el Tratado de Paz, Amistad y Comercio entre Costa Rica y Guatemala (55), suscrito el 10 de Marzo de 1848, en el que se señala:

"Habiéndose disuelto el pacto federal de 1824, por el que formaban un solo cuerpo político los Estados de Centroamérica, quedando éstos desde el año 1838 libres e independientes; erigido el de Guatemala en República, conforme a su resolución promulgada el 21 de Marzo de 1847, y considerándose el de Costa Rica en la misma capacidad; deseosos los gobiernos de ambos pueblos de cimentar, bajo bases fijas de reciprocidad y de justicia, las relaciones de comercio, y mantener y aún fomentar las conexiones fraternales que han tenido entre sí, desde muy largo tiempo, por la identidad de origen,

religión, idioma y costumbres: con tales objetos han creído útil y conveniente concluir un tratado de paz y de comercio".

d) Además, en el Preamble del Tratado de Paz, Amistad y Alianza, suscrito entre las Repúblicas de Costa Rica y Guatemala (56), el 20 de Julio de 1876, se señala:

"Los gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica y Guatemala, deseosos de que entre sus nacionales se estrechen más y más los vínculos de fraternidad a que están llamados como miembros de una familia y deseosos también de que en una época no muy lejana, los demás Estados que forman la América Central vengan a agruparse para formar un solo cuerpo de nación, bajo bases convenientes a su comun felicidad, han convenido en celebrar un tratado que afiance definitivamente sus vínculos y sirva de núcleo a la unidad centroamericana, aspiración constante del patriotismo, y única y noble idea que conduce al adelanto moral e intelectual de éstos países, porque aleja las cuestiones locales y pone término a los continuos sacudimientos políticos que tanto perjudican a la honra y a la riqueza de los pueblos" (57).

También tiene especial interés citar principios y disposiciones correspondientes a los Tratados que crearon y modificaron la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA). Al efecto, el Tratado original (58), suscrito en San Salvador, República de El Salvador, el 14 de Octubre de 1951, establece en un Considerando:

"Que las Repúblicas Centroamericanas, partes disgregadas de una misma nación, permanecen unidas por vínculos indestructibles que conviene utilizar y consolidar en provecho colectivo".

Como propósito de la Organización, en su artículo 10. se expresa:

"Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua constituyen la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), con el objeto de fortalecer los vínculos que los unen; consultarse mutuamente para afianzar y mantener la convivencia fraterna en esta región del Continente; prevenir y conjurar toda desaveniencia y asegurar la solución pacífica de cualquier conflicto que pudiere surgir entre ellos; auxiliarse entre sí; buscar solución conjunta a sus problemas comunes y promover su desarrollo económico, social y cultural, mediante la acción cooperativa y solidaria".

En la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (59), suscrita en Panamá, República de Panamá, el 12 de Diciembre de 1962, que sustituye totalmente al tratado original antes referido, se expresa en su único Considerando, lo siguiente:

"Que es necesario dotar a los cinco Estados de un instrumento más eficaz, estableciendo órganos que aseguren su progreso económico y social, eliminen las barreras que los dividen, mejoren en forma constante las condiciones de vida de sus pueblos, garanticen la estabilidad y la expansión de la industria y confirmen la solidaridad centroamericana".

En forma solemne, en el artículo 10. se establece como finalidad de la Organización, el siguiente:

"Costa Rica, Nicaragua, Honduras, el Salvador y Guatemala son una comunidad económica-política que aspira a la integración de Centroamérica. Con tal propósito se ha constituido la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)".

También en cuanto de las Constituciones centroamericanas se manifestaba y se manifiesta todavía, la idea de la desintegración de una nación y el ideal y aspiración de su reestructuración a través de la unión política.

Como fácilmente pueden consultarse los textos en citas hechas en el curso de este estudio, nos limitamos a recordar el número de los artículos constitucionales en los que están recogidas las ideas referidas. Refiriéndonos primero a las Constituciones actualmente vigentes, se trata de los preceptos siguientes: artículo 20. de la Constitución de Guatemala 100. de la Constitución de El Salvador; 60. de la Constitución de Nicaragua; y 90. de la Constitución de Honduras.

Respecto a los preceptos aplicables correspondientes a las Constituciones ya no vigentes, pero sí en vigor a la fecha en que se inició formalmente el programa de integración centroamericana, nos remitimos a la explicación contenida en cita número (48) de este mismo trabajo. El texto de los artículos primeramente citados pueden consultarse en Anexo número uno de este estudio.

La Constitución de Costa Rica (60) carece de disposiciones que hagan referencia a los ideales apuntados, -

pero no obstante, participa del mismo ideal y aspiraciones y ello queda evidenciado puesto que tiene suscritos los dos instrumentos relativos a la Organización de Estados Centroamericanos, a que antes se hizo referencia, y en los que se contienen claramente manifestaciones de los ideales integracionistas.

Pueden señalarse como constitutivos de un "Derecho público centroamericano", expresión quizá un tanto discutible, a los principios y postulados expresamente reconocidos y reiteradamente proclamados en los tratados que se han celebrado entre los países centroamericanos.

Al efecto, en el Tratado General de Paz y Amistad celebrado entre Costa Rica y Guatemala el 15 de Mayo de 1895 y en el celebrado entre Costa Rica y El Salvador el 12 de Junio del mismo año (61), se destacan los principios siguientes: la decisión de mantener la paz entre los Estados signatarios y resolver sus controversias mediante el arbitraje; el uso de medios pacíficos para procurar la unión centroamericana y el repudio de medios de fuerza para alcanzarla; el mantenimiento y defensa del territorio centroamericano; el deber de no intervenir en los asuntos internos de los Estados y la inviolabilidad del derecho de asilo.

Existen además otros postulados, que aunque no están calificados expresamente como principios de Derecho público centroamericano, se reiteran constantemente en los tratados. Dentro de éstos puede citarse por ejemplo, el relativo a la igualdad de derechos, a veces hasta de derechos políticos entre los nacionales de los Estados contratantes. Como ejemplo de esto último puede citarse el artí

culo 8 del Tratado de Paz, Amistad y Comercio entre Costa Rica y Honduras (62), en el que se señala:

"No pudiendo considerarse las Repúblicas de Costa Rica y Honduras como naciones extranjeras, por tener un origen común y conexiones que las han ligado, se declaran; que los costarricenses a vecinados en cualquier punto de Honduras, y los hondureños que lo estén en cualquier punto de Costa Rica, serán considerados como ciudadanos del país, con iguales derechos políticos y prerrogativas que tengan los naturales y sujetos como éstos a las mismas cargas y obligaciones".

Merecen una mención especial los postulados y principios relativos al libre comercio entre los países centroamericanos. Al efecto puede citarse el artículo 5o. del Tratado entre Costa Rica y Guatemala (63), de 10 de Marzo de 1848, en el que se señala:

"Habrá entre las Repúblicas de Guatemala y Costa Rica una recíproca libertad de comercio. En consecuencia, los ciudadanos de cualquiera de las dos partes podrá ir, por mar o por tierra, libre y seguramente con sus muebles y cargamentos, y entrar en los puertos, rios y territorios de la otra; y lo mismo que los naturales, podrán hacer el comercio por mayor o menor, alquilar y ocupar casas y almacenes, y fijar los precios a sus mercaderías; haciendo por sí de consignatarios, agentes o encargados, que al efecto podrán nombrar; quedando sin embargo, respectivamente sujetos a las leyes y estatutos del lugar

donde pasaren estos actos"(64).

También se ha incluido en un cierto número de Tratados el tema relativo a la equiparación de gravámenes a la importación. Así puede citarse como ejemplo el artículo 9 del Tratado entre Guatemala y Costa Rica, de fecha 10 de Marzo de 1848<sup>(65)</sup>, en el que se consigna:

"Por las mismas razones expresadas en el artículo anterior, y que son aplicables al comercio que pueda hacerse entre las dos partes contratantes, de sus particulares y propias deducciones, se declara y establece: que por las introducciones que se hagan de uno a otro punto, ya sea por mar o por tierra, de los artículos de productos naturales o industriales, propios del país que los remite, no causarán ni pagarán otros ni mayores derechos, que el cuatro por ciento que bajo la denominación de alcabala interior, se ha acostumbrado antes; y para evitar toda duda se conviene: que los efectos de que habla este artículo y su introducción al territorio de una parte, deberán ir acompañados de un certificado, expedido por las autoridades competentes de la otra, que hará constar ser de ella el origen y procedencia de dichos efectos, cuyo documento deberá ser visado en Costa Rica por el agente de Comercio de Guatemala y en esta República por el agente de Comercio de Costa Rica, que respectivamente residan en dichos lugares"(66).

Sobre el principio de libertad de ejercicio de profesiones y oficios, puede citarse como ejemplo el artículo 5 del Tratado de Paz y Amistad de 1868 entre Costa Rica y Nica-



ragua, en el que se estipula:

"En consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, los naturales de las dos Repúblicas podrían ejercer en la otra sus diferentes profesiones y oficios con arreglo a las leyes del país en que residan, y en cuanto a profesiones científicas, bastará para la incorporación la presentación del título con la autenticidad correspondiente, y la justificación de la identidad de la persona, si fuere necesario" (67).

Toda la normatividad citada, constituye un rico conjunto de fuentes históricas y de antecedentes de ese "Derecho Público Centroamericano" a que hace referencia el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica y que de haberse fundamentado en una realidad sociológica más propicia, hubiera adelantado en muchos años el proceso de integración económica centroamericana.

Lo que verdaderamente es interesante, no es la vigencia o actualidad de los principios contenidos en las normas citadas, sino, la vigencia constante en la historia jurídica del área centroamericana de tal espíritu o de tales propósitos. Es indudable que las normas referidas, recogidas en Tratados bilaterales y en algunas convenciones colectivas y su síntesis contenida en la expresión "derecho público centroamericano", recogida en el artículo XXIV del Tratado Multilateral del Libre Comercio e Integración Económica, al que ya se hizo referencia, influyeron profundamente en la estructuración del marco normativo actual del pro -

ceso de integración centroamericana, porque la tradición de solidaridad, amistad y acercamiento que ya existía<sup>64</sup> se reavivó y asimismo, permitirá en el futuro, nuevos y audaces intentos integracionistas, no solo en el campo estrictamente económico, sino aún en el político.

## TITULO II

### DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO

#### CAPITULO I

#### AUTONOMIA Y CARACTERISTICAS DE UN DERECHO COMUNITARIO.

##### A) Enfoque doctrinal sobre su realidad y autonomía.

Los instrumentos y los caracteres de un proceso de integración de Estados estarán en relación con las metas fijadas para el mismo, o en otras palabras, con el grado de integración que se desee alcanzar.

La integración de Estados puede limitarse a aspectos determinados de sus relaciones comerciales, fijándose como meta final, simplemente, la constitución entre ellos de una zona de libre comercio. En este caso, el interés común de los Estados será incrementar su comercio recíproco por medio de la eliminación de trabas aduaneras y medidas de efectos equivalentes impuestas a la circulación de mercancías. Todo esto supone un mecanismo institucional simple; además, el interés común es definido e interpretado por los Estados, quienes no transfieren competencias especiales y autónomas a los órganos creados; también, las decisiones de los órganos sobre materias importantes son formuladas por la unanimidad de los Estados en ellos representados y si en algunos casos las decisiones pueden ser aprobadas por mayoría, en ningún caso, se puede aplicar una decisión contra la voluntad de un Estado miembro. Además, se fijan condiciones y plazos en que se implementará el acuerdo y se establecen reglas por las que eventualmente se modificará para al-

gunos o todos los Estados participantes.

La función del derecho en este tipo de proceso es fundamentalmente formalizar un acuerdo de base entre Estados soberanos, lo que se hace a través de tratados internacionales de tipo clásico. Puede decirse que este es el tipo de proceso establecido por la Asociación Europea de Libre Comercio, entre otros.

La integración puede también perseguir objetivos más ambiciosos, tal como sería, el establecimiento de un solo espacio económico, integrando en sistemas plurinacionales los sistemas nacionales, políticos económicos, culturales y jurídicos, de los cuales se parte. En esta, la integración se basa en una comunidad de intereses, para cuya satisfacción se fijan objetivos y medios, se crean mecanismos institucionales en el que los órganos que interpretan el interés de los Estados coexisten con órganos autónomos; también, los Estados transfieren parte de sus competencias para formular normas jurídicas en materias especiales, a favor de las instituciones creadas cuyos actos serán directamente aplicables en el territorio. La transferencia de competencias es el resultado de un acto voluntario y soberano de cada Estado, formalizado en un tratado internacional. En este caso, la interpretación de las normas no será hecha por órganos jurisdiccionales de los Estados, sino por un órgano jurisdiccional comunitario autónomo, o por lo menos, así debe ser. A este tipo de integración responde precisamente el proceso actual de las Comunidades Europeas.

En un tipo de integración como en el indicado anteriormente, la garantía del cumplimiento de la voluntad co-

mún de los Estados y el factor de orden y seguridad para los mismos, en cuanto a una distribución justa de las cargas y beneficios, radica en el predominio del Derecho.

En otros casos, el proceso de integración puede estar orientado, en principio, al logro de metas limitadas como podría ser la constitución de una zona de libre comercio, delineándose los instrumentos para lograr en etapas posteriores metas de una más intensa integración. En estos casos, los Estados participantes tienen intereses comunes, pero la realidad económica o política de la que parten les impone cautela en la evolución del proceso, ya que entre los Estados se presentan diferencias en sus estructuras y desarrollo económico y social.

En estos casos, el proceso de integración se o-rienta no solo hacia la integración de espacios y siste-mas, sino a la creación de condiciones de desarrollo eco-nómico y social, es decir, se buscan objetivos complemen-tarios de integración y desarrollo. Bajo esta orientación y principalmente en las etapas en las que se busquen es-tados de más intensa integración, el sistema institucional que se requiere debe ser fuerte y con amplias competencias. También en este tipo de proceso de integración, al derecho le está reservado un papel importante, ya que debe consti-tuirse en un instrumento para la realización de los objeti-vos perseguidos y en la garantía para una distribución e-quitativa de los beneficios del proceso. La Asociación Lati-noamericana de Libre Comercio y el Mercado Común Centroame-ricano, responden a este tipo de proceso de integración.

Desde un punto de vista institucional y jurídico

y en relación con la naturaleza jurídica de la asociación que se crea para llevar a cabo un proceso de integración, las diferencias más destacadas aparecen cuando se intenta determinar quién define e interpreta el interés común y quién dicta, aplica e interpreta el derecho. En los tipos de proceso menos evolucionados, serán los Estados los que mantendrán todas sus competencias para definir e interpretar sus intereses comunes y para la elaboración, aplicación e interpretación del derecho que regule sus relaciones. En los tipos de proceso más evolucionados, las funciones referidas comienzan a ser transferidas a órganos comunes y autónomos. La diferencia resulta de la adaptación de la estructura jurídica y de las instituciones, a las metas perseguidas y al carácter operativo seguido en uno y otro tipo de proceso.

Se afirma (68), que todo proceso de integración debe ser voluntario, de derecho y planeado.

Como proceso voluntario, debe ser el resultado de la libre concertación de los intereses de los Estados participantes y de las fuerzas, económicas y sociales, que lo impulsan y orientan. Esta concertación de intereses debe hacerse en atención a la existencia de intereses comunes y a ello mismo debe responder el mecanismo institucional que se adopte.

Como proceso de derecho, lo que supone la existencia de un orden jurídico, debe ser el resultado del predominio de las normas jurídicas que encuadran el juego de las fuerzas participantes en el proceso; es decir, que a dichas normas les corresponde la función de fijar el

marco para la acción de los sujetos del proceso y limitar las competencias de los órganos comunes creados. Esto supone también, el funcionamiento, necesario, de un mecanismo jurisdiccional que controle la legalidad de los actos jurídicos dictados, e interprete las normas jurídicas creadas. El ideal en una integración estrictamente de derecho es que en la misma se exprese una relación efectiva entre la estructura normativa y la realidad socio-económica que regula, esto suponiendo, además, que la conducta de los sujetos del proceso se conforme realmente a las normas jurídicas previstas, a efecto de que se beneficien del proceso, en forma equitativa y justa, todos los sectores sociales cuyos intereses se ponen en juego en cada uno de los países participantes.

La afirmación de que todo proceso de integración debe ser planeado, parte de la idea de que es siempre un fenómeno complejo, en el que deben conciliarse intereses nacionales y regionales diversos, que a veces pueden resultar contradictorios, y en el que no caben acciones incoherentes y aisladas, sino que por el contrario, se requiere una aproximación gradual y sistemática a las metas fijadas. Es evidente que la Comunidad Económica Europea responde a esta forma de integración planeada, en forma altamente satisfactoria. No puede decirse lo mismo respecto a los procesos que se siguen en el área del Mercado Común Centroamericano y en el de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, los que se han caracterizado por la falta de una planificación adecuada (69).

Trataremos a continuación, el problema relativo a

la existencia o no, como auténtica y autónoma rama jurídica del Derecho Comunitario. El punto tiene singular importancia, atendiendo a que la idea básica de la hora presente en el plano internacional, es la de que los Estados deben integrar sus economías, por medios jurídicos, para lograr una verdadera superación en el plano nacional y regional. Esta corriente de pensamiento es lo que ha inclinado a los juristas, en su mayoría y nos incluimos entre ellos, a considerar que no solo existe el Derecho Comunitario como sistema jurídico autónomo, sino además, que es imprescindible que tal autonomía sea reconocida para que puedan realizarse adecuadamente los objetivos que tales asociaciones económicas se fijan.

Se sostiene, además, que la autonomía del Derecho de integración debe ser reconocida, para que este nuevo derecho pueda desempeñar su cometido sin las debilidades de pertenecer a una rama jurídica, como el Derecho Internacional, que se encuentra en proceso de formación, al que le falta, a veces, el elemento de coercibilidad, el que, por el contrario, si es casi común en el derecho de integración, tal como sucede y se evidencia en el caso de las Comunidades Europeas.

Enfrentado el problema de la autonomía científica, Rocco <sup>(70)</sup> opina, que la misma puede ser comprobada, no tanto en razón del elemento técnico de la materia, cuanto, en razón de la amplitud y la organicidad del conjunto de las normas, de la existencia de principios propios que la gobiernan, así como de los métodos de examen aplicados al contenido especial y sustancial de la norma.



Catalano (71), se inclina decididamente por reconocer al derecho comunitario el carácter de derecho autónomo, es decir, por clasificarlo como una nueva rama del Derecho. Al efecto señala, refiriéndose a las Comunidades Europeas, que la nueva disciplina tiene ciertamente vínculos e interferencias con el derecho internacional, pero que también los tiene y quizás más acentuados, con los órdenes jurídicos internos de los seis Estados miembros, ya que las normas comunitarias ejercen una incidencia profunda sobre ellos, constituyendo simultáneamente una modificación o un complemento de los mismos, y que, aunque no sea más que por motivos de clasificación sistemática, es oportuno considerar el derecho de las Comunidades Europeas como una rama independiente, separada y distinta de las otras disciplinas jurídicas. Sostiene además Catalano, en un intento de definición, que el derecho de las Comunidades Europeas constituye aquella rama del derecho que, sin desdeñar las relaciones con los organismos internacionales existentes, tiene por finalidad profundizar sistemáticamente, no solo el estudio de los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, sino también, el de la evolución jurídica resultante de la aplicación progresiva de las disposiciones escritas en los tratados, de la adopción de normas comunitarias previstas por esos tratados, de la interpretación de la jurisprudencia comunitaria relativa tanto a las disposiciones de los tratados como a las normas y las medidas adoptadas por las instituciones de las tres Comunidades. Agrega además Catalano, que las Comunidades Europeas no pueden compararse, efectivamente, con uniones internacionales,

así como tampoco son verdaderos Estados federales, aunque la estructura de las mismas se asemeje más a las de tipo federal; y que no obstante su origen contractual, los tratados que instituyeron las Comunidades Europeas trascienden el ámbito del orden jurídico internacional, aunque no escapan enteramente a su estudio, sino que por el contrario, tal estudio es indispensable dentro del ámbito del derecho internacional, aunque no fuese más que para ahondar en sus diferencias sustanciales respecto de cualquier otro instrumento internacional, lo que justifica, a su modo de ver, el nacimiento de un nuevo derecho, que se distingue del derecho internacional clásico y, por lo tanto, conveniente de examinar y profundizar autónomamente.

Otro defensor del carácter autónomo del Derecho Comunitario es Hallstein (72), para quien este derecho no solo difiere del derecho estatal, sino también del derecho internacional público y que así como no puede concebirse como un simple legajo de acuerdos internacionales, tampoco puede considerársele como una parte o un apéndice de ordenes jurídicos nacionales; además señala, que el derecho internacional tiene por objeto las relaciones entre los Estados y los otros sujetos del derecho internacional público y que el Derecho Comunitario, por su parte, como "derecho común" que es, se aplica directamente en favor o en contra de cada ciudadano de los Estados miembros, pues los Estados al crear la Comunidad, (se refiere a la Comunidad Económica Europea), han restringido su soberanía creando una entidad jurídica autónoma que se impone a sus ciudadanos y a los Estados mismos.

La Comisión Jurídica del Parlamento Europeo (73) sostiene, definitiva y totalmente, la tesis de la existencia del Derecho Comunitario como un derecho autónomo. En un informe que emitiera señala:

"el propósito de este informe es lanzar la "voz de alarma" para que la opinión pública tenga una conciencia más viva sobre la existencia de un orden jurídico comunitario que cada Estado miembro se ha comprometido a respetar".

En otra parte del mismo informe se señala que: "a diferencia de lo que sucede con los tratados internacionales ordinarios, los Tratados europeos y, en particular, el Tratado de la CEE, establecen un orden jurídico propio integrado al sistema jurídico de los Estados miembros que se impone a sus jurisdicciones".

El carácter autónomo del Derecho Comunitario es defendido también por Lagrange (74), ex-Abogado General de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, quien ante la interrogante ¿qué se entiende por Derecho Comunitario?, afirma que se trata:

"del "orden jurídico autónomo" que surge del conjunto de reglas establecidas por los Tratados para asegurar, por medios especialmente previstos, el logro del objeto que definen. Esta es, en efecto, como frecuentemente se ha hecho notar, la originalidad de los Tratados europeos, pues no se limitan, como la mayoría de los tratados internacionales, a contemplar los compromisos recíprocos destinados a

reglar sobre un punto u otro las relaciones entre los Estados contratantes, sin ocuparse, al menos en su parte esencial, de la competencia de los órganos estatales sino que "integran" un sector completo de la vida nacional, estableciendo reglas a las que este sector está sometido y transfiriendo a las instituciones, dotadas al efecto de poderes propios, las competencias necesarias para aplicar estas reglas, realizándose la articulación de poderes dentro del marco de una Comunidad, sujeto de derecho internacional distinto al de los Estados que la componen, y según un ordenamiento inspirado en los principios generales de derecho público en los que se basan los Estados individuales".

Lagrange, sostiene además, que el orden jurídico que regla la vida de las Comunidades (se refiere a las tres Comunidades europeas en razón del estrecho parentesco que existe entre las mismas, en el campo de los objetivos y de los principios, no obstante las diferencias que puedan haber en cuanto a los mecanismos), se manifiesta lo suficientemente completo y autónomo como para que se pueda hablar de un derecho comunitario.

La defensa del Derecho Comunitario como un Derecho autónomo, se destaca en la opinión general de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (75), la que en una interesante sentencia, después de afirmar que,

"a diferencia de los tratados internacionales corrientes, el Tratado de la CEE ha instituido un orden jurídico propio, integrado en el sistema jurídi

co de los Estados miembros desde la entrada en vigor del Tratado y que se impone a su jurisdicción".

Señala que,

"el derecho que origina un tratado que emana de una fuente autónoma, no puede, por su naturaleza específica original, verse opuesto jurídicamente a un texto interno cualquiera, sin perder su carácter comunitario y sin que se ponga en tela de juicio la base jurídica de la Comunidad misma".

En el panorama jurídico Centroamericano, unos juristas defienden la tesis de la existencia autónoma del Derecho Comunitario y otros, por el contrario, la niegan. Dentro de los primeros cabe citar a Roberto Ramírez <sup>(76)</sup>, jurista hondureño, el que en un interesante estudio, entre otras opiniones sostiene:

"Estamos frente a una revolución jurídica provocada por una transformación económica y social, y el jurista no debe olvidar que la creación de estas normas jurídicas debe ser formulada en vista de las nuevas instituciones económico-sociales, cuya estructura no es la misma que tuviera a la vista la dogmática clásica del Derecho. Estos nuevos hechos exigen un nuevo Derecho y este es el Derecho de la Integración, que exige una nueva dogmática que le imprima la dinámica de las instituciones económicas".

Otro defensor de la autonomía del Derecho Comunitario es Ricardo González Camacho <sup>(77)</sup>, jurista salvadoreño, quien en un estudio presentado a la Secretaría Permanen

te del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA) señala:

"El postulado principal de esta tesis consiste en afirmar que con el advenimiento del Programa de Integración Económica y la formación de su Mercado Común, se está creando en Centroamérica un conjunto de normas jurídicas, cuya aplicación e interpretación rebasan los límites del Derecho interno y no encajan exactamente en el Derecho Internacional tradicional. Se trata de un Derecho nuevo que, si el término no se prestara a confusiones, podríamos llamar "regional", pero que es preferible denominar "Derecho de la Integración" o "Derecho de la Comunidad".

Sostiene además González Camacho, que los principios hasta hoy conocidos de Derecho Internacional resultan insuficientes al tratar de aplicarlos a federaciones o comunidades; también, refiriéndose al concepto de "Derecho Público Centroamericano" mencionado en el artículo XXIV del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana (78), sostiene que éste no es otro que el Derecho Comunitario de Centroamérica. González Camacho cita ejemplos para demostrar que ciertas normas comunitarias no se conforman con los principios tradicionales y reconocidos del Derecho Internacional y una de éstas es la que se refiere a la creación de Cortes de Justicia (tal como la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas), para dirimir conflictos a instancias de personas naturales o jurídicas, las que no siendo sujetos de derecho internacio

nal, puedan recurrir a Tribunales no nacionales, cuyas sentencias tienen fuerza obligatoria en los territorios de los países miembros.

Entre los que niegan la independencia científica del Derecho Comunitario, citamos en primer término, a Gautama Fonseca <sup>(79)</sup>, funcionario del Departamento Legal de la Secretaría Permanente de Integración Económica Centroamericana, el que ha expresado:

"a nadie se le ha ocurrido afirmar hasta ahora que la existencia de una organización mundial como la ONU o de movimientos regionales como la OEA, han dado origen a una disciplina jurídica nueva, distinta del Derecho Internacional Público"

Afirma además Gautama Fonseca que:

"así como la presencia de entidades internacionales que, a semejanza del Mercado Común Europeo, están dotadas de personalidad y voluntad propias, independientes de las de los Estados que forman parte de los mismos, no ha motivado el nacimiento de una nueva rama del Derecho, no se explica por qué este fenómeno sí se ha producido con motivo de la integración económica de los Seis. Además, la circunstancia de que se haya dotado de facultades supranacionales a los órganos comunitarios, no puede servir de base para arribar a esta última conclusión, puesto que otro tanto sucede con la ONU y la OEA".

Dentro de esta misma corriente podemos citar también a Alfredo Martínez Moreno <sup>(80)</sup>, para quien la serie de argumentos, referentes a la especial estructura de las

comunidades económicas carece de consistencia. Estos argumentos son, el que sostiene que la aplicación del Derecho Comunitario se extiende a los individuos o ciudadanos de los Estados miembros, a los que el Derecho Internacional no reconoce como sujetos; el referente a la existencia de normas que confieren competencias a Cortes de Justicia comunitarias, que puedan dirimir conflictos a instancias de personas naturales o jurídicas y cuyas sentencias tengan fuerza en los territorios de los Estados miembros. Sostiene Martínez Moreno que éstos argumentos no tienen consistencia alguna y rebate los mismos señalando que en el mismo Derecho Internacional existen tipos sui-generis de Estados compuestos (tal como la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Comunidad Británica de Naciones), que tampoco se asimilan a las estructuras jurídicas de los sistemas federales, ni a las uniones internacionales de Estados, por tener diferencias sustanciales con ellas, sin que por ello se alegue que el estudio de éstos trasciende el dominio del Derecho Internacional o que forme parte de una rama jurídica separada; además, que la corriente moderna más aceptable en cuanto a sujetos del Derecho Internacional es aquella que afirma que el ser humano es el sujeto de Derecho Internacional por excelencia y que las personas naturales o jurídicas pueden ser y en realidad son, sujetos de Derecho Internacional, lo que a su juicio quedó perfectamente demostrado desde que el Estatuto de la Corte de Justicia Centroamericana, creada en 1907, permitió a los individuos demandar a los Estados, en la misma forma que también reconocía la personalidad jurídica internacional



del hombre el pacto constitutivo del Tribunal Internacional de Presas, firmado en la Segunda Conferencia de La Haya en el mismo año 1907 (81).

En una absoluta concordancia de ideas, Martínez Moreno señala además (82):

"Los argumentos que se han esgrimido en defensa de la independencia del Derecho Comunitario no nos parecen lo suficientemente sólidos para justificar tal posición. Si acaso en el futuro, cuando se hayan efectivamente delimitado los campos de acción, si es que ello fuera posible, podría aceptarse la tesis de la autonomía. En efecto, hemos visto que hasta el momento muchas de las reglas que son válidas en cuanto al proceso de las Comunidades Europeas no son aplicables en otros movimientos integracionistas. Para mantener aquella posición habría que estar convencidos de que las normas del llamado Derecho de integración o comunitario deberían tener plena validez en todos los casos, pues de no ser así, llegaríamos al absurdo de afirmar que existen tantos derechos comunitarios como movimientos económicos de esa índole existen en el mundo, es decir, que perfectamente podría criticarse tal tesis con los mismos argumentos, tan conocidos, de que aún cuando haya ciertas peculiaridades en algunas instituciones y costumbres regionales, no por ello debe concluirse que existen Derechos Internacionales particulares, sino que el Derecho de gentes es único y universal".

Por otra parte sostiene además:

"que los países centroamericanos tienen lazos estrechísimos de carácter histórico, racial, geográfico,

de lenguaje y de aspiraciones comunes que los convierte en una verdadera nación, y que en la afinidad tan íntima que los une han llegado aún a modificar algunos conceptos jurídicos clásicos, como por ejemplo el de la definición de cabotaje, que desde la firma del Tratado General de Paz y Amistad <sup>(83)</sup> por parte de los cinco Estados del área, en la ciudad de Washington en 1907, confirmada en diversos otros instrumentos regionales, ha dejado de ser el comercio de naves a través de las costas de un solo país, para abarcar el comercio ejercido por todo el litoral centroamericano. Pero de ello a concluir que el Derecho Público Centroamericano es algo distinto al que rige para otras zonas del mundo hay un trecho muy grande. Las normas jurídicas que se aplican a las relaciones entre los Estados centroamericanos, si bien especiales en muchos aspectos, por los vínculos estrechos que hemos señalado, no pueden constituir una rama distinta y autónoma, sino que solamente señalan el hecho evidente de tales lazos, que hacen posible el desarrollo y consolidación del proceso integracionista entre ellos".

Como conclusión de sus ideas a este respecto, Martí-  
nes Moreno señala:

"por lo menos en la actual etapa de desarrollo de los sistemas jurídicos de integración económica, no es posible reconocer la autonomía, como disciplina científica separada, del Derecho Comunitario".

El jurista guatemalteco Francisco Villagrán Kra-

mer (84), no solo niega su autonomía, sino además, llega a negar el carácter de "comunitario" del Derecho de la Integración Económica Centroamericana. Para formarnos una idea global de su pensamiento a este respecto, recogemos el concepto siguiente:

"El hecho de que el esquema centroamericano no configure una etapa preliminar de integración económica ni tampoco esté centrado en torno de una etapa avanzada -cual sería la unión económica-, sino situado entre ambas, permite que los Estados, en unos casos, consignent en un tratado internacional que el desarrollo de las normas adoptadas corresponderá a los propios Estados mediante el método de los tratados y los protocolos, y en otros, que la reglamentación del Tratado correrá a cargo de un órgano instituido, sujetando la reglamentación a una expresa aceptación por parte de ellos".

En este orden de ideas, Villagrán Kramer llega a la conclusión de que:

"El orden jurídico de la integración centroamericana corresponde plenamente a un orden jurídico internacional particular y no logra reunir las características de un orden jurídico de tipo comunitario".

El adecuado desarrollo de los diversos procesos integracionistas y las singulares modalidades, que en el campo de la estructura institucional y funcional necesita adoptar cada uno de ellos, para que puedan cumplir su cometido económico y social, supone también, que los mismos se regulen bajo normas de contenido y carácter distinto a a-

quellas que tradicionalmente rigen en el campo del Derecho Internacional. En efecto, la normatividad "comunitaria" o de "integración" como también podría denominársele trasciende el ámbito del Derecho Internacional, el que no puede negarse que vive todavía una "etapa de formación", ya que en no pocos campos y materias se hace patente su falta de coercibilidad, y asimismo, su debilidad o insuficiencia en cuanto a la determinación precisa de sus sujetos y la determinación de los mecanismos para la defensa adecuada en sus derechos.

Los aspectos anteriores adquirieron desde un principio, en el Derecho Comunitario, una configuración mucho más completa, al punto, que en la esfera propia del mismo, casi no ofrece discusión su pleno reconocimiento o la necesidad de su reconocimiento. Así tenemos, un reconocimiento casi total, de la personalidad jurídica comunitaria de las personas individuales y jurídicas, y no solo, como normalmente se da en el Derecho Internacional, la de los Estados. También, la institución, desde un principio, de Cortes de Justicia comunitarias que diriman los conflictos planteados por los diversos sujetos del derecho comunitario y cuyas decisiones sean obligatorias para todos y con plena fuerza obligatoria en el territorio de los Estados miembros. La eficacia interna y directa del derecho comunitario es otra nota singular, ya que se destaca, no solo la obligatoriedad en el seno de los Estados mismos, de las decisiones, normalmente mayoritarias y no unánimes, de los órganos comunitarios; su eficacia directa sobre los Estados y las personas individuales y jurídicas, sino también, de los desarrollos

normativos dictados por los mismos órganos, sin que para su eficacia se pase por la aprobación, en la forma tradicional, por parte de los poderes legislativos estatales.

Todas estas singularidades, y en cierta forma la necesidad de que en su desarrollo no encuentre los obstáculos que han impedido un progreso acelerado del Derecho Internacional e influyendo asimismo, que la estructura comunitaria se aproxima un tanto a la forma de organización federal, nos hace inclinarnos a la aceptación y defensa de la autonomía científica del Derecho Comunitario, es decir, a su reconocimiento como disciplina separada del Derecho Internacional o de otro Derecho.

La singularidad del Derecho Comunitario como Derecho autónomo es más destacada en procesos de integración desarrollados, como es el caso de las Comunidades Europeas, pero también, sus notas caracterizantes se evidencian en los procesos de integración de menor desarrollo, como pueden ser, el iniciado a partir de la constitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y el iniciado a partir de la constitución del Mercado Común Centroamericano.

#### B) Características de un Derecho Comunitario.

El derecho de integración ha sido y será creación de hombres que han comprendido la necesidad de establecer instrumentos aptos para la realización de una acción común tendente a satisfacer intereses comunes. El criterio que se debe seguir siempre en la formulación jurídica comunitaria debe ser siempre funcional y realista. Existe todo un com-

plejo de intereses sobre los cuales se basa una acción de integración y que configura parte de la realidad que se debe regular. Al perderse de vista dichos intereses, y al intentarse forzar una realidad dada, pueden formularse normas jurídicas que carezcan de validez social. El problema, en consecuencia, no consiste en formular normas jurídicas deseables, sino en formular normas jurídicas de aplicación posible al servicio de objetivos también factibles. Desde esta perspectiva pueden señalarse como notas características del Derecho Comunitario, las siguientes:

1) Elaboración y contenido pragmático. El derecho comunitario es y debe ser, una respuesta concreta a realidades también concretas, ya que su base es siempre de tipo económico, social y político. Es solo a partir de esas realidades y de esos intereses que se debe formular la norma jurídica. No se debe partir de principios abstractos y conflictivos, ni se debe pretender dar respuesta total o ideal a la complejidad de los problemas que se encaran. En tales condiciones, la opción ideológica es reducida a un mínimo indispensable para mantener una coherencia en el proceso.

El criterio básico debe ser, tener en cuenta los efectos prácticos de las normas jurídicas, incluir en su contenido solo lo necesario para obtener dichos efectos prácticos, formular las normas jurídicas en forma simple y precisa y fundamentalmente, evitar incluir en las normas definiciones que pueda originar una interpretación conflictiva, innecesaria para la realización del proceso de integración. Sobre este punto Gautama Fonseca (85), refiriéndose al Mercado Común Centroamericano, señala que en la evolución de

sus instituciones se ha dejado conducir por un criterio emi-  
nentemente pragmático.

2) Derecho operativo. Las normas del derecho comu-  
nitario deben estar destinadas a la acción y a lograr un e-  
fecto positivo sobre esa acción. El objeto de todas sus nor-  
mas debe ser posibilitar la realización de un proceso de  
contenido básicamente económico. En tales condiciones, las  
exigencias del proceso serán siempre las determinantes de  
la creación a su servicio de nuevas normas jurídicas.

Dentro de esa función básica de asegurar una dis-  
tribución justa de las cargas y beneficios del proceso de  
integración, el derecho comunitario debe contemplar siempre  
el brindar una garantía para que en condiciones adecuadas  
participen los países de menos dimensión o menor capacidad  
económica. Indudablemente, con mayor o menor efectividad,  
se le ha dado vigencia en el proceso de integración centro-  
americana a esta nota caracterizante, al otorgársele los be-  
neficios de país de menor desarrollo relativo a Honduras  
(§6).

3) Es un Derecho transitorio. Precisamente por  
constituir un instrumento al servicio de un proceso, exis-  
tirá en tanto el proceso no alcance sus metas finales, ya  
que en este punto, se transformaría en el derecho público  
interno de una nueva realidad política autónoma, totalmente  
distinta de las individualidades estatales que originalmen-  
te constituyeron su principal origen. En el área centroame-  
ricana este propósito es evidente, ya que en muchas declara-  
ciones conjuntas recientes, se pone en evidencia la necesi-  
dad de realizar esfuerzos que encaminen a Centroamérica ha-

cia la unión política, y asimismo, de considerar las realizaciones que se logren en el proceso integracionista, como el paso previo para llegar a la unidad de los pueblos del área (87).

Puesto que todo proceso de integración debe ser esencialmente dinámico y gradual en su evolución, el Derecho Comunitario, para mantener su carácter de factor dinámico en los distintos procesos, debe evolucionar y transformarse al ritmo del fenómeno al cual se aplica. Dentro de este necesario ritmo de transformación, muchas de las normas aplicables en las primeras etapas se transforman o pierden su vigencia en las etapas posteriores. La sola lectura de alguno de los instrumentos relativos a la integración centroamericana, nos pone en evidencia este ritmo de transformación de normas, ya que cada avance institucional o funcional normalmente hace perder vigencia a las normas que regulaban la etapa anterior.

4) Debe ser un Derecho flexible. Este carácter es quizás complementario del anterior, ya que en todo momento el Derecho Comunitario debe constituir una respuesta lógica y acertada a las distintas etapas por las que atraviese el proceso de integración, ya que en cada una de ellas la realidad a regular es normalmente distinta, lo que exige también normas diferentes e instituciones flexibles, que hagan factible la adopción de fórmulas novedosas y operativas, que permitan a su vez la activa y efectiva participación que puedan impulsar el proceso. A estas ideas responde ampliamente el "Tratado-cuadro" de cada una de las Comunidades Europeas y asimismo, aunque no a los niveles de los en-



teriores, el amplio "marco jurídico" de Tratados, Convenios y Protocolos relativos a la integración centroamericana.

Le corresponde a todo el ordenamiento jurídico comunitario, facilitar la dinámica del proceso y la eficacia de las instituciones, las que deben de gozar de márgenes amplios de maniobra que les permita tomar las decisiones que cada caso demande y elaborar las políticas adecuadas para impulsar el proceso de integración.

Con una vinculación muy estrecha al problema de la primacía del Derecho Comunitario sobre el derecho de los Estados miembros, se señalan una serie de características que debe reunir el primero. Al efecto y estimando que derivan del carácter efectivamente comunitario de este Derecho, Constantinesco (88) señala las siguientes:

a) - La unidad del Derecho Comunitario tiene que ser asegurada mediante la unidad de la interpretación. Esta tiene que evitar que el Derecho Comunitario tenga significaciones diferentes según la interpretación que puedan darle los distintos Tribunales nacionales.

b) - El Derecho Comunitario primario, después de la ratificación de los Tratados y el Derecho Comunitario secundario, tienen que estar sustraídos a todo control constitucional por parte de los Estados miembros que practiquen esta clase de control.

c) - Las leyes nacionales posteriores, ordinarias o constitucionales, no deben ni poder modificar ni poder abrogar el Derecho Comunitario primario o secundario.

El pensamiento de Constantinesco a este respecto es verdaderamente importante, ya que hace hincapié en notas

caracterizantes que ponen en primer plano el problema de que se garantice la igualdad en la posición y en los efectos que el Derecho Comunitario debe tener en cada uno de los Estados miembros.

Efectivamente, el Derecho Comunitario debe tener:

- 1) - La misma significación en todos los Estados miembros;
- 2) - la misma fuerza obligatoria en todos los Estados miembros; y
- 3) - debe representar una categoría jurídica invariablemente dentro de todos los Estados miembros.

Las anteriores afirmaciones suponen la necesidad de un pequeño comentario al respecto.

La existencia de un Derecho Comunitario evidencia la necesidad de que su interpretación y aplicación sean también unitarias. Es evidente, que un derecho unificado a escala internacional o supranacional deja de ser unitario si no se asegura la unidad de su interpretación. Constituye una efectiva amenaza para la unidad del Derecho Comunitario, la diversidad de interpretaciones de que puede ser objeto por parte de los Tribunales nacionales. De aquí, la necesidad de mantener su unidad por medio de una interpretación unitaria, dada por un tribunal comunitario y en la que se suponga la obligación de los tribunales nacionales de ajustarse a la interpretación dada. La institucionalización de un tribunal de esta índole es una necesidad urgente dentro del proceso de integración centroamericana. Para su creación y funcionamiento puede servir de adecuado modelo la forma en que está institucionalizada y opera la Corte

de Justicia de las Comunidades Europeas, lo cual no supone tampoco, la conveniencia de un trasplante institucional, si no que por el contrario, tal tribunal comunitario centroamericano debe de ser una respuesta, en su organización y competencias, a la especial naturaleza y consecuente desarrollo previsible del proceso de integración centroamericana. Por exceder los límites de este estudio, no tratamos el problema constitucional que supone la creación de tal naturaleza en Centroamérica.

Sobre la segunda afirmación, o sea, que el Derecho Comunitario debe de tener en todos los Estados miembros la misma fuerza obligatoria, es también necesaria una aclaración.

Lo anterior quiere decir, que los efectos del Derecho Comunitario tienen que ser iguales en todos los ordenamientos jurídicos y vincular por igual a todos los Estados miembros. La igualdad de fuerza obligatoria del Derecho Comunitario en los Estados miembros, plantea dos clases de problemas. El primero es, sobre si el Derecho Comunitario, en general, y el Derecho secundario (el originado en virtud de decisiones de los órganos comunitarios) en particular, pueden ser examinados por los Estados miembros, en cuanto a su conformidad con las Constituciones nacionales, y si los Estados miembros pueden, por el trámite del control de la constitucionalidad, sustraerse unilateralmente a las obligaciones del Derecho Comunitario secundario, lo cual equivaldría, a una violación del principio de la identidad de los efectos del derecho comunitario en todos los Estados miembros (en el caso centroamericano, no contradicen este

principio, los beneficios que puedan establecerse a favor de los países de menor desarrollo relativo). El segundo problema, está en saber si el derecho comunitario, primario y secundario, tienen un rango superior al de la Constitución nacional. El primero plantea el problema del control de la constitucionalidad, y el segundo, el de la jerarquía del derecho comunitario dentro del orden jurídico interno de los Estados, a los que no nos referiremos con detalle, salvo ligeras alusiones, por exceder su planteamiento los límites de este trabajo.

La afirmación de que el derecho comunitario debe representar una categoría jurídica invariable dentro de todos los Estados miembros, requiere también una aclaración a  
d  
adicional. Efectivamente, el carácter comunitario y unitario del derecho comunitario exige que éste sea invariable, es decir, que tiene que mantenerse tal como ha sido establecido por los órganos competentes, lo cual supone, que los Estados miembros no pueden, unilateralmente, ni modificarlo ni abrogarlo, ni directa ni indirectamente. Admitir que un Estado miembro pudiera modificar el Derecho mediante modificaciones constitucionales o mediante leyes ordinarias posteriores, sería tanto como aceptar que el derecho comunitario no fuera unitario ni comunitario, y sería además, contrario al principio de igualdad de los Estados ante el Derecho comunitario y al relativo a la unidad de su fuerza obligatoria. Es indudable, que toda modificación o abrogación del Derecho comunitario tiene que quedar reservada, en principio, al ó  
r  
gano que lo ha establecido. Todos los argumentos que puedan darse en relación a este problema, nos conduce a aquel refe

rente a la primacía del derecho comunitario. Se afirma (89), que la autonomía del Derecho comunitario constituye el primer argumento en favor de su primacía.

Constituiría una auténtica lesión al carácter unitario y comunitario del Derecho que estudiamos, si cada Estado, por medio de leyes nacionales posteriores, pudiese decidir, individualmente, acerca de la existencia, la modificación o la supresión de la categoría jurídica representada por el Derecho Comunitario. Sobre este aspecto nos limitamos a hacer estos cortos comentarios, porque su tratamiento exhaustivo excede los naturales límites de este trabajo.

-----

## CAPITULO II

### FUENTES DEL DERECHO COMUNITARIO CENTROAMERICANO.

#### A) Clasificación de las fuentes.

Antes de hacer una clasificación de las fuentes del derecho comunitario centroamericano, es preciso hacer una introducción aclaratoria.

La determinación de las fuentes del derecho comunitario centroamericano no es tarea fácil. A la circunstancia de que el problema es de por sí complejo, se une el hecho de que, hasta el momento, han sido muy pocos los que se han preocupado por explorar el contenido de tal derecho y su forma de manifestación. La complejidad está motivada por la falta de una decisión de autoridad que fije de modo preciso los actos que tienen la virtud de crear normas, y por lo equívoco que es la expresión misma de "fuentes del derecho", la que en el curso de la historia de la literatura jurídica ha sido empleada con sentidos diversos. En este trabajo, esta expresión deberá entenderse, como principio generador de las normas jurídicas que en la actualidad se aplican, como consecuencia de los compromisos asumidos para integrar las economías centroamericanas y cuyo conjunto constituye el Derecho Comunitario Centroamericano.

Es algo que no ofrece duda el hecho de que el estudio de las fuentes del derecho comunitario centroamericano puede hacerse tomando como base cualquiera de las clasificaciones que sobre las fuentes del derecho, se han dado a través de la historia del pensamiento jurídico (90). No obstan

te, adoptar cualquiera de ellas tiene poca utilidad práctica.

Es evidente, que el Derecho que comentamos está dominado por la norma jurídica escrita y es ella a la que siempre ha de hacerse una referencia primaria.

Efectivamente, entre las fuentes existe un orden de prelación en el cual, el primer lugar, está ocupado por el derecho escrito. El papel de las otras fuentes puede considerarse como verdaderamente secundario, a las que se acude solo por vía excepcional.

Conviene hacer una puntualización acerca de la distinción existente entre las disposiciones sustantivas o de contenido y las disposiciones que crean, o en su caso amplien, precisan y perfeccionan, las competencias de los órganos. Esta distinción incide en un aspecto fundamental de la naturaleza del ordenamiento jurídico de la integración centroamericana. En el caso que comentamos, como ocurre en otros procesos de integración, las disposiciones atributivas de competencias han generado una nueva fuente de normas. Así tenemos que, a las normas sustantivas del Tratado General y de los instrumentos complementarios, se suman las que emanan de la actuación misma de los órganos, cuya actividad perfila otra categoría de normas componentes del ordenamiento jurídico comunitario centroamericano. Esta es precisamente, la que en la terminología en uso dentro de las Comunidades Europeas se conoce como "derecho secundario".

No es posible ignorar una importante categoría más, aunque no llegue a constituir exactamente una fuente del derecho comunitario centroamericano, y es, la constituida por

aquellas normas internas de los Estados centroamericanos dictadas como consecuencia del proceso de integración, para viabilizar o facilitar la aplicación, en el ámbito interno de los Estados, de las normas contenidas en los instrumentos convencionales o bien, de las emanadas de los actos de los órganos comunitarios. En concreto, son las normas que los Esta-  
dos individualmente elaboran y dictan, en cumplimiento de las obligaciones inherentes a su condición de sujetos princi-  
pales del proceso de integración. En suma, es derecho inter-  
no y no le ocuparemos mayor atención.

Esta varia procedencia de las normas imprime al or-  
denamiento jurídico de la integración centroamericana una  
singular fisonomía, que indudablemente contribuye a caracte-  
rizar lo "comunitario" de dicho ordenamiento.

La clasificación, que es más que todo una enumera-  
ción, puede ser la siguiente:

- a) Tratados, Convenios, Acuerdos y Protocolos de inte-  
gración centroamericana;
- b) Reglamentos emitidos para facilitar la aplicación  
de los Tratados, Convenios, Acuerdos y Protocolos;
- c) Resoluciones de los Consejos creados por el Trata-  
do General de Integración Económica Centroamerica-  
na;
- d) Recomendaciones y dictámenes de los órganos de in-  
tegración;
- e) Principios generales del Derecho y de la Ciencia  
Económica;
- f) Doctrina de los tratadistas de mayor competencia.



Al respecto de que el proceso de integración centroamericana esté regido en la actualidad por un número considerable de Tratados, Convenios, Acuerdos y Protocolos, se señala (91), que especialmente dos factores han condicionado el proceso. De una parte, la determinación de realizarlo en forma gradual y progresiva y, de otra, el criterio eminentemente pragmático con que se han enfocado los cambios requeridos al efecto.

B) Los Tratados como fuente del Derecho Comunitario Centroamericano.

a) Valor de los Tratados.

Como ya quedó indicado, la fuente primordial del derecho comunitario centroamericano está constituida por los Tratados, Convenios, Acuerdos y Protocolos, los que constituyen su medio de creación formal y escrito por excelencia, aportando la mayoría de las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario.

El origen de este Derecho es, esencialmente convencional y sus instrumentos son conocidos bajo la amplia gama de denominaciones con que en Derecho Internacional son conocidos los acuerdos entre Estados: tratados, convenios, carta, acuerdos, protocolos.

El principal mecanismo para la creación del derecho de la integración económica centroamericana es el de los tratados, convenios, acuerdos y protocolos. En el futuro trataremos de emplear exclusivamente la expresión "tratados", con la cual, salvo casos en los que se haría la aclaración oportuna, deberá entenderse que nos referimos a la amplia

gama de instrumentos mencionados.

Dentro de este orden de ideas, la misma facultad de crear derecho, a través de los tratados, conlleva la de modificarlo, derogarlo o sustituirlo, sin otra limitación para este actuar, necesariamente colectivo, que la que pueda establecerles el orden jurídico internacional.

Efectivamente, ninguno de los tratados suscritos, en el campo de la integración económica centroamericana, contiene disposición alguna que limite el derecho de los Estados para que, de común acuerdo, modifiquen, amplien o restrinjan las disposiciones originalmente adoptadas, ni tampoco sujeta su modificación o ampliación a trámite especial alguno. No obstante que el Consejo Ejecutivo, en uso de la competencia que le atribuye el artículo XXVIII del Tratado General, pueda analizar una situación y determinar los efectos que podría tener la celebración de un determinado tratado, dichas observaciones nunca serán impedimento legal, si todos los Estados están de acuerdo, para que puedan celebrar otro que suponga una ampliación, modificación o restricción de los anteriores.

Además, corresponde exclusivamente a los Estados, a través de la celebración de nuevos tratados, ampliar el marco legal integracionista para abarcar campos no previstos originalmente, tal como el caso de tratados que aseguren la libre movilidad de las personas, garanticen adecuadamente la de los servicios y regulen en esta misma forma, la existencia del régimen fiscal y el de la futura unión aduanera, ya que hasta la fecha, dentro del régimen del Mercado Común, únicamente se garantizan ciertos aspectos, como son la libre

circulación de los productos manufacturados y originarios de los países de la zona y el comercio desleal; y también, la libre movilidad de los capitales y en una forma bastante restringida la de los servicios. Esta situación de ser los Estados los únicos que pueden hacerlo, indudablemente está determinada por el hecho de que a los órganos de la integración no les otorgaron el suficiente margen de actuación para crear el derecho necesario que pudiera determinar una ampliación del derecho integracionista hacia nuevas esferas.

En cuanto a la ampliación y desarrollo de ciertas normas, que hacen alusión a este compromiso y que están contenidas fundamentalmente en ciertos tratados, a los que más adelante calificaremos de "básicos", la vía que se ha utilizado es la de la suscripción de protocolos. Pero, efectivamente, ninguna norma convencional, salvo el principio del pacta sunt servanda, compulsa a los Estados al cumplimiento de esos compromisos y mucho menos puede producir estos efectos una acción de los órganos de la integración. Los órganos, simplemente, sí pueden tener una iniciativa en este respecto y es efectivamente a lo que se han limitado, conforme los términos del artículo XXII del Tratado General.

En suma, los Estados después de crear ciertas normas básicas dejan su desarrollo y ampliación a protocolos posteriores. El término protocolo solo se emplea para identificar a un determinado instrumento legal, ya que tanto los tratados, los convenios y los protocolos, tienen, salvo una norma expresa, la misma naturaleza jurídica -tratados internacionales-, y la misma jerarquía, salvo que tan-

bién una disposición expresa establezca una jerarquía distinta.

Ejemplos de esta labor de desarrollo y ampliación a través de protocolos los tenemos, entre otros, en los casos siguientes:

En el protocolo de San José al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito el 31 de Julio de 1962, los Estados adoptaron disposiciones especiales aplicables a los productos lácteos, al establecer un sistema de cuotas de importación la leche en polvo procedente de terceros países; también se adoptaron disposiciones adicionales referentes al comercio desleal, que amplían las disposiciones que a este efecto están contenidas en el Capítulo III del Tratado General, ya que éste solo contempla el caso de comercio desleal dentro del área centroamericana y aquél contiene normas que hacen referencia a medidas respecto de mercancías procedentes de fuera de la región.

Un ejemplo más, se encuentra en el Protocolo Especial sobre Granos, llamado Protocolo de Limón, suscrito el 28 de Octubre de 1965, en el que se somete a un régimen especial la importación y exportación de los granos y se crea además, un órgano para coordinar las políticas y programas nacionales de estabilización de precios, este último, no previsto en el Tratado General, y con lo cual se amplía el alcance del mismo.

Otro ejemplo se tiene con el Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la

Importación y al Convenio sobre el régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, denominado Segundo Protocolo de Managua, suscrito el 16 de Noviembre de 1967, en el que se establecen nuevos gravámenes uniformes a la importación; además, se contienen disposiciones especiales sobre la política de desarrollo de la industria de hilados y tejidos de algodón, estableciendo un nuevo régimen industrial respecto a las industrias que se señalan; y además, se conforma una política crediticia relacionada con la industria de hilados y tejidos planos de algodón, al establecer en el artículo XV este especial deber al Banco Centroamericano de integración, con lo cual, sin consignarlo expresamente, amplía el Convenio Constitutivo del citado Banco; asimismo, le crea al Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), la obligación de formular las normas de calidad aplicables a los tejidos e hilados de cualquier fibra textil que se produzca en el área, dando preferencia a los hilados y tejidos planos de algodón. En estos términos, un solo Protocolo determinó la ampliación de diversos instrumentos.

El mismo fenómeno de ampliación se planteó con el Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, suscrito el 29 de Enero de 1963, por el cual se creó un sistema especial de promoción de actividades productivas a fin de estimular el establecimiento de industrias nuevas, sistema que no estaba previsto ni en el Tratado General ni en el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración.

Una consecuencia más de que los Estados tengan la facultad de crear derecho es, también, la de modificarlo y derogarlo, empleando al efecto el mismo método, es decir, los tratados.

Un ejemplo es suficiente para comprender este fenómeno jurídico. Conforme el artículo XIX del Tratado General, los Estados convinieron en alcanzar, en el menor plazo posible, una equiparación razonable de leyes y disposiciones sobre la materia y convinieron la suscripción de un protocolo especial, en el que se estipularía todo lo conducente, quedando la coordinación en la aplicación de los incentivos fiscales al desarrollo industrial a cargo del Consejo Ejecutivo. Efectivamente, los Estados suscribieron, no el protocolo especial que se consigna en el Tratado, sino un convenio, y en lugar de equiparar las leyes adoptaron una ley uniforme sobre incentivos fiscales al desarrollo industrial, en el que se deja, durante los primeros siete años de vigencia del mismo (la vigencia se inició el 23 de Marzo de 1969), a los propios Estados, con lo cual dicho convenio deroga todas aquellas disposiciones contenidas en leyes generales y especiales que se le opongan. En suma, la creación de normas básicas y complementarias, así como su ampliación, modificación y derogación, se realizan mediante el mecanismo de los tratados, aunque éstos reciban la denominación de protocolos, los que, repito, tienen, dentro del fenómeno jurídico de la integración económica centroamericana, la misma naturaleza, jerarquía y categoría. Bajo este procedimiento, la norma posterior deroga una anterior sin que para ello tenga relevancia el hecho de haberse adoptado

la misma a través de un protocolo.

b) Tratados básicos.

Solo unos pocos pueden recibir tal denominación, ya que la mayoría solamente contienen soluciones de detalle en cuestiones sobre las que existen acuerdos previos de carácter general.

Suelen calificarse como Tratados básicos a los siguientes (92) (apuntados por orden de suscripción):

- 1) Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica (93);
- 2) Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración;
- 3) Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación;
- 4) Tratado de Asociación Económica entre las Repúblicas de Honduras, Guatemala y El Salvador (93);
- 5) Tratado General de Integración Económica Centroamericana;
- 6) Carta de la Organización de Estados Centroamericanos.

Es criterio aceptado, que el Tratado General de Integración Económica Centroamericana es también, al igual que el Tratado de Roma que establece la Comunidad Económica Europea, un "tratado-marco", ya que desde su vigencia se constituyó en el instrumento constitutivo básico y central del Programa de integración económica centroamericana; además, porque establece para dicho proceso el sistema institucional básico que se consideró adecuado para la etapa que el Tratado iniciaba, y porque contiene el orden normativo alre

dedor del cual giran los demás instrumentos, tanto los anteriores como los posteriores a él, completando sus disposiciones, perfeccionándolas o extendiendo su ámbito de aplicación a otros campos cubiertos por el programa de integración.

Autores como Villagrán Kramer (94), sostienen que en cuanto al proceso de integración centroamericana no puede sostenerse de ninguna manera el criterio de la existencia de un "tratado-cuadro". En defensa de su tesis afirma:

"El marco legal que sirve de base a la integración económica centroamericana, según puede verse, es un marco flexible que no se precisa en función de un tratado único, un tratado base o un "tratado-marco" cual acontece en el caso de la ALALC y la CEE. Al haber retenido los Estados la potestad normativa para y dentro del esquema, pueden de acuerdo con el derecho internacional general introducir de común acuerdo cualesquiera modificaciones a los instrumentos adoptados, desarrollar sus normas programáticas, y asimismo, derogar cualquier norma adoptada por los mismos Estados o por los órganos instituidos con potestad legislativa".

Sin embargo estimamos, que lo anterior no destruye los argumentos expuestos para defender la tesis de que el Tratado General efectivamente constituye el Tratado básico y central del Programa de integración económica centroamericana. La norma contenida en el artículo XXVII del Tratado General, que señala que este Tratado prevalecerá, entre las partes contratantes, sobre los demás instrumentos suscritos



bilateral o multilateralmente, reafirma el criterio sostenido.

El crecido número de tratados, protocolos o convenios internacionales (95), que forman las fuentes formales escritas del Derecho Comunitario Centroamericano, en opinión de Gautama Fonseca (96), se explica si se tienen en cuenta los dos hechos siguientes:

- "a) Cuando se inició el proceso de integración a finales de 1950, los países no consideraron prudente -vistos los fracasos unionistas del pasado-, comprometerse en demasía en un programa de cuyas bondades no podía dudarse pero que tenía implicaciones que entonces no se habían determinado adecuadamente. Esto hizo que se le diera carácter gradual, progresivo y recíproco y que su perfeccionamiento requiriera de una acción legislativa intensa; y
- b) El régimen constitucional imperante en Centroamérica, que por razones de principio exige que todo compromiso internacional se establezca por medio de Tratados o Convenciones".
- c) Conclusiones de Tratados.

Estimamos conveniente iniciar el estudio de este aspecto, haciendo un análisis general de las condiciones que se requieren para poder suscribir los tratados, convenios y protocolos que regulan la integración económica centroamericana y para poder participar como miembro en el programa de integración.

Partiendo de la idea de que el Tratado General es el tratado básico y central del programa, referiremos nues-

tro comentario a dicho instrumento. Todos los demás instrumentos no contradicen, en ningún sentido, lo que al respecto del Tratado General señalaremos.

Los artículos I, XXX y XXXIII del Tratado General, hacen referencia al aspecto que nos preocupa.

Al efecto el artículo I señala:

"Los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado común que deberá quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Tratado. Se comprometen además a constituir una unión aduanera entre sus territorios".

El párrafo 3º del artículo XXX establece:

"El Tratado entrará en vigor ocho días después de la fecha en que se deposite el tercer instrumento de ratificación para los tres primeros ratificantes, y para el subsiguiente, en la fecha de depósito de su respectivo instrumento".

El artículo XXXIII dice:

"El presente Tratado queda abierto a la adhesión de cualquier Estado centroamericano que no lo hubiere suscrito originalmente".

De acuerdo con las disposiciones anteriores, los requisitos exigidos para adquirir la calidad comentada, son:

- a) Ser Estado;
- b) estar situado en Centro América;
- c) depositar en forma el instrumento de ratificación.

Del contexto del Tratado General y asimismo de los demás instrumentos de integración, se deduce además, que el

Estado miembro o el que quiera acceder a tal calidad, debe mantener un régimen económico que no sea incompatible con el Tratado o con los demás instrumentos a que se hizo referencia.

Es conveniente hacer un pequeño análisis de cada uno de los requisitos.

a) Ser Estado. El término Estado debe entenderse en el sentido técnico que le da el Derecho Internacional. Al respecto el artículo 10 de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, suscrita en la Séptima Conferencia Internacional Americana (Montevideo, 1933), dispone:

"El Estado como persona de Derecho Internacional debe reunir los siguientes requisitos: I) Población Permanente; II) territorio determinado; III) Gobierno; y IV) capacidad de entrar en relación con los demás Estados".

El artículo 2º de la Organización de Estados Americanos (OEA), dice:

"Son miembros de la Organización todos los Estados Americanos que ratifiquen la presente Carta".

En la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (1962), se hace una referencia constante a los cinco gobiernos y Estados centroamericanos, lo que permite no poner en duda que para ser miembro de la misma se necesita ser Estado Centroamericano. Al efecto, uno de los considerandos de la Carta señala:

"Que es necesario dotar a los cinco Estados de un instrumento más eficaz, estableciendo órganos que aseguren su progreso económico y social, eliminen las ba-

rreras que los dividen, mejoren en forma constante las condiciones de vida de sus pueblos, garanticen la estabilidad y la expansión de la industria y confirmen la solidaridad centroamericana".

El artículo 1º de la misma Carta de la Organización de Estados Centroamericanos dice:

"Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala son una comunidad económica-política que aspira a la integración de Centro América. Con tal propósito se ha constituido la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)".

El artículo 25 de la citada Carta de la ODECA señala también:

"La presente Carta será ratificada por los Estados Centroamericanos en el menor tiempo posible, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

Se registrará en la Secretaría General de las Naciones Unidas en cumplimiento del artículo 102 de su Carta".

Estimamos a este respecto, que a los elementos referidos debe sumarse el de "independiente", referido a los Estados, al que hace referencia el "Acta de Washington" sobre el ingreso de nuevos miembros en la O.E.A., emanada de la Primera Conferencia Internacional Extraordinaria, celebrada del 16 al 18 de Diciembre de 1964. En consecuencia, debe suponerse que la entidad política que no tenga plentitud de soberanía, es decir, de autonomía en lo interno y de independencia en lo externo, no puede formar parte o par

participar como miembro en el programa de integración económica centroamericana.

b) Estar situado en Centro América. El Tratado General, como tratado básico, y los demás tratados, convenios y protocolos, hacen referencia en su texto a expresiones como las siguientes: "impulsar en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica", "se comprometen a perfeccionar una zona centroamericana de Libre Comercio", "Los Estados signatarios, convencidos de la necesidad de unificar sus tarifas aduaneras y teniendo el firme propósito de establecer entre sus territorios una unión aduanera", "Los Estados contratantes convienen en establecer un régimen centroamericano uniforme de incentivos fiscales al desarrollo industrial", "el Banco Centroamericano de Integración Económica... El Banco tendrá por objeto promover la integración económica y el desarrollo económico equilibrado de los países miembros". Las expresiones anteriores están contenidas en instrumentos tales como los siguientes: Objeto y artículo II del Tratado General; artículo IV del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica; artículo 1º del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial; artículos 1, 2 y 35 del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.

En el panorama internacional actual debe entenderse por Centro América, la parte del Continente Americano que comprende a las actuales unidades estatales que formaron la disgregada República Federal de Centro América, las que no puede negarse que están impregnadas fuertemente de elemen-

tos étnicos, lingüísticos, culturales, económicos, de tradición e historia, comunes.

Con una excepción, en atención a las afinidades que guarda con el área centroamericana en cuanto a los elementos últimamente citados y su posición geográfica, el artículo 10 de las disposiciones transitorias de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (1962), admite la posibilidad de adhesión de Panamá, no obstante considerársele, en la práctica real de la zona tradicional como fuera del área centroamericana (96-A). El precepto citado establece al efecto:

"El presente Convenio queda abierto a la República de Panamá para que, en cualquier tiempo, pueda adherirse a esta Carta y formar parte de la Organización de Estados Centroamericanos".

Aunque esta adhesión no se ha dado formalmente, existe un Protocolo de incorporación de Panamá a algunos órganos subsidiarios de la ODECA (los que tienen una vinculación indudable con aspectos diversos de la integración e económica e integración en general, de Centroamérica). Este Protocolo fué suscrito en San Salvador, El Salvador, al 16 de Junio de 1966, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2<sup>a</sup> de las Disposiciones Transitorias de la misma Carta de la ODECA.

No ofrece ninguna duda que la participación en el proceso de integración económica centroamericana, se restringe en base a dos limitaciones: a) la de índole geográfica; y b) la de índole histórico-cultural.

En base a lo expuesto en líneas anteriores, partiendo de los diversos instrumentos actualmente vigentes, queda descartada la posibilidad de participación o incorporación en el Programa de integración centroamericana, en calidad de miembro con plenos derechos, de cualquier otro país hispanoamericano, de Estados Unidos, Estados Europeos o Estados integrados en cualquier otra región.

c) Depósito en forma del instrumento de ratificación. Este aspecto no ofrece mayor comentario y solo señalaremos que a ello hacen referencia los artículos XXX y XXXII del Tratado General; XXVII del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica; XVI del Protocolo de San José al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación. Solo en vía de ejemplo dejamos apuntados los preceptos anteriores, ya que todos los instrumentos actualmente vigentes contienen cláusulas de similar redacción, señalando todas que la depositaria de los instrumentos será la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos.

d) Mantenimiento de un régimen económico compatible con los Tratados y demás instrumentos que rigen el proceso de integración. El programa de integración económica centroamericana, tiene en su base una organización con determinados objetivos y metas en orden al desarrollo económico de los Estados miembros. Estos objetivos y metas se conciben indudablemente partiendo de ciertos presupuestos básicos sobre los cuales se asienta la estructura y el funcionamiento del Programa, para el cumplimiento o el logro

de aquellos objetivos. Lo anterior supone que si el régimen económico de un Estado no armoniza con esos presupuestos, se crea una incompatibilidad técnica y económica con el sistema establecido, lo que originaría una indudable distorsión en el funcionamiento del programa de integración económica.

Aunque este requisito último no se menciona expresamente en el texto de los instrumentos varios que regulan la integración económica centroamericana, es lógico suponer que se exija, por cuanto corresponde a una adecuada interpretación, el considerar a todas las disposiciones de un tratado, convenio, o protocolo, como un conjunto e interpretarlas de manera tal que se evite, en lo posible, privar a cualquiera de ellos de su efecto útil. Esto es particularmente importante, para asegurar el eficaz y armónico funcionamiento del aparato institucional concebido y consecuentemente, la adecuada realización de los objetivos que estén establecidos. Puede considerarse que este requisito está implícito en los diversos instrumentos, atendiendo a las razones siguientes:

- a) Atendiendo a los fines perseguidos y la consiguiente institución del Mercado Común, con todo lo que ello representa, se presupone la intención en las partes contratantes del mantenimiento de regímenes económicos compatibles con dichos fines, a efecto de que los mismos puedan cumplirse;
- b) En el Tratado General, principalmente, se estableció un mecanismo institucional cuyo pleno y normal funcionamiento requiere la coordinación y armonización de los regímenes económicos de sus Estados miembros. Esto supone una compati



bilidad esencial de los regímenes político-económicos vigentes entre los Estados miembros, porque de lo contrario, el sistema institucional y funcional carecería de efectividad (97).

En relación a lo expuesto señalamos finalmente, que el eficaz funcionamiento del programa de integración económica centroamericana solo podrá lograrse si entre los Estados miembros existen afinidades en cuanto al régimen político, económico, social, que mantengan.

Tanto el Tratado General, como sus instrumentos complementarios, anteriores y posteriores, se han concluido siguiendo el procedimiento tradicional de negociación, firma, aprobación legislativa, ratificación y depósito, teniendo cada uno de estos trámites el mismo significado y alcance que les atribuye el Derecho Internacional Público. La observancia de los trámites anteriores obedece, naturalmente, al hecho de haberse considerado, que por la naturaleza de su objeto y el alcance de muchas de sus estipulaciones, no era constitucionalmente factible apartarse de disposiciones expresas del ordenamiento interno de los países contratantes.

Cabe señalar, que debido a la lentitud del sistema antes expuesto, ha venido manifestándose, en los últimos años, una preocupación por encontrar medios más expeditos de concertación de convenios.

El sistema tradicional de concertación de convenios internacionales, implica actuaciones unilaterales sobre las cuales los órganos comunitarios no podrían tener ingerencia, tal como ocurre con la aprobación legislativa, la

ratificación y el depósito.

La técnica que está incorporada en la mayoría de los instrumentos que forman parte del programa de integración centroamericana, respecto al inicio de la vigencia de los mismos, es la siguiente: el convenio contenido en el instrumento entra en vigencia con el depósito del tercer instrumento de ratificación para los tres primeros depositantes; para los demás, en la fecha del respectivo depósito (93). Estos mecanismos, exceptuando quizás el mencionado último, el que también tiene la desventaja de ser dilatado en su trámite, tienen el grave inconveniente de que crean disparidades jurídicas entre los Estados, pues en tanto no se han realizado los cinco depósitos, las normas comunitarias no adquirieron la necesaria uniformidad.

En el Seminario sobre "Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Centroamericana" (99), celebrado en el Centro de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Miami en 1964, se advirtieron los problemas que, respecto al desarrollo de la integración económica centroamericana, se originan de ajustar la celebración, aprobación y ratificación de tratados a las formalidades tradicionales; se planteó allí además, la forma de superar dicho problema mediante el establecimiento de un sistema jurídico especial para los instrumentos centroamericanos, menos formalista, que simplifique su entrada en vigor. En este mismo Seminario se trató de investigar también, las fórmulas y procedimientos idóneos y posibles para sustituir los tratados o ampliar sus alcances a través de otros medios paralelos o sustitutivos.



Durante el Segundo Congreso Jurídico Centroamericano (100), se recomendó, que se reconocieran las diferencias de rango que existen en los instrumentos que regulan el sistema de integración económica y que en virtud de ello se reservara la ratificación legislativa para los tratados básicos y se establecieran procedimientos más acelerados para las normas de menor rango y protocolos de detalle (101). En un sentido más o menos idéntico se pronunció el Segundo Congreso Centroamericano de Congresos (102), celebrado en 1968.

En los pronunciamientos de las Reuniones antes citadas no se mencionan, específicamente, los procedimientos o la técnica más ágil y flexible por los que se abogaba, aunque probablemente lo que se tenía en mente era la adecuada utilización del que es conocido como instrumento otorgado "en forma simplificada"; lo que significa, que una vez negociado y firmado el instrumento, entra en vigor por el mero acto de la firma o un simple acto posterior de aprobación por parte del Poder Ejecutivo.

A nivel de los organismos oficiales de integración, el asunto se ha planteado más bien en términos de lograr un procedimiento o una fórmula que permita obtener de modo más expedito y rápido la aprobación y ratificación de los instrumentos que se suscriben. Así tenemos, que el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (103), en su Reunión de Enero de 1966, hizo a este respecto una tímida recomendación al Consejo Económico Centroamericano, consistente en que al suscribirse futuros protocolos de renegociación de gravámenes uniformes a la importación, se recomendase a los Gobiernos que adopten plazos para solemnizarlos



a la consideración de sus respectivos Congresos y para depositar los correspondientes instrumentos de ratificación una vez concluido el proceso legislativo.

Para superar las demoras y dificultades inherentes al actual sistema de renegociación arancelaria mediante Convenios o Protocolos sujetos al trámite tradicional de la aprobación legislativa y la ratificación, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) (104) propuso, que en lugar de agilizar el sistema actual para la renegociación, se atribuyera a los Consejos instituidos por el Tratado General, y no a los gobiernos, la competencia al efecto. Conforme la propuesta, el Consejo Económico Centroamericano sería competente para fijar el monto de los impuestos que gravan la importación, dentro de los límites máximos y mínimos que determinen los Congresos Nacionales. El Consejo Ejecutivo sería competente para continuar realizando la negociación y renegociación arancelaria para facilitar al Consejo Económico Centroamericano el cumplimiento de sus responsabilidades. La propuesta de la SIECA pretende encontrar su fundamento en el texto mismo de los artículos XX y XXI del Tratado General, que hacen referencia a las funciones y competencias de los Consejos Económico Centroamericano y Ejecutivo; el primero para dirigir la integración y coordinar la política económica de los Estados, y el segundo, para aplicar y administrar el Tratado, realizar todas las gestiones y trabajos que tengan por objeto llevar a la práctica la unión económica de Centroamérica y proponer a los Gobiernos la suscripción de

los convenios unilaterales que adicionalmente se requieran para alcanzar los fines de la integración económica de Centroamérica.

Es un hecho indudable y una necesidad urgente, que se generalice la reforma de la técnica de conclusión y puesta en vigor de los Tratados, Convenios y Protocolos que se relacionen con el proceso de integración centroamericana. Una solución a fondo de los problemas que pueda presentarse al efecto, sólo podrá lograrse a través de una reforma de los preceptos de cada una de las Constituciones que hacen referencia a esos problemas, a efecto de que constitucionalmente quede regulado en forma expedita la conclusión de los convenios que se refieren a la integración centroamericana. Mientras tanto, se necesitará una actuación inspirada bajo un principio de mayor comprensión de los problemas que afectan a estos asuntos y una labor de interpretación flexible de las normas constitucionales vigentes, que permitan orientarse hacia soluciones momentáneas correctas.

Al igual que acontece en otros esquemas internacionales se presenta en Centro América la modalidad jurídica de los acuerdos simplificados. Es decir, instrumentos internacionales que no requieren aprobación y ratificación por el órgano estatal que aprueba o ratifica los tratados, convenios y protocolos, para que surtan efectos jurídicos. Esta modalidad de acuerdos simplificados se ha registrado dentro del esquema centroamericano sin circunscribirse a los que celebran los poderes ejecutivos. . Se encuentra establecida esta modalidad en los instrumentos de creación de la Cámara de Compensación Centroamericana y el Consejo Monetario Cen-

troamericano (105). Ambos requieren, para su vigencia, de ratificación por el órgano de mayor jerarquía de cada uno de los Bancos Centrales centroamericanos.

El artículo 40 del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (106) es la base legal para establecer la Cámara de Compensación Centroamericana, el que al efecto establece:

"El Banco podrá prestar sus facilidades para la organización y funcionamiento de una cámara de compensación por cuenta de los Bancos Centrales cuando éstos así lo soliciten".

También constituye un fundamento legal importante, las propias leyes Orgánicas de los Bancos Centrales, en las que se les confiere un grado de autonomía suficiente para que pueda cumplir sus fines la Cámara de Compensación.

La constitución del Consejo Monetario Centroamericano encuentra su fundamento en el artículo X del Tratado General y en las propias leyes orgánicas de los Bancos Centrales. Al efecto el párrafo 1º del artículo X citado dice:

"Los Bancos Centrales de los Estados signatarios cooperarán estrechamente para evitar las especulaciones monetarias que puedan afectar los tipos de cambio y para mantener la convertibilidad de las monedas de las respectivos países sobre una base que garantice, dentro de un régimen normal, la libertad, la uniformidad y la estabilidad cambiarias".

En relación al término "ratificación", el que está reservado normalmente para un acto del Poder Ejecutivo, el artículo 34 del Convenio Constitutivo de la Cámara de Compensación Centroamericana, establece:

"Este Convenio entrará en vigor inmediatamente después de la última ratificación de tres Bancos Centrales, comunicada al Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica".

El Convenio de Compensación y de créditos recíprocos entre los Bancos Centrales miembros de la Cámara de Compensación Centroamericana y el Banco de México S.A. (107), también contiene una norma similar. Al efecto su artículo 34 dice:

"La ratificación del presente Convenio deberá ser notificada por cada Banco Central signatario a la Cámara de Compensación Centroamericana, la que a su vez la comunicará, a la brevedad posible, a los otros Bancos Centrales signatarios indicando asimismo, la fecha de inicio de las operaciones".

El mecanismo legal bajo comentario es también objeto de aplicación en el caso del Convenio Constitutivo del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)<sup>(108)</sup>, en el que se señala que la integración del mismo es por representantes de las Universidades de cada Estado. En cuanto a la ratificación del Convenio se establece:

"a) El organismo superior de cada Universidad de Centroamérica, una vez ratificada esta convención, procederá inmediatamente al nombramiento de sus respectivos delegados ante el Consejo Superior Universitario Centroamericano".

Tanto el Convenio Constitutivo del Consejo Superior Universitario Centroamericano, como los acuerdos varios que suscriben las Universidades, requieren para entrar en vigor únicamente la ratificación por el órgano de más alta jerarquía dentro de la estructura universitaria, es decir, los respectivos Consejos Superiores.

Lo anterior pone de manifiesto, que en la práctica centroamericana no todos los acuerdos o normas de integración requieren de una previa aprobación legislativa para entrar en vigor, y tampoco de una necesaria ratificación por los organismos ejecutivos, sino que hay casos, en que la ratificación corre a cargo de otros órganos estatales.

Una solución provisional adecuada, enfocada con carácter general, podría ser, la que hace referencia a la adopción de instrumentos y entrada en vigor de los mismos por el mero hecho de la firma, o un simple acto posterior de aprobación por el Poder Ejecutivo y además, se ampliara el uso, en el caso de organismos con un grado efectivo de autonomía, distintos del Poder Ejecutivo, de la vía legal antes comentada. A esto debe unirse, el compromiso de los Poderes Ejecutivos de no demorar, en otros casos en que esto si se necesite, la realización de las fases correspondientes a la ratificación y depósito.

Sin embargo, sería más efectivo, que en los Convenios mismos se fijara la fecha para el inicio de su vigencia, en forma automática, con la salvedad de que los mismos podrían ser denunciados o no aceptados por los Estados (por oposición de los Congresos o cualquier otra razón), antes



de tal fecha. Esta fórmula tendría la ventaja de, en caso de no haber denuncia, los instrumentos iniciarían su vigencia en forma simultánea en todos los Estados contratantes; tendría la desventaja, de que para su firme establecimiento se requeriría quizás una previa reforma constitucional de las disposiciones vigentes aplicables (109).

Finalmente, estimamos que debe considerarse adecuado, para la fase actual de desarrollo del programa de integración centroamericana, que para la adopción de los instrumentos complementarios del programa, se adopte, en forma generalizada, la forma simplificada de conclusión de convenios a que antes se hizo referencia. Para los demás instrumentos, es decir para aquellos en que pueda estimarse oportuno y necesario, un procedimiento audaz e importante sería, el de fijar en el propio texto de los mismos, el inicio de su vigencia en forma automática, en los términos y con el mecanismo a que se hizo referencia en líneas anteriores.

Una solución provisional y temporal digna de considerarse sería, la adopción de un compromiso entre los Estados participantes, para que impulsen, cuando ello sea necesario, y mediante los procedimientos ya sugeridos, las fases de aprobación legislativa, o en su caso, no se demoren los actos de ratificación y depósito de los instrumentos.

#### 1) El problema de la adhesión.

Iniciamos este tema con una pequeña exposición descriptiva acerca de los procedimientos por medio de los cuales las normas constitucionales de las organizaciones inter

nacionales regulan la participación de otros Estados. Al efecto, los procedimientos más usados son la "admisión" y la "adhesión".

En el caso de la admisión, se requiere no solamente la declaración de voluntad del Estado que desea entrar a formar parte de la organización, sino además, la decisión favorable de dicha organización expresada a través del órgano u órganos competentes o de la conjunción de la mayoría o de la unanimidad de los asentimientos de los Estados ya miembros, según el grado de institucionalización de la organización.

En el caso de la adhesión, es suficiente para adquirir la calidad de miembro, una declaración de voluntad del Estado interesado. En opinión de algunos, a este mecanismo sería preferible denominarlo de admisión automática (110), ya que para adquirir el status de miembro solo se requiere la manifestación de voluntad del Estado interesado, es decir, de colocarse en la situación que prevén los tratados correspondientes.

El procedimiento de la adhesión no es incompatible con el ejercicio de una forma de control respecto al adherente, de las condiciones ya mencionadas como necesarias para que un Estado pueda adquirir la calidad de miembro de una organización internacional o estrictamente comunitaria (111).

En uno y otro de los procedimientos referidos, el Estado a la vez que entra a formar parte de un acuerdo multilateral, con derechos y obligaciones recíprocas, se integra dentro de un cuerpo dentro del cual deja de actuar co-

mo una individualidad autónoma, para hacerlo como miembro de una entidad distinta de sus componentes, como parte de un organismo cuya voluntad, fuente de nuevas obligaciones y derechos, contribuye jurídicamente a formar, todo dentro del cumplimiento dinámico de unos fines comunes.

Dentro del marco de los tratados, convenios y protocolos que regulan el proceso de integración centroamericana, no se contempla el procedimiento de admisión. Si se contienen normas referentes al procedimiento de adhesión, aunque referidas exclusivamente, con las excepciones a que haremos referencia, a los Estados Centroamericanos (111-A).

Al efecto, los instrumentos que regulan la integración económica centroamericana, no están abiertos ni contemplan la posibilidad de que a ellos se adhieran terceros Estados ajenos al área centroamericana. No sólo no está prevista su adhesión, sino tampoco podría entenderse que ella es posible por el mero hecho de no existir, en algunos instrumentos, disposición contraria al respecto. El Tratado General no contiene ninguna disposición que aluda a este problema.

La regla conoce una excepción y en relación a un solo país, y es la contenida en los artículos 1 y 2 de las Disposiciones Transitorias de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) (112), en los que se admite la posibilidad de que la República de Panamá forme parte de la Organización o de cualquiera de sus organismos subsidiarios, mediante un acto formal de adhesión, que todavía no se ha dado, en lo que se refiere a la Organiza-

ción. Sin embargo, sí forma parte, por haber suscrito los protocolos correspondientes, de algunos de los organismos subsidiarios de la Organización, algunos de los cuales tienen lazos de relación con el proceso mismo de integración económica centroamericana (113).

En los Tratados, Convenios y Protocolos que regulan en forma directa el proceso de integración económica, salvo el caso del instrumento a que más adelante se hará referencia, no se contiene disposición alguna que haga alusión, o permita suponer la posibilidad de adhesión al mismo, del Estado de Panamá. Esto justifica lo expuesto más adelante, respecto a la necesidad de que para su ingreso previamente se celebre un Acuerdo formal de Asociación.

En cuanto a la participación de Panamá en el programa de integración económica, en muchas oportunidades, el Consejo Económico Centroamericano ha expresado opinión al respecto, indicando que se vería con simpatía su participación, pero ello no se ha traducido en nada concreto. No obstante debe calificarse como un síntoma más de apertura lo estipulado en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (114), en el que en su artículo 236 se establece que el mismo queda abierto a la adhesión de la República de Panamá.

En suma, los convenios centroamericanos de integración económica no surten efecto alguno respecto de terceros Estados y en el caso concreto de Panamá, repito, estimamos que no sería suficiente una adhesión unilateral o que se dirigiera a los respectivos Gobiernos manifestándoles ese propósito, sino que en todo caso, sería preciso la

negociación y suscripción de un tratado o acuerdo especial de asociación, el que tendría que sufrir, además, todos los trámites mencionados, de aprobación legislativa, ratificación y depósito para el inicio de su vigencia en relación a cada uno de los Estados. Este comentario deja a salvo el caso del Convenio Centroamericano para la protección de la Propiedad Industrial, en el que en atención a la redacción de su artículo 236 puede estimarse, que sería suficiente un acto unilateral de adhesión.

## 2) La cuestión de las reservas.

Las reservas en el Derecho Comunitario Centroamericano están totalmente proscritas, lo cual constituye un progreso significativo. Sin embargo, no se realizan, no en virtud de un acuerdo expreso de voluntades, ya que en ningún instrumento se hace referencia a ello, sino en virtud de un acuerdo tácito, de un convencimiento firme de que no deben existir, ya que se prefiero no pactar a admitir su posibilidad. Esto ha determinado, que en el curso de las negociaciones, se hagan los mayores esfuerzos para encontrar soluciones a normas aceptables para todos los países.

Esta singular forma de actuación, indudablemente, se ha logrado gracias a la convicción existente de que en el campo especial de la integración centroamericana debe regir un idéntico régimen jurídico. Sin embargo, lo ideal sería que, unida a esta firme convicción en el actuar, se establecieran normas que prohibieran la ratificación con reservas de los tratados respectivos, ya que no puede dudarse de que el derecho comunitario existente debe regir por igual en todo el área centroamericana. Esto, sin embargo, tiene

el peligro de que por el hecho de no poderse establecer reservas, no se ratifiquen, con la celeridad deseada, los tratados, no obstante reconocerse que la vigencia de los mismos, normalmente, solo puede originar beneficios para los Estados.

### 3) Las cláusulas de salvaguardia.

Varios instrumentos introducen ciertas limitaciones a la capacidad de contratar de los Estados miembros, con el fin indudable de salvaguardar con ello la integridad del marco normativo creado por los tratados de integración económica y asimismo, salvaguardar con ello los intereses centroamericanos. Estas limitaciones afectan, indudablemente, a la soberanía de los Estados, en cuanto a su libertad de contratación.

Básicamente, estas limitaciones están contenidas en el artículo XXV del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, cuyo tenor es el siguiente:

"Los Estados signatarios convienen en no suscribir unilateralmente con países no centroamericanos nuevos tratados que afecten los principios de la integración económica centroamericana. Asimismo convienen en mantener la "Cláusula Centroamericana de Excepción" en los tratados comerciales que celebren sobre la base del tratamiento de nación más favorecida con países distintos a los Estados contratantes."

La primera parte del artículo citado, o sea la que hace referencia a la suscripción unilateral con países no centroamericanos de nuevos tratados que afecten los princi-

pios de la integración económica centroamericana, no es otra cosa más que el resultado de un proceso evolutivo cuyos orígenes deben buscarse en los tratados bilaterales entre los Estados centroamericanos, que precedieron al actual programa de integración.

Como nota singular, debe advertirse la amplitud de la cláusula prohibitiva, ya que en lugar de hacer referencia a reservas u otras prohibiciones igualmente precisas, alude a los "principios de la integración económica". Sin embargo, esta expresión, por su misma amplitud, es imprecisa y puede ser objeto de interpretaciones unilaterales extensivas o restrictivas y como consecuencia no le quitan validez a las afirmaciones hechas al final del punto anterior. No obstante, esta norma constituye uno de los compromisos más solemnes dentro del programa de integración centroamericana y el hecho mismo de su inclusión en el Tratado, pone de manifiesto el grado de vinculación y solidaridad esencial existente entre los Estados centroamericanos, no obstante, pasajeras pero graves situaciones de desavenencia ocurridas entre algunos Estados.

La "Cláusula Centroamericana de Excepción" responde al mismo propósito de la comentada en líneas anteriores, ya que estatuye un límite adicional a la capacidad de celebrar tratados que tienen los Estados, ya que en virtud de la misma no pueden los Estados Centroamericanos hacer extensivos a terceros países los beneficios que para ellos se derivan del programa de integración.

El Tratado General de Integración Económica Centroamericana no constituye ni el primero ni el único ins-

trumento, en el que se incluye la "Cláusula Centroamericana de Excepción", ya que se le encuentra en otros anteriores como son el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica y el Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación. Al efecto, la parte conducente del artículo XXIV del primero, establece:

"Los Estados signatarios convienen en seguir manteniendo la "Cláusula Centroamericana de Excepción" en los tratados comerciales que celebren sobre la base del tratamiento de nación más favorecida con países distintos a los Estados contratantes.

Declaran las partes contratantes que el espíritu que los anima en la celebración del presente Tratado es el de un mayor acercamiento como Estados de Centroamérica regidos en la actualidad por los principios especiales de un Derecho Público Centroamericano. En este sentido convienen en que si alguno de los tratados comerciales que tienen celebrados con otras naciones o su participación en otros arreglos internacionales llegaren a ser obstáculo para la existencia del que ahora celebran, especialmente en razón de las estipulaciones contenidas en aquellos otros tratados que dieran margen a que esos países exigiesen un tratamiento de favor igual, procederán a renegociarlos, o en su caso, denunciarlos cuanto antes sea posible, a fin de evitar las dificultades o los perjuicios que pudieren sobrevenir a cualquiera de los Estados contratantes por una exigencia de esa naturaleza.

Asimismo, las partes contratantes se obligan a no suscribir con otras naciones nuevos convenios que sean con



trarios al espíritu y objetivos del presente Tratado y, en particular, a lo previsto en este artículo".

La parte conducente del artículo VIII del segundo instrumento, señala:

"Los Estados signatarios, en virtud de que este Convenio es de carácter específicamente centroamericano y constituye una de las bases de la unión aduanera de los países contratantes, convienen en mantener la "Cláusula Centroamericana de Excepción" con respecto a terceros países en lo que se refiere a la aplicación del régimen arancelario preferencial que establece este artículo".

Indudablemente, la cláusula contenida en el Tratado General trata de ser mucho más amplia y comprender en sus efectos a los más variados campos y materias que puedan tener relación con el proceso de integración económica centroamericana.

Comentando este mismo tipo de cláusulas, Gautama Fonseca, (115) Jefe de la Sección Jurídica de la SIECA, señala que las mismas:

"permiten esperar que en un corto plazo se produzcan modificaciones sustanciales en el aparato institucional que hasta ahora existe, pues al implicar una actuación conjunta, unitaria, frente a los demás países que forman la comunidad internacional, inevitablemente implica también la existencia de una estructura orgánica, ágil, eficaz, no ontrabada por los sentimientos nacionalistas que generó el concepto de soberanía y que se advierten en los entes

regionales con que hasta hoy se cuenta".

4) Las cláusulas de desarrollo equilibrado.

Dentro del programa de la integración económica centroamericana, la equidad tiene una forma de manifestación concreta en el llamado principio del "desarrollo equilibrado" o "desarrollo armónico". Este principio encuentra su fundamento en la aspiración de los Estados centroamericanos de obtener, a través del proceso integracionista, un desarrollo individual y, consecuentemente, conjunto.

Manifestaciones de esta especial aspiración, las encontramos en disposiciones diversas de los instrumentos que constituyen el marco legal del programa de integración.

Al efecto, en el Proámbulo del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, se establece:

"Animados del deseo de estrechar los lazos de hermandad que natural y tradicionalmente unen a sus países y de cooperar conjuntamente hacia la superación de los problemas económicos que les afectan en común,

Teniendo como objetivo fundamental la elevación de los niveles y condiciones de vida de los pueblos centroamericanos y el uso racional, para tal fin, de sus recursos naturales, y convencidos de que, dentro de los programas de desarrollo económico del Istmo Centroamericano, la integración de sus economías ofrece ventajas que redundarán en una ampliación del intercambio comercial y en un proceso más acelerado de industrialización sobre bases de inte-

rés recíproco".

En el artículo I del mismo Convenio, se pacta:

"Los Estados contratantes se comprometen a estimular y promover el establecimiento de industrias nuevas y la especialización y ampliación de las existentes, dentro del marco de la integración económica centroamericana, y convienen en que el desarrollo de las diferentes actividades que estén o puedan estar comprendidas en dicho programa deberá efectuarse sobre bases de reciprocidad y equidad, a fin de que todos y cada uno de los países centroamericanos obtengan progresivamente beneficios económicos".

El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, únicamente hace referencia a lo siguiente, contenido en el Preámbulo correspondiente:

"Con el objeto de reafirmar su propósito de unificar las economías de los cuatro países e impulsar en forma conjunta el desarrollo de Centroamérica a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes".

El Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, suscrito en Managua, Nicaragua, el 13 de Diciembre de 1960, en la parte conducente de su artículo 26, estableco:

"El Banco tendrá por objeto promover la integración económica y el desarrollo económico equilibrado de los países miembros".

El Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, establece en su Preámbulo:

"Con el objeto de estimular en forma conjunta el des-

arrollo industrial de Centroamérica, a fin de mejorar las condiciones de vida y el bienestar de sus pueblos".

Al fijarse el objetivo del mismo Convenio, el artículo 1º señala:

"Los Estados contratantes convienen en establecer un régimen centroamericano uniforme de incentivos fiscales al desarrollo industrial, de acuerdo con las necesidades de la integración y del desarrollo económico equilibrado de Centroamérica y conforme a las siguientes disposiciones:

En la disposición transitoria Quinta del citado Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, se establece lo siguiente:

"Con el propósito de aplicar el principio de desarrollo equilibrado entre los países centroamericanos, los Estados signatarios acuerdan que la Autoridad Administrativa nacional de la República de Honduras podrá conceder durante dos años, y la República de Nicaragua durante un año, exención de impuesto sobre la renta a las utilidades, los activos y el patrimonio, adicionalmente a los que les correspondan, a las empresas que, conforme a este Convenio, clasifiquen como pertenecientes a industrias nuevas de los grupos A y B. Estos beneficios adicionales se otorgarán durante los primeros diez años de este Convenio".

Otra manifestación de este deseo comunitario de desarrollo equilibrado o armónico lo encontramos en la con

firmación de un trato preferencial a Honduras, en virtud de concedérsele el tratamiento de país de menor desarrollo relativo dentro del área, contenido en el Protocolo al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, suscrito el 23 de Septiembre de 1966.

d) Aplicación de los Tratados.

Dentro de la estructura normativa regional de la integración centroamericana se pueden localizar fácilmente tres tipos de normas. En primer término, las normas creadas por los Estados a través del procedimiento de los tratados. Estos a su vez pueden tener el carácter de básicos, complementarios y reglamentarios, según el tipo y la naturaleza de la norma creada mediante este método.

En segundo término se tienen las normas creadas por los órganos de la integración, en ejercicio de la competencia normativa que se les ha conferido y las que jerárquicamente tienen la categoría de normas secundarias frente a las primeras.

En tercer término, se tienen las normas creadas por los Estados individualmente.

En líneas anteriores hicimos una referencia y un pequeño comentario respecto a lo anterior y a él nos referimos y nos limitamos.

En relación a lo comentado en líneas inmediatamente anteriores, está el problema de la aplicación de los tratados, lo cual se realiza efectivamente a través de tres sistemas, es decir, por los órganos creados por el Tratado General, por órganos internacionales distintos a los primeros y por órganos propios de los Estados miembros.

En cuanto al primer sistema, o sea la aplicación de los Tratados por los órganos comunitarios creados por el Tratado General, podemos señalar lo siguiente. La tribución de orden general fué asegurada a los tres órganos, es decir, al Consejo Económico Centroamericano, al Consejo Ejecutivo y a la Secretaría Permanente (SIECA), lo cual se desprende del texto mismo de los artículos XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del Tratado General.

La competencia más amplia está asegurada al Consejo Económico Centroamericano, conforme los términos del artículo XX, ya que conforme éste le corresponde resolver los problemas que plantee la aplicación o inaplicación de las normas de los tratados, actuando en unos casos como única instancia y en otros como instancia superior, salvo que la competencia de aplicación se le asigne expresamente a otro órgano.

A este efecto pueden mencionarse los claros ejemplos siguientes:

El Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, conocido como Segundo Protocolo de Managua, suscrito el 16 de Noviembre de 1967, le asigna, en su artículo XVII, en forma exclusiva y en única instancia, la competencia de aplicación del mismo, ya que en atención a recomendaciones del Consejo Ejecutivo, es el único que puede adoptar las medidas que sean necesarias para evitar discriminaciones en los precios, actos de comercio desleal o situaciones que redunden en perjuicio de los consumidores o de las industrias

que utilicen los productos textiles como materia prima.

El Protocolo Especial de Granos, conocido como Protocolo de Limón, le asigna una especial competencia de segunda instancia en la aplicación del mismo. Mediante este Protocolo se creó la Comisión Coordinadora de Mercadeo y Estabilización de Precios para Centroamérica, la que fué dotada de la facultad de velar porque a nivel nacional se cumplan sus resoluciones. Cuando un Estado se considera afectado por las mismas, puede llevar el asunto ante el Consejo Ejecutivo, a efectos de que éste resuelva el problema. Para el caso de que haya inconformidad con lo resuelto por el Consejo Económico, el artículo 11 del Protocolo en men-  
ción admite la posibilidad de que se pueda recurrir, en ca-  
rácter de órgano de superior jerarquía, al Consejo Económi-  
co Centroamericano, para que resuelva en definitiva.

El Consejo Ejecutivo, tiene la competencia de apli-  
car solo los tratados que expresamente hubieren previsto e-  
sa competencia, es decir, el Tratado General; además, todos aquellos otros en los que expresamente se le confiera y los instrumentos suscritos con antelación al Tratado General, bilaterales o multilaterales, los que por mandato expreso del artículo XXII del Tratado General, su aplicación co-  
rresponde al Consejo Ejecutivo. A esta competencia de apli-  
cación hacen referencia, no solo el precepto citado, sino el artículo XXI del instrumento. Respecto al Tratado Gene-  
ral, ya hemos destacado su singular importancia, y en aten-  
ción a ésta, es de dejar asentado, que su aplicación, la que por mandato corresponde al Consejo Ejecutivo, destaca a éste en forma especial como órgano de aplicación del de

recho comunitario centroamericano.

En cuanto a la competencia de la Secretaría Permanente (SIECA), le está asignada solo para el caso de que la interpretación de los tratados no esté expresamente confiada a otro organismo, a lo cual hace clara referencia el artículo XXIV del Tratado General. En consecuencia, la Secretaría Permanente (SIECA), se sustrae de la aplicación de un tratado, si en el mismo dicha competencia se le asigna a otro órgano. En la realidad de su actividad, en cuanto a este aspecto, la SIECA se limita a formular observaciones a los Estados y al Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación o inaplicación de los Tratados.

En cambio, el Consejo Ejecutivo, en contraposición a lo anterior, puede ir más allá en su actividad de aplicación de los tratados, ya que conforme al artículo XXII del Tratado General, tiene la atribución de dictar todas las medidas que sean necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Tratado General y resolver los problemas que se susciten con motivo de la aplicación de sus disposiciones.

En cuanto al segundo sistema, o sea, la aplicación de los Tratados o del derecho comunitario por otros órganos internacionales, es decir, órganos distintos a los instituidos por el Tratado General, puede citarse el caso de la forma de aplicación que está establecida en el Convenio Constitutivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica y el Tratado sobre Telecomunicaciones. En el primero, se establece un órgano especí-



fico encargado de su aplicación. En el segundo, igualmente, ya que tal encargo se le asigna a la Asamblea de Gobernadores, al Directorio y al Presidente. En el tercero, por consiguiente, ya que la aplicación del mismo se encarga a la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones.

Respecto al tercer sistema, o sea el caso en el que la aplicación de los tratados no corresponde, ni a los órganos creados por el Tratado General, ni a otros órganos internacionales, sino a órganos meramente estatales, es decir, que la aplicación corresponde a los propios Estados. Podemos y consideramos oportuno referir algunos casos concretos, que constituyen ejemplos significativos.

Quizás, el más destacado es el del Convenio de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, cuya aplicación desde el inicio de su vigencia hasta finalizar el séptimo año de la misma, corresponde a las respectivas autoridades administrativas nacionales, correspondiéndole al Consejo Ejecutivo durante este tiempo, únicamente, la labor de coordinar la aplicación nacional entre los Estados. Conforme los mismos términos del Convenio, concluido el séptimo año de vigencia, la que se inició el 23 de Marzo de 1969, la aplicación del mismo dejará de ser nacional para hacerse sobre bases enteramente comunitarias.

Otro ejemplo se encuentra, en el caso del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en el que se señala, que la administración aduanera en los Estados signatarios, corre a cargo del Servicio Aduanero Centroamericano, el que está constituido por organismos públicos nacionales, que dependen del Poder u Organismo Ejecutivo, en el ramo

de Hacienda, y, que conforme a los términos del artículo 13 del mismo, son: la Dirección General de Aduanas, las Aduanas u oficinas aduaneras, y los otros organismos establecidos por el Código o sus reglamentos.

Normas similares, de aplicación de disposiciones por parte de las Autoridades administrativas nacionales, se contienen en la sección 6ª. del apéndice a la lista "A" del Segundo Protocolo de San Salvador al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito el 5 de Noviembre de 1965, y se refieren, a que corresponde a las autoridades administrativas nacionales velar porque las importaciones de papel en bobinas se dediquen exclusivamente a las actividades periodísticas.

También, un ejemplo más lo tenemos, en el Caso del Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de la Educación, suscrito dentro del marco de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), el 22 de Junio de 1962, cuya aplicación efectiva corresponde exclusivamente a los Estados miembros.

El fenómeno de descentralización en la aplicación del derecho de la integración centroamericana, que en cierta forma se pone de manifiesto en la vigencia y aplicación de los tres sistemas referidos, no hace desaparecer, a nuestro juicio, ese carácter comunitario que le atribuimos al derecho de la integración económica centroamericana, que se afirma en atención a otra serie de notas a que detalladamente nos referiremos en otra parte de este mismo trabajo.

e) Duración y denuncia de los Tratados.

En lo que hace a esta materia son varias las dis-

posiciones existentes. Quizás la de mayor importancia es la contenida en el artículo XXXI del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, por ser éste el tratado básico del programa de integración económica, calidad que se desprende indudablemente del texto mismo de los artículos XXII, XXIV y XXVII.

El texto de la norma primeramente citada es el siguiente:

"La duración del presente Tratado será de veinte años contados desde la fecha inicial de su vigencia y se prorrogará indefinidamente.

Expirado el párrafo de veinte años a que se refiere el párrafo anterior, el Tratado podrá ser denunciado por cualquiera de las partes contratantes.

La denuncia causará efectos, para el Estado denunciante, cinco años después de su presentación, y el Tratado continuará en vigor entre los demás Estados contratantes en tanto permanezcan adheridos a él, por lo menos dos de ellos".

Es oportuno señalar, que la vigencia del Tratado General se inició el 4 de Junio de 1961.

La norma es clara y no necesita mayores comentarios, aunque sí estimo necesario señalar, que conforme su texto se elimina la posibilidad de extinción del Tratado antes del vencimiento del plazo inicial de vigencia, fijado en veinte años. Asimismo, cualquier denuncia, la que podrá hacerse en cualquier momento después de transcurridos los veinte años de duración inicial del Tratado, producirá efectos, para el denunciante, cinco años después de su

presentación. Este plazo de suspenso es relativamente largo, en relación a los normales para desligarse de un compromiso en Derecho Internacional.

Si no hay denuncias, y en tanto permanezcan adheridos al Tratado por lo menos dos de los contratantes, la prórroga del mismo será por tiempo indefinido. En consecuencia, la vigencia mínima efectiva del Tratado General no puede ser menos de veinticinco años.

Es evidente, que entre los Estados contratantes prevaleció un criterio de durabilidad distinto del que ordinariamente se sigue en esta clase de convenios e indudablemente ello se debió a la convicción existente en los diversos momentos previos al pacto, de que convenios de esta naturaleza requieren, para su desarrollo y efectividad, períodos largos de vigencia. Sin embargo, debido a la eficacia y bondades intrínsecas del programa, las que pronto se pusieron de manifiesto, a largos ocho años de su vigencia existe la firme convicción, no solo de que el proceso es irreversible, sino de que es necesario ampliar el Programa y superar las vigentes formas institucionales.

Refiriéndose al futuro del Tratado General, Gauthama Fonseca (116) expresa una interesante opinión, la que comparto totalmente. Al efecto expresa:

"Si no es de esperar la extinción del instrumento a que se alude por obra de una denuncia, para nosotros es indudable que se está a una distancia muy corta de la fecha en que tendrá que ser sustituido por otro convenio que, al mismo tiempo que consolide las conquistas que hasta ahora se han hecho, regule la

amplia gama de asuntos que aún no reciben atención en Centroamérica, bien porque el Tratado General guarda silencio frente a ellos o bien porque lo que en él se dice ha dejado de guardar la debida proporción con los hechos".

En otros instrumentos se regula en forma distinta, tanto lo relativo al tiempo de duración del Convenio, como lo reforante a la oportunidad y efectos del acto de denuncia. En este distinto tipo de regulación influye básicamente, que los Tratados, Convenios o Protocolos, sean anteriores o posteriores a la fecha de suscripción del Tratado General, ya que, en cuanto a los posteriores, la norma general es que su duración estará sujeta a la del Tratado General (117). En otros casos, se condiciona su duración a la vigencia de otros instrumentos que contiene el convenio base específico (118).

Otros tipos de normas, que contienen disposiciones distintas sobre términos de duración del convenio, formas de renovación de los mismos, y distintos mecanismos en relación a las denuncias, esto no sólo en cuanto a la oportunidad en que pueden presentarse, sino en cuanto al momento en que se producen sus efectos, se encuentran en cierto número de instrumentos, todos los cuales tienen en común, la característica de que su suscripción fué anterior, y sólo en un caso simultánea, a la del Tratado General.

Señalar lo anterior tiene importancia, en virtud de que en el artículo XXVII del Tratado General se estipula, que dicho Tratado prevalecerá sobre los tratados y convenios, bilaterales o multilaterales existentes entre las

partes contratantes, pero que no afectará la vigencia de los mismos.

Al efecto, puede señalarse:

1) - Los párrafos pertinentes del artículo XXVIII del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica, establecen:

"La duración de este Tratado será de diez años, contados desde la fecha inicial de su entrada en vigor, y se renovará por conducción tácita, por periodos sucesivos de diez años.

El presente Tratado podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados signatarios, con seis meses de anticipación, por lo menos, a la fecha en que termine el periodo inicial o los periodos sucesivos de vigencia del Tratado. La denuncia surtirá efectos, para el Estado denunciante, en la fecha en que termine el periodo correspondiente de vigencia del Tratado, y éste continuará en vigor entre los demás Estados contratantes en tanto permanezcan adheridos a él, por lo menos, dos de ellos".

2) - Los párrafos aplicables del artículo XII del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, señalan:

".... Su duración será de veinte años y se renovará, por reconducción tácita, por periodos sucesivos de diez años.

El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados signatarios, con dos años de anticipación, por lo menos, a la fecha en que ter-

mine el período inicial o los períodos sucesivos de vigencia del mismo.

Si alguno de los Estados contratantes hiciere la denuncia después del plazo fijado, pero con anterioridad a la iniciación de un nuevo período, ésta será válida, pero el Convenio conservará su vigencia por dos años más a partir de la fecha en que se inicio el nuevo período.

En caso de denuncia del presente Convenio, éste continuará en vigencia con respecto a los protocolos adicionales por el tiempo que faltare para la expiración de los mismos.

Cuando alguno de los Estados contratantes ~~denuncia~~re este Convenio los otros decidirán si queda sin efecto para todo, o si se mantiene su vigencia entre los que no lo hubieron denunciado".

3) - El artículo XV del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, en sus párrafos aplicables, dice:

".... Su duración será de veinte años contados desde la fecha de su vigencia y se renovará, por tácita reconducción, por períodos sucesivos de diez años. El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados signatarios con dos años de anticipación, por lo menos, a la fecha en que expire el período inicial o los períodos sucesivos de vigencia del mismo. La denuncia surtirá efectos, para el Estado denunciante, en la fecha en que termine el período correspondiente de vigencia del

Convenio y éste continuará en vigor entre las demás partes en tanto permanezcan adheridos a él por lo menos dos de ellas".

4) - El párrafo 1º del artículo XXXI del Tratado de Asociación Económica entre las Repúblicas de Honduras, Guatemala y El Salvador, preceptúa:

"El presente Tratado tendrá una duración de veinte años y expirado dicho término se prorrogará indefinidamente, salvo su denuncia con preaviso de cinco años. Continuará en vigencia cuando haya por lo menos dos países adheridos a él".

5) - El Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, en su artículo 37, establece:

"El presente Convenio tendrá una duración ilimitada y no podrá denunciarse antes de los veinte años, contados a partir de su entrada en vigor. La denuncia surtirá efecto cinco años después de su presentación. El Convenio continuará en vigencia cuando permanezcan por lo menos dos países adheridos a él".

En todos los Tratados y Convenios referidos se mantiene la estipulación de que la prórroga de los mismos se operará en forma automática, lo que quiere decir, que para que continúen en vigor no será necesaria la suscripción de nuevos convenios, lo que pone de manifiesto, la voluntad de prolongar en el tiempo los efectos de los mismos, sin que, periódicamente, se sufran las interrupciones que supondría la negociación, firma y ratificación de nuevos instrumentos. Consecuencia de lo anterior y expresión del mismo propósito, es la estipulación, presente en todos



los Tratados y Convenios, de que el instrumento gozará de vigencia en tanto dos países se mantengan adheridos a él.

f) Interpretación de los Tratados.

Tiene singular importancia conocer, con cierta amplitud, los métodos que se emplean para desentrañar el sentido de las normas que integran el Derecho Comunitario Centroamericano y los órganos que tienen a su cargo esa labor.

La no existencia de un Tribunal de Justicia Comunitario, al cual puedan acudir tanto los Estados como los particulares para resolver los conflictos que resulten de la aplicación e interpretación de los tratados, hace que en Centroamérica esa función corra a cargo del Consejo Ejecutivo, el Consejo Económico Centroamericano y en última instancia, un tribunal arbitral. Más adelante haremos referencia a la mecánica de solución de conflictos contenida en el "Reglamento sobre Procedimientos para Resolver Conflictos", aprobado por el Consejo Económico Centroamericano (119).

Los dos primeros, Consejo Ejecutivo y Consejo Económico Centroamericano, como ya lo hemos mencionado repetidamente en el curso de este trabajo, son órganos que deben su existencia al Tratado General.

El arbitraje es un modo jurisdiccional de solución pacífica de conflictos, al que podemos caracterizar, corriendo el resgo de ser insuficientes, por el hecho de que el tribunal no es permanente, sino elegido por las partes en conflicto, quienes además, fijan los límites de su competencia. Todos los tratados que forman el marco jurídico fundamental del programa de integración económica centroamericana, hacen referencia al mismo como último recur-

so de solución de los conflictos que surjan entre los mismos (120). No obstante que se han presentado problemas susceptibles de originar serias controversias, jamás se ha recurrido a la constitución de un Tribunal arbitral para que los dirima.

El conocimiento de las diferencias que han surgido sobre la interpretación o aplicación de los tratados que regulan la integración económica, es una tarea que hasta ahora ha estado a cargo exclusivo de los dos Consejos instituidos por el Tratado General.

Refiriéndonos, no ya a las diferencias que surjan con motivo de una interpretación, sino al hecho mismo de la interpretación, debe considerarse que la misma es también un elemento integrante del proceso de integración económica centroamericana, ya que los actos de los órganos suponen siempre, en mayor o menor grado, una labor de interpretación de normas jurídicas.

En el sistema comunitario centroamericano, el Tratado General fija la labor de interpretación como una de las varias responsabilidades que tienen los tres órganos instituidos. Al efecto, en el caso de los Consejos, Ejecutivo y Económico Centroamericano, la tienen asignada indirectamente, ya que se debe de comprender de que está implícita en las competencias que se les atribuye. En el caso del Consejo Ejecutivo, debe entenderse que está comprendida en la facultad que le otorga el artículo XXI, referente a aplicar y administrar el Tratado General y realizar todas las gestiones y trabajos que tengan por objeto llevar a la práctica la unión económica de Centroamérica. En cuanto al

Consejo Económico Centroamericano, en la competencia que le atribuye el artículo XX para dirigir la integración de las economías centroamericanas y coordinar la política, en materia económica, de los Estados contratantes. En el caso de la Secretaría Permanente (SIECA), el artículo XXIV le asigna, en forma expresa, la competencia de interpretación, para los efectos finales de velar por la correcta aplicación de los Tratados, siempre y cuando dicha función no esté encomendada a algún otro organismo.

Al suscribir y ratificar definitivamente el Tratado General, los Estados centroamericanos renunciaron a interpretar unilateralmente no solo este tratado, sino todos los demás instrumentos que en el futuro se suscribieran, de donde se desprende que la interpretación que hagan los tres órganos mencionados gozará no solo de autenticidad, sino de plena validez, adquiriendo el valor autónomo de los preceptos legales, especialmente cuando se hace con el fin de colmar una laguna, y obligará, no únicamente al Estado o Estados que la motivan, sino que adquieren el carácter de normas de conducta obligatoria para todos los Estados contratantes.

Una labor de interpretación equilibrada, en la que se busque determinar el sentido de una norma jurídica, precisar su alcance y esclarecer los puntos oscuros o ambiguos de las mismas, debe atender a ciertas reglas directrices. Al efecto, haremos referencia a unas pocas de singular importancia.

1) La interpretación debe tener como fin investigar lo que las partes han querido realmente estipular, pa

ra así ser consecuente con el principio de la buena fe, cuyo respeto adquiere carácter especial en todo proceso de integración económica;

2) tiene que hacerse, tomando en cuenta que las partes contratantes se proponen algo razonable, operante en la práctica, conveniente a la integración y armónico con los fines básicos de ésta;

3) debe realizarse, tomando en consideración, que el contexto de los tratados sirve para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, a efecto de lograr siempre la debida correspondencia y armonía.

El criterio general es de que solo ante la imposibilidad de aplicar las reglas anteriores, debe recurrirse a realizar una interpretación en base a la equidad o lo que parezca más conforme al espíritu general de la legislación internacional.

En cuanto a los métodos que pueden emplearse en la interpretación de las normas jurídicas propias del proceso de integración centroamericana, Gautama Fonseca (121) expresa lo siguiente:

"No existe límite alguno para que se empleen bien el método lógico tradicional o cualesquiera de los métodos modernos, llámense éstos de la libre investigación científica del Derecho, histórico, evolutivo o positivo ~~tológico~~ lógico. Esta circunstancia permite que tanto el Consejo Ejecutivo, como el Consejo Económico Centroamericano puedan actuar, aunque no necesariamente de acuerdo con su propio saber y entender, sí de conformidad con las ideas que a

la fecha prevalecen en esta materia y que reconocen que el sentido y alcances de una norma jurídica no derivan del exámen de su concreta realidad a la luz de un determinado método, sino de una búsqueda más amplia, que si bien tome en cuenta las palabras empleadas, la presunta voluntad del legislador y el espíritu que en ella pueda advertirse, tenga continuamente presente las condiciones actuales de la vida, porque solo de esa manera el resultado de la indagación puede estar dotado de sentido, ser útil en la práctica y hallarse conforme con la naturalza dinámica del proceso integracionista".

Ni el Tratado General, ni la práctica de los órganos, son lo suficientemente explícitos respecto al aspecto de interpretación. Sin embargo, pueden distinguirse actos de interpretación referentes a los tratados mismos y a los propios actos comunitarios y actos de interpretación relacionados con disposiciones pertenecientes al ordenamiento interno de los Estados miembros.

Las interpretaciones expresas que hasta el momento se han hecho no están consignadas en notas, protocolos o tratados complementarios, sino en simples resoluciones de los dos Consejos mencionados, principalmente del Consejo E-jecutivo.

Como actos de interpretación contenidos en resoluciones del Consejo Ejecutivo, podemos mencionar los siguientes:

a) Resolución número 16 dictada durante su Cuarta Reunión Ordinaria, en la que se señala:

"En los casos de mercancías comprendidas en el anexo "A" del Tratado General, cuyo tratamiento consista en el pago de los "impuestos a la importación vigentes", se entenderán por tales las que estén en vigor al momento de efectuarse la importación".

b) Resolución número 39, en la que interpretando el mismo Tratado General, se señala:

"El libre comercio de granos básicos, arroz, maíz, frijoles y maicillo entre Costa Rica y demás países, está en vigor desde el inicio del quinto año de vigencia del Tratado General (4 de Junio de 1965); y que tal libre comercio no está supeditado a la suscripción del Convenio Especial sobre Granos".

c) Resolución número 64 (122), que señala:

"Es contraria al Tratado General... la disposición por parte del Gobierno de Nicaragua de prohibir la exportación a Centroamérica de cueros crudos de res, establecida en el Decreto número 97 de 19 de Octubre de 1966, y que, por lo tanto, se debe restablecer de inmediato el libre comercio irrestricto de este producto tal como lo garantiza el Tratado General".

A veces, la interpretación está referida a actos comunitarios y así tenemos que en algunos casos el Consejo Ejecutivo, se ha pronunciado respecto a dictámenes de la Secretaría Permanente (SIECA) y en otros, el Consejo Económico Centroamericano, respecto a resoluciones del Consejo Ejecutivo. Como ejemplo de lo primero, tenemos la resolución número 10 del Consejo Ejecutivo, en la que, referen

te a la obligación de no restringir el intercambio cuando se tenga duda sobre el origen de una mercancía, resolvió:

"ratificar la interpretación que ha venido haciendo la Secretaría Permanente..."

Como ejemplo de lo segundo se tiene, la resolución número 32 del Consejo Económico Centroamericano, por la cual se declara correcta y se ratifica la interpretación contenida en la resolución número 41 del Consejo Ejecutivo, referente al efecto no suspensivo para la vigencia de los aferos de equiparación progresiva acordados para la leche en polvo, de la falta de fijación de cuotas de importación de terceros países.

Respecto a los actos de interpretación referidos a disposiciones pertenecientes al ordenamiento interno de los Estados contratantes, se ha planteado, lo que dejamos simplemente como planteamiento, la duda siguiente: si la resolución del Consejo Ejecutivo se limita a declarar la incompatibilidad de una medida o acto interno con lo dispuesto en el Tratado, o si por el contrario, su resolución envuelve un pronunciamiento acerca de si es o no correcta la interpretación que en el ámbito nacional se hubiese hecho. Como resoluciones de este tipo, pueden citarse las siguientes:

a) La resolución del Consejo Ejecutivo, en la que se declaró que el impuesto del ochenta por ciento sobre el precio de venta de licores que aplicaba el Gobierno de Costa Rica a los licores que se importaban de Centroamérica amparados por los Tratados y Protocolos de integración, no se ajustaba a los preceptos del artículo VI del Tratado General, y que en consecuencia el impuesto no debería

exceder de las cifras contenidas en la página 16 del informe de la Secretaría Permanente (SIECA) (123).

b) La resolución número 58 del Consejo Ejecutivo (124), por la cual se resolvió acerca del impuesto de consumo que correspondía pagar a los cigarrillos marca "FAMA", dado el precio de venta al consumidor salvadoreño y de acuerdo con la ley de impuesto de cigarrillos vigente en El Salvador.

c) La resolución número 72 del Consejo Ejecutivo (125), en la que se declara la incompatibilidad de una disposición de la legislación interna de Guatemala con lo dispuesto en el Tratado General.

En cuanto a la labor que le corresponde a la Secretaría Permanente (SIECA) en el campo de la interpretación, es conveniente dejar sentadas algunas observaciones. Aunque este órgano tiene expresamente asignado, de acuerdo con el artículo XXIV del Tratado General, la obligación de velar por la correcta aplicación de los convenios, lo cual supone también el deber de interpretarlos, en la práctica, ambas funciones la cumplen los Consejos, Ejecutivo y Económico Centroamericano, y en especial, el primero. Sin embargo, ordinariamente, es a ella a quien corresponde hacer los estudios que sirven a los Consejos mencionados para resolver los diversos problemas. En términos reales, la labor de la SIECA en esta materia, es la de un organismo auxiliar, cuyas opiniones ejercen considerable influencia en la decisión de los otros órganos mencionados.

En su labor interpretativa, ninguno de los órga



nos actúa o puede actuar en forma arbitraria, ya que dependiendo de un orden jurídico, deben ajustar sus actuaciones a dicho orden, cuando en el mismo se prevén las situaciones específicas. En el caso contrario, deben ajustarse a las necesidades efectivas y fines concretos del programa de integración económica.

En la práctica internacional común actual, la interpretación de los tratados se efectúa por actos unilaterales de los Estados contratantes y solo deviene una actuación colectiva o una especial actuación de un Tribunal Internacional, cuando así es convenido por los Estados. En este último caso es cuando, básicamente, la interpretación puede adquirir la categoría de verdadera fuente de derechos y obligaciones, no solo en virtud de la aplicación general de que puede ser objeto, sino del carácter obligatorio de que puede gozar. Solo en estas circunstancias puede pretenderse una uniformidad en la interpretación de las normas de un ordenamiento comunitario y, asimismo, una uniformidad en la ejecución de los compromisos contenidos en los tratados o convenios.

El proceso de integración económica centroamericana, carece actualmente, en su sistema institucional, de un órgano de justicia, de competencia permanente y jurisdicción obligatoria, que en definitiva pueda tener a su cargo la labor de interpretación, única y uniforme. La falta de estos órganos jurisdiccionales, constituye una deficiencia del sistema institucional que es preciso superar, ya que su existencia representaría, no solo un progreso institucional, sino la posibilidad de una labor de

interpretación y juzgamiento, única y uniforme, verdaderamente positiva (126).

Como consecuencia de que el sistema normativo del Programa de integración económica centroamericana, no cubre todos y cada uno de los aspectos y problemas susceptibles de presentarse en la marcha normal del proceso integracionista, lo que se pone de manifiesto tanto respecto a las normas sustantivas, como a las normas adjetivas o de competencia; también, respecto a las disposiciones que establecen reglas de conducta para los Estados y los particulares y asimismo, en relación a las disposiciones que definen las funciones y facultades de los órganos comunitarios. Esta situación ha determinado, que se plantee la utilización de dos técnicas propias del moderno Derecho de los Tratados (127). Las técnicas en referencia son dos: 1) la modificación de los tratados por práctica ulterior; y 2) la interpretación funcional o teleológica. La primera obedece a una expresión utilizada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, la que al elaborar su proyecto de tratado sobre el Derecho de los Tratados (128), en el artículo 38 incluyó la norma siguiente:

"Todo Tratado podrá ser modificado por la práctica ulterior en la aplicación del Tratado cuando tal práctica denote el acuerdo de las partes en modificar las disposiciones del Tratado".

En el artículo antes citado, se hace referencia al caso, de que las partes, de común acuerdo, apliquen de hecho el Tratado de manera diferente a la prevista en sus disposiciones (128-A).

La segunda técnica, alude a la aplicación de los criterios modernos de interpretación funcional o teleológica, en la que se da singular importancia a la efectividad del resultado y se tiene, básicamente, en cuenta, el objeto y el fin del Tratado.

La utilización de las técnicas antes referidas, puede contribuir a obviar muchos problemas derivados de una deficiente o insuficiente regulación y es de desear, en tanto se actualizan y superan los instrumentos vigentes, se procure, generalice o intensifique su empleo, siempre y cuando se haga en forma comedida y justa, en el que cada acto de interpretación sea una respuesta adecuada y equánime, a los ingentes problemas y necesidades que se plantean dentro del programa de integración.

No obstante las deficiencias funcionales e institucionales señaladas anteriormente, que conducen a una falta de unidad interpretativa, es preciso reconocer que la actuación de los Consejos, Ejecutivo y Económico Centroamericano y de la Secretaría Permanente (SIECA), cada uno dentro de los limitados marcos de actuación a que los somete la fase actual de desarrollo del proceso integracionista, advierte una acentuada y decidida actitud en favor de una interpretación constructiva y progresista, sin que esto suponga ignorar, que sus actuaciones interpretativas se realizan en forma casi totalmente independiente y en algunos casos, con escaso sentido armónico.

Para las etapas de mayor integración, a que necesariamente deberá llegarse en el futuro y a los que conducen necesariamente los actuales esfuerzos, que tanto a ni-

vel de los órganos comunitarios como de los Estados se realizan, no obstante las diferencias, problemas y conflictos que entre algunos Estados lamentablemente se producen (129) serán absolutamente insuficientes e inadecuadas las actuaciones interpretativas que realizan los actuales órganos comunitarios. Esta situación plantea una urgente modificación institucional y funcional, a lo que ya hemos hecho referencia, que permita la creación y actuación del necesario Tribunal o Corte Centroamericana de Justicia, que con jurisdicción obligatoria y constituida en forma permanente tome a su cargo la labor de interpretación del Derecho Comunitario Centroamericano.

La creación del Tribunal antes mencionado, tiene obstáculos de tipo constitucional (130), lo cual supone, que previamente, se proceda a una reforma de las disposiciones pertinentes de cada una de las Constituciones de los Estados Centroamericanos, que permita no solo la creación del mismo, sino su eficaz constitución y funcionamiento. Este progreso institucional en el Derecho Comunitario Centroamericano, no podrá lograrse, si previamente no se procede a lo sugerido anteriormente, ya que, no obstante, estar reconocido en la casi totalidad de las Constituciones un sentido de unidad centroamericanista, el principio de soberanía, con perfiles que tienden a lo absoluto, también goza de reconocimiento. Atendiendo a lo anterior, su creación, por vía de una interpretación amplia y funcional de las Constituciones, no solo sería peligroso para la estabilidad de su existencia, sino sería ilegal y se correría el riesgo, de dejar planteado el problema de la incog-

titucionalidad de su creación.

Finalmente, para cerrar el tratamiento del tema referente a la interpretación de los tratados, haremos referencia, nuevamente, pero con más detalle, al problema y necesidad de una interpretación unitaria del derecho de la integración centroamericana.

Efectivamente, así como todo ordenamiento jurídico internacional, cuyas disposiciones rigen directamente en el ámbito interno de los Estados, requiere ser interpretado por los órganos que lo aplican, con un mínimo de homogeneidad, también, ésto es necesario y quizás con un requerimiento más agudo, cuando se trata de la interpretación de tratados que se proponen la realización de un programa de integración económica internacional o regional, ya que es obvio, que los propósitos de unidad y uniformidad, no podrán ser alcanzados, a menos que el derecho en cuestión se aplique de manera idéntica en toda la zona que está en proceso de integración. Es indiscutible, que una aplicación uniforme será prácticamente imposible, si cada Estado que participa en el proceso, en forma unilateral y con absoluta libertad de apreciación, interpreta las normas reguladoras del proceso de integración.

Si la función de interpretación de las disposiciones comunitarias queda en manos de los Estados, es inevitable el peligro de interpretaciones contradictorias o por lo menos diferentes. La necesidad de prever formas que aseguren la interpretación unitaria es indiscutible. La exigencia de mantener la armonía estructural, funcional y de interpretación de las normas vigentes, constituye en rea-

lidad la condición de su virtualidad efectiva y representa la seguridad, de que todos los sujetos sometidos al derecho comunitario serán objeto de un tratamiento igualitario, pues no puede dudarse, que a través de interpretaciones erróneas puede un Estado, en un caso dado, alterar o aún concluir, las obligaciones comunitarias o internacionales que hubiere contraído. Tampoco puede ponerse en duda, que influye, en la forma en que la unidad de interpretación puede lograrse, que el organismo, Tribunal o Corte que tenga a su cargo tal función, tenga un acentuado carácter intergubernamental, o por el contrario, que en cierta manera tenga una naturaleza supranacional, lo que en todo caso está en relación a la nota intergubernamental o supranacional que domine en el orden jurídico correspondiente.

Más adelante, haremos referencia a las notas caracterizantes de la supranacionalidad, y a dicho comentario nos remitimos para comprender, las que podrían caracterizar al organismo cuya necesidad de existencia comentamos.

A veces, el orden jurídico internacional, o comunitario, como en el caso del proceso de integración económica centroamericana, puede llegar a aplicarse directamente dentro del territorio de cada Estado, esto es, con carácter de inmediatez. En este caso, el orden comunitario crea derechos y obligaciones que las personas, individuales y jurídicas, pueden hacer valer ante los órganos del Estado. Si en este caso surge una controversia, la misma normalmente se planteará o puede ser planteada ante los tribunales nacionales, los que deberán resolver el litigio, mediante la interpretación y aplicación de las normas del derecho



comunitario aplicable; aquí es precisamente, donde se enfrenta el mayor peligro de interpretaciones heterogéneas, y como consecuencia, también se planteará, en mayor grado, la necesidad de establecer medios que aseguren una interpretación uniforme del derecho comunitario en cuestión.

En principio, la única forma de obtener la deseada y necesaria interpretación unitaria, es confiándola a un solo órgano y que ese órgano sea de carácter supranacional, permanente, con una integración adecuada y por sujetos, que no solo tengan formación jurídica comunitaria, sino el suficiente grado de independencia y sensibilidad para captar y comprender los diversos problemas que plantea un proceso de integración y las necesarias evoluciones que los mismos sufren y deben sufrir.

En el ámbito de la integración económica centroamericana, los litigios entre las personas individuales y morales o jurídicas y los órganos de los Estados, no son, ni previsiblemente serán, tan frecuentes, porque el derecho comunitario vigente es relativamente limitado en cuanto a sus efectos internos, pero, en el futuro, con el desarrollo y progreso que el proceso de integración plantea, los efectos internos del derecho comunitario aumentarán y consiguientemente, la posibilidad de litigios.

El establecimiento de un tribunal como el referido en líneas anteriores, necesariamente, aún cuando no se desee, pasa por una fase de resistencia política por parte de los Gobiernos interesados. Esta resistencia se ha puesto de manifiesto en muchos otros aspectos y se ha logrado superar, ya que es indudable, que se vivió una fase de con-



cientización de la necesidad y virtudes de un profundo e intenso proceso de integración del área centroamericana. Quizás se constituya en algo más delicado, el obstáculo constitucional a la creación de tal Tribunal, el que supone, para salvarlo, reformas constitucionales adecuadas y previas, todo dentro de ese trámite largo y complicado que las diversas Constituciones centroamericanas establecen para su reforma (131).

Refiriéndose a este problema y concretando sus comentarios a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), Eduardo Jiménez de Aréchaga y Felipe H. Paolillo (132), en un interesante trabajo y como un ejemplo del mecanismo existente en la ALALC, señalan:

"Cuando un Estado reduce los derechos que gravan ciertos productos provenientes de los otros países de la zona, o elimina restricciones sobre esos productos, se obliga frente a los demás países integrantes de la ALALC, pero también se está obligado frente a aquellos individuos que se proponen realizar operaciones comerciales en las condiciones que resultan del otorgamiento de dichas concesiones. Una persona que pretende realizar una operación de importación al amparo de una concesión determinada tiene derecho a que los órganos del Estado concedente actúen de acuerdo con el compromiso contraído internacionalmente, y mantengan esa concesión tal como fue negociada, sin que puedan volverla inoperante por medios indirectos, frustrando así el derecho del particular interesado. En este terreno es donde pug



de producirse una colisión entre el derecho del individuo que se ampara en el acta de negociación y la conducta de los órganos del Estado que de múltiples maneras puede hacer frustrar ese derecho".

En otra parte del mismo estudio señalan (133):

"Dentro de la zona de libre comercio hispanoamericana, el individuo no tiene otra alternativa que recurrir a los órganos judiciales nacionales y éstos a proceder al exámen de las disposiciones del Tratado de Montevideo y de los demás instrumentos que conforman el orden jurídico de la ALALC. En esta operación, los tribunales nacionales interpretan libremente el derecho común, sin que exista ningún medio de asegurar que esta interpretación pueda tener un nivel mínimo de homogeneidad".

Esta clara expresión de pensamiento de los autores citados, nos pone de manifiesto la problemática tan singular que plantea la diversidad de interpretaciones de que puede ser objeto el conjunto normativo propio de un proceso integracionista, como consecuencia de la diversidad humana de los hombres llamados a realizar la labor de juzgamiento y la distinta formación jurídico-mental de los mismos. Lo anterior, no deja al margen el hecho, de las diversas influencias políticas y económicas que pueden ejercer algún tipo de influencia sobre los eventuales juzgadores.

Refiriéndose a este mismo problema y concretándose siempre, en sus comentarios, al marco de la ALALC, los mismos autores últimamente citados señalan (134), que se

- 120 -

presenta una resistencia de los Gobiernos participantes en dicho proceso a "instituir, siquiera en forma embrionaria, un poder judicial dentro de su estructura orgánica. Los tribunales ad hoc previstos en el protocolo sobre solución pacífica de controversias se contraerán únicamente a pronunciarse sobre los litigios que se susciten entre las partes. Una instancia prejudicial de interpretación de las normas de la Asociación no fué jamás concebida en las deliberaciones de los distintos órganos y comisiones de la ALALC". Además de lo anterior, señalan lo siguiente:

"Por ahora la interpretación auténtica de los instrumentos de la ALALC queda en manos de sus órganos políticos, los cuales, por su composición y su sistema de votación no parecen ser los más aptos para estos efectos".

Los comentarios anteriores, tienen absoluta validez y aplicabilidad al caso centroamericano, sin por ello dejar de reconocer, que el proceso está más institucionalizado que el de la ALALC y que existe a nivel de los gobiernos y de las entidades y personas interesadas, un mayor grado de acercamiento geográfico, económico, espiritual y cultural, que puede permitir se supere esta etapa con más facilidad. El optimismo nos embarga a este respecto.

Para completar el comentario sobre este tema de la interpretación del Derecho Comunitario centroamericano, haremos una ligera referencia a la forma en que se confronta ese problema dentro del marco de las Comunidades Europeas.

Al efecto, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, solo tiene como función pronunciarse en los litigios en que se cuestiona el ejercicio de poderes de las instituciones comunitarias, cuya regularidad debe controlar, pero en modo alguno está por encima de las jurisdicciones nacionales, que no están subordinadas a aquélla en nada. Ahora bien, es evidente que dejar a las instancias nacionales el cuidado de interpretar a su manera los diversos textos comunitarios, no puede sino conducir a un fraccionamiento y a contradicciones que destruirían, en la realidad, el enorme esfuerzo de unificación realizado en los textos y que indudablemente volverían a crear, en la práctica, las discriminaciones y diversos problemas de uniformidad y armonía que con los tratados se pretendió hacer desaparecer.

Es tal la preocupación de los estudiosos por el deslinde adecuado de las competencias, que Lagrange (135) se permite señalar que:

"No sería admisible abandonar a los jueces nacionales la competencia para pronunciarse en los litigios a los que se ven abocados por la aplicación de las decisiones de las autoridades comunitarias, tales como los reglamentos o acerca de la validez de sus actos con referencia al tratado en virtud del cual los realizan: en la Corte de Justicia, institución de las Comunidades, la que normalmente está encargada de juzgar esa validez por el ejercicio de su facultad de anulación (136) o hasta por vía de excepción (137), y sería llegar al

desorden y hasta la incoherencia, permitiendo una concurrencia competente por parte de jurisdicciones internacionales cuando se lleva la cuestión ante ellas ¿Cabe imaginar, por ejemplo, que un reglamento del Consejo o de la Comisión sea declarado ilegal en un país de la Comunidad y legal en otro?".

Ante el planteamiento anterior, Lagrange (138), afirma:

"Para evitar este doble escollo, los autores del Tratado de Roma concibieron la posibilidad de recurrir a un mecanismo ya conocido en el derecho interno, en grados diversos, en los países de la Comunidad, "el mecanismo de las cuestiones prejudiciales". Comprende dos aspectos: por un lado, se escinde la esfera de competencia, pues la Corte de Justicia europea recibe competencia para pronunciarse sobre la "interpretación" del tratado y de los actos de las instituciones de la Comunidad, así como sobre la validez de éstos, mientras que las jurisdicciones nacionales mantienen su competencia para la "aplicación" de estos mismos textos (en la medida en que los litigios que se les planteen requieran esta aplicación; por otra parte se instituye un procedimiento especial que permite a las jurisdicciones de los dos órdenes emitir dictamen, cada una en la esfera de su propia competencia, sin romper la unidad de procedimiento del litigio. Tal es, en principio, el propósito del artículo 177 del Tratado de la CEE (139). Al igual que en el orden interno, aun

que por razones parcialmente diferentes, el mecanismo de las cuestiones prejudiciales aparece así, como una derogación de la regla: "el juez de la excepción es juez de la excepción". Se trata de una solución de "compromiso" que permite asegurar el respeto por el orden de competencias manteniendo, al mismo tiempo, la unidad del procedimiento".

Creo que lo expuesto es suficiente, sin ninguna pretensión de haber hecho un examen exhaustivo, para poner de manifiesto la necesidad o importancia de encontrar, solución al problema que plantea la necesidad de una interpretación única y uniforme de los diversos instrumentos que regulan el proceso de integración en sus diversos aspectos, básicamente en cuanto al económico, en una forma similar a como se resolvió en el marco de las Comunidades Europeas, dejándose a salvo siempre, las alteraciones y modificaciones que supone y exige el menor desarrollo institucional, funcional y legal del Programa de integración centroamericana.

C) Los Reglamentos como Fuente del Derecho Comunitario Centroamericano.

a) El Poder Reglamentario.

Sin perjuicio de referirnos más adelante a este problema, al tratar concretamente lo referente a las competencias de los órganos comunitarios centroamericanos, en el que haremos resaltar otros aspectos, dejaremos sentadas algunas observaciones en este apartado.

En la estructura institucional de la integración

económica centroamericana, el órgano que con más rigor y precisión fué dotado de la facultad reglamentaria es el Consejo Ejecutivo (140). Esta atribución es comprensible en atención a la función básica que le asigna el artículo XXI del Tratado General, en cuanto a "aplicar" y "administrar" el Tratado y "realizar todas las gestiones y trabajos que tengan por objeto llevar a la práctica la unión económica de Centroamérica". Al efecto, el artículo XXII del citado Tratado le fija como función propia y específica, la siguiente:

"El Consejo Ejecutivo dictará las medidas que sean necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos mediante este Tratado y de resolver los problemas que se susciten con motivo de la aplicación de sus disposiciones".

La primera competencia reglamentaria que se le asigna al otro Consejo instituido por el Tratado General, el Consejo Económico Centroamericano, la encontramos en la última parte del párrafo 2º del artículo XXIV del Tratado General, referente a que los reglamentos que norman las funciones de la Secretaría Permanente (SIECA), han de ser aprobadas por el Consejo Económico Centroamericano.

Además, en algunos tratados, la competencia reglamentaria ha sido asignada como competencia privativa del Consejo Económico Centroamericano, en atención a las funciones que se le asignan en el artículo XX del Tratado General, básicamente en lo que se refiere a "dirigir" la integración y "coordinar" la política económica de los

Estados contratantes.

Entre las facultades reglamentarias acordadas a favor del Consejo Económico Centroamericano, pueden citarse: a) los reglamentos previstos en el artículo 132 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); b) la contenida en el artículo XII del Protocolo al Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración (Segundo Protocolo de Managua), en el que se le asigna al Consejo Económico Centroamericano la competencia de fijar el monto de ciertos gravámenes arancelarios.

Desde ya hemos de dejar sentado, que en cuanto a la facultad de dictar reglamentos no existe una verdadera unidad normativa, ya que mientras algunos Reglamentos que son dictados por los órganos de la integración no requieren la aceptación expresa de los Estados para poder surtir efectos legales en el ámbito del derecho interno, otros, si requieren de tal aceptación, en cuyo caso la recepción se realiza en virtud de actos administrativos o ejecutivos. Claro ejemplo de este último tipo de reglamentos lo tenemos en los referidos en líneas anteriores sobre competencia reglamentaria del Consejo Económico Centroamericano, en concreto, el RECAUCA y los que pueda dictar en ejercicio de la competencia que le asigna el artículo XII del Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración (Segundo Protocolo de Managua).

La ausencia en los Tratados, principalmente en el

Tratado General de una norma general que establezca la naturaleza, jerarquía y alcances jurídicos precisos en los reglamentos en el ámbito del derecho interno, determina, que sea precisamente en cada tratado, donde los Estados establezcan la modalidad reglamentaria que se seguirá, razón por la cual llega a afirmarse que la potestad normativa conferida a los órganos de la integración en el Tratado General, tiende a ser encauzada por los propios Estados, y no, por los mismos órganos (141).

La función normativa de los Consejos, Ejecutivo y Económico Centroamericano, abarca la tarea de crear normas de carácter general, válidas para los Estados y los particulares y asimismo, normas individualizadas, en aplicación de un tratado, cuyos destinatarios pueden ser uno o más Estados o particulares, debiéndose entender este último término en el sentido de que abarca a las empresas y a las personas individuales y jurídicas o morales (142).

Dentro del programa de integración económica centroamericana, es evidente, que el órgano administrativo por excelencia es el Consejo Ejecutivo, el que por tal motivo está llamado a centralizar y concentrar la potestad reglamentaria, aunque ello tenga en la realidad notorias e importantes excepciones, en consideración a la atribución de esa función al Consejo Económico Centroamericano.

De lo prescrito por el artículo XXII del Tratado General, ya citado, se desprende, que el Consejo Ejecutivo no está investido de funciones normativas discrecionales, sino que por el contrario, le son atribuidas en forma expresa y únicamente pueden ejercitarse orientadas hacia fi-



nes determinados, es decir, en forma limitada, ya que habrá de contraerse a establecer disposiciones jurídicas de carácter general que complementen las normas establecidas o para viabilizar o garantizar su ejecución. Atendiendo al tenor literal del artículo XXII, difícilmente puede obtenerse otra interpretación respecto a la función reglamentaria que de él se desprende, no obstante que la función básica del Consejo Ejecutivo, respecto a "aplicar" y "administrar" el Tratado General, puede suponer un margen más amplio de actuación en cuanto a la actividad reglamentaria que pueda realizar. A este respecto, Gautama Fonseca (143) conserva el criterio, de que el Consejo Ejecutivo, en el ejercicio de una función reglamentaria, puede ir más allá de los límites antes señalados. Refiriéndose a esta limitación, señala:

"No creemos que conlleve la prohibición de omitir reglamentos autónomos o independientes, es decir, aquellos que son mera consecuencia de la potestad reglamentaria que el Tratado General le atribuye al Consejo Ejecutivo, porque de otra manera éste no podría, si faltara una disposición expresa, organizar sus propios servicios o regular el ejercicio de los múltiples poderes que se le han conferido".

b) Formación y valor de los Reglamentos.

La práctica comunitaria nos pone de manifiesto, que el Consejo Económico Centroamericano participa de manera activa en el proceso de preparación y emisión de reglamentos, actuación que no podría incluirse fácilmente

dentro de las funciones que le asigna el artículo XX del Tratado General, no obstante la amplitud que puede desprenderse de los términos mismos en que está redactado dicho precepto. Esta creciente participación del Consejo Económico en el ejercicio de la función reglamentaria, quizás se ha debido a una falta de reconocimiento de la libertad de acción que el Consejo Ejecutivo necesita para el cumplimiento adecuado de las funciones que le están asignadas, o a una inadecuada interpretación de las disposiciones que regulan sus competencias.

En atención a lo expuesto, es evidente que el Consejo Económico Centroamericano tiene igual potestad normativa que el Consejo Ejecutivo, ya que además de las funciones antes referidas que se le asignan en el artículo XX del Tratado General, el mismo precepto en su párrafo 2.º le da facultad para examinar los trabajos del Consejo Ejecutivo y tomar las resoluciones que juzgue pertinentes. Para éstas y otras resoluciones debe atender al sistema de votación referido en el último párrafo del artículo XXI del Tratado General (144), salvo que en el propio Tratado o instrumento se exija un tipo especial de votación (145).

La facultad referida, consistente en poder examinar los trabajos del Consejo Ejecutivo y tomar las resoluciones que juzgue pertinentes, nos pone de manifiesto que el Consejo Económico Centroamericano puede ejercer las mismas atribuciones que el Consejo Ejecutivo, solo que en una instancia superior. Este mismo poder de revisión, solo que referido a la competencia jurisdiccional del Consejo

jo Ejecutivo, se le vuelve a reconocer expresamente al Consejo Económico Centroamericano en el artículo 46 del Reglamento sobre Procedimientos para Resolver Conflictos (146).

Otra manifestación de competencia está expresada en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), el que en su artículo 182 establece a favor del Consejo Económico Centroamericano una especial competencia. El texto de dicho precepto, es el siguiente:

"El Poder u Organismo Ejecutivo de cada Estado emitirá los reglamentos a este Código, acordados multilateralmente en el seno del Consejo Económico Centroamericano. Las modificaciones a dichos reglamentos deberán hacerse mediante igual procedimiento".

Sin hacer comentario sobre el singular mecanismo establecido en este precepto, nos limitamos a subrayar la atribución de competencia hecha al Consejo Económico, lo que reviste un carácter especial, no solo por ser una de las pocas que expresamente se le otorga, sino por el especial mecanismo establecido, ya que después de ser acordados en su seno los reglamentos, los mismos necesitan ser "emitidos" por los Poderes Ejecutivos de los Estados contratantes, lo cual supone, que los reglamentos que se acuerden no adquieren inmediata vigencia, sino que su obligatoriedad deviene después de ser "emitidos", término de por sí ambiguo, por los Poderes Ejecutivos de cada uno de los Estados contratantes.

Otro ejemplo de ejercicio de una competencia reglamentaria por parte del Consejo Económico Centroamericano, lo encontramos claramente en el caso de la emisión del Re

glamento sobre Procedimientos para Resolver Conflictos, el que fué aprobado por el citado Consejo en su Decimoquinta Reunión Extraordinaria celebrada en San Salvador, El Salvador, el 27 de Marzo de 1968, en su resolución número 50 (147). En este caso concreto, la participación del Consejo Ejecutivo estuvo limitada a la preparación del proyecto de dicho Reglamento, lo que quizás pone en evidencia la falta de reconocimiento de la necesaria libertad de acción con que debe contar el Consejo Ejecutivo, o la inadecuada o restrictiva interpretación de las disposiciones que regulan sus competencias. Asimismo, pone de manifiesto la estrecha vinculación y colaboración entre los dos Consejos para el ejercicio de sus funciones. Finalmente, en el artículo 53 del Reglamento comentado, se le faculta al mismo Consejo Económico Centroamericano para introducirle al Reglamento las reformas que considere necesarias, sin exigir para ello la participación de ningún otro organismo, aunque es de suponer que para ejercitar tal competencia haga uso de la facultad de pedir asesoramiento a organismos técnicos centroamericanos o internacionales, que se le reconoce al final del artículo XX del Tratado General.

El ejercicio de la potestad normativa implica para ambos Consejos, la reglamentación de las normas contenidas en los tratados, convenios y protocolos, creándose así verdadero Derecho y cubriéndose las comúnmente llamadas "lagunas legales".

Es oportuno dejar sentado, que esta potestad normativa encuentra su límite en los propios tratados y convenios, ya que solo dentro del marco establecido por ellos

pueden ejercerla. Esta nota pone una vez más en evidencia el carácter de derecho secundario de las normas reglamentarias.

La potestad reglamentaria de los Consejos, insistentes, unas veces está expresamente referida en los tratados, convenios y protocolos, y en otras, está concebida como competencia implícita, es decir, puede ejercitarse dentro de la potestad normativa de orden general de que ambos Consejos están investidos. Sin embargo, en algunos casos son los propios Estados los que asumen el ejercicio de esta potestad, por haberse establecido así en los instrumentos correspondientes, y lo llevan a cabo a través del mecanismo tradicional de la celebración de tratados, convenios o protocolos adicionales.

En efecto, ambos Consejos, Ejecutivo y Económico Centroamericano, gozan de la facultad de dictar reglamentos, potestad que, normalmente, la ejercen en forma complementaria. Puede apreciarse además, que para que las normas emitidas tengan carácter de normas reglamentarias, no se requiere que formalmente se adopten con el título de "reglamento", ya que tal carácter, está implícito dentro del contexto de las resoluciones que los contienen.

En el futuro, deberá rectificarse la práctica y fortalecer más la posición del Consejo Ejecutivo, definiéndose clara y ampliamente sus funciones y las facultades que se le otorgan para el ejercicio de las mismas y asimismo, restituyéndosele la plena competencia reglamentaria que le corresponde, a efectos de que pueda cumplir a cabalidad la función de ejecutor y administrador del Pro-

grama de integración económica centroamericana y en especial, por ser éste el tema <sup>U</sup>que nos ocupa, pueda dictar reglamentos que puedan gozar de la calificación de verdaderas decisiones comunitarias unilaterales y autoejecutables, con lo cual se confirmará y afirmará definitivamente el carácter supranacional de los reglamentos comunitarios, lo que debe constituir la verdadera nota distintiva de los mismos.

Tomando en consideración las disposiciones comunitarias citadas y la realidad del funcionamiento del Programa de integración económica centroamericana, podemos afirmar que los cuerpos normativos constituidos por los reglamentos, producto éstos de calificadas actuaciones de los órganos comunitarios, constituyen verdadera fuente del Derecho Comunitario Centroamericano.

El Reglamento sobre Procedimientos para Resolver Conflictos, en su artículo 38, inciso b), hace clara referencia a la condición de los reglamentos como una de las fuentes del Derecho comunitario centroamericano. Al efecto, el precepto citado señala:

"Las resoluciones que el Consejo Ejecutivo emita para ponerle fin a un conflicto deberán tener como fundamento, entre otros:

b) Los reglamentos emitidos para facilitar la aplicación de tales instrumentos".

En su función jurisdiccional, el Consejo Económico Centroamericano, debe atender a los mismos principios y normas, de conformidad con lo que para el efecto dispone el artículo 51 del mismo Reglamento.

D) La actuación de los Organos como Fuente del Derecho Comunitario Centroamericano.

a) Observaciones Generales.

Los actos de los órganos creados por el Tratado General, por su aptitud para generar normas de conducta de contenido obligatorio, constituyen una fuente del derecho comunitario centroamericano. Este derecho, conviene repetirlo nuevamente, está constituido por tres grandes categorías de normas: las contenidas en el Tratado General y sus demás instrumentos complementarios, las que dictan individualmente los Estados para cumplir sus obligaciones como participantes en el proceso de integración y las emanadas de los órganos centroamericanos competentes, es decir, de los órganos comunitarios.

En el Derecho comunitario centroamericano, lo que dificulta la sistematización de los actos de los órganos comunitarios es la escasa regulación de que son objeto dichos actos en los instrumentos constitutivos del programa de integración, por lo cual, para poderlos estudiar, hay que recurrir a la práctica de los propios órganos.

El problema anterior no se presenta en el Derecho Comunitario Europeo, pues este tiene un ordenamiento altamente desarrollado, en el que las dificultades radican más en la diversidad y complejidad de los actos previstos en los Tratados constitutivos.

Dentro del marco institucional establecido por el Tratado General, la capacidad para actuar y generar normas de carácter obligatorio la comparten, el Consejo Ejecutivo

y el Consejo Económico. No obstante, en el proceso de formación de los actos comunitarios, intervienen otros órganos e instituciones. A este último aspecto nos referiremos más adelante.

Respecto a la Secretaría Permanente (SIECA), a la que nos referiremos con detalle más adelante, cuando tratemos lo referente a la formación del acto comunitario, solo indicamos en este momento, que sus capacidades se derivan de los términos del artículo XXIV del Tratado General, en el que se le otorga una competencia en materia de interpretación y además, una competencia, hasta ahora potencial, respecto a la cual la práctica todavía no arroja suficiente luz como para poder determinar sus alcances, consistente en las funciones que le pudiera delegar el Consejo Ejecutivo.

Tiene singular importancia referirse a lo relativo a la naturaleza o contenido de los distintos actos de los órganos y su respectivo propósito y esferas de validez, porque es en este punto donde se aprecia el menor grado de precisión de esta fuente del derecho comunitario centroamericano (148). La razón principal de lo anterior obedece, a que las competencias de los órganos comunitarios no están concebidas en términos lo suficientemente explícitos.

Desde un punto de vista más bien formal, pueden distinguirse dos clases de actos comunitarios: las resoluciones y las recomendaciones. Ninguno de los dos tiene una mención precisa dentro del texto del Tratado General y tampoco, una indicación respecto a efectos y eficacia de los mismos. Indudablemente, esta imprecisión constituye una laguna que en una reforma futura de los textos legales bási-



cos debe resolverse, no solo dándole denominación a los distintos tipos de actos que puedan realizar los órganos comunitarios, sino fijándoles, cierta amplitud y precisión simultáneas, sus efectos y el grado de eficacia que puedan tener. En el Tratado de Roma (149), que regula la Comunidad Económica Europea, se definen, con la claridad necesaria, no solo la denominación de los distintos tipos de actos que puedan realizar los principales órganos comunitarios, sino su eficacia y ámbitos de validez.

Las recomendaciones no tienen fuerza jurídica obligatoria. Sin embargo, en cuanto a sus destinatarios, generalmente tiene por objeto el que los Estados miembros hagan o se abstengan de hacer algo en interés de la marcha normal de la integración; además, a veces, se dirigen a los particulares y a menudo se dirigen a otros órganos o instituciones del proceso. Un ejemplo de lo anterior está contenido en la resolución número 26 del Consejo Económico Centroamericano, por la cual se hicieron varias recomendaciones al Banco Centroamericano de Integración Económica, al Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), a la Escuela Superior de Administración Pública de América Central (ESAPAC) y a otros organismos centroamericanos; también, lo estipulado en la última parte del párrafo primero del artículo XXII del Tratado General, por el cual el Consejo Ejecutivo "podrá proponer a los Gobiernos la suscripción de convenios multilaterales...".

Los Consejos han formulado recomendaciones en otros muchos y densos campos, no obstante que los instrumentos constitutivos no contemplan, en forma expresa, este

forma de actuar de los órganos. Ha de señalarse, que las recomendaciones no estando limitadas a un campo determinado, ni tampoco por razón del destinatario, pueden coadyuvar, tanto ahora como en el futuro, de una forma muy efectiva, al buen funcionamiento del proceso de integración y a la eventual creación de las nuevas normas y procedimientos que en los respectivos ámbitos nacionales o comunitario, se necesiten. Dada la amplitud de las funciones que se les han confiado, ninguna materia, asunto o actividad que se relacione con el programa de integración económica, escapa a este tipo de acción de los actuales órganos comunitarios.

Los actos que configuran fuente de nuevos derechos y obligaciones son las "resoluciones" propiamente dichas. Su fundamento de validez radica en la naturaleza y alcance de las competencias atribuidas a los órganos. No obstante ser el término "resolución" el que figura en los artículos XX y XXI del Tratado General, no existe uniformidad en cuanto a su uso, ya que en algunos instrumentos y en el texto de algunas resoluciones se usan expresiones tales como "medida", "declarar", "dictaminar". Lo anterior, supone a veces la necesidad de una labor de interpretación para desentrañar el verdadero sentido o alcance de la resolución. No obstante, excepto en los casos en que claramente se consigne lo contrario, las resoluciones son de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios, o en otras palabras, solo adquieren la condición de normas de conducta obligatoria, en relación a los casos concretos que las han motivado. Los destinatarios, tanto de las resoluciones como de las recomendaciones, pueden ser los Estados y los

particulares.

Las recomendaciones, que como ya se indicó carecen de fuerza jurídica obligatoria, solo se formulan con carácter general.

Las normas que emanan de las resoluciones, pueden tener el carácter anterior, o bien, el de una decisión ejecutiva aplicable a un Estado o determinados Estados, o en su caso, a un particular o determinados particulares. Las resoluciones de carácter ejecutivo o individual adoptan diversas formas: a veces, se declara la conducta de un Estado miembro como incompatible con alguna norma o principio del ordenamiento jurídico de la integración, con el objeto de que se deje sin efecto la medida nacional que ha suscitado la cuestión; en otras, se le autoriza a que proceda a hacer algo.

En cuanto al carácter de la competencia cuyo ejercicio genera el acto, normalmente, como es lo usual en el funcionamiento de toda organización internacional, los actos emanan del ejercicio de competencias "delegadas", es decir, de competencias expresamente conferidas a los órganos; a veces, cuando median circunstancias que así lo aconsejan o requieren, los actos emanan de competencias "implícitas" y en otros casos más esporádicos, de competencias "inherentes". En apartado especial nos referiremos, con cierta amplitud, al análisis y consideración de estas tres distintas modalidades de competencias.

Además, se habla (150) de los "acuerdos" como otro tipo de acto obligatorio para los Estados, el que no ha sido objeto de frecuente aplicación. Se señala, que es

Los acuerdos son tomados por los órganos regionales y que se refieren a interpretación de normas o a criterios aplicables a la conducción del proceso de integración. No está claro si estos acuerdos son verdaderas decisiones de los órganos, asimilables a las resoluciones, o si son meras negociaciones entre representantes gubernamentales. El asunto tiene interés, porque si se tratara de un acuerdo intergubernamental, el acuerdo solo obligaría a los Estados que han consentido en él; en cambio, si se trata de un acto de un órgano comunitario, se aplicaría, como en el caso del Consejo Ejecutivo, la regla establecida en el artículo XXI del Tratado General, el que señala que las decisiones del mismo se tomarán por mayoría de votos de sus miembros. Se cita como un caso de aplicación de estos "acuerdos" tomados en el seno del Consejo Ejecutivo, el contenido en el memorándum de la Sección Jurídica de la SIECA: "Opinión sobre si las llantas y neumáticos fabricados por la GLNSA tienen acceso al libre comercio en Honduras", en el que se señala:

"El acuerdo del Consejo que se deja relacionado, sobre cuya validez ningún Estado expresó reservas, tenía como propósito armonizar el tratamiento que ya estaban recibiendo en el mercado regional los productos de la planta guatemalteca con las disposiciones del Convenio sobre el Régimen de Industrias de Integración".

Respecto al acuerdo, el mismo memorándum señala además:

"El Consejo Ejecutivo, al estudiar el proyecto de

Protocolo que ampararía a dicha planta dentro del régimen señaló que su incorporación al mismo no afectaría ni restringiría el libre intercambio de productos similares que se estuviere realizando por empresas existentes antes de la referida incorporación por parte del Consejo Ejecutivo...".

La naturaleza jurídica de estos "acuerdos" no está perfectamente delimitada, lo cual supone, que para su comprensión futura será necesario realizar una investigación detenida en la práctica. En suma, en una especie de resumen de lo expuesto, a medida que transcurren las diversas etapas del proceso centroamericano de integración económica, será necesario hacer la precisión terminológica y de validez sugerida en líneas anteriores, lo que actualmente es ya una necesidad y en el futuro lo será mucho más a medida que la actuación de los órganos comunitarios se haga más intensa, sean más diversos los campos de actuación que se afecten por sus decisiones y más amplio el número de relaciones que tengan que regular.

b) Proceso de formación del acto comunitario.

El acto comunitario centroamericano usualmente experimenta un proceso de formación en el que interviene otro u otros órganos e instituciones que participan en el programa de la integración económica, cuya intervención no siempre está prevista expresamente en el instrumento que regula el acto, sino que, con cierta frecuencia, la intervención es objeto de una solicitud espontánea realizada por el órgano a quien compete realizar el acto. En algunos casos, es consecuencia de la propia iniciativa de

la institución u órgano que realiza la participación.

Estas intervenciones o participaciones generalmente obedecen, a que se trata de un asunto que requiere de una capacitación altamente técnica o especializada, o bien, que se requiere de una investigación y estudios previos.

Respecto a estos tipos de intervenciones pueden destacarse, las participaciones singulares de la Secretaría Permanente (SIECA), del ICAITI y finalmente, de las personas particulares.

Respecto a la SIECA, ya se señaló anteriormente, que a la misma, juntamente con el Consejo Ejecutivo y el Consejo Económico Centroamericano, le corresponde la competencia de velar por la integridad del ordenamiento comunitario centroamericano, lo que supone también, una necesaria coparticipación de los tres órganos en el proceso de formación de los actos comunitarios. Puede citarse como ejemplo de una participación efectiva de la SIECA, entre otros, el caso que motivó que el Consejo Ejecutivo dictara la resolución número 84 (151), en la que, la opinión de la SIECA sirvió de base para que se dictara la misma.

La participación del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), está prácticamente limitada al campo del desarrollo industrial integrado, debido a su naturaleza altamente técnica y especializada.

Se contempla su participación en el artículo IX del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, al disponer, referente a la incor-

poración de una planta al régimen, lo siguiente:

"Cuando la Secretaría disponga de suficientes elementos de información, dará cuenta de la solicitud a la Comisión (152). Si a juicio de ésta el proyecto responde a los objetivos de este Convenio, la solicitud será sometida a dictamen del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial o de cualquier otra persona o entidad que la propia Comisión considere competente. El dictamen deberá recaer sobre los aspectos tecnológicos y económicos del proyecto, y, en particular, sobre las perspectivas de mercado".

Se fortaleció más la posición del ICAITI al suscribirse el Primer Protocolo al Citado Convenio, realizado en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, el 29 de Enero de 1963, al encargársele la formulación de las normas de calidad industrial y la comprobación periódica de dichas estipulaciones. A este respecto el artículo IV señala:

"Los productos de las plantas de integración deberán cumplir las normas de calidad que serán formuladas por el ICAITI y aprobadas por el Consejo Ejecutivo. El ICAITI queda encargado de comprobar periódicamente el cumplimiento de dichas especificaciones, comunicando el resultado de esta comprobación a la Secretaría Permanente".

Se nota claramente, que se le asigna al ICAITI una participación obligatoria en la etapa técnica de un acto reglamentario que de realizar el Consejo Ejecutivo,

y además, ~~se le atribuye una función clara de vigilancia.~~

El artículo 33 del Protocolo últimamente citado, en relación a la aplicación de aforos uniformes cuando exista producción centroamericana de ciertos artículos, establece lo siguiente:

"La Secretaría Permanente a solicitud del país o países interesados, verificará en colaboración con el ICAITI los extremos del artículo anterior ...".

La posición del ICAITI se fortaleció también, con la suscripción del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, ya que el artículo 6 del mismo supone nuevamente una coparticipación SIECA-ICAITI, al señalar, respecto a la clasificación de las empresas, lo siguiente:

"Previo dictámen técnico favorable de la Secretaría Permanente del Tratado General, basado en los estudios que al respecto solicite del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial la Autoridad Administrativa nacional podrá clasificar...".

En el artículo citado se le asigna al ICAITI una participación indirecta, pero importante, ya que indudablemente la SIECA al dictaminar lo hará conforme a lo opinado por el ICAITI; además, la repercusión final de su actuación, ya no se dará en este caso solo respecto a un acto comunitario, sino incluso se extiende a verdaderos actos nacionales de los Estados contratantes.

Finalmente, el Comité de Cooperación Económica del Istmo, en su resolución 134, recomienda al Consejo E



económico Centroamericano que consolide y fortalezca la función del ICAITI, al señalar:

"toma las medidas necesarias para consolidar formalmente la función del ICAITI como único organismo en cargo de la formulación de normas industriales en Centroamérica".

Respecto a la oportunidad que se les ofrece a los particulares para que influyan en las decisiones de los órganos comunitarios, corresponde citar, en primer término, el artículo VIII del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, en el que se asigna a la Comisión Centroamericana de Integración Industrial (ahora Consejo Ejecutivo), la labor de dictar las normas en las que se fijen las condiciones y formas en que habrán de oírse los puntos de vista de la iniciativa privada. En este caso, no puede hablarse de una participación directa, pero sí, de una participación en la que si el Consejo Ejecutivo lo decide así, pueden los particulares, y para utilizar el término empleado en el Convenio, la iniciativa privada, exponer sus puntos de vista o influir consecuentemente, en los órganos que deberán tomar las resoluciones.

Una actuación similar ha tenido la iniciativa privada, a partir de la práctica de incluir representantes de la misma en las delegaciones oficiales de los países concretamente al seno del Consejo Ejecutivo, la que se ha dado básicamente, cuando se han discutido cuestiones relativas a la liberación comercial.

También de parte del sector oficial se ha manifestado un cierto interés y preocupación por el perfecciona-

miento del mecanismo actual.

Al efecto, el Consejo Ejecutivo en su vigésimocuarta Reunión (noviembre de 1966), consideró la conveniencia de organizar y fortalecer su propio funcionamiento, mediante el establecimiento de procedimientos que regularan las gestiones que los intereses públicos y privados pudieran realizar entre los Gobiernos o los órganos de la integración, a efectos de proporcionar un mejor clima, estabilidad, seguridad y certidumbre a dichos intereses. El mismo organismo ya había reconocido, con anterioridad a la Reunión indicada, la conveniencia de que representantes de los sectores económicos participaran, de alguna manera, en sus deliberaciones, a manera de asesores del proceso integracionista.

A este respecto, en su Reunión de Enero de 1966, el Comité de Cooperación Económica adoptó la resolución número 134, en la que se recomienda:

"d) adopte un sistema de audiencias previas que permita la participación de los distintos intereses afectados, en la discusión de la política arancelaria, a fin de perfeccionar los procedimientos relacionados con las funciones deliberativas y de decisión del propio Consejo" (se refiere al Consejo Ejecutivo).

Otra expresión de esta tendencia puede observarse, en el Reglamento sobre Procedimientos para Resolver Conflictos, preparado por la SIECA por encargo del Consejo Económico Centroamericano, según consta en la resolución número 40 de este último, adoptada durante su Séptima Re-

unión Ordinaria. En este Reglamento se contempla la participación de los particulares en las sesiones de los órganos que tengan por objeto resolver controversias (153).

El artículo IX del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, suscrito en Tegucigalpa, República de Honduras, el 10 de Junio de 1958, contempla otro caso de acceso directo que tienen los particulares a los órganos centroamericanos de integración económica (154). Fuera de los casos referidos, y principalmente hasta el inicio de la vigencia del Reglamento citado, las personas naturales o jurídicas no tenían una posición independiente ante los órganos comunitarios, sino sujeto al consentimiento de las autoridades administrativas nacionales, ya que cuando tenían que defender una posición o interés necesariamente tenían que recurrir, o bien al Gobierno de su país para que fuera él quien planteara el asunto ante los órganos correspondientes, o bien, tenían que acudir directamente a la jurisdicción nacional ejercitando las acciones y procedimientos que el derecho interno estableciera al efecto.

Es evidente, que en la formación de un gran número de los actos comunitarios, es conveniente se le de participación a los grupos o individualidades que tengan un interés en los mismos; además, es necesario se garantice una más intensa participación de los organismos técnicos o especializados que están creados y que forman parte del actual esquema institucional de la integración económica centroamericana. Una adecuada regulación, producto de una negociación futura entre los Estados partes en el

programa de integración, ha de normar la oportunidad y el grado de participación que cada parte interesada u organismo técnico ha de tener en la construcción legal del acto comunitario.

Tomando en cuenta que la gran mayoría de los actos comunitarios afecta directamente a intereses privados, debe adoptarse un sistema que permita oír, cuando éstos lo consideren necesario o cuando los respectivos órganos lo estimen oportuno, sus opiniones o en su caso la defensa de sus intereses, durante la fase de gestación de cada uno de los actos comunitarios.

c) Las Resoluciones de los Consejos como fuente del Derecho Comunitario Centroamericano.

Ya nos referimos anteriormente a la significación jurídica de las resoluciones dictadas por los Consejos, Ejecutivo y Económico Centroamericano. Ahora solo señalaremos, que las resoluciones constituyen el instrumento o medio por el cual los Consejos citados resuelven las diversas cuestiones sometidas a su competencia y a medida que se han ido creando nuevas relaciones, el número de las mismas se ha incrementado en forma considerable.

Al tenor de las normas contenidas en los artículos XX, XXI y XXII del Tratado General, se desprende que los Consejos, especialmente el Ejecutivo, pueden dictar todas aquellas medidas que sean necesarias para garantizar la consecución de los fines que se persiguen a través del programa de integración económica.

Es indudable, que las resoluciones adquieren el carácter de verdadera fuente del derecho comunitario centroamericano, cuando son dictadas con el fin de colmar u-

na laguna en el mencionado Derecho. Ya hemos hecho referencia al hecho, de que el vigente derecho comunitario a dolece de una escasa regulación en lo que se refiere a los actos que pueden realizar los órganos comunitarios y también, a los términos generales y consecuentemente sus ceptibles de interpretaciones extensivas o restrictivas, con que se definen las respectivas competencias de los mismos.

Si la resolución se dicta con el objeto de llenar una laguna, no puede ponerse en duda su capacidad ge neradora de normas jurídicas y en este sentido, es lógico suponer, que sean muchas las actuaciones de los órga nos mencionados, en atención a las consideraciones hechas en líneas anteriores. El fundamento legal de estas resoluciones se encuentra en los propios instrumentos de integración económica, los que previendo la posibilidad de que se den relaciones frente a las cuales no esté pre vista en los mismos una norma aplicable, autorizan a los Consejos, y en especial al Ejecutivo, para que puedan re alizar, a través de la emisión de resoluciones, la función integradora del Derecho, en cada caso concreto en que ello se requiera. El rasgo característico de estas resoluciones es que se incorporan, con el simple requisi to de notificación a los Gobiernos, al ordenamiento jurí dico comunitario.

Si la resolución se dicta, no para cubrir una deficiencia normativa, o dicho en otros términos, para resolver el problema de la ausencia de una norma aplica ble, sino para orientar el actuar futuro de los órganos,

difícilmente podría afirmarse, que tales resoluciones constituyen fuente auténtica de normas jurídicas.

Suele señalarse como claro ejemplo de resolución normativa, el de la número 71 del Consejo Ejecutivo (155), la que por su carácter y texto constituye un complemento indudable de lo dispuesto en el artículo VI del Tratado General, que regula lo referente a los impuestos al consumo que pueden establecer los Estados contratantes.

Es y debe ser motivo de especial preocupación, lo referente a la entrada en vigor de las resoluciones de los Consejos, es decir, la fecha a partir de la cual surten efectos jurídicos. En ningún tratado existe una norma de carácter general que resuelva el problema y como consecuencia de esto, cada órgano ha tratado de resolver el problema.

Al efecto, el Consejo Ejecutivo, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo XXII del Tratado General, dictó su resolución número 24 en la que se señala, que las resoluciones del Consejo Ejecutivo entrarán en vigor en cada país ocho días después de que la Secretaría Permanente notifique a los Gobiernos dichas resoluciones, transcribiéndoles el acta correspondiente.

En la misma forma el Consejo Económico Centroamericano, en ejercicio de su propia potestad legislativa resolvió oportunamente, que sus reglamentos entrarían en vigor ocho días después de que la SIECA transmita a los Gobiernos el acta certificada de la Reunión del Consejo en la que se adoptó la resolución o reglamento.

Es oportuno hacer la observación, acerca de que

las resoluciones indicadas adolecen de falta de precisión, por no aclararse, si el momento exacto del inicio de la vigencia es cuando la SIECA despacha la copia de la resolución o cuando los respectivos Estados la reciben y en este último caso, es lógico suponer, que no todos los Estados la reciban al mismo tiempo.

Solamente dos tratados tienen estipulaciones al respecto, y en cuanto a esto, hay que dejar claramente sentado, que son estipulaciones que tienen valor únicamente para las resoluciones que se dictan dentro del marco de los respectivos tratados. Los dos instrumentos que contienen normas reguladoras aplicables a la entrada en vigencia de las resoluciones de los Consejos, son los siguientes:

1) El Segundo Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, suscrito en San Salvador, el 5 de Noviembre de 1965, el que en su artículo 2º señala:

"El Consejo Ejecutivo, mediante acuerdo y con base en el programa de producción de la planta y un dictamen que al efecto preparará el ICAITI, determinará las clases y espesores de vidrio plano o en láminas, que serán amparadas por este protocolo en su fecha inicial de vigencia. Asimismo, podrá incluir nuevas clases o espesores, siempre mediante acuerdo, previa comprobación de que la fábrica los produce en condiciones adecuadas para abastecer el mercado centroamericano. Dichos acuerdos serán publica-dos en el diario oficial de cada uno de los países para los efectos legales correspondientes, dentro



del término de 30 días a que se refiere el artículo 16".

2) El Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración (Segundo Protocolo de Managua), suscrito el 16 de Noviembre de 1967, en su artículo XII, inciso f) señala:

"La resolución que adopte el Consejo Económico será comunicada a las partes contratantes por la Secretaría Permanente, dentro de los diez días siguientes a la fecha de clausura de la respectiva reunión. Dentro de los quince días siguientes a la fecha de la comunicación de la Secretaría Permanente, el Poder Ejecutivo de cada Estado contratante emitirá un acuerdo o resolución para poner en vigor los montos arancelarios acordados. Dicho acuerdo o resolución se publicará en el diario oficial dentro de un plazo no mayor de dos meses, contados a partir de la fecha en que el Consejo Económico Centroamericano clausuró la reunión en que acordó aquellos".

3) El Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos, aprobado por el Consejo Económico Centroamericano en su resolución número 50 de 27 de Marzo de 1968, el que en sus artículos 43 y 44 establece:

El artículo 43, dice:

"La Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica será el órgano encargado de certificar y notificar a los Estados las resolucio



nes que se dicten.

Se tendrán por certificadas y notificadas tales resoluciones por el solo hecho de que la Secretaría Permanente cumpla con dichos requisitos respecto del acta en que aquellas figuren".

El artículo 44 establece:

"Las resoluciones a que se alude en el presente Reglamento surtirán efecto en la forma y fecha que en las mismas se indique o, si nada se dijere sobre esto particular, ocho días después de la fecha del documento por medio del cual la Secretaría Permanente transnita a los Estados el acta certificada en que aquellas consten.

El plazo a que se refiere el párrafo precedente será de ocho días corridos.

No obstante lo anterior, los miembros del correspondiente Consejo quedan obligados a no esperar el transcurso del plazo que se menciona en este artículo para tomar las medidas que sean necesarias a fin de que las resoluciones produzcan sus efectos, en los respectivos países, al vencimiento del término señalado".

En relación al valor y vigencia de las resoluciones de los Consejos, es preciso señalar, que en ninguno de los instrumentos que regulan la integración centroamericana, se ha establecido una tipología normativa, ni se han precisado los distintos efectos jurídicos que tienen las normas de integración en el ámbito del derecho interno, tal como efectivamente está establecido en el Tratado de

la Comunidad Económica Europea (CEE).

En efecto, ninguno de los tratados preve en forma expresa y taxativa el efecto jurídico de las resoluciones, es decir, su efecto inmediato y directo en el orden jurídico interno. Sin embargo, si la atribución de competencias está contenida en normas básicas aceptadas por los Estados, las resoluciones que dicten los órganos en ejercicio de sus propias competencias, necesariamente han de producir efectos jurídicos. En consecuencia, no podrá un Estado oponérsele, no podrá impedirla, sino a lo sumo, determinar la modalidad de ejecución de las mismas, ya que la norma contenida en ellas va acompañada de un carácter de auto y directamente ejecutable.

Aunque esto ya lo dijimos anteriormente, es conveniente hacer referencia nuevamente a ello. Es necesario el fortalecimiento institucional de los Consejos, Ejecutivo y Económico Centroamericano, a efectos de que puedan cumplir a cabalidad las funciones que actualmente les están asignadas y las que necesariamente les corresponderán en las etapas futuras del programa de integración económica centroamericana, lo cual también supone, que en los nuevos instrumentos que necesariamente han de suscribirse, para que sustituyan a los actualmente vigentes, se precisen más sus funciones y las facultades que tendrán para realizarlas. Toda esta renovación necesariamente ha de desembocar en una atribución más clara y precisa de competencias supranacionales a los principales órganos que tienen a su cargo la orientación, aplicación y administración de esta gran empresa comunitaria que es la integración económica centro-

americana

2) Las Recomendaciones de los Consejos como frente del De-  
recho Comunitario Centroamericano.

Anteriormente ya hicimos referencia también a la significación jurídica de las Recomendaciones de los Consejos, Ejecutivo y Económico Centroamericano. Ahora nos referiremos a otro aspecto.

Dentro del conjunto de actos realizados por los Consejos, tienen el carácter de recomendaciones, aquellos mediante los cuales los mismos proponen a los Estados que adopten, en su orden interno, determinadas medidas de carácter sustantivo o de procedimiento. Con la emisión de una recomendación, los Consejos no pretenden en manera alguna, resolver algún problema concreto que se les haya presentado, sino que por el contrario, sus efectos son de menor alcance y simplemente se persigue señalar derroteros a los Estados, para que en su orden interno, dicten las medidas que se consideran oportunas para armonizar o impulsar la marcha de la integración económica. Normalmente, las recomendaciones van dirigidas a los Estados y solo en casos excepcionales son dirigidas a otros organismos vinculados a la integración o a personas privadas, siempre para solicitar a los mismos que adopten un determinado comportamiento o que presten una determinada colaboración.

El fundamento legal de la actuación de los Consejos, en este aspecto, se encuentra en las amplias y poco precisas funciones que a las mismas se les asigna en los artículos XX, XXI y XXII del Tratado General, en cuanto a sus funciones directas, coordinadoras, aplicadoras y admi-

nistradoras del programa de integración económica centroamericana. En cuanto al Consejo Ejecutivo, la facultad que la concede el artículo XXIII para:

"proponer a los Gobiernos la suscripción de los Convenios multilaterales que adicionalmente se requiera para alcanzar los fines de la integración económica de Centroamérica, inclusive una unión aduanera entre sus territorios"

lo permite un margen muy amplio para dictar recomendaciones en relación a los asuntos más diversos.

En el artículo 38 inciso d) del Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos, contenido en la resolución número 50 del Consejo Económico Centroamericano, ya mencionada anteriormente.

En el precepto antes citado, se establece:

"Las resoluciones que el Consejo Ejecutivo emita para ponerle fin a un conflicto deberán tener como fundamento, entre otros:

d) Los dictámenes y recomendaciones de los organismos de integración económica".

Hasta antes de la emisión del citado Reglamento, ninguno de los instrumentos que regulan el proceso de integración económica centroamericana hacía mención a lo que debía calificarse y considerarse como fuente del derecho de integración. A partir del inicio de la vigencia del Reglamento en cuestión, si debe calificarse a las recomendaciones como fuente del Derecho de Integración, aun cuando, repito, éstas no tengan efectivamente fuerza jurídica obligatoria, pero en todo caso, deben constituir una

orientación en la emisión del fallo y servir así de base a las resoluciones que se dictan para resolver conflictos.

Aún cuando se aceptara el criterio de que las recomendaciones no pueden constituir fuente de verdadero y efectivo derecho, no podría negarse, en ningún momento, que las recomendaciones se originan en la realidad del proceso de integración económica centroamericana, en un factor de influencia en la creación del Derecho Comunitario.

e) Ambitos de validez de los actos de los órganos comunitarios.

Para estudiar, aún cuando sea a grandes rasgos, los diferentes campos en que actualmente actúan los órganos comunitarios, es conveniente agrupar los actos en tres sectores, según se refiera: 1) a la liberación comercial; 2) a la equiparación arancelaria; y 3) al desarrollo industrial integrado. No está demás señalar, que este agrupamiento no responde más que a la necesidad de simplificar la exposición.

Los del primer grupo, o sea, los que se refieren a la liberación comercial, puede reclasificárseles según se refieran: a) a la determinación del origen de las mercancías; b) a los obstáculos no aduaneros a la liberación comercial; y c) al comercio desleal.

Respetando la clasificación planteada, intentaremos hacer un somero análisis.

La determinación del origen centroamericano de las mercancías, para los efectos de lo previsto en los artículos II y V del Tratado General, es un problema que se ha presentado repetidamente en los Estados. Debido a que

las discrepancias no se han resuelto por arreglo bilateral, han pedido los Estados la intervención del Consejo Ejecutivo para que este verifique el origen de las mercancías. Una primera actuación a esto respecto se encuentra en la resolución número 1 del Consejo Ejecutivo, en la que se señala:

"A efecto de facilitar la determinación del origen de las mercancías objeto de libre comercio, y de acuerdo con sus respectivas normas legales, cada Estado dispenga en forma obligatoria que los artículos manufacturados en sus territorios ostenten claramente una leyenda que diga "producto centroamericano hecho en...".

Una manifestación más de la preocupación del Consejo Ejecutivo sobre este asunto, quedó expresado en la solicitud misma que oportunamente le hizo a la Secretaría Permanente, para que preparara un proyecto de reglamento para determinar el origen centroamericano de las mercancías.

En relación a este aspecto, relativo a la determinación del origen de las mercancías, son varias las actuaciones que ha tenido el Consejo Ejecutivo. Una de las primeras la motivó el producto "Lea & Perrins Sauce", elaborado por la firma "Droguería y Laboratorios Coamos" que opera en El Salvador, el cual motivó que se dictara la resolución número 18 (156) en la que se declara, que el producto es simplemente diluido y como consecuencia, no originario de Centroamérica. Además, en la misma resolución se establecía:

"que no siendo un producto originario de una de las

partes contratantes, de acuerdo con el artículo III del Tratado General no goza de libre comercio".

La resolución citada anteriormente, fué dejada sin efecto por la resolución número 20 (157), por haberse variado las condiciones de producción del artículo.

Respecto a otros casos, puede citarse la resolución número 59 (158), en la que se declara:

"no existir motivo para dudar del origen Centroamericano de la varilla de hierro de 1/4" producida por la planta ACERO S.A. de El Salvador y en consecuencia, debe restablecerse el libre comercio de dicho producto".

Otro caso se encuentra en la resolución número 63 (159), en la que por considerar el Consejo Ejecutivo, que eran originarios de Guatemala los vinos y jugos de frutas fermentados que se elaboraban en este país, declaró:

"Los Gobiernos deben eliminar las restricciones al intercambio que han impuesto en el origen".

También puede citarse la resolución número 64 (160) del Consejo Ejecutivo, en la que, en relación a la disposición del Gobierno de Nicaragua de prohibir la exportación a Centroamérica de cueros crudos de res, se resolvió en la misma:

"que se debe restablecer de inmediato el libre comercio irrestricto del producto".

En cuanto a actos referidos a los obstáculos no aduaneros a la liberación comercial, podemos citar las resoluciones del Consejo Ejecutivo siguientes:

- a) la resolución número 4, por la que se solicitó a los Gobiernos centroamericanos la adopción de medidas para armonizar disposiciones legales en materia de sanidad vegetal y animal, cuya disparidad resultaba un impedimento al libre comercio;
- b) la resolución número 5, por la que se recomendó la unificación de los horarios de las distintas aduanas nacionales;
- c) la resolución número 6 (161), por la que se autorizó a unos Gobiernos para que establecieran un impuesto diferencial al consumo de cerillas equivalente a un centavo de dolar;
- d) la resolución número 12 (162), por la que se resolvió autorizar a todos los Gobiernos para que pudieran establecer impuestos al consumo de llantas y neumáticos;
- e) la resolución número 54 (163), por la que se resolvió la incompatibilidad con la norma establecida en el artículo VI del Tratado General, de un impuesto sobre el consumo de licores de origen centroamericano establecido por el Gobierno de Costa Rica, resolviéndose además, que un impuesto de esta naturaleza, no debería exceder de las cifras sugeridas por la SIECA en un documento que al efecto elaboró;
- f) la resolución número 58 (164), en la que se resolvió lo que textualmente se transcribe:

"que no procede una negativa, por parte de las autoridades correspondientes, a vender los timbres necesarios para expender cigarrillos "FAMA" en territorio Salvadoreño, ya que ello significaría un



obstáculo incompatible con el libre comercio irrostricto consagrado en el Tratado General de Integración Económica Centroamericana";

g) la resolución número 71 (165); por lo que el Consejo Ejecutivo declara, que un Estado miembro del Tratado General debe dejar de cobrar los impuestos que hubiera establecido en caso de que cese en su propio territorio la producción del artículo gravado y se continúe elaborando, sin embargo, en otro o en otros países del área. Con esta resolución se amplía apreciablemente el ámbito de validez de los actos del Consejo Ejecutivo, ya que se contienen normas cuyo contenido no está previsto en el artículo VI del Tratado General.

En cuanto a los actos relacionados con el comercio desleal, empezamos por iniciar, que el Tratado General no define lo que debe entenderse por tal comercio. No obstante, en el artículo XI del Tratado General se habla sobre subsidios a la exportación, ventas a precio inferior al valor normal, etc. En el artículo XIII se deja al Consejo Ejecutivo un margen amplio para que dictamine en los casos de posibles prácticas de comercio desleal. El alcance del Tratado General, en cuanto a este aspecto, ha sido ampliado por las normas incluidas en el capítulo III del Protocolo de San José al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, por la inclusión de la noción de "medidas de carácter multilateral" y nociones sobre aplicación de sanciones. Las normas últimamente citadas, indudablemente, agregan una protección más a las industrias de integración, ya con garanti-

as según lo dispuesto en el artículo 8 del Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, suscrito en San Salvador, República de El Salvador, el 29 de Enero de 1963.

Dentro del grupo de actuaciones relacionadas con el comercio desleal, de las que hay pocas, podemos citar la resolución número 50 (166), que se dictó a raíz del anuncio del Gobierno de Costa Rica de exigir caución o fianza por el monto de los impuestos correspondientes, sobre todo en envio de granos procedentes de Nicaragua, por estinar que en este país había evidencia de comercio desleal dadas las inportaciones que había efectuado durante el año 1964 y los próximos anteriores. En esta resolución bajo comentario, se declaró:

- "a) que no existe evidencia de comercio desleal de arroz entre Nicaragua y Costa Rica;
- b) que no procede exigir caución por parte de las autoridades costarricenses, a las inportaciones de arroz procedentes de Nicaragua".

En esta resolución se dejó claramente establecido, que para poder exigirse fianza por los impuestos de importación que pudieran causarse, debe mediar previamente una autorización del Consejo Ejecutivo.

Respecto a actuaciones relacionadas con la equiparación arancelaria, pueden mencionarse las resoluciones números 41 y 42 (167) del Consejo Ejecutivo. En la primera se señala que la vigencia de los aforos de equiparación acordados para la leche en polvo en el Protocolo de San José al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Graváne-

nos a la Importación, no está supeditada a la fijación de cuotas de importación de terceros países. En la segunda, se estableció un sistema de registro y licencias para que pudieran llevarse estadísticas desglosadas y detalladas sobre importación de leche en polvo procedente de países fuera del área centroamericana.

En lo relativo a la formación y renegociación del arancel común, los actos realizados tienen su base legal básicamente en las disposiciones del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y fundamentalmente, en lo dispuesto en sus artículos XI y XII, lo que origina una combinación de actos entre el Consejo Ejecutivo, que es quien confecciona el proyecto de protocolo correspondiente, con la asistencia técnica de la SIECA, y el Consejo Económico Centroamericano, quien es el que decide, si así lo considera oportuno, suscribirlo y a continuación remitirlo a cada Estado para su aprobación. Pueden citarse a este respecto, la resolución número 12 del Consejo Económico Centroamericano y la resolución número 17 del mismo Consejo, por la que "suscribió" el proyecto de "Acuerdo Especial sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación de Tejidos de Rayón y otras fibras artificiales o sintéticas", el que previamente había sido aprobado por el Consejo Ejecutivo, en su Undécima Reunión, celebrada en Enero de 1965. Este acuerdo fue suscrito en San Salvador, El Salvador, el 7 de Febrero de 1965 y se encuentra en vigencia desde el 27 de Enero de 1968.

Indudablemente, el sistema de renegociación aran-

celaria y suscripción subsiguiente de Protocolos al Con-  
venio de Equiparación de Gravámenes a la Importación, re-  
sultó, desde un principio, engorroso y dilatorio de la  
marcha del proceso, razón por la cual, debe buscarse la  
forma más adecuada a efecto de dotar a los órganos comu-  
nitarios de una competencia específica para fijar los a-  
ranceles renegociados, con lo cual se daría nacimiento a  
actos de naturaleza jurídica distinta a los hasta ahora  
realizados y que representarían, sin lugar a dudas, un a-  
vance de singular importancia en el enfoque y considera-  
ción del principio de supranacionalidad dentro del proce-  
so de integración económica centroamericana.

Respecto al grupo de resoluciones relacionadas  
con el desarrollo industrial integrado, las mismas pueden  
referirse, al régimen de industrias de integración propi-  
amente, al sistema especial de promoción de actividades  
productivas establecido en el capítulo IV del Protocolo  
al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamerica-  
nas de Integración, o a las disposiciones pertinentes  
del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al  
Desarrollo Industrial. No obstante, solo respecto a lo  
primero haremos un comentario, es decir, respecto a las  
especiales competencias que dentro del régimen de indus-  
trias de integración se le atribuye al Consejo Ejecutivo.  
Tenemos así, las resoluciones del Consejo Ejecutivo núme-  
ros 7 y 37 (168), por las que se califican a ciertas in-  
dustrias como de integración.

La competencia prevista en el artículo 20 del  
Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Com



troamericanas de Integración, ha sido ejercida por el Consejo Ejecutivo al dictar las resoluciones números 35 y 36. En la primera, "aprobó" la lista de tipos y tamaños de llantas y neumáticos; en la segunda, "aprobó" la aplicación de la lista de tipos y tamaños del mismo producto, en la que además ejerció, en relación a la planta de integración GINSA S.A. la competencia que le atribuye el artículo 25 del citado Protocolo, consistente en fijar la lista de precios y autorizar modificaciones a éstos. También puede citarse, la resolución número 68 (169), en la que se aprobó, para los efectos del artículo 25 del Protocolo citado, la lista de precios máximos al consumidor, al crédito, para las nuevas llantas y neumáticos que estaban siendo producidas por la GINSA, S.A., empresa establecida en la República de Guatemala.

E) Los principios Generales del Derecho como fuente del Derecho Comunitario Centroamericano.

En todos y cada uno de los sistemas jurídicos de los Estados centroamericanos se reconocen como propios y de respeto obligatorio, por imperativo de una moral política, una serie de principios, dentro de los que puede señalarse, a título de ejemplo, de de "buena fe" y el de "pacta sunt servanda", los que también destacan entre los más importantes. Los principios referidos también gozan de tal reconocimiento, entre los sistemas normativos de muchos otros Estados, que pertenecen también a regiones diversas de nuestro planeta.

Los principios generales del derecho, no obstante gozar de reconocimiento y servir como fuente de inspira-



ción del que está llamado a interpretar las leyes o del que tiene planteada la necesidad de integrar un ordenamiento legal a través de especiales decisiones de carácter normativo, como consecuencia de la ausencia de una norma aplicable al caso concreto que se plantea, algunas corrientes doctrinales se niegan a reconocerles el rango de fuente de derecho, de la cual pueden surgir normas jurídicas, es decir, normas de contenido obligatorio y de imposición coercitiva.

En ninguno de los instrumentos vigentes que regulaban el programa de integración económica centroamericana, se encontraba norma alguna que hiciera referencia a los principios generales del derecho, como fuente de la que pudiera emanar una norma jurídica comunitaria. No existía una norma como la establecida en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (170), que se refería al deber de la Corte, cuya función es decidir conforme al Derecho Internacional las controversias que le son sometidas, de aplicar los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. La referencia a los principios generales del derecho, no existía, ni como norma de actuación dirigida a los diferentes órganos instituidos, ni dirigida a un Tribunal, el que tampoco existió dentro de la actual ordenación institucional comunitaria centroamericana.

No obstante, los órganos comunitarios, en su diverso actuar, ordinariamente se inspiraban en los principios generales del derecho, cuando realizaban la labor de interpretar o integrar las normas jurídicas comunitarias.

Lo expuesto, necesariamente nos conduce a la afirmación, de que dentro del Derecho Comunitario Centroamericano vigente hasta la emisión del Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos, los principios generales del derecho no constituían fuente de aquel, es decir, fuente de donde pudieran emanar directamente normas jurídicas comunitarias.

Con una opinión un tanto discrepante en relación a lo afirmado anteriormente, Gautana Fonseca (171), caracteriza a los principios generales del derecho como:

"una fuente autónoma, aunque subsidiaria, de la legislación común centroamericana".

A partir de la vigencia del Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos, los principios generales del derecho, son calificados, verdadera y claramente, como fuente del Derecho Comunitario Centroamericano y a ello hace referencia clara el artículo 38 inciso e), el que literalmente dice:

"Las resoluciones que el Consejo Ejecutivo emita para ponerlo fin a un conflicto deberán tener como fundamento, entre otros:

e) Los principios generales del Derecho y de la ciencia económica".

Efectivamente, conforme al precepto citado, los principios generales del derecho deben ser tomados en consideración y aplicados al dictarse un fallo y consecuentemente, servir de base a las resoluciones que se dicten al efecto.

La disposición citada, no solo es aplicable a las

resoluciones que dicto al efecto el Consejo Ejecutivo, sino también, para las que dicto, con el mismo objeto y conociendo en segunda instancia, el Consejo Económico Centroamericano, tal como claramente se establece en el artículo 51 del mismo reglamento.

Acordo con nuestro particular enfoque, respecto a la forma adecuada en que debe organizarse el procedimiento de juzgamiento de los problemas y conflictos que surjan como consecuencia de la aplicación del derecho comunitario, estimamos que al igual que en el precepto citado del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el comentado correspondiente al Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos, debe reconocerse a los principios generales del derecho, los que correspondan al Derecho Internacional general y los propios del Derecho regional, como fuentes de inspiración y fundamento de los fallos del Tribunal o Corte de Justicia Centroamericana, labor que indistintamente debe realizarse al elaborarse y aprobarse el Estatuto que regulará el funcionamiento de dicho Tribunal. En diversas partes de este trabajo, hemos insistido en la necesidad y conveniencia de la existencia de este Tribunal, para los efectos de poder alcanzar un nivel de progreso en la interpretación, la que debe ser uniforme, del Derecho comunitario y para el juzgamiento adecuado y regular de los conflictos que puedan suscitarse.

Igual criterio nos merece el reconocimiento de los principios de la Ciencia Económica, por lo que obviamos hacer comentarios especiales sobre ellos.



F) La Doctrina como fuente del Derecho Comunitario Contro-  
americano.

Para efectos de poder analizar el aspecto que ahora nos interesa y sin ninguna pretensión de sentar una definición definitiva, debemos o podemos entender por Doctrina, el conjunto de comentarios y críticas que sobre las leyes y las diversas cuestiones de interés jurídico realizan los estudiosos. Partiendo de esta noción y tomando en consideración que por haberse iniciado el fenómeno integracionista controamericano en una fecha relativamente reciente, su ordenamiento jurídico puede adolecer, y efectivamente adolece de imperfecciones e insuficiencias en su elaboración, los comentarios, opiniones y críticas de los estudiosos de este derecho comunitario, ejercerán una influencia considerable, y algunas veces tal influencia será determinante, en la evolución y perfeccionamiento de sus instituciones.

Lo anterior nos conduce a afirmar, que la doctrina, no constituye por sí fuente de derecho, y en el caso que nos ocupa, no podrá considerársele como efectiva fuente del derecho comunitario controamericano, ya que de simples comentarios u opiniones, por muy fundadas, técnicas y realistas que sean, no podrán surgir normas jurídicas comunitarias. No está demás dejar sentado, que en los diversos instrumentos que constituyen el marco legal del proceso integracionista, no se hacía mención o referencia alguna a la doctrina como fuente de normas jurídicas.

Sin embargo, Gautama Fonseca (172) después de señalar que el Derecho Común Controamericano (así denomina

este investigador al Derecho que estudiamos) se ha elaborado con base principalmente en criterios pragmáticos y que atendiendo a que la doctrina no tiene como función elaborar normas de Derecho, sino más bien hacer su comentario o crítica, se permite afirmar, atribuyéndole con ello un carácter más significativo que el que le atribuimos en líneas anteriores, que:

"no puede menos de admitirse que en el Derecho Común Centroamericano constituye una fuente accesoria, de importancia cada día mayor".

El valor de la doctrina es siempre considerable, porque los que la expresan son hombres y el Derecho es una elaboración humana y como consecuencia, los criterios, opiniones y orientaciones jurídicas, de aquellos, determinan el alcance, valor, objetividad y profundidad normativa de las leyes, tratados o convenciones que elaboran. En esto consiste la gran riqueza de la doctrina. En cuanto a su posible estimación como fuente efectiva del Derecho Comunitario Centroamericano, tomada esta expresión en el sentido que hemos venido atribuyéndole en el curso de este trabajo, dejamos sentada nuestra opinión negativa.

La creación en las Universidades de Departamentos especializados en cuestiones de integración, y más concretamente, Departamentos especializados en el estudio de los problemas jurídicos de la integración, pone de manifiesto la importancia de la doctrina como fuente intelectual del Derecho, lo cual justificaría, que al organizarse la Corte o Tribunal Centroamericano de Justicia, en el Estatuto correspondiente se le reconociera, sin exago-

raciones y tampoco en forma muy restrictiva, el valor que la misma puede tener como instrumento eficaz para una interpretación adecuada de las normas jurídicas comunitarias (173), tal como a partir de la vigencia del Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos, se reconoce en el artículo 38 inciso f) y artículo 51. El precepto primeramente citado está referido a las resoluciones que para poner fin a un conflicto deba dictar el Consejo Ejecutivo; el segundo, a las que con las mismas finalidades deba dictar el Consejo Económico Centroamericano. En uno y en otro caso, aún cuando colocada en última instancia, debe tomarse la "doctrina de los tratadistas de mayor competencia", como fundamento de las resoluciones que se dicten. No está demás insistir, que conforme al Reglamento comentado y así deberá considerarse en cualquier otra regulación que se haga, deberá considerarse como fuente a la doctrina de los tratadistas, solo en el caso de que las fuentes efectivas, que son siempre objeto de consideración antes que ella, no contengan la norma o el principio aplicable al caso, es decir, no puedan constituir fundamento en la resolución o fallo.

El comentario anterior, que en síntesis, es que debe considerarse y respetarse siempre el orden jerárquico plasmado en las normas clasificatorias, es aplicable a todas las que son calificadas como fuentes del Derecho Comunitario Centroamericano, en orden y atención a la colocación que se les da en la norma que les atribuye el calificativo de fuentes o elementos de fundamento de las resoluciones o fallos que han de poner fin a los conflictos.

TITULO III

LA SUPRANACIONALIDAD EN EL DERECHO

COMUNITARIO CENTRO AMERICANO

CAPITULO I

ANTECEDENTES Y TEORIAS ACERCA DE

LA SUPRANACIONALIDAD

A) Antecedentes del término supranacional.

El término "supranacionalidad" hizo su aparición, oficialmente y por primera vez, en el año 1951, cuando los representantes de Francia, Bélgica, República Federal de Alemania, Holanda, Italia y Luxemburgo suscribieron en París el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, conocida mejor bajo la denominación y utilización de la sigla "CECA", mediante el cual se creó la primera comunidad de integración económica. Esta institución comenzó a funcionar realmente el año 1953, al producirse la apertura del Mercado Común Europeo del Carbón y del Acero, aunque efectivamente, el Mercado Común de este último mineral, abrió operaciones al año siguiente. Nació así el primer ensayo desarrollista en el Continente europeo, precisamente respecto de las materias básicas de la industria europea.

Parece ser que el término "supranacionalidad" tiene su origen en la mentalidad de algunos estadistas europeos, quienes comprendieron la necesidad de dotar a las organizaciones regionales de los suficientes poderes y atribuciones para permitirles, al mismo tiempo que facilitarles, una acción dinámica que no se viera entorpecida ó demorada por las dificultades nacionales, es decir, por las trabas del derecho positivo interno.

Llama la atención el hecho referente a que el término "supranacional" haya sido empleado en un tratado internacional antes de haber sido siquiera elaborado por la doctrina, la cual había permanecido casi ajena a él.

Sin lugar a dudas, el término "supranacional" nació con un manifiesto significado político, que tendía a producir un fuerte impacto en el medio social al cual se dirigía, lo que confirma la generalizada idea de que se trata de un concepto jurídico-político.

Es interesante destacar a este respecto la opinión de Pescatore (174), el que señala:

"Para explicar un fenómeno como el de las Comunidades, que no encuentra puesto apropiado ni en las categorías de derecho público, ni en las del derecho internacional clásico (en efecto, es evidente que no se puede introducir pura y simplemente las instituciones comunitarias en la categoría de las organizaciones internacionales), se ha intentado forjar un nuevo término, el de la "supranacionalidad".

Este término no sólo representa, sin embargo, un intento de calificar un fenómeno nuevo, sino que ha pasado a ser rapidísimamente también un término de combate político: la supranacionalidad es, no sólo lo que se encuentra ya en los tratados europeos, sino también un ideal que se ansía conseguir en el futuro. Ahora bien, el uso de esa noción como término de combate no ha dejado de provocar reacciones y hasta una especie de aler

gia política, al extremo de que en la hora actual todos cuantos están más deseosos del crecimiento real de las instituciones europeas de un combate ideológico, se imponen una gran reserva en la utilización de ese concepto discutido".

En el Tratado de la CECA se utilizó el término para caracterizar las funciones de los miembros de la Alta Autoridad. En los Proyectos de Tratado de la Comunidad Europea de Defensa y de la Comunidad Política Europea, se utilizó para definir la -naturaleza de esas Comunidades, lo que se señala como una de -las causas del fracaso del primer proyecto ante el Parlamento Francés, en 1954, y el nuevo fracaso al segundo proyecto. En los Tratados de Roma, debido a las difíciles circunstancias políticas en que nacieron estos Tratados, el término ya no aparece. Esta omisión en el empleo del término no significa que la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de -Energía Atómica (EURATOM), estén desprovistas de competencias supranacionales. Tanto las Comunidades últimamente citadas, como la CECA, están igualmente dotadas de evidentes competencias supranacionales, como se puede apreciar al examinar la estructura, funciones y facultades de los órganos e instituciones de esos procesos de integración.

Es indudable que las Comunidades europeas marcan el esfuerzo de una profunda renovación de la organización internacional en lo que a los objetivos, la estructura y los métodos de acción se refiere. Puede decirse, que este esfuerzo implica una profunda originalidad. Debe considerarse normal que se tratara de buscar una palabra que pudiese designar los rasgos orig

ginales de la empresa comunitaria. Ante una nueva orientación, un nuevo fenómeno, era perfectamente legítimo forjar el neologismo constituido por el término "supranacional", y puesto que fué éste el que los creadores de la novedad eligieron, cabe preguntarse por qué no habría de conservársele.

Se emplee ó no el término, es de destacar que en cuanto a las tres Comunidades europeas actuales, el sentido de supranacionalidad no cubre más que la independencia de los miembros de la Alta Autoridad de la CECA y de los miembros de los organismos de las dos restantes comunidades, sobre todo, en relación con los gobiernos nacionales, no describiéndose de manera alguna, en los instrumentos que los regulan, como organizaciones supranacionales.

En opinión de Constantinesco (175), el carácter supranacional de una Comunidad ó de una organización no puede resultar más que de las estructuras y cualidades que permitan designarla de tal manera. En su opinión, la calidad de supranacional se ha de deducir de la estructura general de la entidad misma y en especial de la estructura y del poder supranacional de los órganos.

Sin embargo, en un afán de evitar equívocos, es necesario precisar que la dificultad radica en el hecho de que no hay criterio preciso y estricto que permita establecer el carácter supranacional de un órgano ó de una estructura, aunque, como veremos más adelante, los criterios para su establecimiento pueden ser varios y cada uno de ellos ofrecer matices diversos.

Básicamente, los elementos fundamentales de la supranacionalidad radican en la autonomía de los órganos e instituciones y en la naturaleza y alcance de las competencias que se les ha

atribuido. Estos elementos se presentan unidos a otras características, para formar un conjunto, que confiere al concepto una individualidad jurídica propia.

La autonomía inherente al concepto de supranacionalidad puede observarse en muchos planos. Todo proceso de integración está dotado de fines propios, distintos de los fines de cada uno de los Estados miembros, no obstante que sean éstos los que determinen dichos fines y objetivos en el Tratado que da origen al proceso. Para la realización de los mismos, los procesos contarán con procedimientos y medios que también le son propios. Esta autonomía de los fines y objetivos de la integración, así como la de los procedimientos y medios con que cuenta, es obvia desde el momento en que sus órganos e instituciones están llamadas a actuar en un plano y ámbito distinto del de los Estados miembros, en un espacio regional amplio, que supone técnicas diferentes, mecanismos especiales y metas comunes a todos los Estados participantes; precisamente, lo que se persigue mediante la integración es aquello que cada Estado por sí solo está incapacitado de lograr. Como esta autonomía en referencia, no es exclusiva de la concepción supranacional, puesto que toda organización internacional persigue fines propios, sólo adquiere valor cuando se combina con los demás criterios caracterizantes de la supranacionalidad (176).

La supranacionalidad tiene su más importante expresión en la naturaleza y alcance de las competencias normativas de las instituciones y órganos que forman parte del programa de integración, a las que deben unirse, en forma coordinada, las necesarias competencias supranacionales en los campos jurisdiccionales.



nales, ejecutivo y administrativo.

Permanentemente, a través de la iniciativa en la actividad de cada uno de los órganos comunitarios se hará presente - el criterio regional y comunitario de cada uno de los Estados integrados. Todo órgano intergubernamental y específicamente - los que se constituyan con poderes supranacionales, deberán - siempre tener en consideración este factor.

Los distintos órganos que participan en un proceso de integración jurídico-económica, deberán tener siempre en cuenta las posiciones y criterios básicos de los respectivos gobiernos nacionales y han de procurar siempre establecer un denominador común de intereses, mediante la proposición de soluciones, que mirando a los intereses esenciales de la región, satisfagan en la medida de lo posible los intereses nacionales. De esta manera, el equilibrio de intereses podrá ser recíproco y completo: los órganos gubernamentales e intergubernamentales estarán obligados a tener en consideración la iniciativa de los órganos supranacionales y éstos, a su vez, estarán obligados, por la fuerza de la realidad, a tener en cuenta los criterios nacionales. No podría ser de otra manera desde el momento en que los intereses nacionales y los intereses comunitarios son convergentes en un proceso de integración. No deberá entenderse nunca, que la - iniciativa del órgano supranacional es el fruto de una transacción ó compromiso entre los criterios gubernamentales, como ocurre en las organizaciones internacionales de tipo tradicional. En la iniciativa de un órgano supranacional prevalece el interés regional y sólo procura dar satisfacción a los intereses nacionales en la medida posible, esto es, en la medida en que ello

es compatible con el interés esencial y supremo de la región.

También, las iniciativas supranacionales no sólo deberán estar dotadas de un gran poder político y de una gran fuerza moral, sino que muy especialmente, de obligatoriedad jurídica precisa.

En lo que respecta al sistema de votación, existen también, interesantes y dinámicos mecanismos en el ejercicio de las competencias supranacionales. El órgano propiamente supranacional, y ésto lo aconseja la lógica de una rápida y justa solución, debe votar, exclusivamente, ó generalmente, por mayoría simple, ya que esto evitará siempre, que un simple disidente impida, mediante la imposición de criterios interesados y egoístas, la adopción de decisiones de indudable beneficio comunitario. La vigencia de este criterio respecto de las votaciones, reemplaza a la unanimidad como sistema general de votación.

En una competencia normativa supranacional, la primera característica esencial, es que los órganos que la ejercen pueden adoptar decisiones con fuerza jurídica obligatoria, aún para los Estados miembros que se hayan opuesto a su adopción. Conforme esto, los Estados quedan directa e inmediatamente obligados por la decisión de los órganos, cuya validez y obligatoriedad jurídica no requieren la aceptación, aprobación ó ratificación por parte de aquellos. Esta característica se da, tanto cuando la decisión es adoptada por mayoría simple, ó cuando eventualmente, por mayoría calificada.

La dinámica referida, no es exclusiva de las organizaciones supranacionales, ya que puede encontrarse en algunas organismos

zaciones intergubernamentales, lo cual significa que éstas últimas coinciden en la citada característica, careciendo por el contrario, de la autonomía y de otras peculiaridades de las competencias supranacionales.

Una característica más de las decisiones adoptadas en el ejercicio de las competencias supranacionales está, en obligar directamente, no ya solo a los Estados miembros, sino también, a sus nacionales, sean ellos personas físicas ó morales.

Es en este aspecto donde se produce la mayor diferenciación de la organización supranacional respecto de la organización internacional y es a lo que Constantinesco denomina "inmediatez" (177). En las organizaciones internacionales los nacionales no pueden ser obligados directamente por las decisiones del órgano internacional, sino sólo luego de que ellas hayan sido ratificadas o aprobadas por los Parlamentos o Congresos Estatales, momento en el cual, la norma o decisión internacional se transforma en Derecho interno; ésto último es entonces, lo que verdaderamente obliga a los nacionales. La competencia supranacional establece, normalmente, un vínculo directo y autónomo entre los órganos comunitarios y los particulares. De esta manera, los órganos comunitarios dictarían verdaderas leyes aplicables en todo el territorio de la comunidad, que obligarían no sólo a los Estados, sino a todas las personas físicas y jurídicas ó morales. Un ejemplo claro de lo anterior lo tenemos en el caso de las empresas del carbón y del acero, que están ambas bajo la jurisdicción de la CECA.

Muchos estudiosos de esta materia han argumentado, que la amplitud y dinamismo de éstas competencias supranacionales se -

ven disminuídas por el hecho de carecer los órganos comunitarios de un procedimiento ejecutivo propio. A este respecto es de señalar, que la norma o decisión supranacional también es autónoma en su ejecución, no obstante que para los estos efectos se utilice, normalmente, el aparato judicial y administrativo de cada Estado miembro. El aparato nacional interviene solo como un instrumento de ejecución, sólo para facilitar la acción comunitaria; esto es, la autoridad nacional se limita a -certificar que la norma en cuestión ha sido efectivamente dictada por los órganos comunitarios, pero sin pronunciarse sobre el fondo de la misma, llevándose luego a cabo la ejecución, como cualquier norma del derecho interno del Estado.

Es preciso aclarar, que ni la autonomía ni las competencias que puedan tener los órganos supranacionales, son absolutas o ilimitadas. De ser así, habría los naturales y peligrosos riesgos, que en definitiva podrían traducirse en un factor negativo en la marcha de los procesos de integración. Los límites a que se alude, tampoco podrían obedecer al capricho de los Estados ó a ciertas circunstancias transitorias, sino tan solo a la naturaleza misma de los órganos y al alcance con que han sido -concebidas sus competencias en los Tratados que establecen los procesos de integración. Sobre este particular, es oportuno señalar, que si bien los organismos supranacionales pueden desarrollar su acción prescindiendo de la voluntad de los Estados participantes, ésto ocurre en la etapa en que ya están en pleno funcionamiento, pues obviamente, que para su nacimiento se requirió del concurso de la voluntad colectiva y unánima de los Estados, los cuales, a través del Tratado constitutivo, proyectan parte

de su soberanía para poder lograr propósitos y soluciones comunes.

La actividad supranacional está controlada también, en virtud del principio de la división de los poderes, estableciéndose, en este plano, un adecuado equilibrio institucional. Este control representa, indudablemente, un resguardo contra los hipotéticos excesos o abusos de poder en que se pudiera incurrir. Así se conciben, los llamados: órgano ejecutivo, órgano jurisdiccional y órgano político parlamentario.

Los elementos sucintamente señalados como esenciales del concepto de la supranacionalidad, nos permiten hacer derivar - dos ventajas apreciables a simple vista. De una parte, en virtud de la autonomía, se evita el vicio que se observa en las organizaciones internacionales de carácter intergubernamental, en las cuales, las transacciones, los compromisos y las presiones determinan una acción no siempre constructiva y a la larga perjudicial para todos los asociados. De otra parte, que las soluciones propuestas, llevadas a cabo por la organización supranacional, - se han derivado de un exámen más perfecto de la realidad, puesto que la visión de los problemas, de sus causas y de sus consecuencias ha de ser necesariamente más amplia: una visión de conjunto, no limitada por barreras nacionales, lo que también permite que su objetividad y las metas de bien común tengan una mayor certeza y autenticidad.

#### B) Teorías acerca de la supranacionalidad.

Las teorías que se han formulado han provocado una extensa polémica jurídica, especialmente en el ámbito europeo.

Los primeros criterios que se dieron, no arrojan ninguna luz, sino que por el contrario, están rodeados de una considerable confusión. El Representante holandés Sr. Van der Goes, propuso a la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, en sus sesiones de 1949, que se examinara por el Comité Político la creación de una administración coordinada de las organizaciones técnicas y económicas, sobre una base supranacional y bajo el control permanente de los representantes del pueblo. En esta propuesta, se destacan aspectos de coordinación y además, expresamente, se aclaraba que se trataba de un poder supranacional - subordinado a todos los gobiernos. En la misma oportunidad, el representante inglés Harold Macmillan, propuso que el Comité de Ministros fuera una autoridad ejecutiva con poderes supranacionales, sin que ello afectara el problema de la soberanía. - Conforme esta propuesta y desde el momento en que el Comité de Ministros se compone de Ministros nacionales, y como consecuencia no es autónomo, el elemento supranacional, también en este caso, quedaría subordinado a los Gobiernos (178).

Las dos interpretaciones antes citadas, vinculan confunden la supranacionalidad a la mera cooperación intergubernamental tradicional, sin atribuirle caracteres propios.

Para De Visscher (179), la supranacionalidad tampoco tiene una fisonomía jurídica propia, sino que se trata, pura y simplemente, de una manifestación más del Derecho Internacional Público.

La clasificación de las Comunidades Europeas, principalmente la del Carbón y del Acero, entre las uniones internacionales, ha sido, esencialmente, sostenida en base a los argumentos

siguientes (179):

- a) En que la naturaleza del acto constitutivo es la de un tratado internacional;
- b) En la posibilidad de que este tratado sea revocado si así lo deciden la voluntad unánime de los Estados miembros, y,
- c) En la posibilidad de reformarlo solamente mediante el acuerdo de los Estados miembros.

El criterio anterior está referido a las Comunidades europeas y más concretamente, a la Comunidad Europea del Carbón y - del Acero (CECA); conforme él, estas Comunidades estarían subordinadas al Derecho Internacional y constituirían verdaderas uniones internacionales. De Visscher niega, además, todo alcance determinante a los principios siguientes:

- a) A la autonomía de la Comunidad y de sus órganos, sosteniendo que un poder autónomo de decisión en el terreno normativo, - administrativo ó jurisdiccional, no sería por si mismo extraño al ordenamiento jurídico internacional, a condición de que - las competencias comunitarias encontraran su fundamento jurídico en la voluntad común de los Estados miembros;
- b) Al sistema de las deliberaciones mayoritarias, sosteniendo que las decisiones adoptadas por los órganos comunitarios tendrían también en este caso, un carácter específicamente internacional, ya que encontrarían sus causas y sus límites en un instrumento internacional al cual estarían subordinadas las decisiones comunitarias;
- c) Al objeto del tratado y a sus particularidades esenciales - (transferencia de competencias y en especial, efecto inmediato de las disposiciones del tratado y de las medidas de la Al

ta Autoridad cuyos destinatarios directos son, no solo los Estados miembros, sino también algunos de sus sujetos de de recho, a saber, las empresas del carbón y del acero), soste niendo que un alcance análogo había sido atribuido ya a - otros organismos internacionales bien conocidos (tribunales arbitrales mixtos, Comisión Europea del Danubio, etc.), - aunque sin la amplitud y la intensidad previstas en el tra tado de la CECA.

Conforme al criterio antes comentado, las Comunidades - constituyen organizaciones regidas por el derecho internacio-  
nal, el cual varía conforme a su desarrollo.

Criterio similar al antes comentado tiene Schacht Ariste-  
guieta (180), para quien, bajo la preocupación del estado ac-  
tual de subdesarrollo de muchos países y la necesidad de su in corporación a todo un proceso de superación de esa situación, dentro del marco de unas constantes relaciones con los países desarrollados y desenvolviéndose dentro de la aplicación de to da una serie de fórmulas jurídicas, las empleadas hasta la fe-  
cha de una eficacia dudosa y muchas veces incompatibles con -  
los rígidos conceptos de soberanía, es posible afirmar lo si-  
guiente:

"Para lograr tan estimable condición demo s orientar nues tros mejores esfuerzos hacia la implantación absoluta, - tanto como fuere posible, en esta materia, de la suprana cionalidad, es decir de la institución mediante la cual los Estados, así como las Entidades y Organizaciones in-  
ternas y externas que hayan de intervenir en el complejo mecanismo de adaptación y aplicación de los nuevos pre-



ceptos del "Derecho de Desarrollo" estén conveniente y debidamente dotados de los suficientes poderes y facultades como para permitirles el dinamismo, al mismo tiempo que la agilidad hermenéutica y la jurisdicción suficientes para cumplir su objetivo sin el riesgo de caer en nacionalismo estéril ni en burocracia inoperante".

En opinión de Schacht Aristeguieta, sólo así se podrá robustecer lo denominado por él, preferentemente, "Derecho de Integración" ó "Derecho Comunitario", nutrido de las más idóneas estructuras orgánicas, de manera que los países sub-desarrollados puedan iniciar, bajo nuevos sistemas, el interesante proceso de su acelerada transformación en países desarrollados, no exclusivamente en su propio y particular provecho, sino también en beneficio de la comunidad internacional en general, puesto que ésta estará entonces constituida por Estados-Miembros suficientemente fuertes por sí mismos, y aptos para enfrentarse, en óptimas condiciones, a los tiempos futuros, tan pletóricos en satisfacciones y realizaciones, pero también, en exigentes esfuerzos.

Conforme la tesis de Schacht Aristeguieta, quien se refiere básicamente a los mecanismos que deben instituir los pueblos subdesarrollados, el derecho comunitario actual no pasa de ser una rama del derecho internacional. A este efecto, afirma (181):

"Es, desde luego, una nueva rama del derecho internacional, y que quizá podría especializarse tanto que hasta podría convertirse en el futuro en una técnica autónoma e independiente, relacionada con el Derecho Internacional, pero también con el Derecho Constitucional, con el Derecho Adminis

trativo y con otras disciplinas jurídicas más, así como también con Ciencias como las Económicas y las Sociales, en general. Es, indudablemente, un nuevo tipo de Derecho, con flexibilidad y versatilidad excepcionales, si es que realmente se aspira a que contribuya idóneamente a la conquista de una etapa de desarrollo por parte de los pueblos sub-desarrollados".

Para Schacht Aristeguieta, lo que él llama organización - supranacional, comprende elementos Supranacionales que refuerzan sus características de derecho y ente estatal y por lo tanto, lo aproximan bastante al derecho interno y conteniendo además numerosos elementos intergubernamentales, lo acercan bastante al derecho internacional y que es precisamente en esto, donde radica la esencial característica de las organizaciones supranacionales y además, que en esa amalgama especial y en su asimilación a las organizaciones clásicamente internacionales radica su novedad jurídica e institucional. Sostiene además, que en el concepto de - supranacionalidad es en donde, fundamentalmente, conviene fijar la última esencia de lo que él llama "nuevo derecho de desarrollo", pues aquél es la causa de éste, jurídicamente hablando y - en virtud de su existencia es que puede explicarse y realizarse todo el complejo mecanismo del derecho comunitario, así como sus principales características funcionales.

En el transcurso de los años se han manifestado una serie de intentos para precisar la noción de supranacionalidad. Unos - tratan de hacerlo aproximando la noción a la de estructuras federales. Otros tratan de encontrar su explicación por la transfe-rencia de parte de soberanía, de derechos de soberanía o por una

simple transferencia de competencias.

Dentro de los primeros destaca Catalano (182), quien rechaza la idea, refiriéndose concretamente a la Comunidad europea del Carbón y del Acero, de que ésta constituya o forme parte, del cuadro clásico de las uniones internacionales, lo cual obligaría a una clasificación análoga de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).

Catalano no se muestra partidario del uso del término "supranacional", y muchos menos, de otras expresiones como "supraindividual" o "metanacional", por considerar que dichos términos no contribuyen en modo alguno a la definición y comprensión de la estructura jurídica creada por los tratados que instituyeron las Comunidades Europeas.

Catalano insiste, en que al estudiar la naturaleza jurídica de las Comunidades europeas, no puede dejarse de tomar en consideración los elementos y factores políticos que intervinieron en la creación de los Tratados y el alcance, intención y finalidades que sus autores pretendieron conseguir. Sostiene, que tanto el tratado de la CECA como los de la CEE y la EURATOM fueron proyectados y concebidos con finalidades federalistas, - parciales por estar limitadas al solo proceso económico y como etapas de un ideal que no ha sido nunca abandonado: la creación de los Estados Unidos de Europa y con el propósito manifiesto - de transferir gradualmente a los organismos comunes las competencias propias de los Estados miembros, lo que explica, que se hubiere adoptado el término "supranacional" para indicar la absorción de las soberanías nacionales en una soberanía común.

Para refutar la tesis de los que califican a las Comunidades europeas entre las uniones internacionales, Catalano señala: que en cuanto al origen convencional de los tratados, también ese mismo carácter existe en los actos que instituyen los Estados federales y que a este respecto, si se quiere captar el efectivo alcance de las integraciones realizadas y las finalidades perseguidas, se debe tomar en cuenta que los tres tratados que instituyeron las Comunidades europeas deben ser considerados, no aisladamente, sino en conjunto, como elementos convergentes de una integración única, que tienden, mediante la abolición de todas las barreras entre los Estados miembros y la creación de una solidaridad nueva, a crear las premisas de una integración cada vez más amplia, que pueda culminar en una verdadera constitución federal. En cuanto a la objeción de que hay una posibilidad teórica de que los tratados que crean las Comunidades europeas puedan ser anulados por la voluntad unánime de los Estados miembros, lo que en su opinión es la objeción más seria, señala Catalano, - que tiene que hacerse referencia al alcance del ideario que inspiró la elaboración de los tratados. Sostiene (183), que si teóricamente los Estados miembros pueden destruir pura y simplemente lo que han construido, eso debe ser excluido en la práctica, puesto - que ciertas soluciones políticas son, por su naturaleza irreversibles, ya que por el hecho mismo de la entrada en vigor y aplicación de los tratados, los que instituyeron las Comunidades europeas, se crearon intereses y se plantearon problemas, sobre los - cuales no se puede volver atrás.

Respecto a la posibilidad de un retiro ó de una secesión, - señala Catalano, que nada es eterno en las organizaciones y estructu

turas humanas y que un retroceso respecto de la integración europea habría de asimilarse, en todo caso, a una revolución resultante de una acción ilícita, de un acontecimiento violento o de un consentimiento común y pacífico de los Estados miembros; además, que toda otra modificación o transformación del sistema instaurado debería ser clasificado entre los fenómenos fisiológicos y no patológicos, que a causa de la evolución histórica, provocan, no solo en los Estados federales, sino aún en los Estados de estructura unitaria, movimientos de centralización o descentralización que implican transferencias de competencias. Insiste además Catalano, en que otro de los elementos que distinguen claramente a las Comunidades europeas respecto de las uniones internacionales, es la amplitud de las competencias atribuidas a las primeras, la singular capacidad de derecho internacional que poseen y la forma en que ejercitan cierta esfera de las relaciones internacionales de los Estados miembros, ya que éstos, sin lugar a dudas, se han despojado de una parte de su propia competencia para atribuirla a una u otra de las Comunidades. Finalmente, Catalano sostiene a este respecto, que lo que más distingue a las Comunidades europeas de todas las uniones de Estados realizadas hasta el presente, son las reglas relativas al funcionamiento de las unas y de las otras; que en las uniones internacionales el obstáculo fundamental a la adopción de soluciones objetivas lo constituye, no sólo el derecho de veto, sino también, y sobre todo, el hecho de que toda decisión es el resultado de una relación de fuerzas y de influencias que frecuentemente está muy lejos tanto de una aplicación correcta de las prescripciones del instrumento constitutivo, como de un

examen imparcial de los problemas a resolver; que en las Comunidades europeas, como Comunidades de Derecho, los Estados miembros, sus ciudadanos y los organismos comunitarios, están obligados a respetar en la forma más rigurosa las prescripciones de los tratados y las medidas normativas, administrativas y jurisdiccionales adoptadas por las instituciones competentes y que - un sistema complejo de garantías políticas y jurisdiccionales, directas e indirectas, asegura el cumplimiento de las obligaciones y la protección de los derechos dentro del ámbito de un sistema que no duda en someter a los Estados miembros a los actos comunitarios. Afirma Catalano, que para tratar de definir la naturaleza jurídica de las Comunidades europeas conviene proceder por aproximación y, si bien es cierto, que no se les puede comparar con uniones internacionales y tampoco con Estados federales, la estructura de las mismas se asemeja más a las de tipo federal que a las de uniones internacionales (184); que los tratados que las instituyeron trascienden el ámbito del orden jurídico internacional, sin escapar enteramente a él, puesto que su estudio es indispensable también dentro del ámbito del derecho internacional, aunque no fuese más que para ahondar en las diferencias sustanciales respecto de cualquier otro instrumento internacional. Para Catalano, lo expuesto anteriormente, justifica el nacimiento de un Derecho nuevo, que distinguiéndose del derecho internacional clásico, debe examinársele y estudiarse autónomamente.

Otra teoría, cuyo sostenedor es Heraud (185), refiriéndose también a las Comunidades europeas, señala que es un caso de deralismo funcional, en el cual la unificación se realiza por eta

pas progresivas, limitándose a los sectores psicológicamente maduros en los cuales la eficacia se combina con facilidades técnicas particulares, lográndose así, un federalismo parcial y limitado a ciertas funciones.

Una singular teoría, sostenida por Benvenuti (186), es la del Estado Soberano Corporativo, elaborada a propósito de la naturaleza jurídica de la CECA. Este autor, después de hacer notar que no puede definirse a la CECA con nociones tradicionales sin falsear sus esenciales características, trata de superar los límites de los esquemas jurídicos usuales afirmando, que el elemento territorial no es necesario para la existencia de una entidad estatal soberana; hace referencia al sistema británico, en el cual la soberanía se divide en elementos que solo aparentemente serían territoriales, pero que en realidad tendrían el carácter de "corporación". Reconoce en la Comunidad del Carbón y del Acero un "Estado Soberano Corporativo", que en vez del territorio, tendría como elemento constitutivo una actividad económica con la importancia política que en los Estados nacionales se atribuye a los territorios. Conforme esta teoría, los Estados miembros participarían en la CECA, no como entidades soberanas, sino como pueblos de la Comunidad; la ausencia de territorio y el carácter parcial de la CECA explicarían las diferencias existentes entre la estructura de ella y la de los Estados modernos.

Catalano (187), comentando a Benvenuti, señala que la tesis del mismo no es convincente y que está destinada a quedar aislada. Además, que no podría discutirse que en la CECA, al igual que en las demás Comunidades europeas, no falta una base

territorial, ya que en los tratados que instituyeron dichas Comunidades se tuvo el cuidado de fijar los límites de aplicación territorial de los mismos y de definir el ámbito territorial de las competencias atribuidas a los órganos comunitarios, ya que sólo ciertos poderes, y no ya la totalidad de los poderes soberanos de los Estados miembros, han sido transferidos a las Comunidades. Señala asimismo Catalano, que es inexacto que los Estados miembros participen en la Comunidad del Carbón y del Acero no como Estados Soberanos, sino como "pueblos de la comunidad", ya que tal afirmación es desmentida por el hecho mismo de la participación directa ó indirecta de los Estados miembros en los órganos comunitarios.

Tanto la teoría de Heraud, como la de Benvenuti, rechazan la fisonomía jurídica propia de la supranacionalidad.

Constantinesco (188), con un enfoque diferente y característico sobre el tema que estudiamos, señala, que si el "quid novi" de las Comunidades europeas no se explica por la noción de la supranacionalidad aún menos se explica por la idea de federación parcial, a la vez inexacta y excesiva. Inexacta porque los elementos federales no tienen más que una existencia precaria en tanto no estén dotados de un poder de coacción federal. Reconoce que es cierto que las Comunidades europeas contienen elementos federales, pero que debe reconocerse que en las mismas los elementos intergubernamentales e internacionales pesan, en la hora actual, mucho más en la balanza de sus estructuras. Señala asimismo, que es excesivo porque la idea de una federación, incluso parcial, crea una imagen estatal que excede con mucho de la realidad de las Comunidades europeas, ya que éstas no tienen es-



estructura estatal, ni desde el punto de vista territorial, ni -  
sicológico, ni político ó incluso jurídico y que además, aunque  
muy integradas, no pasan de ser solamente organizaciones regio-  
nales de tipo avanzado. Al respecto de la noción de supranacio-  
nalidad, Constantinesco (189), se permite señalar, que la misma  
es una forma de organización internacional que engloba a vari s  
Estados, que tiene fines y medios propios y que goza de cierta  
autonomía con relación a los Estados miembros, especialmente en  
lo que se refiere a la persecución de sus fines, a la formación  
de la voluntad de sus órganos, y al derecho de dictar normas ju-  
rídicas directamente obligatorias, no sólo para los Estados -  
miembros, sino también para los nacionales de éstos; que la su-  
pranacionalidad supone un orden dotado de existencia propia y -  
provisto de una autonomía, limitada pero real, con relación a -  
los Estados miembros. En opinión de Constantinesco, la organiza-  
ción supranacional no puede ser estatal porque le falta la ma-  
yor parte de los atributos estatales, no pudiendo asimilársele  
además a un Estado, ni desde el punto de vista jurídico, ni po-  
lítico, sicológico, histórico, étnico ó territorial; además, -  
que la organización supranacional no puede ser asimiliada ni a  
un Estado ni a una Federación, aunque sea parcial y que si la -  
organización supranacional comprende elementos supranacionales

que refuerzan sus rasgos de derecho estatal y la acercan al derecho interno, no es menos verdad que contiene numerosos elementos intergubernamentales que la acercan al derecho internacional. Como conclusión de su pensamiento a este respecto, Constantinesco sostiene, que la característica esencial de las organizaciones supranacionales reside en esa amalgama de elementos estatales e internacionales, y que su similitud a las organizaciones internacionales clásicas depende de la dosis de éstos elementos en sus estructuras: si los elementos internacionales dominan, pertenecerá a aquellas; si están en equilibrio, será de carácter claramente supranacional.

Respecto del grupo de intentos doctrinales que tratan de explicar la supranacionalidad por la transferencia de soberanía o de derechos de soberanía o de simple transferencia de competencias, podemos hacer los comentarios y observaciones siguientes.

Se han formulado teorías que otorgan a la supranacionalidad un valor jurídico autónomo. Algunos autores que defienden esta posición consideran, que el elemento esencial de la supranacionalidad radica en la transferencia de soberanías o de derechos soberanos de los Estados -- miembros a los órganos comunitarios.

Comentando el criterio anterior Constantinesco<sup>(190)</sup> señala, que los autores que la sostienen no están de acuerdo sobre la cuestión -- de saber si los tratados han significado una limitación de soberanía, una transferencia de soberanía o una simple transferencia de competencias.

Al efecto, Mónaco<sup>(191)</sup>, refiriéndose a la CECA señala, que el -- tratado de la misma ha significado una simple transferencia de competencias, sin que ello implique una delegación o una limitación -- ----- esencial de la soberanía y que en virtud de esta transferen-

cia de competencias, se crea una superestructura supranacional, que constituye un órgano jurídico propio, situado a mitad del camino entre la estructura internacional y la estatal. Señala además el mismo Mónaco (192), que el orden de la Comunidad constituida por la CECA es distinto y autónomo, tanto en lo que respecta al orden internacional, como en lo que respecta al orden jurídico de los Estados miembros y que, "la Comunidad no ha absorbido las competencias de los estados miembros, sino que ha asumido el ejercicio de competencias nuevas".

Para otros autores dentro de los que destaca Ophüls<sup>(193)</sup>, lo que caracteriza a las Comunidades europeas es precisamente, el hecho de que los Estados miembros hayan transferido derechos de soberanía. Se sostiene, que las competencias de las tres Comunidades y especialmente la de la CEE, representa algo más que la simple suma de competencias estatales que los Estados miembros le han transferido. Dentro de esta misma corriente, se califica como absurda la conclusión según la cual la CEE no tiene sobre el territorio de cada Estado miembro más que las competencias transferidas, por lo que se sostiene, que es preferible hablar de una dotación original de las Comunidades con derechos soberanos.

Hallstein<sup>(194)</sup>, concretando sus comentarios a la Comunidad Económica Europea (CEE) señala, que la misma es una creación del Derecho, sino que ella crea también Derecho, haciendo nacer un orden jurídico autónomo, que es la fuente de un Derecho nuevo, de un Derecho

"secundario" en relación con el Tratado.

Dentro de los límites de la competencia que le ha sido transferida la Comunidad Económica Europea es, y esto coincide totalmente con el criterio de Hallstein, como lo ha corroborado la Corte de Justicia de las Comunidades<sup>(195)</sup>, una fuente autónoma de Derecho. La Corte de Justicia de las Comunidades Europeas<sup>(196)</sup> ha señalado, además:

"que a diferencia de los tratados internacionales corrientes, el Tratado de la CEE ha instituido un orden jurídico propio, que quedó integrado en los sistemas jurídicos de los Estados miembros a partir de la entrada en vigor del Tratado, imponiéndose a sus jurisdicciones".

Es de señalar, que el instrumento que preve el Tratado para instituir una verdadera legislación comunitaria, es el reglamento, constituyendo éstas las verdaderas leyes de la Comunidad Económica Europea y a pesar de que su denominación puede ser causa de confusión, nada tienen de común con las decisiones reglamentarias adoptadas en los ordenes nacionales. La directiva, la decisión y la recomendación, son por el contrario, formas del derecho comunitario que influyen indirectamente sobre los sistemas jurídicos nacionales (artículo 189 del Tratado de la CEE). La actividad legislativa de la Comunidad -- (la CEE) está confiada, a la vez, al Consejo y a la Comisión (artículos 145, 155, 162 del Tratado de la CEE).

Sostiene Hallstein<sup>(197)</sup>, que al crearse la Comunidad Económica Europea, los Estados miembros restringieron su soberanía y crearon una entidad jurídica autónoma que se impone a sus ciudadanos y a ellas mismas y que, así como no se puede concebir al derecho comu

unitario como un simple legajo de acuerdos internacionales, tampoco se le puede considerar, como una parte o un apéndice de los órdenes jurídicos nacionales de los Estados miembros; y que, como creación de derecho y como fuente de derecho, la Comunidad Económica que constituye la CEE, es propiamente un orden jurídico nuevo.

En opinión de Kunz<sup>(198)</sup>, la idea de los órganos supranacionales es nueva, porque trasciende la organización internacional, sin constituir un Estado Federal, basándose además, no en una mera restricción sino que en una transferencia de soberanía, la que se da en un sector particular. En opinión de Kunz, de aquí se desprende que los órganos supranacionales se ubiquen a mitad del camino entre los órganos internacionales y los federales.

Al respecto de los criterios últimamente comentados, Constantinos co<sup>(199)</sup> señala y sostiene, que la noción de soberanía está unida tradicionalmente a las estructuras estatales y que se concibe como la competencia de decisión política, a la vez suprema, original y libre y que - por el contrario, la libertad de decisión de la Comunidades Europeas, es solamente político-económica y no es ni suprema, ni totalmente original, ni completamente libre, no teniendo además estructura estatal.

También ha expuesto interesantes opiniones acerca de nuestro tema de estudio, el autor Resenstiel<sup>(200)</sup>, quien al efecto afirma:

"La creación de las comunidades llamadas supranacionales

obedeció a un propósito de orden exclusivamente político: impedir toda vuelta a la agresión de una cualquiera de las grandes potencias de la Europa continental, desencadenando un proceso de integración política progresiva de seis partícipes, cuyas primeras fases serían de carácter técnico, económico o militar. Carece de interés aïar el fenómeno jurídico de la supranacionalidad de su medio político ambiente, que es el de un conflicto de soberanías declinantes. El interés del estudio del principio de supranacionalidad se sigue de la variedad de sus incidencias políticas, jurídicas y sociales. La coordinación de las soberanías no puede ser considerada como la expresión perfecta de la supranacionalidad, sino que es incluso, su antítesis. Nadie podrá negar el ideal político que animaba a los padres de las pimeras comunidades supranacionales: hacer comunes todos los medios susceptibles de provocar el enfrentamiento de las soberanías, a fin de promover en más o menos largo término, una Federación Europea. El proceso supranacional consistiría, pues, en una especie de demostración de eficacia comunitaria, hecha por un número siempre creciente de instituciones, preocupadas de demostrar la incompatibilidad de poderes inter-estatales y de competencias acumuladas. Las construcciones supranacionales reposan sobre el esquema confederal de coordinación de soberanías nacionales que permanecen dueñas de las incidencias últimas de sus compromisos. Con relación al Estado nacional, lo supranacional no es más que una

forma de exceder, no es más que posibilidad de superación. Encontramos así la tensión política que forma cuerpo con el principio de supranacionalidad y le situa entre los campos de atracción de lo nacional y de lo federal. Dentro del contexto de las Comunidades se presente el principio de supranacionalidad como el vehículo jurídico de la integración política; intentaría allí conciliar temporalmente el abandono de ciertas competencias nacionales y los imperativos de la eficacia comunitaria, en tanto que en la federación, marco normal de la supranacionalidad, éstos dos términos se completan lógicamente. El principio de supranacionalidad no tiene sentido más que en relación con el fin hacia el que tiende; es una técnica de integración que, como toda técnica, no se aprecia más que mirando al resultado final que permite obtener; no es un resultado en si mismo. El estudio del principio de supranacionalidad exige que sea definida la noción misma de soberanía, de la que depende en último análisis de apreciación del poder político de las Comunidades supranacionales. Una competencia o un poder, aunque fuesen autónomos, no pueden en ningún caso ser considerados como supranacionales, o mejor superestatales. Afirmar que sea competencia o ese poder afecta a una materia o a un conjunto de materias esenciales a la soberanía del Estado concesionario, no cambia en nada el problema. El Estado unitario es soberano en tanto que se considere como tal, es decir, en tanto que no ha cesado de querer serlo o

de serlo realmente. En el plano político, la soberanía, en el sentido de una vocación del Estado para resolver con toda independencia los problemas que se le presentan, puede estar considerablemente atenuada sin que el poder, fragmento jurídico de la soberanía, haya sido transferido a una entidad estatal nueva, más apta para resolver las dificultades. Las comunidades supranacionales no son concebidas, para heredar el poder político de los Estados. Las Comunidades supranacionales no son más que prolongaciones funcionales debidas al ejercicio de las soberanías nacionales. No cabe hablar, a propósito de las Comunidades supranacionales, de transferencias o cesiones de soberanía. El poder o el Estado no están en condiciones de transferir o ceder una soberanía que se sitúa, no en un plano jurídico-político, sino en el plano estrictamente sociológico: el de las naciones y el de los ciudadanos que los componen. La noción de supranacionalidad ha nacido de la delegación de ciertas funciones y no, de una transferencia de soberanía del Estado al órgano supranacional. Lo supranacional roza las soberanías, sin englobarlas - porque es su emanación y no su heredero. Lo supranacional caracteriza una integración al nivel de la administración, sin implicar jamás una integración política. La supranacionalidad no es una categoría política sui generis, sino una administración sui generis; no es más que una visión nueva y horizontal de la administración"



Al adoptar el término "~~supra~~supranacionalidad", Pescatore<sup>(201)</sup>, lo emplea como un calificativo descriptivo, como un nombre dado a un determinado tipo de estructura interestatal, y no como un término de combate político. Pescatore señala además, que la confusión doctrinal en torno a este término no debe impedir la realización de esfuerzos tendientes a obtener una concepción a la vez pertinente y clara de él. Sobre este orden de ideas señala Pescatore, que la supranacionalidad es:

"una autonomía de poder y de acción colocada al servicio de intereses, o si se quiere, de objetivos comunes a varios Estados. El fundamenteo de la supranacionalidad es el reconocimiento por varios Estados de intereses - económicos, técnicos, militares, etc - que les son comunes; en otras palabras, el reconocimiento de lo que - trasciende a l interés puramente nacional, y de la fusión de éste con el interés de una comunidad humana más extensa. Pero a ese elemento material debe agregarse un elemento formal: el de la constitución de una autonomía de voluntad al servicio de los objetivos comunes. A su vez, esa utonomía no puede existir a menos que se llenen dos condiciones: la realidad de un poder (por ejemplo, un poder normativo, un poder de orientación política, un poder de administración, un poder de jurisdicción); y además, ese poder tiene que combinarse con una autonomía de acción".

Refiriéndose nuevamente a las Comunidades Europeas, señala Pescatore, que esa autonomía, aunque diste mucho de ser perfecta, comienza a manifestarse gracias a la estructura colectiva de las instituciones, gracias a la independencia institucional de algunas de ellas (Alta Autoridad, Comisiones, Parlamento, Corte de Justicia ), y gracias, por último, a la introducción de los procedimientos de resolución mayoritarios, que facilitan la formación de una voluntad común. Ante la idea de que la expresión de supranacionalidad describe un aspecto muy real y muy original de la empresa comunitaria, Pescatore recomienda cuidarse de las exageraciones, ya que si la supranacionalidad designa el reconocimiento de un interés común, la adopción de objetivos comunes, el esfuerzo por expresar una autonomía de estructura y una autonomía de acción, no significa, en modo alguno, la desaparición del interés nacional, ni la abolición de los objetivos nacionales, así como tampoco, la supresión de la voluntad y la autonomía nacionales; la realidad se concreta, en consecuencia, a una interacción en todos los niveles y en todas las fases del proceso comunitario entre el interés y la voluntad nacional, por una parte, y una voluntad autónoma, por otra, que sin ser extraña para los Estados miembros, esté al menos situada al servicio de finalidades reconocidas por todos como que trascienden las posibilidades de los Estados considerados individualmente.

La Comisión Jurídica del Consejo de Europa<sup>(202)</sup>, en un interesante dictamen que emitiera durante las reuniones que celebró el 18 de Febrero, 15 de Marzo y 26 de Abril de 1965, señala, refiriéndose a las Comunidades Euro-

peas, que la característica predominante de la construcción comunitaria es que, tanto en lo que se refiere a sus objetivos, como en lo que respecta a sus cometidos, no es un sistema internacional de tipo clásico; que al analizar el Derecho comunitario, y por consiguiente, al examinar las relaciones entre dicho derecho y el derecho nacional, los juristas no deben hacer caso omiso de las características de esa estructura en comparación con el Derecho internacional clásico; que en su origen se encuentra una voluntad y una finalidad de carácter político ligadas a la primacía del Derecho comunitario y las únicas soluciones adecuadas son las que permiten deducir consecuencias de esa originalidad para justificar la primacía. En otra parte del informe, se señala que no obstante considerar, que no existe suficiente justificación de la primacía del derecho comunitario, ni en el carácter particular de la estructura jurídica que dicho Derecho establece, ni en la voluntad y finalidad política que se hayan en su origen, por ello no deja de ser importante considerar el Derecho comunitario como un Derecho de índole particular, que establece un orden jurídico particular vigente en el marco de una comunidad de Estados, o por el contrario, como parte integrante del Derecho Internacional clásico ampliado. Para resolver el problema de ¿cuál es la índole del derecho formulado al aplicar dichas tratados, en especial el que emana de las instituciones comunitarias?, la Comisión Jurídica, es de la opinión que puede considerarse que ambos derechos constituyen una unidad que puede llamarse "transnacional", para distinguirlo del Derecho de gentes en general y conforme a lo cual, el Derecho formu-

lado por las instituciones comunitarias es la aplicación directa del Derecho de los tratados, e ipso facto, las dos categorías de normas devienen idénticas. Sigue afirmando la Comisión, que a diferencia de lo que sucede con los tratados internacionales ordinarios, los tratados europeos y en particular el tratado de la CEE, establece un orden jurídico propio integrado al sistema jurídico de los Estados miembros que se impone a sus jurisdicciones; que al establecer una Comunidad de dirección ilimitada, dotada de instituciones propias, con personalidad, con capacidad jurídica, con capacidad de representación internacional, y más particularmente, con poderes reales fundados en una limitación de las respectivas competencias o del traslado de poderes de los Estados a la Comunidad, éstos han restringido, en determinados sectores, sus derechos soberanos, creando así un cuerpo de leyes aplicable a sus ciudadanos y a ellos mismos; que la transferencia de los derechos y obligaciones que los Estados realizan en aras del orden jurídico comunitario entraña una limitación definitiva de sus respectivos derechos soberanos, contra la cual no podría prevalecer un acto unilateral posterior incompatible con el concepto de Comunidad. Se afirma, que sería imposible aplicar los Tratados, si para la ejecución de los reglamentos comunitarios fuera necesaria la intervención de los órganos constitucionales de los Estados miembros para insertar dichos reglamentos en los órdenes jurídicos nacionales. Afirma en definitiva la Comisión, que rechazar las tesis de la compenetración del derecho comunitario y el derecho inter-

no y la de la inserción directa o inmediata de uno con el otro, como consecuencia inevitable de la transferencia de competencia de los Estados miembros a las Comunidades equivale a desconocer el alcance de un principio fundamental de los Tratados, e impediría la ejecución de sus disposiciones esenciales. Se señala además, que la atribución de competencias a las Comunidades produjo una transferencia apreciable de los poderes de los órganos constitucionales internos a los órganos de la Comunidad, lo cual supone que el traslado afecte los sistemas jurídicos internos, porque supone la subordinación de los órganos constitucionales nacionales al sistema comunitario.

Van Reaalte<sup>(203)</sup> estima, que lo supranacional constituye una estructura nueva situada entre el derecho internacional y el derecho interno. Contra este criterio Rosenstiel<sup>(204)</sup> argumenta que no es razonable hablar de estructura nueva, sin que ésta responda a un derecho nuevo integrado en un orden nuevo.

Acerca del tema que estudiamos, Schuman<sup>(205)</sup> señala:

"Lo supranacional se sitúa a igual distancia entre el individualismo internacional, de una parte, que considera intangible la soberanía nacional y no acepta como limitación de la misma más que las obligaciones contractuales, ocasionales y revocables; y de otra parte, el federalismo de Estado que se subordina a un superestado, dotado de una soberanía territorial propia. La institución supranacional no posee las características de un Estado, pero detenta y ejerce ciertos poderes soberanos. Es independiente con relación a los gobiernos

nacionales, dentro de los límites del tratado y esta independencia es irrevocable como lo es el traspaso de competencias que le da vida. El tratado confía a la Comunidad una función propia y no la ejerce a título de "delegación" por cuenta de los Estados miembros".

Lagrange<sup>(206)</sup>, ex-Abogado General de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, refiriéndose a las mismas Comunidades europeas, admite la existencia de un "derecho comunitario". Afirma al efecto lo siguiente:

"Estimo que en este caso se trata del "orden jurídico autónomo" que surge del conjunto de reglas establecidas por los tratados para asegurar, por medios especialmente previstos, el logro del objeto que definen. Esta es, en efecto, como frecuentemente se ha hecho notar, la originalidad de los Tratados europeos, pues no se limitan como la mayoría de los tratados internacionales, a contemplar los compromisos recíprocos destinados a reglar sobre un punto u otro las relaciones entre los Estados contratantes, sin ocuparse, al menos en su parte esencial, de la competencia de los órganos estatales sino que "integran" un sector completo de la vida nacional, estableciendo reglas a las que este sector está sometido y transfiriendo las instituciones, dotadas al efecto de poderes propios, las competencias necesarias para aplicar estas reglas, realizándose la articulación de poderes dentro del marco de una Comunidad, sujeto de derecho internacional distinto de los Estados

que la componen, y según un ordenamiento inspirado en los principios generales de derecho público en las que se basan los Estados individuales".

En opinión de Lagrange, el orden jurídico que regula la vida de las Comunidades se manifiesta lo suficientemente completo y autónomo como para que se pueda hablar de un derecho comunitario. Respecto al problema de las "transferencias de competencia" emergentes de los tratados en sectores completos, a favor de las Comunidades y sus instituciones, que operan dentro del marco de un orden jurídico propio, señala, que no se trata de una primacía en el sentido de una "jerarquía" entre un derecho comunitario preeminente y derechos nacionales subordinados, sino de una "sustitución" del derecho nacional por el derecho propio de la Comunidad en los campos en que la transferencia de competencias ~~se~~ ha realizado, ya que en esos campos es la regla de derecho comunitario la que se aplica, de lo cual resulta, una división entre las competencias transformadas en comunitarias y las que permanecen nacionales. En cuanto a la forma en que realiza la transferencia de competencias señala Lagrange, que en cada Tratado se realiza una Transferencia "general" a favor de la Comunidad, que abarca la totalidad del sector cuya responsabilidad se confía en adelante a dichas Comunidades, y que por otra parte, se realiza a favor de las instituciones comunitarias, una "atribución de competencias" para permitirles el logro de la misión que corresponde a la Comunidad. Lagrange concluye destacando la

evidente analogía de todo el conjunto de relaciones y situaciones antes expuestas, con las correspondientes a un sistema federal.

Ramón Tamames<sup>(207)</sup> opina que el Tratado de Roma, de creación de la Comunidad Económica Europea, contiene un mecanismo de creación de decisiones verdaderamente supranacionales y al hacerse la pregunta ¿en donde reside ese carácter supranacional?, señala que lo que verdaderamente origina tal carácter es el procedimiento por medio del cual se generan las decisiones comunitarias; que la regla de la unanimidad en muchos organismos intergubernamentales no resta absolutamente ninguna soberanía a sus miembros, ya que cada uno conservaba pleno su derecho a disponer sobre su propia conducta. Afirma Tamames, que solo se puede decir que el carácter supranacional comienza a existir cuando en un tratado se acuerda que serán aceptadas y cumplidas, por todos los países signatarios, todas las decisiones que se adopten por medio de una cierta mayoría (simple o calificada), en el seno de una instituciones comunitarias concretas.

Aunque no lo exprese con la claridad deseada, en su concepción sobre la presencia de un carácter supranacional en la CEE, Tamames destaca no solo lo referente a la forma en que se toman las decisiones (por mayorías simples o calificadas), y su obligatoriedad, sino el hecho de la existencia y actuación de instituciones comunitarias autónomas (con funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, más o menos extensas) y con competencias propias, dirigidas no solo a los Estados miembros, sino a sus nacionales. El hecho de que en una organización internacional se reúnan todos o



solamente algunos de los datos destacados, es lo que nos permitirá, en un momentodado, pensar que tenemos frente a nosotros a una organización con poderes verdaderamente supranacionales, amplios o menos amplios, o que nos encontramos ante una organización internacional clásica o tradicional, en la que pueden no solo no existir órganos verdaderamente independientes de sus miembros, sino las competencias de los mismos puedan ser limitadas o sus decisiones tener que tomarlas por unanimidad.

La supranacionalidad, y estamos con ello de acuerdo con varias de las opiniones expuestas, que comentan básicamente las Comunidades Europeas, participa indudablemente de los caracteres del derecho internacional y del derecho interno. Las diferencias que median entre el tipo de organización supranacional y la organización internacional tradicional son normalmente claras, tanto en lo que concierne a su autonomía, como a sus competencias, tanto en lo que respecta a su estructura, como a su funcionamiento. Sin embargo, si cada uno de los elementos y características de la supranacionalidad, a las que más adelante haremos referencia, se examina aisladamente, es indudable que también podrá encontrarse, de una manera y otra, en alguna organización internacional de tipo clásico, presente o pasada, pues la experiencia y los ensayos en este campo han sido innumerables y variadas. Una organización supranacional debe conservar una individualidad propia frente a la organización supranacional clásica, tanto en el plano jurídico, como en el político, y desde luego en un plano jurídico-político combinado, que por lo demás, es inherente al concepto de supranacionali-

dad. Dentro de este orden de ideas, es de destacar también, que igual individualidad puede y debe observar frente al tipo de organización y estructura federal.

Respecto a los efectos que quiera atribuírsele a la supranacionalidad dependerán, indudablemente, del ángulo en que se la mire. A este respecto podrá hablarse de delegación de soberanía, de transferencia de soberanía, de transferencia de competencias o de atribución de competencias; podrá hacerse referencia a un derecho internacional avanzado, a un derecho cuasifederal. Nada de esto afecta la individualidad jurídica del fenómeno supranacional, ya que si lo que se busca es la vigencia de instituciones que representen un criterio regional, que proporcionen una solución colectiva a través de su autonomía y de sus competencias propias, que den garantías de legalidad por medio de controles jurisdiccionales y políticos y que permitan e impulsen la marcha dinámica de la integración, para consolidar una economía regional y asegurar un desarrollo económico efectivo, ello ha tenido sus logros en las Comunidades Europeas y también ha operado eficazmente en el ámbito del Mercado Común Centroamericano y de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, aunque en éstos últimos con logros evidente más modestos. Sin embargo, hay que reconocer, siguiendo el criterio de Schacht Aristeguieta<sup>(208)</sup>, que el Derecho de Integración está menos desarrollado, menos evolucionado en Hispanoamérica que en Europa, pues / corresponde evidentemente a una realidad menos lograda.

No obstante que se señala que la característica fundamental de la autonomía de las Comunidades Europeas consiste en confiar la ejecución de las disposiciones de los tratados a los órganos comunitarios, que obran independientemente de los Estados miembros y asimismo, en sustraer ciertas competencias de los Estados miembros y confiarlas a la competencia de los órganos comunitarios y en atribuir a éstos poderes normativos, así como un poder de ejecución, de control jurídico y político, no es menos verdad, que estas cualidades se encuentran también en otras organizaciones internacionales.

En realidad, la estructura supranacional de una organización internacional, no puede ser más que el resultado de una compilación de varios criterios, los más importantes de los cuales residen indudablemente en la autonomía de los fines y medios de la organización respectiva, así como también, en la autonomía más o menos amplia, pero real, de sus órganos y competencias. Un examen de estos criterios dentro del cuadro de las Comunidades europeas y, asimismo, dentro de las estructuras comunitarias centroamericanas, nos podrá permitir conseguir algunos puntos de apoyo para poder concluir después, sí en las mismas, real y no teóricamente, existen elementos de supranacionalidad y en que medida.

El criterio que trata de fundar la supranacionalidad en el hecho de que los órganos comunitarios puedan tomar decisiones obligatorias en el territorio de los Estados miembros, sin que se precise de la autorización,

de un voto positivo o de la ratificación por parte de los Estados miembros, tampoco nos puede conducir, por si solo, a criterios seguros de calificación, que esté fuera de duda.

Para determinar con cierta exactitud la noción de supranacionalidad, es preciso analizar los diversos elementos y la forma, aspectos y esferas en las que se manifiesta la autonomía de los órganos comunitarios en relación a los Estados miembros. Estos aspectos pueden ser los siguientes:

- a) El que se refiere al fin de la organización comunitaria;
- b) el que se refiere a la independencia de los órganos, Este ofrece los subaspectos siguientes:
  - 1) el que se refiere a la integración de los órganos;
  - 2) el que se refiere a la independencia de trabajo, lo que a su vez puede presentar los aspectos de ser independiente de los Gobiernos de los Estados miembros o dependiente de sus instrucciones;
  - 3) el modo de voto, unánime o mayoritario, de los órganos que toman las decisiones.
- c) Las esferas en las que aplican las decisiones.
- d) La relación directa existente entre los órganos comunitarios y los nacionales de los Estados miembros, a efecto de establecer si pueden ser obligados por normas comunitarias, directamente y sin intervención por parte de los Estados miembros.
- e) La autonomía financiera.

Autonomía de los fines. A este efecto, las Comunidades Europeas poseen

finés propios, distintos de los de los Estados miembros, los que deben ser alcanzados por procedimientos propios y perseguidos aún si uno de los Estados miembros tienen intereses contrarios o divergentes. Lo que es necesario subrayar, es la autonomía de estos fines respecto a los Estados miembros o incluso respecto a algunos de sus intereses. El artículo 20. del Tratado que establece la Comunidad Económica Europea (CEE) hace referencia en forma concreta a sus fines y el artículo 30. hace referencia a las acciones que la realización de los mismos supone.

Partiendo siempre de que el Tratado General de Integración es el Tratado básico de la organización comunitaria centroamericana, referiremos nuestros comentarios especialmente a él y solo en casos especiales y excepcionales nos referiremos a otros instrumentos. Al efecto, el artículo I del Tratado General de Integración hace claro referencia a los fines. Este precepto, literalmente dice:

"Los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado común que deberá quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Tratado. Se comprometen además a constituir una unión aduanera entre sus territorios".

Lo que es necesario subrayar es la autonomía de estos fines respecto a los Estados miembros o incluso, respecto a algunos de sus intereses.

No obstante, este elemento por si solo podría no ser suficiente para justificar la autonomía de las organizaciones comunitarias y sobre todo,

para justificar su distinción de otras organizaciones internacionales de tipo clásico, que también persiguen fines propios.

Autonomía institucional. Otra característica también esencial, es la de confiarse la persecución de los fines, o sea la ejecución y la aplicación de las disposiciones del Tratado o Tratados, a órganos comunes, independientes de los Gobiernos que obran según las normas del tratado y no directamente según las instrucciones de los Gobiernos. Esto se manifiesta en tres aspectos:

- 1) La independencia en la integración de los órganos.
- 2) Modo de trabajo independiente de los Gobiernos de los Estados miembros
- 3) Modo de voto, unánime o mayoritario, de los órganos que toman las decisiones.

Haremos primero una ligera referencia a las Comunidades Europeas. Al efecto, los dos órganos dinámicos de las Comunidades Europeas difieren el uno del otro, por su origen, composición, estructura y naturaleza. El Consejo, compuesto de representantes de los Estados miembros (que obran según las instrucciones de su Gobierno), es un órgano comunitario, que tiene un carácter integubernamental. Este carácter nace del hecho de que sus miembros están ligados, en sus acciones y decisiones, por las instrucciones que reciban de los Gobiernos que representan. Su carácter comunitario nace del hecho de que constituye un órgano de las Comunidades, que como entidad global, puede tomar decisiones que pueden comprometerla, pero que también, pueden ser diferentes de

las instrucciones dadas por los Gobiernos a sus representantes.

La Comisión, constituye verdaderamente el órgano supranacional por excelencia. Sus miembros son independientes y deben quedar fuera de toda influencia e instrucción por parte de sus Gobiernos.

Lo que es verdaderamente nuevo e importante es que los órganos, estructural y funcionalmente independientes y diferentes, trabajan, cooperan y toman decisiones.

El Consejo, órgano de decisión, es el órgano principal, porque sus decisiones pueden comprometer a la Comunidad o establecer reglas jurídicas directamente aplicables (reglamentos). Las decisiones son válidas desde el momento en que el voto ha sido emitido conforme las disposiciones del tratado, es decir, conforme el procedimiento de voto previsto en él; además, son directa e inmediatamente válidas, sin necesidad de ser aprobadas o ratificadas por los Gobiernos o por otros órganos constitucionales, tales como los Congresos o Parlamentos. Este último carácter reduce su aspecto de órgano intergubernamental, - así como la importancia misma de las instrucciones gubernamentales. Conforme esto, si uno de sus miembros vota contra las instrucciones dadas por su Gobierno, ello no afecta en modo alguno la validez de la decisión del Consejo en cuanto órgano comunitario.

El Consejo se distingue además de los órganos intergubernamentales, por el modo de trabajo y sobre todo por el hecho de que en realidad esté ligado de cierta manera por las proposiciones de la Co-

misión, sobre las cuales debe deliberar en la mayor parte de los casos previstos por el Tratado. Este modo de trabajo, reduce también el carácter intergubernamental del Consejo y permite que la acción del órgano supranacional se inserte a través de las proposiciones, en la voluntad del mismo.

Sin embargo, el Consejo conserva su carácter intergubernamental y difiere de la Comisión en lo que respecta al nombramiento y a la independencia de sus miembros en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo no es más que un colegio de representantes de los Gobiernos, donde cada Gobierno delega uno de sus miembros. Esto no difiere en nada de los nombramientos en el seno de los organismos intergubernamentales, donde los miembros son nombrados únicamente por la voluntad del Gobierno y no hacen más que exponer el punto de vista de un Gobierno.

En las Comisiones, sus miembros son nombrados en razón a su competencia general y ofrecen plena garantía de independencia (artículo 157, 158 de la CEE; 127 de la EURATOM; y 10 de la CECA). Por este procedimiento, se quiso asegurar, un poco más, la independencia de los órganos respectivamente.

El papel del Consejo, en cuanto al aspecto de la independencia de sus miembros, consiste precisamente en dar a conocer y defender el punto de vista nacional, según las instrucciones que reciben de sus Gobiernos.

En el caso de la Comisión, en cuanto a este aspecto de la indepen



dencia de sus miembros, se trata de asegurar la independencia no solo desde el punto de vista personal, sino también, la independencia institucional y funcional, en el sentido de que ni la Comisión, ni ninguno de sus miembros, puedan solicitar o aceptar instrucciones de sus Gobiernos o de otro órgano comunitario u organismos internacional. Sus miembros no pueden ser destituidos por los Gobiernos durante sus funciones, no estando sometidos a éstos en ninguna de las acciones comprendidas en el ejercicio de sus funciones, no pudiendo además los Estados, poner en juego su responsabilidad.

En cuanto al modo de trabajo de ambos órganos podemos señalar que efectivamente no trabajan siguiendo el principio de exclusividad y separación, sino en la forma de colaboración y cooperación. Aún siendo el Consejo órgano de decisión, solo puede decidir, en la mayoría de los casos, cuando la Comisión le haya presentado una proposición, ya que solo ésta tiene el derecho de iniciativa. A través de este monopolio de iniciativa la acción supranacional de la Comisión se inserta en la decisión tomada por el órgano de carácter intergubernamental, el Consejo. La proposición tiene un valor jurídico efectivo por cuanto que el Consejo no puede variar o modificarlas a su gusto, sino únicamente aceptarlas o rechazarlas, salvo que lo haga por un voto unánime.

En cuanto a modo de voto podemos hacer las observaciones siguientes.

El Consejo, conoce varias formas. La regla fundamental es la de la

mayoría, simple o calificada, según los casos. Cuando la decisión tiene importancia capital o importantes consecuencias políticas, tiene que decidir según el principio de la unanimidad.

Estas formas de voto tienen importancia por cuanto que todo Estado miembro puede formar parte de la minoría y verse obligado por una decisión de la mayoría y ésto contra su voluntad y contra las instrucciones dadas a sus representantes. Esto constituye uno de los elementos más importantes de la supranacionalidad en las Comunidades europeas.

A los aspectos comentados hacen referencia los artículos 157, 158, 149 del Tratado de la CEE; 127 del Tratado de la EURATOM; 10 del Tratado de la CECA.

A continuación, haremos también un ligero comentario acerca de la regulación especial que sobre estos aspectos existe en el Derecho comunitario centroamericano.

Dentro de la organización comunitaria centroamericana, también se confía la persecución de los fines, es decir, la ejecución y aplicación de las disposiciones que sobre fines contiene el Tratado o Tratados, a órganos comunes, que gozan de cierta independencia respecto de los Gobiernos y que obran, básicamente, según las normas del Tratado y no siempre según las instrucciones de los Gobiernos. Esto se evidencia, aún que pueda no tener el rasgo tan caracterizado como en las Comunidades Europeas, con un simple análisis de las disposiciones que regulan las formas de votación generales a que hace referencia el ar-

título XXI del Tratado General, lo que deja a salvo los casos en que normas especiales imponen una forma de votación determinada.

Los dos órganos dinámicos y de decisión que son el Consejo Ejecutivo y el Consejo Económico Centroamericano, no difieren tanto el uno del otro en cuanto a su origen, composición, estructura y naturaleza.

El Consejo Económico Centroamericano está compuesto, según el artículo XX del Tratado General, por los Ministros de Economía de cada uno de las partes contratantes. Sin lugar a dudas, es un órgano comunitario, pero de carácter intergubernamental, en el que sus integrantes actúan según las especialidades instrucciones elaboradas en el seno de los respectivos Gobiernos, los que en definitiva orientan a sus acciones y decisiones. Este órgano tiene un carácter comunitario porque su existencia se debe precisamente a que fué establecido dentro del contexto institucional comunitario, pudiendo tomar decisiones, conforme al párrafo final del artículo XXI del Tratado General, que pueden comprometer a la entidad global y que pueden ser tomadas por unanimidad, lo que afirmaría un carácter intergubernamental, pero también, puede tomarlas por mayoría, en cuyo caso, las decisiones serán diferentes a algunas de las instrucciones dadas por los Gobiernos o en otras palabras, no representarán la simple suma de las instrucciones oportunamente formuladas por los Gobiernos.

El Consejo Ejecutivo tiene también un carácter intergubernamental, por estar constituido, al tenor del párrafo lo del artículo XXI del Tratado General, por funcionarios designados por cada uno de los Estados

contratantes. En atención a las especiales funciones que le están encomendadas el Consejo Ejecutivo está llamado a ser, básicamente, el órgano de decisión, aunque en la realidad su actuación no se oriente hacia el cumplimiento de ese objetivo, tal como antes lo comentáramos. Las decisiones de este órgano, tal como se establece en el párrafo 2o del citado artículo XXI del Tratado General, deben de ser tomadas por mayoría del total de sus miembros y en tales circunstancias, son efectivamente válidas porque son adoptadas conforme los términos del Tratado General. Ya - hemos hecho referencia y más adelante lo mencionaremos nuevamente, a que tales decisiones tienen la característica de que son directa e inmediatamente válidas sin necesidad de una aprobación previa de los Gobiernos o de otros órganos nacionales. Esta nota reduce su carácter intergubernamental y asimismo, le quita eficacia a las instrucciones mismas que los funcionarios lleven al seno del Consejo. También en las votaciones de este órgano se pone en clara evidencia, que la decisión que se tome puede estar en contradicción con las instrucciones que hayan llevado algunos de sus miembros, lo que no afecta en absoluto su validez y obligatoriedad. Debiéndose tomar las decisiones por mayoría, siempre podrá considerarse la posibilidad de la existencia de una minoría, en cuyo caso los Estados que se vean afectados pueden verse obligados por la decisión de aquellos y esto no solo en contra de su voluntad, sino en contra de las propias instrucciones que llevaban los funcionarios delegados, lo que pone de manifiesto el mayor grado de decisión amplia que tiene este Consejo.

Dentro de la estructura comunitaria centroamericana esto caracteriza también uno de los elementos más importantes de la supranacionalidad en las mismas.

Es evidente que entre el Consejo Ejecutivo y el Consejo Económico Centroamericano existe un clima evidente de colaboración y cooperación amplia y más aún, hay tendencia a destacar en el Consejo Económico, una condición de organismo revisor y de examen de los trabajos realizados por el Consejo Ejecutivo y como Órgano encargado de una Segunda Instancia en el caso de solución de conflictos, lo que determina, en la práctica actual, un cierto predominio y superioridad del Consejo Económico sobre el Ejecutivo.

Al enfocar esta problemática referida al ámbito centroamericano, omitimos repetir algunas notas caracterizantes de lo intergubernamental referidos al hacer el enfoque sobre las Comunidades Europeas y que estimamos que tienen clara aplicación al caso centroamericano, siempre y cuando los elementos de base tengan la identidad que es necesaria.

Otro elemento por el cual se expresa la supranacionalidad en las Comunidades Europeas, es la inmediatez de algunas disposiciones normativas que las regulan, tomadas por los Órganos comunitarios, en relación a los ciudadanos de los Estados miembros.

Al efecto, en las organizaciones internacionales de tipo clásico, los ciudadanos de los Estados miembros no pueden quedar obligados directamente por una regla o por una disposición de los mismos, ya que en -

principio una regla internacional de esta naturaleza, solo es obligatoria para ellos después de haber sido aceptada, ratificada y transformada por los órganos competentes del Estado respectivo. Sin embargo, han habido casos, en el curso de la historia reciente y en relación a solo algunas organizaciones, y siempre raros, de inmediatez en algunas decisiones.

La supranacionalidad de los órganos comunitarios, cuya autonomía alcanza el poder de imponer a los ciudadanos de los Estados miembros normas jurídicas obligatorias y directamente aplicables, se expresa en las Comunidades Europeas de manera franca.

En el marco de la organización comunitaria centroamericana, también se da este fenómeno de inmediatez. Ya hemos puesto de manifiesto algunas situaciones y al tratar los temas siguientes se podrán de manifiesto nuevos casos.

En concreto, también dentro del fenómeno comunitario centroamericanos, se presentan situaciones en que como consecuencia de disposiciones de los órganos comunitarios devienen mandamientos obligatorios y directamente aplicables a los ciudadanos de los Estados miembros. Al analizar una serie de acuerdos o resoluciones actualmente vigentes y consecuentemente obligatorias, encontraremos evidenciada esta característica.

Finalmente, haremos referencia a la nota de la autonomía financiera.

La autonomía financiera constituye otro elemento que en las Comuni-

dades Europeas expresa la idea de supranacionalidad. Al tratar este aspecto debe hacerse la distinción siguiente:

- 1) Autonomía de los ingresos financieros;
- 2) Libertad de los órganos para disponer o hacer uso del dinero que les corresponde.

En efecto, no es lo mismo que una organización internacional viva de las contribuciones que los Estados miembros le ponen a disposición o que posea sus propios ingresos financieros.

En el área de las Comunidades Europeas, la única que posee ingresos propios es la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA). La Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), no tienen autonomía financiera. No obstante, dentro de esta situación, los órganos pueden disponer libremente de los fondos.

El Programa de integración económica centroamericana, que constituye en gran parte el programa comunitario de la región, carece también de autonomía financiera, lo que está claramente evidenciado por lo dispuestos en el párrafo 2o del artículo XXIII del Tratado General, en el que se configura la situación de que el sostenimiento económico del proceso se realiza en base a la contribución de los Estados miembros, todo canalizado a través de ese otro órgano que es la Secretaría Permanente. Dentro de esta configuración, es indudable que los órganos si pueden disponer libremente de los fondos que se les asigne.

Nuestro criterio final a este respecto es estimar que la autonomía

financiera de una organización o de un programa cualquiera, significa siempre un reforzamiento de su autonomía respecto de los Estados miembros, y en consecuencia, una instauración o afianzamiento de su carácter supranacional.

Tales nos parecen ser, respecto a sus elementos esenciales, los principales criterios que juntos constituyen lo que podría denominarse la supranacionalidad, tanto en las Comunidades Europeas, como en el área de aplicación del Derecho Comunitario Centroamericano.

La supranacionalidad supone un orden dotado de existencia propia y provisto de una autonomía, limitada pero real, con relación a los Estados miembros.

Desde esta perspectiva puede entenderse por supranacionalidad, en principio, una forma de organización que engloba a varios Estados, que tiene fines y medios propios y que goza de cierta autonomía con relación a los Estados miembros, especialmente en lo que se refiere a la persecución de sus fines, a la formación de la voluntad de sus órganos y al derecho de dictar normas jurídicas directamente obligatorias, no solo para los estados miembros, sino también para los nacionales de éstos.

Suele sostenerse, que la característica esencial de las organizaciones supranacionales reside precisamente en esa peculiar amalgama de elementos estatales e internacionales a que hemos hecho referencia en otra parte de este trabajo. En este orden de ideas, su asimilación a las organizaciones internacionales clásicas depende de la dosis de estos elementos en sus es-



estructuras. En consecuencia, si los elementos internacionales dominan pertenecerá a aquellas y si los dos elementos están en equilibrio, será de carácter clara o marcadamente supranacional.

Esta ambivalencia de las organizaciones supranacionales permiten dejar en suspenso el problema de la soberanía, hasta que los elementos que suelen caracterizar la supranacionalidad sean de tal amplitud, que deriven la transformación del orden supranacional en una entidad con un tipo de estructura federal.

De momento, no es posible afirmar que la organización comunitaria centroamericana tenga un carácter soberano y tal afirmación no es posible referirla, ni siquiera, a las Comunidades Europeas.

Lo que de momento es importante subrayar es que las organizaciones supranacionales se dirigen o imponen obligaciones a los Estados miembros o directamente a sus nacionales, sin salirse del marco de los instrumentos legales que las regulan. Estas obligaciones son establecidas por los órganos comunitarios de modo independiente y pueden ser tomadas incluso contra la voluntad de uno y otro Estado miembro.

Además, lo propio de los tiempos nuevos es poner en duda, no solo el valor de las soluciones tradicionales, sino también lo bien fundado de la existencia de nociones, principios y fórmulas antiguas. La frontera entre lo interno y lo externo es atacada cada vez con más fuerza. La introversión estatal, cuya expresión suprema era la soberanía, es sustituida progresivamente por la extroversión, cuya expresión es la solida-

ridad internacional. También, la línea de demarcación entre la política y la economía, tan clara antes, es cada vez más incierta, ya que todas las medidas económicas importantes implican una decisión y una concepción política necesariamente. La soberanía, durante largo tiempo ideal supremo de todo Estado ha perdido vigencia, ya que de hecho está cada vez más desprovista de la realidad y del contenido absoluto que se le atribuía. En este orden de hechos, la soberanía unilateral está siendo cada vez más reemplazada por la solidaridad multilateral, que no destruye los Estados sino que los proyecta en unidades más vastas.

Finalmente, de cara al desarrollo histórico, lo supranacional debe concebirse como una fórmula transitoria que trata de sobrepasar o superar la situación estática, en la que el Derecho Internacional clásico basado en la soberanía, ha encerrado a los Estados nacionales. Constituye en suma, una nueva concepción del orden y de la organización política, que reemplazando a la estricta soberanía nacional por la solidaridad regional, abre la posibilidad a los Estados de adaptarse a la dinámica integracionista de la historia. La supranacionalidad, como algo casi indiscutible, es una de las condiciones básicas para la constitución de un derecho verdaderamente dinámico de la integración y del desarrollo y para la definitiva estructuración de un verdadero derecho comunitario<sup>(209)</sup>.

C) La supranacionalidad y la soberanía de los Estados.

¿Puede conciliarse la soberanía nacional con la supranacionalidad?.

Esta interrogante la evoca indudablemente el concepto tradicional de la

soberanía, que con caracteres más o menos destacados se evidencia en la estructura constitucional de los Estados centroamericanos. Según esta concepción, el conjunto de atributos y derechos que ella supone no es incompatible, en relación al ejercicio de esos mismos derechos y atributos, con las limitaciones sustanciales que implica la supranacionalidad.

A este respecto es preciso señalar, que históricamente la doctrina nunca ha sido concebida en términos verdaderamente absolutos, sino que por el contrario, siempre se ha admitido la posibilidad de la existencia de deberes y limitaciones que tienen su origen en los Tratados y en las otras fuentes del Derecho Internacional.

No obstante la aclaración anterior, la idea tradicional de soberanía ofrece una resistencia decidida a aceptar el concepto de supranacionalidad, porque parte del punto de que los atributos y derechos que la caracterizan son inherentes e inalienables al Estado y que, como consecuencia, cualquier limitación a esos mismos derechos y atributos debía contar con el consentimiento del Estado, todo lo cual suponía que cualquier limitación era producto de una acción autolimitativa y de una obligación así mismo del Estado, y como consecuencia, la conducción de sus asuntos internos y externos podía realizarla libre de ingerencias o restricciones externas que no hubiese consentido. Todo lo anterior hacía en cierta forma gravitar el Derecho Internacional alrededor del interés nacional de los Estados.

No obstante que el concepto tradicional de la soberanía ha quedado arraigado en fuertes sectores de la doctrina, la aparición del interés "general" ha determinado un cambio de mentalidad y orientación, no solo en sectores doctrinales, sino en la mente de políticos y estadistas, quienes han llegado a comprender que el aislamiento es perjudicial, que el desarrollo exige colaboración y supone interdependencia y que el dominio de la técnica y de la ciencia, solo puede lograrse bajo un programa de asistencia mutua entre los Estados, con intereses, problemas (económicos, sociales, culturales y políticos) y características análogas . Plantear hacia realidades estos nuevos principios suponía un cambio en la concepción que se tenía de la soberanía y una aceptación de la existencia de un interés "general" o con otro enfoque, de un "interés comunitario", lo cual se dio, básica y decididamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, conflagración que determinó una apertura mundial del pensamiento y de la política de los Gobiernos hacia necesidades humanas no atendidas, y problemas colectivos que en la mayor parte de los casos, deliberadamente, se habían mantenido ocultos. Bajo la inspiración de estas nuevas corrientes, surgieron la gran mayoría de las Organizaciones internacionales actuales y una diversidad de procesos de integración regionales, que comenzaron a ejercer, en muchos campos, un cierto control y dirección de las relaciones internas y externas de los Estados miembros, - con pretensión de hacerlo aún respecto a la conducta de los que no son miembros<sup>(210)</sup>. Surgió dentro de este clima, la "cooperación internacio-

nal", cuya utilización permitió fuertes corrientes de autolimitación de la soberanía nacional y aún, la atribución a órganos internacionales, en relación a materias específicas y conforme a procedimientos determinados, de competencias supranacionales. Esta atribución configura en si misma una autolimitación, pero lo que si ya no reviste este carácter, una vez realizada la atribución, es el ejercicio subsiguiente de las competencias atribuidas, en cuyo caso, la validez de las actuaciones de los órganos ya no requiere del consentimiento previo de los Estados que consintieron la atribución de competencias,

Planteado en éstos términos, nos situamos frente al problema de la atribución de competencias supranacionales, el que guarda relación estrecha con los procesos de integración, fenómenos caracterizados por la protección singular de que goza el interés comunitario. Sin embargo, no en todos los procesos de integración se manifiesta la supranacionalidad con el mismo grado de intensidad, ni aplicado a las mismas esferas de validez. Si puede afirmarse, que no existe proceso de integración que no esté dotado de un mínimo de supranacionalidad. Esto supone la inadmisibilidad, dentro de un proceso de integración, de órganos, que en mayor o menor grado, puedan obligar a los Estados o afectar con sus decisiones las relaciones internas o externas de éstos. Esto referido al área centroamericana y en contraste con la idea de soberanía reconocida en las mismas Constituciones centroamericanas, plantea el problema que se ha denominado la "cuestión constitucional" del Mercado Común Centroamericano,

al que haremos repetidas referencias en el curso de este trabajo.

Los diversos procesos de integración que se han organizado, han variado en su extensión y profundidad, en relación a los campos y materias que afectan y competencias que se atribuyen, según la mayor o menor compatibilidad de las mismas con relación a las ideas que sobre la soberanía han estado vigentes en las Constituciones y en la mente de los hombre que tienen a su cargo el Gobierno en los Estados interesados. Una apertura en este último aspecto ha permitido en algunas oportunidades la suscripción de los Tratados correspondientes y la puesta en marcha de procesos de integración, sin recurrir previamente a la reforma de los preceptos constitucionales afectados, tal como sucedió en el caso de la creación de la Comunidad Económica Europea y Mercado Común Centroamericano, procesos respecto a los cuales se ha señalado muchas veces, que su creación requería una previa reforma constitucional.

= Superadas las ideas que caracterizan la concepción tradicional de la soberanía, lo que es posible, en algunos casos, a través de amplios criterios interpretativos, y en otros, requerirá una reforma constitucional, lo único que puede quedar para conciliar definitivamente el nuevo concepto de la soberanía con la supranacionalidad, es que los órganos nacionales de los Estados interesados, procedan a interpretar y aplicar las normas del derecho comunitario con la razonable liberalidad y amplitud de criterio, a efecto, de que siempre queden asegurados los derechos fundamentales de los Estados interesados, las instituciones comunita-

rias y personas individuales y jurídicas implicadas en el proceso de integración.

## CAPITULO II

### COMPETENCIAS DE LOS ORGANOS COMUNITARIOS

#### CENTROAMERICANOS.

##### A) Planteamiento del problema: la competencia supranacional.

El tratamiento de este tema supone que previamente se aclare lo relativo al empleo del término "competencia". La lectura de los instrumentos constitutivos de gran parte de los organismos internacionales, no siempre nos permite conocer con certeza el número y extensión de las facultades o poderes que se atribuyen a los órganos para el cumplimiento de sus funciones, o en su caso, que funciones se le encomienda. El problema que pudiera surgir para establecer una distinción entre los términos "función" y "facultad" podría superarse, si al término "competencia" se le entiende y emplea en el sentido de una atribución que reúne tanto una determinada función, como la facultad que se confiere para su desempeño. La distinción tiene gran importancia, no solo a los efectos de la interpretación y aplicación de las disposiciones que regulan las competencias "delegadas" o "expresas", sino en el caso de determinar cuando los órganos pueden ejercitar las competencias a las que se les ha llamado "implícitas" e "inherentes".

Debido al estado actual del desarrollo del Derecho Internacional, se han ampliado considerablemente las funciones de las organizaciones internacionales, quedando actualmente muy pocos campos de la actividad humana



que escapan al fenómeno de una gradual y progresiva "internacionalización".

Los casos claros y evidentes, tales como: las decisiones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, ya que en el artículo 25 de la Carta se establece que los miembros "convienen en aceptar y cumplir"; las decisiones que toma el Organo de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que en su artículo 20 señala:

"Las decisiones que exijan la aplicación de las medidas mencionadas en el artículo 80 serán obligatorias para todos los Estados asignatorios del presente Tratado que lo hayan ratificado, con la sola excepción de que ningún Estado estará obligado a emplear la fuerza sin su consentimiento"

Finalmente, las competencias normativas o reglamentarias que ejercen ciertos organismos especializados, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los casos antes mencionados ponen de manifiesto la presencia en la organización internacional de competencias que permiten a los respectivos órganos tomar decisiones de validez erga omnes, que afectan a las relaciones exteriores y asuntos internos de los Estados miembros.

El estudio del alcance y naturaleza de las competencias antes indicadas, hace destacar el interesante y discutido aspecto de la "supranacionalidad", que tanta controversia y discusión doctrinal ha suscitado, no solo dentro de las Comunidades Europeas, sino aún en el Mercado Común Centroamericano.

El mejor encuadramiento del tema exige que se hagan algunas observaciones en relación a la forma en que funcionan las competencias supranacionales dentro de las Comunidades Europeas. Estas tienen en común con las organizaciones internacionales mencionadas anteriormente, la fuerza jurídicamente obligatoria de las decisiones de los órganos y, además que los actos no siempre requieren el voto unánime de los miembros. Los Tratados de París y de Roma consignan claramente la supranacionalidad orgánica y obligatoriedad de las "decisiones" y recomendaciones de la CECA y de los "reglamentos", "directivas" y "decisiones" de la CEE y del EURATOM. La diferencia que se destaca es la siguiente: la composición de los órganos dotados de la competencia supranacional. En los órganos dotados de la competencia supranacional. En los organismos supranacionales, son siempre órganos intergubernamentales; en las Comunidades europeas, o bien comparten esa competencia órganos de esta clase con las instituciones técnicas y autónomas, o bien, pueden ejercerlas por si solas éstas últimas. Otra diferencia destacada consiste en que las normas emanadas de algunos de los actos comunitarios obligan, directamente, no solo a los Estados miembros, sino también a sus nacionales, ya sean éstos personas físicas o morales; en tal sentido, el Estado miembro no tiene intervención alguna en cuanto a la elaboración y eficacia de la norma en cuestión. En líneas anteriores ya hicimos referencia amplia a estos aspectos, razón por la cual a ellos nos remitimos y nos abstenemos de hacer nuevos comentarios. Para los efectos del tema que estudiamos, nos basta con mencionar

nuevamente los aspectos que tienen relación con el mismo.

En relación a las Comunidades europeas se ha señalado que el hecho de carecer de mecanismos propios para la ejecución de las normas y decisiones que dicten sus órganos no afectan, en lo esencial, a la supranacionalidad de la competencia, ya que se estima que la norma o decisión supranacional continúa autónoma en su proceso de ejecución, no obstante que para esos efectos se utilice el aparato administrativo y judicial de los Estados miembros. Al efecto, los órganos internos de los Estados miembros intervienen solo a título de vehículos o instrumentos de ejecución; únicamente para hacer viable y facilitar la acción comunitaria, sin que haya ingerencia de su parte en los aspectos sustantivos de tal acción.

Antes de ahondar más en el estudio del tema, es preciso que queden claras dos cuestiones: la primera, que la condición de supranacional no debe referirse al órgano mismo, sino que a la competencia o competencias del órgano en que concurra esa condición; la segunda, que no se debe tratar de encontrar, ni de formular, una definición global, absoluta, que sirva para caracterizar todas las situaciones de supranacionalidad, por se la misma una tarea no solo difícil sino arriesgada. Cuando se ha definido la supranacionalidad como la capacidad de un órgano internacional o comunitario para tomar decisiones directamente obligatorias para los particulares; cuando se ha pensado que esa condición depende más bien de la naturaleza del órgano; cuando se ha llegado a distinguir entre la suprana-

cionalidad "comunitaria", que sería la de un órgano técnico, y la supranacionalidad "intergubernamental", que sería la de los órganos políticos o representativos; cuando se ha distinguido por razón del sistema de votación, para reducir las decisiones supranacionales a las adoptadas conforme a la regla de la mayoría; o cuando se ha preferido mirar el carácter de la decisión o acto del órgano (normativo o reglamentario, ejecutivo o judicial), solo se ha logrado destacar determinados aspectos o elementos, de interés práctico o teórico, pero incapaces por si solos, de dar una imagen que permita caracterizar todas las expresiones posibles de la competencia supranacional.

Es oportuno dejar sentado desde ya que, a nuestro juicio, la esencia misma de la competencia supranacional radica en la aptitud o capacidad de un órgano, internacional o comunitario, para decidir erga omnes respecto a relaciones exteriores o asuntos internos de los Estados miembros<sup>(211)</sup>

En relación a nuestro tema de estudio, Germán Zea Hernández<sup>(212)</sup>, Ex-Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, al inaugurar en Febrero de 1967, una Mesa Redonda en la que se tratarían problemas relacionados con la integración de América Latina, expresó:

"En efecto, de la sociedad o comunidad internacional de carácter relacional, o sea de relaciones exclusivamente entre Estados, con el dogma de la soberanía absoluta y el voluntarismo estatal en la creación de las normas del Derecho Internacional, hemos pasado hoy a la comunidad internacional de carácter institucional,

y a la creación de nuevos sujetos del Derecho Internacional, como son los organismos internacionales, en favor de los cuales los Estados han cedido parte fundamental de sus atribuciones soberanas, dotándolos de un nuevo Derecho propio, o sea el Derecho Administrativo Internacional; de personalidad jurídica internacional y de un marco de competencias exclusivas, que se traducen en el nuevo concepto jurídico de "supranacionalidad".

Sobre éstos aspectos, dentro del ámbito de la doctrina centroamericana, se han expresado diversas opiniones; una que niega la existencias de órganos con competencias supranacionales; y otros, que en cierta forma, admiten la realidad de tales competencias.

Villagrán Kramer<sup>(213)</sup>, dentro de una posición crítica y bastante esceptica, parece no reconocer actuaciones de tipo supranacional dentro del Programa de integración centroamericana, partiendo de la idea de una débil y deficiente estructura institucional. Al efecto afirma, que en la etapa en que se encuentra no es sino una red de tratados, acuerdos y convenios, con órganos específicos que tienen funciones entrecentroamericanas que cumplir; que no es aún una personal jurídica internacional con derechos y deberes definidos en los instrumentos de su creación; que no es tampoco una ficción jurídica, sino básicamente un "cuadro jurídico" ajustado a las necesidades del momento; que el Mercado Común para su operatividad requiere de un encuadramiento legal, ya que se está en presencia de nuevas formas jurídicas que reclaman, si no una definición legal, cuando menos su institucionalización, sobre la base de un trata-

do internacional del tipo de un Tratado - Ley o de un Tratado-Contrato.

Concretamente afirma Villagrán Kramer:

"El Tratado General de integración Económica Centroamericana que sienta las bases para el Mercado Comun Centroamericano, puede, facilmente, comprenderse dentro de esta nueva tipología de tratados, si la misma se acepta como válida.

Pero el resto de instrumentos, alguno de ellos anteriores al tratado y cuya vigencia se reafirma, y otros posteriores que lo complementan o implementan, requieren de una fórmula jurídica - propia para sí configurar una teoría jurídica en torno al Mercado Común. Nosotros nos circunscribimos por ahora, a señalar la existencia de un nuevo "cuadro jurídico" que reclama una denominación legal para el Mercado Común Centroamericano, instituciones comunes-independientes de los Gobiernos y de toda otra autoridad de los Estados miembros-, para que puedan asumir integralmente la competencia de las instituciones de este nuevo cuadro jurídico"

Villagrán Kramer afirma, además, que la institucionalización requiere de gran flexibilidad para ajustarse y acomodarse a los cambios que se general con el proceso integracionista y que de consiguiente, la institucionalización debe contribuir a asegurar el dinamismo de los sectores y grupos que le impulsan el proceso, y no a frenarlos con estructura rígidas.

En otro estudio, Villagran Kramer (214) insiste, en el fenómeno de

la descentralización en la aplicación del derecho de la integración centroamericana y reafirma el hecho de la descentralización, como característica propia del Derecho Internacional. Lo anterior, sumado a la consideración de que son varios los métodos para crear el derecho de la integración centroamericana, le permite afirmar, que el esquema de integración centroamericana se encuentra:

"en una posición intermedia entre la creación del derecho exclusivamente por los Estados y que corresponde a estructuras interestatales y la creación del derecho por órganos con funciones "supraestatales" o supranacionales".

Mario Quiñonez Amézquita<sup>(215)</sup>, señala que en centroamérica únicamente existe una zona de libre comercio y atisbos de un mercado común, pero no una integración económica, porque no existen organismos supranacionales cuyas decisiones sean obligatorias para todos los Estados miembros - y porque tampoco hay una política monetaria, fiscal y social única; afirma además, que el Tratado General de Integración adolece del defecto consistente en que el Consejo Económico Centroamericano no posee un régimen que le permita facultades más amplias y le faciliten la realización de sus fines, y que si bien es cierto, que la creación de organismos supranacionales es una etapa para la cual las Constituciones de los países centroamericanos no están preparadas, también lo es, que se hace necesario la creación de organismos supranacionales. En cuanto al problema de la integración centroamericana, afirma que es indudable y necesario,

sin quiere impulsase no solo la integración económica, sino también la integración política, la creación de organismos supranacionales con poder normativo y decisorio creados como sujetos de Derecho Internacional, con capacidad para cumplir acuerdos con terceros países, y con poder de afectación tanto sobre los Estados miembros de la comunidad, como sobre los ciudadanos de éstos, las empresas y organismos comunitarios. Señala además Quiñonez Amezcuita, que la creación de organismos supranacionales es una necesidad como el único medio de afianzar el derecho comunitario y de realizar la integración económica y política.

Refiriéndose a las atribuciones de los órganos creados por el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, Jorge Mario García Laguardia señala<sup>(216)</sup>, que los tres órganos y especialmente el Consejo Ejecutivo, tienen facultades legislativa y que el conjunto de reglamentos y resoluciones que a la fecha han dictado constituyen un verdadero derecho nuevo y adjetivo, de aplicación general, que ha sido el instrumento jurídico de carácter dinámico que ha impulsado la integración y que aún cuando esos órganos no tienen carácter supranacional, en la práctica tienen una naturaleza sui-générís muy semejante. Sostiene además García Laguardia, que se debe propiciar la creación y funcionamiento de órganos supranacionales, depositarios de la dinámica del proceso de integración, con facultades adecuadas.

Brewer Carias<sup>(217)</sup>, Profesor de la Universidad Central de Venezuela, sitúa a la creación de órganos supranacionales como presupuesto para una



efectiva integración latinoamericana, considerando además, que los órganos y leyes nacionales. En su opinión, la creación de órganos supranacionales, o para ser más precisos, con competencias supranacionales, requiere la necesidad de que dichos órganos puedan dictar normas con eficacia erga omnes, que no requieran, para su validez y eficacia, de posteriores ratificaciones por parte de los Parlamentos. Afirma, además, que todo proceso de integración se basa sobre el principio de igualdad de los Estados miembros, y que tal principio no se realiza, si se exige, para la validez de una disposición comunitaria, de una posterior ratificación por parte de los Parlamentos o Congresos.

Quizás lo más importante, en relación a la competencia supranacional, es apreciar, con un criterio objetivo, las semejanzas, diferencias y características que dicha competencia presenta en el ámbito del Mercado Común Centroamericano, ya que desde un punto de vista teórico, o desde un punto de vista práctico, es difícil concebir un Mercado Común sin un mínimo de supranacionalidad. Además, si la creación de un mercado común, dotado de un marco institucional que incluya algunas competencias supranacionales, es o no incompatible con el ordenamiento jurídico-constitucional de los estados no puede ser dilucidada su cabalidad mientras no se examine, a la luz de la naturaleza y alcance de las distintas competencias que se atribuyen a los órganos del Mercado Común y en relación con los asuntos o materias que caen dentro de la esfera de validez de cada uno.

El Departamento de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (218) sostiene decididamente la tesis de que los órganos del

Mercado Común Centroamericano, están dotados de competencias supranacionales. Al efecto, en un memorándum que elaborara, señala:

"En el ámbito centroamericano se advierte una marcada analogía con la experiencia europea. Sin presentar el mismo grado de desarrollo institucional, el Mercado Común Centroamericano cuenta con órganos capaces de tomar decisiones cuya validez "erga omnes" está expresamente reconocida. Por ejemplo, conforme al artículo XIV del Protocolo de San José al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, la decisión del Consejo Ejecutivo, mediante la cual se aplican sanciones (multas) a los particulares, "tendrá validez para los cinco países miembros" mientras no sea suspendida por el propio Consejo. Esta disposición revela que este grupo de países latinoamericanos considerará constitucionalmente factible la adopción de medidas punitivas por órganos de integración y que éstas medidas sean directamente aplicables a los particulares. Las funciones y facultades legislativas o reglamentarias conferidas por otros instrumentos centroamericanos a órganos de este proceso de integración, corrobora la factibilidad constitucional de dotar a dichos órganos de competencias supranacionales".

B) Las competencias "implícitas" y las competencias "inherentes".

En las organizaciones internacionales tradicionales y en las organizaciones comunitarias, al igual que en una federación, se plantea el pro-

blema del ejercicio de las llamadas competencias "implícitas" o "inherentes". Los organismos indicados, en el desempeño de sus funciones, no siempre han podido circunscribirse al ejercicio de las facultades que específica y expresamente se les han concedido, y a veces, el problema consiste en que se trata de competencias no concebidas ni delimitadas en términos suficientemente explícitos y claros.

Refiriéndonos a la práctica que se ha tenido en las organizaciones internacionales, podemos señalar lo siguiente: en las Naciones Unidas, sus órganos, han ejercitado las competencias bajo comentario, con frecuencia y en diversos campos de actividad, pudiéndose señalar como ejemplo, no solo la constante reestructuración interna de que es objeto, por resoluciones de sus principales órganos, especialmente la Asamblea General, sin que ello suponga que las medidas adoptadas estén previstas expresamente en la Carta; también, en lo referente a la capacidad contractual, la cual (artículos 43 y 63 de la Carta), está prevista únicamente respecto a determinados convenios, lo cual no ha impedido que sus órganos hayan concluido innumerables instrumentos sobre otras materias, a veces, por órganos a los cuales no se les ha conferido esa especial capacidad<sup>(219)</sup>.

La Organización de las Naciones Unidas ha ejercido también el derecho de legación, activo y pasivo, a través del envío de representaciones temporales o permanentes, que pueden calificarse como "diplomáticas", y ha realizado además, reclamos ante Gobiernos por daños y perjuicios ocasionados a sus funcionarios o a personas a su servicio. Estos y otros actos

más, por no estar expresamente previstos en la Carta, han provocado objeciones de parte de algunos miembros, no obstante lo cual, los referidos actos han surtido el mismo efecto de los que se realizan al amparo de las competencias "delegadas", y en cierta forma, han merecido la aceptación y aquiescencia de los que originalmente se opusieron a ellos.

En el campo de la organización regional americana, también se han dado ejemplos singulares: la actuación del Organo de Consulta que menciona tanto el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca<sup>(220)</sup>, como el que establece la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos<sup>(221)</sup>, no solo ha extendido el ámbito de aplicación de la legítima defensa, a formas de agresión taxativamente excluidas en el artículo 30 del Tratado de Asistencia Reciproca, y tomando medidas no incluidas entre las que expresamente enumera el artículo 8 del mismo Tratado, sino que ha "delegado" en el antiguo Consejo de la Organización de Estados Americanos y actualmente Consejo Permanente de la misma, como tal y no para cuando actúe provisionalmente como Organo de Consulta, facultades cuyo ejercicio se le ha reservado. También, el antiguo Consejo de la Organización (actual Consejo Permanente de la misma) y el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), en el campo de la cooperación económica y social, han tomado decisiones que conforme al artículo 33 de la Carta (actualmente asamblea General), "órgano supremo" de la Organización, a quien le está atribuida la específica función de determinar la estructura y funciones de los órganos de la Organización.

También la Corte Internacional de Justicia, en diversas opiniones consultivas emitidas, han reconocido la legitimidad del ejercicio de competencias no expresamente atribuidas, a los órganos de una organización internacional<sup>(222)</sup>. En todas las ocasiones en que la Corte ha emitido opinión a este respecto, ha señalado la circunstancia que justifica el ejercicio de tales facultades, la que es, la necesidad de actuar con miras al cumplimiento de las funciones o responsabilidades que se le han confiado a la Organización internacional.

Existe discusión doctrinal acerca de si, en puridad jurídica, cabe hacer una distinción entre las competencias "implícitas" y las "inherentes". Como criterio general, tal vez cabe hacer la distinción siguiente: considerar a las primeras como competencias, que por analogía con las "delegadas", han de considerarse como competencias que se contemplaron al dotar a la organización internacional de un marco institucional adecuado; y a las segundas, como competencias que no fueron entonces ni siquiera contempladas, sino que aparecen después, por decisión de los propios órganos que las ejercen, por considerarlas éstos como esenciales al cumplimiento de sus responsabilidades ante la organización<sup>(223)</sup>.

A través del ejercicio de la competencia supranacional y de las "implícitas" e "inherentes", se revela una tendencia a ampliar y fortalecer la capacidad del poder ejecutivo para obligar internacionalmente al Estado. Sin embargo, existen otras expresiones de esta misma tendencia. Una de ellas, está representada por la conclusión de los llamados instrumen-

tos "en forma simplificada ", que consisten en convenios o acuerdos, bilaterales o multilaterales, que entran en vigor por el mero acto de la firma o, en su caso, por un simple acto de aprobación ulterior del Poder Ejecutivo, Ya en otra parte de este mismo trabajo hicimos referencia detallada a este tipo de instrumentos.

La diferencia entre los acuerdos o instrumentos en forma simplificada y los tratados sujetos a la aprobación legislativa, a menudo es más de forma que de fondo; además, los asuntos objeto de dichos instrumentos, no siempre corresponden a aquellas limitadas materias, respecto de las cuales no se suscitan dudas acerca de la capacidad del Poder Ejecutivo para obligar internacionalmente al Estado, sin la intervención del Poder Legislativo<sup>(224)</sup>.

Una segunda expresión, es la que recogió la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en el proyecto de Tratado sobre el Derecho de los Tratados, en el que se señala en el artículo 38 lo siguiente<sup>(225)</sup>:

"Todo Tratado podrá ser modificado por la práctica ulterior en la aplicación del Tratado, cuando tal práctica denote el acuerdo de las partes en modificar las disposiciones del Tratado".

Además, en lo referente a la contratación internacional pueden mencionarse dos expresiones más. Una, la entrada en vigor provisional de tratados sujetos al trámite tradicional de la ratificación; otra, la suspensión de la aplicación de un tratado, por el consentimiento de las

y ágiles, lo que solo es posible lograr a través de la actuación de un poder ejecutivo dotado de los órganos adecuados y éstos, de las competencias necesarias.

C) La competencia reglamentaria.

Es conveniente que en las observaciones que a continuación se señalan, recordemos la cuestión siguiente: ni en el Tratado General, como - tampoco los demás instrumentos por lo que se rige el proceso de integración centroamericana, de fines claramente, el contenido de las funciones que atribuyen a los distintos órganos, ni delimitan, al menos por el grado de precisión deseable, las facultades que les confieren para el desempeño de sus funciones.

Como ya lo analizamos anteriormente, tanto en el Tratado General, como en otros instrumentos constitutivos del Programa de integración económica centroamericana, se confía al Consejo Ejecutivo, y en otros casos al Consejo Económico Centroamericano, la reglamentación de algunos de los instrumentos o de determinadas materias regidas por ellos. Un examen detenido de los instrumentos, revela la presencia, implícita, de competencias normativas que trascienden el carácter meramente reglamentario y cuyo ejercicio, aparentemente, tampoco está limitado a determinadas esferas de validez.

Al analizar las fuentes del Derecho Comunitario Centroamericano, hicimos amplia referencia a la naturaleza y límites de la competencia reglamentaria del Consejo Ejecutivo y del Consejo Económico Centroamericano,

partes<sup>(226)</sup>.

Como una expresión final, hay que agregar la s delegaciones expresas que a veces hace el Poder Legislativo para la revisión de los tratados formales. Un ejemplo de esto último lo tenemos, en las reformas a la Carta de las Naciones Unidas, las que una vez aprobadas y luego ratificadas por las dos terceras partes de los Estados Miembros, incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, entran en vigor para la totalidad de los Estados. Al efecto, el artículo 108 de la Carta establece lo siguiente:

"Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Con referencia a la expresión últimamente comentada, también constituyen ejemplo algunos Tratados de integración<sup>(227)</sup>.

Respecto a todo lo anterior, solo cabe agregar que la s tendencias referedas se justifican dada la naturaleza de la misma de los procesos de integración económica, ya sea que éstos se encuentren en etapas avanzadas o cuando se propongan objetivos que trasciendan la mera liberalización comercial, casos de los cuales se requieren mecanismos flexibles



razón por la cual, ahora, simplemente nos limitaremos a recordar e insistir sobre algunos aspectos, a efecto de poder encuadrar el estudio de esta competencia, dentro del tema de supranacionalidad que en este momento nos ocupa.

a) Competencia reglamentaria del Consejo Ejecutivo.

La generalidad de las competencias de índole reglamentaria, como ya lo dejamos asentado anteriormente, están atribuidas al Consejo Ejecutivo, lo cual, sin lugar a dudas, es perfectamente consecuente con su función de "aplicar" y "administrar" el Tratado General, y con la facultad de dictar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Tratado General (artículos XXI y XXII, respectivamente). No obstante, en el Tratado General, conforme se establece en el artículo V, solo se confiere, en forma expresa, la competencia siguiente: la relativa al procedimiento a seguir para determinar el origen de la mercancía. Es oportuno recordar a este respecto, la resolución número 1 del Consejo Ejecutivo, conforme a la cual se solicitó a los Gobiernos:

"que a efecto de facilitar la determinación del origen de las mercancías objeto de libre comercio y de acuerdo con sus respectivas normas generales, que los artículos manufacturados en su territorio ostenten claramente una leyenda que diga: "Producto Centroamericano hecho en...(país de origen)".

Sin lugar a dudas, la resolución anterior representa una reglamentación parcial respecto a lo dispuesto en el artículo V.

Está también prevista la actuación reglamentaria del Consejo Ejecutivo, en lo relativo a los incentivos fiscales al desarrollo industrial. Lo que interesa destacar en este momento es lo referente a los términos imprecisos en que confiere dicha competencia del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, ya que en su artículo 47 se establece:

"Los Estados contratantes adoptarán un reglamento uniforme a este convenio dentro de un período no mayor de 30 días a partir de la fecha en que entre en vigencia el presente instrumento. Este reglamento será elaborado por el Consejo Ejecutivo"<sup>(228)</sup>. Lo que importa aquí es saber, en que consiste, exactamente, la acción de "elaborar" que se confía al Consejo Ejecutivo respecto del reglamento; sobre todo, si se tiene en cuenta las terminologías diversas que se emplean en los distintos instrumentos. Las posibilidades que se ofrecen son dos: una, que el reglamento sea presentado por el Consejo Ejecutivo de los Gobiernos, para su aprobación, por la vía tradicional de los instrumentos sujetos a ratificación; la otra, que la "aprobación" consista, únicamente, en una simple medida ejecutiva de parte de cada Estado, solo a los efectos de su promulgación e incorporación al Derecho nacional. La segunda posibilidad, indudablemente, está más acorde con el objeto que se persigue al pretenderse una reglamentación "uniforme" de los instrumentos convencionales del programa de integración. En otra parte de este trabajo hicimos amplios comentarios, no solo sobre el procedimiento que se

empleó para cumplir con lo ordenado en el artículo 47 del citado Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, si no en cuanto a la técnica que estimamos más adecuada, para la puesta en vigencia de este tipo de reglamentaciones comunitarias que necesitan tener un carácter uniforme.

El artículo 4 del Protocolo de San Salvador al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, confiere también una función de tipo reglamentario al Consejo Ejecutivo, al establecer

"Los productos de las plantas de integración deberán cumplir las normas de calidad que serán formuladas por el ICAITI y aprobadas por el Consejo Ejecutivo".

En el precepto comentado se emplea la palabra "aprobación" y en ello ha de consistir la acción de competencia del Consejo Ejecutivo. En el texto, ni siquiera se contemplan actos posteriores y complementarios de parte del Estado, por lo que parece tratarse de una verdadera competencia reglamentaria en la que, para que se produzcan todos sus efectos, solo se requiere de la tramitación que estimamos procedente en estos casos, la cual, la de los actos de los órganos que surten efecto por el mero hecho de su motivación a los Gobiernos.

Ya hemos indicado antes, que conforme al artículo XXII del Tratado General corresponde al Consejo Ejecutivo dictar

"las medidas que sean necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos mediante este Tratado y de resol-

ver los problemas que se susciten con motivo de la aplicación de sus disposiciones".

El Consejo Ejecutivo no ha ejercido esta facultad tan a menudo como quizás lo ha requerido y justificado la marcha del proceso de integración, pero no obstante, ha tenido actuaciones que pueden considerarse como actividades reglamentarias, en ejercicio de facultades "implícitas", ya que en los instrumentos constitutivos correspondientes, no se contempla expresamente la necesidad de una reglamentación. Como ejemplos de la actuación del Consejo Ejecutivo a este respecto, podemos mencionar los siguientes:

1) La resolución número 26, destinada a reglamentar parcialmente el artículo IX del Tratado General, el que al efecto establece en su párrafo primero:

"Los Gobiernos de los Estados signatarios no otorgarán exenciones ni reducciones de derechos aduaneros a la importación procedente de fuera de Centroamérica para artículos producidos en los Estados contratantes en condiciones adecuadas".

En la resolución citada, el Consejo Ejecutivo resolvió, con el indudable objeto de facilitar y hacer efectivo el cumplimiento de la obligación antes señalada, que cada Gobierno deberá:

"mantener informado a los demás de Centroamérica acerca de la producción en su país de materias primas, artículos semielaborados y envases; esa información debe contener, como mínimo, los siguientes datos: capacidad de producción, producción efectiva actual,

calidad y precios".

Como una cuestión complementaria de la resolución 26, El Consejo Ejecutivo aprobó, también, el formulario confeccionado por la Secretaría Permanente (SIECA), que detalla la información que han de suministrar los Gbiernos para obtener los beneficios correspondientes.

2) Otro ejemplo es, la resolución número 42 del Consejo Ejecutivo, que estableció normas a las oficinas nacionales de integración en relación con el sistema de registro y licencia sobre las importaciones de leche en polvo procedente de países fuera del área.

3) Un ejemplo más lo tenemos, referente al procedimiento a seguir para el trámite, consideración y resolución de las solicitudes y proyectos que se presenten a las instituciones regionales competentes, referente al Régimen de Industrias de Integración y al "sistema especial de promoción de actividades productivas", previstas en el Capítulo IV del Primer Protocolo al indicado Convenio de Industrias de Integración, El procedimiento elaborado por la SIECA fué considerado oportunamente por el Consejo Ejecutivo, habiendo acordado éste enviarlo al estudio de los Gobiernos y asimismo encargó a la SIECA, que preparase el proyecto correspondiente<sup>(229)</sup>. Todo el trámite concluyó en la suscripción del Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración (Sistema Especial de Actividades Productivas), conocido como el Segundo Protocolo de Managua, el 16 de Noviembre de 1967, cuya vigencia se inició el 23 de

Marzo de 1969.

b) Competencia reglamentaria del Consejo Económico Centroamericano.

En otra parte de este trabajo, al tratar lo relativo a las fuentes del Derecho Comunitario Centroamericano, hicimos referencia pormenorizada a la competencia reglamentaria del Consejo Económico Centroamericano y ahora, en cuanto al tema general que nos ocupa, nos limitamos a dejar sentadas - unas cortas observaciones.

El artículo 182 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), atribuye expresamente una competencia reglamentaria al Consejo Económico Centroamericano. El citado artículo señala:

"El Poder u Organismo Ejecutivo de cada Estado emitirá los reglamentos a este Código, acordados multilateralmente en el seno del Consejo Económico Centroamericano. Las modificaciones a dichos reglamentos deberán hacerse mediante igual procedimiento. Los reglamentos no serán compulsorios mientras los instrumentos de ratificación de este Protocolo correspondientes a los cinco países no hayan sido depositados".

Los términos en que está redactado el artículo citado justifica una labor de interpretación y además, ha suscitado dudas acerca de la naturaleza y alcance de la competencia atribuida. Todas las dudas creemos que se originan de una redacción un tanto equívoca, ya que si lo que se persigue es establecer una reglamentación "uniforme", que pueda asegurar una aplicación eficaz de las normas por parte de los organismos públicos nacio-

nales que integran el Servicio Aduanero Centroamericano, deben asegurarse tal finalidad, y consiguientemente, interpretar que la expresión "emitirán" ha de significar simplemente, que los poderes y órganos ejecutivos nacionales promulgarán e incorporarán al derecho interno respectivo, los reglamentos emanados del Consejo Económico Centroamericano, quien actúa como órgano representativo del interés comunitario. Sobre el mecanismo establecido por el artículo 182 del CAUCA, ya dejamos sentadas algunas observaciones en otra parte de este trabajo y a ellas nos remitimos, para evitar repetición de conceptos.

Consecuente con lo comentado, no es de extrañas el lenguaje que empleó el Consejo Económico Centroamericano en el preámbulo de su resolución número 20, al establecer, que es indispensable para la constitución de la Unión Aduanera Centroamericana, la existencia de una organización y procedimientos aduaneros uniformes en los respectivos países centroamericanos y que por tal circunstancia era necesario preservar el carácter regional del reglamento. En la misma resolución 20 antes citada se contiene, que el Consejo Económico Centroamericano aprobaba el instrumento y además, que el mismo sería emitido por el Poder y Organismo Ejecutivo de cada Estado a la mayor brevedad posible.

En suma, las diversas formas de actuación del Consejo Económico Centroamericano aclaran todas las dudas que pudieran surgir acerca de las cuestiones ahora referidas.

D) La competencia normativa general.

En los instrumentos constitutivos del Programa de integración económica centroamericana, no se atribuye, expresamente, a ninguno de los órganos, competencias normativas de carácter general, lo que constituye en sí una diferencia con el sistema instituido en las Comunidades Europeas.

Un análisis detenido de los instrumentos correspondientes al programa de integración económica centroamericana, revela la presencia, implícita, de competencias normativas que trascienden el carácter meramente reglamentario y cuyo ejercicio no está limitado a determinadas esferas de validez. La existencia y ejercicio de éstas competencias, como ya lo indicamos en otra parte de este trabajo, es consecuente, en el caso del Consejo Ejecutivo, con su función de "aplicar" y "administrar" el Tratado General, y en cuanto al Consejo Económico Centroamericano, con su función de "dirigir" la integración y "coordinar" la política, en materia económica, de los Estados miembros, a lo cual se refieren los artículos XXI y XX del Tratado General, respectivamente.

No obstante que los órganos antes indicados no han ejercido, con la amplitud y frecuencia con que pueden hacerlo, esas competencias, en cuanto al Consejo Ejecutivo puede señalarse, como modelo de actuación, la resolución número 71, la que se dictó con motivo del impuesto al consumo que se aplicaba en Nicaragua a detergentes de fabricación hondureña. El asunto fué planteado por el Representante de Honduras y consistió en determinar si el Gobierno de Nicaragua podía mantener un impuesto de esa clase



sobre detergentes que ha dejado de producir, pero que se comentaron a fabricar en Honduras después de haberse implantado el referido impuesto. Es de aclarar, que la citada producción existía en otros países del área antes de la vigencia del mencionado impuesto. En el curso de la Vigésimaquinta Reunión del Consejo Ejecutivo pudo aclararse, que el ~~caso~~ o situación no estaba previsto en el artículo VI del Tratado General, ya que ninguno de sus incisos se refería de un modo específico a un hecho de las características del debatido. En este caso, el Consejo Ejecutivo resolvió no solo una controversia concreta, sino, además, creó nuevas normas de aplicación general, para situaciones que pudieran presentarse en el futuro y que no están previstas en el artículo VI del Tratado General. El texto de la citada resolución número 71, es el siguiente:

" I.- Que un Estado miembro del Tratado General debe dejar de cobrar los impuestos que hubiera establecido en caso de que cese en su propio territorio la producción del artículo gravado y se continúe elaborando, sin embargo, en otro o en otros países del área. El Estado deberá suspender el impuesto de acuerdo con sus procedimientos legales y mediante la sola notificación en ese sentido del Consejo Ejecutivo.

II.- En caso de que, por razones de orden interno, el país que ha dejado de cobrar el tributo considere que es indispensable restablecerlo, deberá solicitar y obtener previamente autorización del Consejo Ejecutivo, el cual podrá concederla después

de haber analizado las consecuencias que pueda tener el impuesto sobre el régimen del libre comercio entre los países de la Región

III.- La SIECA, en su carácter de Secretaría del Consejo, deberá notificar al Gobierno de Nicaragua la presente resolución para los efectos consiguientes".

Otro ejemplo de la competencia que estamos analizando la encontramos en lo resuelto en la Reunión conjunta del Consejo Económico Centroamericano y el Consejo Monetario Centroamericano, con motivo de la situación planteada por un nuevo sistema cambiario adoptado por Costa Rica a principios de 1967. Al efecto, en la citada Reunión se resolvió:

"Cuando por razones de defensa de la balanza de pagos cualquiera de los Estados miembros del Tratado General se vea obligado a implantar restricciones de tipo cambiario, las medidas correspondientes no deberán afectar en modo alguno el funcionamiento eficiente e ininterrumpido del Mercado Común Centroamericano".

La Reunión se convocó y la resolución se tomó, con base en lo dispuesto por el artículo X del Tratado General, cuyo tenor es el siguiente:

"Los Bancos centrales de los Estados signatarios cooperarán estrechamente para evitar las especulaciones monetarias que puedan afectar los tipos de cambio y para mantener la convertibilidad de las monedas de los respectivos países sobre una base que garantice, dentro de un régimen normal, la libertad,

la uniformidad y la estabilidad cambiarias,

En caso de que uno de los Estados signatarios llegare a establecer restricciones cuantitativas sobre las transferencias monetarias internacionales, deberán adoptar las medidas necesarias para que tales restricciones no afecten en forma discriminatoria a los otros Estados.

En caso de dificultades graves de balanza de pagos que afectaren o pudieran afectar las relaciones monetarias de pagos entre los Estados signatarios, el Consejo Ejecutivo, de oficio o a petición de una de las Partes, estudiará inmediatamente el problema en colaboración con los Bancos centrales, a fin de recomendar a los Gobiernos signatarios una solución satisfactoria compatible con el mantenimiento del régimen multilateral de libre comercio".

En relación con el aspecto que estudiamos, tiene interés señalar la propuesta hecha por la SIECA para superar las demoras y dificultades inherentes al actual sistema de renegociación arancelaria mediante convenios o protocolos sujetos al trámite tradicional de la aprobación legislativa y la ratificación. La propuesta de la SIECA señala que, en lugar de agilizar el sistema actual para la renegociación, se atribuya a los Consejos del Tratado General, y no a los Gobiernos, la competencia al efecto, Conforme esta propuesta, el Consejo Económico Centroamericano sería competente para fijar el monto de los impuestos que gravan la importación, dentro de

límites máximos y mínimos que determinen los Congresos nacionales, y el Consejo Ejecutivo, para que continúe realizando la negociación y renegociación arancelaria para facilitar al primero el cumplimiento de sus nuevas responsabilidades<sup>(230)</sup>. Sobre este aspecto ya hicimos también - un ligero comentario en otra parte de este trabajo y para evitar repeticiones, a él nos remitimos. Defendíamos la tesis de la necesidad de dotar a los Consejos de amplias facultades que les permitiera tomar decisiones que obligaran directa e inmediatamente a las partes interesadas en el programa de integración, en relación no solo a la renegociación arancelaria, sino a los más amplios y diversos aspectos vinculados al programa de integración económica.

E) La competencia ejecutiva.

El ejercicio de las competencias ejecutivas, dentro del sistema institucional centroamericano, no están reservados, en exclusiva, al Consejo Ejecutivo. También, el Consejo Económico Centroamericano, en ejercicio de las amplias competencias que el Tratado General le atribuye en su artículo XX, o en caso de que no haya acuerdo dentro del Consejo Ejecutivo, tal como se establece en el párrafo segundo del artículo XXI del Tratado General, ha tomado decisiones del mismo carácter y sobre las mismas materias o asuntos que las que le corresponden al Consejo Ejecutivo, en ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas específicamente.

Igual observación puede hacerse respecto de la SIECA, cuya actuación ha trascendido de la que le podría corresponder como órgano técnico y

administrativo , dada la función de verdadera vigilancia y supervisión y su competencia en materia. de interpretación y funciones que pueden desempeñar por delegación del propio Consejo Ejecutivo, que se le asigna en el Tratado General<sup>(231)</sup>.

Al hablar de competencias ejecutivas, es más conveniente referirse a la específicamente asignadas al Consejo Ejecutivo, las que podemos dividir en tres grupos, según la materia o esfera de validez de cada competencia. Estos tres grupos comprenden: las competencias relacionadas con el régimen de libre comercio, la equiparación arancelaria y finalmente, el desarrollo industrial integrado.

Dentro del primer grupo, o sea, de las competencias relacionadas con el Régimen de Libre Comercio, deben incluirse todas las competencias previstas en el Tratado General para asegurar el funcionamiento eficaz del régimen de libre comercio. Una de estas es, la contenida en el artículo -- V del Tratado General, que establece : en su párrafo segundo, lo siguiente:

" Cuando hubiere duda sobre el origen de una mercancía y no se hubiese resuelto el problema por gestión bilateral, cualquiera de las partes afectadas podrá pedir la intervención del Consejo Ejecutivo, para que éste verifique el origen de dicha mercancía. El Consejo no considerará como productos originarios de una de las partes contratantes aquellos que siendo originarios de o manufacturados en un tercer país solo son simplemente armados,

empacados, envasados, cortados o diluidos en el país exportador".

Conforme el artículo citado, el Consejo Ejecutivo queda facultado para intervenir y resolver acerca del origen de una mercancía que ha provocado una controversia entre Estados miembros.

En materia impositiva también se confieren al Consejo Ejecutivo ciertas competencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados miembros. A este respecto, puede mencionarse el artículo VI del Tratado General, conforme al cual el Consejo Ejecutivo es competente, de una parte, para autorizar a los Estados miembros a que establezcan determinados impuestos y de otra parte, para obligarles a eliminar algunos que ya hubieran establecido. En el citado artículo se dispone que para que un Estado miembro pueda establecer impuestos al consumo sobre un artículo que no se produce en él, pero si en cualquiera de los demás, se requerirá de "previa resolución favorable del Consejo Ejecutivo", y además, que cuando un Estado miembro tuviera establecido un impuesto al consumo de un artículo que no produce y cuya producción se iniciara posteriormente en cualquiera de los demás, el Consejo Ejecutivo, a solicitud del interesado, conocerá del caso y dictaminará si la existencia del impuesto es compatible con el libre comercio. En éstos términos, los Estados se comprometen a eliminar, de acuerdo con sus procedimientos legales, dichos impuestos al consumo mediante la sola notificación en ese sentido del Consejo Ejecutivo.

Al efecto, el párrafo segundo del artículo VI del Tratado General, dis-

pone lo siguiente:

"Las Partes contratantes convienen en que el establecimiento de los impuestos internos al consumo deberá ajustarse a los siguientes términos:

- a) Podrán establecerse por el monto que se estime necesario cuando exista producción interna del artículo en cuestión, o cuando no exista producción de dicho artículo en ninguno de los Estados signatarios;
- b) Cuando no exista producción de un artículo en una de las Partes contratantes, pero sí en cualquiera de las demás, la primera no podrá establecer impuesto al consumo sobre dicho artículo, salvo previa resolución favorable del Consejo Ejecutivo;
- c) Cuando una de las Partes haya establecido un impuesto interno al consumo y posteriormente se iniciare en cualquiera de las demás la producción del artículo así gravado, sin existir esa producción en la parte que estableció el impuesto, el Consejo Ejecutivo, a solicitud del interesado, conocerá el caso y dictaminará si la existencia del impuesto es compatible con el libre comercio. Los Estados se comprometen a eliminar, de acuerdo con sus procedimientos legales, dichos impuestos al consumo mediante la sola notificación en ese sentido del Consejo Ejecutivo".

Dentro de este primer grupo de competencias ejecutivas, cabe destacar una de carácter punitivo, prevista en el capítulo III del Protocolo de San José al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, relativo a disposiciones sobre comercio desleal, en cuyo artículo XIV se establece:

En caso de comprobarse la existencia de las prácticas a que se refiere este capítulo se aplicará, mediante decisión del Consejo Ejecutivo, al destinatario de las mercancías o embarques respectivos, una sanción de cien dólares por kilo bruto y cien por ciento ad valórem, sin perjuicio de cualquier otra medida que resuelva el Consejo. La decisión del Consejo tendrá validez para los cinco países miembros. La sanción será aplicada por el Gobierno del país donde se efectuó la importación y por el de cualquier otro país centroamericano donde la misma mercancía se importe. La sanción continuará aplicándose mientras subsista la situación o práctica de comercio que le dió origen, y será suspendida por decisión del Consejo Ejecutivo".

Principalmente en este último caso comentado, se destacan dos características importantes: La de que en el instrumento se declara, específica y expresamente su validez o fuerza jurídica obligatoria, y la de que serán válidas y obligan directamente, no solo a los Estados, sino a los particulares..

En cuanto a las competencias del segundo grupo, o sea las relacionadas con la equiparación arancelaria, podemos señalar las contenidas en el Capítulo II del Protocolo de San José al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación. Las competencias están establecidas en los artículos siguientes: En el artículo V se establece en su parte conducente, lo siguiente:

"El Consejo Ejecutivo fijará las cuotas de manera que la producción centroamericana y el monto de las importaciones autorizadas de dicho producto aseguren la satisfacción total de



la demanda de leche en polvo existente en el mercado de los Países miembros".

El artículo VI del Protocolo comentado, señala:

"El Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración - Económica Centroamericana fijará anualmente el monto de las cuotas a que se refiere el Artículo V anterior. Las cuotas fijadas para el primer año entrarán en vigor noventa días - después de la vigencia del presente Protocolo.

El Consejo revisará semestralmente las cuotas de acuerdo con el curso de la producción, del consumo y de otros elementos determinantes del abastecimiento y de la situación del mercado. Podrá asimismo, introducir en las cuotas anuales los ajustes que sean necesarios para contrarrestar deficiencias en la producción o cualquier otro elemento que cause o amenaza causar trastornos en el abastecimiento del mercado de los Países miembros".

Conforme a los artículos citados, la acción de cada Estado está supeditada a la acción del órgano representativo del interés común o sea, el Consejo Ejecutivo. En ~~cam~~ambio, el artículo X señala:

"El Consejo Ejecutivo someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo de cada país la adopción de regulaciones a la importación de otros tipos de leches procesadas procedentes de terceros países, cuando así lo estime necesario para garantizar los intereses del consumidor y de la producción, y el abastecimiento centroamericano".

Conforme éste último artículo, la competencia del Consejo Ejecutivo consiste solamente en la facultad de someter a la aprobación del Poo

der Ejecutivo de cada país la adopción de regulaciones para su exportación, cuando así lo aconseje el interés del consumidor, de la producción o del abastecimiento centroamericano.

Como puede observarse fácilmente, la realización de los propósitos perseguidos en el Protocolo comentado, requiere la adopción de medidas que no pueden estar previstas ni en ese Protocolo, ni en ningún otro, de donde se deduce, la necesidad que tuvo el Consejo Ejecutivo de adoptar el sistema de registros y licencia, sobre las importaciones de leche en polvo procedentes de países fuera del área, todo en ejercicio de una competencia reglamentaria indudablemente implícita (232).

En cuanto al tercer grupo, o sea las competencias del Consejo Ejecutivo relacionadas con el desarrollo industrial integrado, es preciso también, hacer algunas observaciones, ya que el régimen de industrias de integración descansa en el ejercicio de variadas e importantes competencias de parte del Consejo Ejecutivo. La primera de éstas competencias se desprende del texto del artículo II del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Los Estados Contratantes declaran su interés en que se desarrollen industrias con acceso al mercado común centroamericano, las cuales se denominarán Industrias Centroamericanas de Integración y serán objeto de declaración conjunta por las Partes contratantes por medio de la Comisión Centroamericana de Integración Industrial que se establece conforme el Artículo VIII de este Convenio.

Se considerarán como Industrias Centroamericanas de Integración aquellas que, a juicio de la Comisión Centroamericana -

de Integración Industrial, se compongan de una o más plantas cuya capacidad mínima requiera que tengan acceso al mercado centroamericano para operar en condiciones razonablemente económicas y competitivas".

Las funciones de la Comisión Centroamericana de Integración Industrial fueron asumidas por el Consejo Ejecutivo, conforme lo dispuesto en el artículo XXII del Tratado General.

La competencia de referencia, cuya naturaleza y alcance no está claramente definida en el Convenio original, se desarrolla y perfecciona en las disposiciones del propio Tratado General, en las que se definen las competencias del Consejo Ejecutivo. Las demás competencias, que dentro del régimen de industrias de integración están actualmente atribuidas al Consejo Ejecutivo, no solo no ofrecen mayores dudas respecto a su naturaleza y alcance, sino que están contenidas y figuran en el Primer Protocolo al referido Convenio, el que fué firmado en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, el 29 de Enero de 1963. Las competencias en cuestión son las siguientes: la contenida en el artículo 4 del Protocolo últimamente mencionado, el que copiado literalmente dice:

"Los productos de las plantas de integración deberán cumplir las normas de calidad que serán formuladas por el ICAITI y aprobadas por el Consejo Ejecutivo.

El ICAITI queda encargado de comprobar periódicamente el cumplimiento de dichas especificaciones, comunicando el resultado de esta comprobación a la Secretaría Permanente. El consejo Ejecutivo, por mayoría de votos, determinará las medidas que deberán aplicarse en caso de incumplimiento, incluyendo

entre ellas la autorización de importaciones mediante el pago de los aforos que se indican en los artículos 15 y 23 siguientes".

Los artículos citados en el precepto transcrito, se refieren, a medidas que deberán adoptarse en caso de incumplimiento.

Una segunda competencia es la contenida en el artículo 20 del mismo Protocolo, el que en su parte conducente establece:

"El Consejo Ejecutivo determinará la lista de tipos y tamaños de llantas y neumáticos que serán amparados por este Protocolo en su fecha inicial de vigencia. Esta lista podrá ser ampliada por el Consejo Ejecutivo previa comprobación de los tipos adicionales de llantas y neumáticos que la fábrica produzca en condiciones adecuadas para abastecer el mercado centroamericano".

Otra competencia, es la contenida en el artículo 25 del mismo Protocolo que comentamos, el que en su parte conducente señala:

"El Consejo Ejecutivo fijará oportunamente los precios de venta de las llantas y neumáticos producidos por la planta, con base en un informe preparado por la Secretaría Permanente acerca de los precios reales que regían en los países centroamericanos para productos similares y en la fecha antes señalada.

El Consejo Ejecutivo, a través de su Secretaría, será el organismo encargado de vigilar la correcta aplicación de las disposiciones anteriores y de autorizar, en su caso, las modificaciones que sea aconsejable introducir en los precios en razón de variaciones en los costos de producción".

Otra competencia de las que nos interesa en este comentario, la encontramos en el artículo 34 del mismo citado Protocolo, el que al efecto señala:

"Siempre que el sistema establecido en virtud de las normas procedentes pudiera originar importaciones especulativas de productos extranjeros, el Consejo Ejecutivo, a petición de cualquiera de las partes contratantes, podrá decidir sobre la necesidad de que los países sometan a restricciones o - cuotas la importación de dichos productos en cualquier tiempo anterior a la fecha en que hubiere de iniciarse la producción centroamericana.

Los Gobiernos actuarán conforme a las resoluciones adoptadas por el Consejo".

Finalmente, y en cuanto al Protocolo en referencia, la contenida en su artículo 37, el que textualmente dice:

"El Consejo Ejecutivo mantendrá una estrecha sobre los precios de los artículos amparados por este sistema especial. Cuando se comprobare que dichos precios son - indebidamente altos con relación a los precios normales de mercado de artículos similares, el Consejo Ejecutivo, con base en el estudio que realice al efecto la Secretaría Permanente y en colaboración con el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial, podrá autorizar que las importaciones se sujeten al ago de los aforos uniformes acordados en el Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y sus protocolos, o, en su defecto, de los aforos nacionales vigentes a la -

fecha de suscripción del presente Protocolo.

El Consejo podrá autorizar importaciones en la cuantía - que fuere necesaria para cubrir los déficit que sean determinados por el mismo, con base en un estudio realizado al efecto por la Secretaría Permanente, sujetas al pago de los aforos a que se refiere el párrafo anterior".

También, en el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, se estipulan ciertas competencias - ejecutivas al Consejo Ejecutivo. Al efecto, el artículo 27 señala:

"Cuando la solicitud presentada en un país por una empresa para el desarrollo de un proyecto de inversión industrial haya sido rechazada por la Autoridad Administrativa nacional y una vez confirmado el rechazo por el Consejo - Ejecutivo, ninguna empresa podrá ser calificada ni clasificada en ninguno de los demás Estados miembros con respecto al mismo proyecto de inversión".

Otra competencia se encuentra en el artículo 28 del mismo Convenio, el que al efecto establece:

"Cuando un Estado contratante estimare que en otro de los países se ha clasificado una empresa en un grupo de clasificación distinto al que le corresponde conforme a este - Convenio, podrá someter al caso al Consejo Ejecutivo dentro de un plazo de tres meses contado a partir de la publicación del Decreto o Acuerdo de Clasificación. El Consejo Ejecutivo determinará el grupo de clasificación que le sea aplicable a la empresa y dará a conocer su decisión a la -

Autoridad Administrativa nacional. Esta quedará obligada a modificar, en lo conducente, los términos de dicho Decreto o Acuerdo".

Está claro, que con la atribución de las competencias comentadas, atribuidas al Consejo Ejecutivo, se supedita la posible acción unilateral de los Estados partes en el Convenil, respecto a lo que resuleva el Consejo Ejecutivo, lo que pone de manifiesto una evidente competencia ejecutiva de éste, respecto a los Estados contratantes.

F) La competencia para el arreglo de controversias.

La vigente carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), establece, como órgano de la misma, uno de carácter judicial, la Corte de Justicia Centroamericana, la que tiene entre sus funciones, conforme a su artículo 15, la siguiente:

- "a) Conocer de los conflictos de orden jurídico que surjan dentro de los Estados miembros y que éstos convencionalmente le sometan;
- b) elaborar y emitir opiniones sobre proyectos de unificación de la legislación centroamericana cuando así se lo solicite la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores o el Consejo Ejecutivo".

La Corte en mención, que conforme el artículo 14 de la Carta se integra con los Presidentes de los Poderes Judiciales de cada uno de los Estados Miembros de la Organización de Estados Centroamericanos, nunca ha actuado, no solo por el hecho de constituir

una jurisdicción voluntaria, a la que no podrá recurrir unilateralmente uno de los Estados interesados, sino porque carece todavía de un Estatuto que establezca su procedimiento y defina el ámbito exacto de su competencia. No obstante, se señala que la competencia de la Corte está concebida con suficiente amplitud y ello podría permitir que los Estados partes en una controversia derivada del proceso de integración económica pudiera ser conocida por la Corte, pero hasta la fecha, ningún caso de éstos se ha dado y además, sería necesario que la jurisdicción no fuera voluntaria, para que la misma fuera también eficaz.

Por las razones indicadas opinamos, y en esto lo hacemos - en forma radicalmente opuesta a lo sostenido por Felix Fernandez-Shaw <sup>(233)</sup>, que la Corte de Justicia Centroamericana no sustituirá, como institución permanente, al Tribunal Arbitral previsto por el artículo XXVI del Tratado General de Integración Económica Centroamericana o a cualquiera de los contemplados por otros instrumentos.

El mecanismo de solución de todas las controversias que susciten la interpretación y aplicación del Tratado General y la mayoría de los problemas que afectan a la integración centroamericana, está contenido en el artículo XXVI del Tratado General, en el que se establece lo siguiente:

"Los Estados signatarios convienen en resolver fraternalmente dentro del espíritu de este Tratado, y por medio del Consejo Ejecutivo o del Consejo Económico Centroamericano en su caso, las diferencias que surgieren sobre la interpretación de cualquiera de sus cláusulas. Si no pudieren poner-



se de acuerdo, solucionarán la controversia por arbitraje. Para integrar el Tribunal Arbitral cada una de las partes contratantes propondrá a la Secretaría General de la Organización de Estados Centroamericanos los nombres de tres Magistrados de sus respectivas Cortes Supremas de Justicia. De la lista total de candidatos, el Secretario General de la Organización de Estados Centroamericanos y los representantes gubernamentales ante este organismo escogerán, por sorteo, a un árbitro de cada parte contratante, debiendo ser cada uno de ellos de diferente nacionalidad. El laudo del Tribunal Arbitral será pronunciado por los votos concurrentes de, por lo menos, tres miembros y causará efectos de cosa juzgada para todas las partes contratantes por lo que hace a cualquier punto que resuelva relativo a interpretación o aplicación de las cláusulas de este Tratado ". (234).

El mecanismo para el arreglo de controversias es bastante más complejo de lo que aparece en el citado artículo XXVI; ya que no es correcta la impresión que da su lectura, respecto a que el arreglo que se contempla sea un arreglo entre las propias partes en la controversia y que la función de los Consejos, Ejecutivo y Económico Centroamericano, esté limitada a la de servir de vehículo a través del cual se ha de canalizar el arreglo. La forma en que ha funcionado el mecanismo es distinta. En verdad, lo que se contempla, no es solo una mera negociación entre las partes directamente interesadas, sino la actuación de órganos a los cuales se ha atribuido competencia para tomar las

decisiones que solucionen la controversia conforme al interés regional. En el mecanismo participan, además de los órganos mencionados en el artículo XXVI, la SIECA y eventualmente, .. otros órganos e instituciones. El ejercicio de la competencia en materia de arreglo de controversias está relacionada con .. el ejercicio de algunas de las competencias ejecutivas atribuidas por el Tratado General a sus órganos y sobre todo, con la asignada en el artículo XXII al Consejo Ejecutivo, en virtud .. del cual está autorizado a dictar las medidas que sean necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos consignados en el Tratado General, y de resolver los problemas .. que se susciten con motivo de la aplicación de sus disposiciones.

Observaciones sobre algunas de las controversias que se han presentado, nos permitirá comprender, de mejor forma, como operaba la solución de controversias hasta antes de la emisión del Reglamento sobre Procedimientos para resolver Conflictos.

La primera controversia que se presentó versó sobre la .. interpretación de un texto de la legislación interna de Guatemala. Costa Rica y El Salvador consultaron en el seno del Consejo Ejecutivo la incompatibilidad de la interpretación que hizo el Gobierno de Guatemala respecto del Decreto-Ley guatemalteco, número 355, de fecha 10 de Junio de 1965, aludiendo que dicha .. interpretación era incompatible con lo dispuesto en el artículo VI del Tratado General. El artículo VI citado señala al efecto:

"Cuando los productos objeto de intercambio estén sujetos a impuestos, arbitrios y otras contribuciones internas de

cualquier clase, que recaigan sobre la producción, la venta, la distribución o el consumo en uno de los países signatarios, dicho país podrá gravar con igual monto a las mercancías de la misma naturaleza que se importen de otro Estado contratante, en cuyo caso deberá gravar también por lo menos en igual monto y por los mismos conceptos, la importación procedente de terceros países".

Para resolver la cuestión, el Consejo Ejecutivo dictó su resolución número 72, cuyo texto es el siguiente:

"El Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración Económica Centroamericana,

CONSIDERANDO:

Que la interpretación que hace el Gobierno de Guatemala de cobrar el impuesto de uno por ciento del timbre sobre el monto de las importaciones procedentes del resto de los Estados Centroamericanos, es contraria a lo establecido en el Artículo III del Tratado General; y que por otra parte dicho impuesto también contraviene a lo dispuesto en el artículo VI del mismo Tratado al no recaer sobre las mercancías importadas de otros países.

RESUELVE:

1º.- Que no procede el cobro del referido impuesto por el Gobierno de Guatemala a las mercancías originarias del resto de los países de Centroamérica, por ser contraria a los artículos III y VI.

2º.- Encomendar al Secretario General que haga gestiones ante el Gobierno de la hermana República de Guatemala a "

fin de que deje sin efecto la interpretación aludida, en vista de los graves perjuicios que está causando a las Empresas dedicadas al comercio centroamericano que se lleva a efecto en Guatemala".

La resolución antes transcrita, indudablemente define el restablecimiento del status-quo anterior; además, no obstante que se encargó al Secretario General que hiciera una gestión amistosa ante el Gobierno de Guatemala, la resolución citada es de la naturaleza y eficacia de las resoluciones que el Consejo Ejecutivo puede dictar de conformidad con el artículo VI del Tratado General, el cual en su parte conducente señala:

"Los Estados se comprometen a eliminar, de acuerdo con - sus procedimientos legales, dichos impuestos al consumo - mediante la sola notificación en ese sentido del Consejo Ejecutivo".

Nuevamente, la actuación del Gobierno de Guatemala, al interrumpir el libre comercio de la sal proveniente de El Salvador, originó la segunda controversia, que a su vez, motivó que el Consejo Ejecutivo dictara la resolución número 57, la que señala:

"El Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración Económica Centroamericana,

Resuelve:

1º.- No proceden obstáculos de ninguna clase al comercio de la sal entre la República de Guatemala y la de El Salvador;

2º.- Los certificados de Sanidad expedidos en forma legal por el Gobierno de un país Centroamericano tendrán acepta

ción obligatoria en todos los demás países de la región".

La resolución anterior, independientemente de su valor y eficacia, guarda como característica singular, lo siguiente: en la misma se sitúa el Consejo Ejecutivo en el desempeño de una función coadyuvante a una gradual y progresiva compenetración de los ordenamientos jurídicos nacionales, lo cual es básico y necesario en toda área en que se realiza un proceso de integración económica.

Otra controversia se suscitó entre Guatemala y Honduras, sobre el derecho de los productos de la planta de integración Ginsa S.A. para gozar de libre comercio en el territorio de Honduras, el que había decidido suspender el libre comercio de los productos Ginsa en su territorio, a partir del 26 de Abril de 1966. Los productos en cuestión, ya venían gozando de libre comercio en Honduras, en virtud de un criterio uniforme acordado por el Consejo Ejecutivo en su Segunda Reunión, realizada en Diciembre de 1962. La controversia motivó que el Consejo Ejecutivo dictara sus resoluciones números 88 y 89. Al efecto la 88 establece:

"CONSIDERANDO: que con base en el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, los Estados Centroamericanos tienen el derecho de segregar del conjunto de actividades industriales, aquellas que, según su criterio, "se compongan de una o más plantas, cuya capacidad mínima requiera que tengan acceso al mercado centroamericano para operar en condiciones razonablemente económicas y competitivas" y que por efecto de esa segre-

gación, que se produce tan pronto como el Consejo Ejecutivo declara a una o más actividades como Industrias Centroamericanas de Integración, la planta o plantas que lleguen a establecerse para manufacturar productos comprendidos en las mismas deben acogerse al Convenio sobre el Régimen de Industrias, si es que los empresarios respectivos desean que sus manufacturas gocen de libre comercio total.

Que el principal estímulo que los países centroamericanos conceden a las industrias de integración consiste en la garantía de libre comercio exclusivo para los productos de las plantas acogidas dentro del Convenio correspondiente.

Que los productos de una planta acogida al Convenio sobre el Régimen de Industrias deben gozar de libre comercio exclusivo en el territorio de todos los Estados centroamericanos, aún antes de que entre en vigencia el correspondiente Protocolo, siempre que los respectivos productos no se encuentren comprendidos en el anexo A del Tratado General de Integración Económica y que cumplan los requisitos que se hubieren acordado en aquel instrumento.

Que la suspensión de libre comercio general que produce la declaratoria de industrias de integración no puede afectar a los productos de la planta que se haya acogido dentro del Convenio sobre el Régimen, por cuanto el Protocolo correspondiente tiene como finalidad, en esta materia, garantizarle precisamente el goce de tal derecho.

Que el Consejo Ejecutivo es el Órgano encargado de - aplicar y administrar los Instrumentos de Integración Económica y que de conformidad con el artículo XXII del Tratado General está obligado a dictar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Gobiernos y de resolver los problemas que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de aquellos instrumentos.

RESUELVE:

12.- Que el efecto de suspender el libre comercio que produce la declaratoria de una industria como de integración hecha por los Gobiernos Centroamericanos por medio del - Consejo Ejecutivo del Tratado General no afecta a los productos de plantas acogidas al Convenio sobre el Régimen - de Industrias Centroamericanas de Integración".

La resolución número 89, que resolvió la controversia, señala - al efecto:

"CONSIDERANDO: que el Gobierno de la República de Honduras hasta la fecha no ha efectuado el depósito de los instrumentos de ratificación del Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración que se suscribió en San Salvador el 29 de Enero de 1963, razón por la cual ha sostenido que las llantas y neumáticos elaborados por la planta a que dicho instrumento se refiere - no tienen derecho a gozar de libre comercio en Honduras.

Que en su resolución número 88 el Consejo Ejecutivo - del Tratado General ha reconocido que el efecto de suspen-

der el libre comercio que produce la declaratoria de una industria como de integración no afecta a los productos de plantas acogidas al Convenio sobre el Régimen de Industrias.

Que si bien el artículo 3 del Protocolo antes mencionado establece que las llantas y neumáticos gozarán de libre comercio a partir de su vigencia, tal disposición no afecta lo prescrito en el artículo I del mismo instrumento, que a la letra dice: "Artículo I: Los beneficios del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración no podrá restringir o limitar el intercambio comercial que se estuviese realizando al amparo del Tratado General de Integración Económica Centroamericana".

Que el Consejo Ejecutivo, durante su Segunda Reunión, teniendo en cuenta que las llantas y neumáticos elaborados por la GINSA gozaban de libre comercio en todos los Estados Centroamericanos, exdepto, Nicaragua, y considerando además que una de las principales finalidades perseguidas al incorporar a dicha planta dentro del Convenio sobre el Régimen de Industrias era garantizarle la exclusividad del mercado centroamericano, expresamente estableció que tal incorporación no afectaría a restringiría el libre comercio de que gozaban aquellos productos.

Que los Gobiernos Centroamericanos ratificaron el acuerdo tomado por el Consejo Ejecutivo como consta en el preámbulo y en el artículo I del Protocolo más arriba cita



do;

Que el Gobierno de Honduras consecuente con el compromiso que había asumido, hasta el 26 de Abril de 1966 había reconocido libre comercio a las llantas y neumáticos productos por la planta de Guatemala.

Que el Consejo Ejecutivo es el órgano encargado de aplicar y administrar los instrumentos de Integración Económica y que de conformidad con el artículo XXII del Tratado General está obligado a dictar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Gobiernos y de resolver los problemas que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de aquellos instrumentos.

RESUELVE:

Que las llantas y neumáticos elaborados por la planta establecida en Guatemala y acogida al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración tienen derecho a gozar de libre comercio en el territorio de Honduras". (235).

Ha sido preocupación de los diversos órganos e instituciones del Programa de Integración Económica Centroamericana el de encontrar vías adecuadas de perfeccionamiento de los mecanismos de solución de controversias.

En efecto, a la Séptima Reunión Ordinaria del Consejo Económico Centroamericano, celebrada en Agosto de 1967, presentó la SIECA (236) una Nota, en la que puntualizó los principales problemas del Mercado Común Centroamericano, sobre todo

los ~~derivados~~ de la necesidad de consolidar el libre comercio frente a obstáculos ~~derivados~~ de interpretaciones unilaterales de los instrumentos legales que lo rigen. Los problemas en cuestión se relacionan con aspectos de la liberación comercial o por resoluciones de los órganos, las que todavía se prestan a interpretaciones diversas frente a las múltiples situaciones que en la práctica pueden presentarse. En su Nota la SIECA, además de sugerir una serie de medidas de posible aplicación, hace, además, énfasis en dos cuestiones básicas:

- 1) La necesidad de agotar la vía del arreglo directo entre las partes antes de sobrecargar al Consejo Ejecutivo con controversias;
- 2) permitir una mayor participación de la SIECA como coadyuvante a la solución de los conflictos en esa etapa de la vía directa.

De acuerdo con los criterios antes expuestos, se sugiere, que agotada la gestión bilateral para la solución de un conflicto considere afectado, lo comunicaría así a la SIECA y a la otra parte de la controversia. La propuesta contenida en la nota comentada, conlleva una delegación condicionada de funciones del Consejo Ejecutivo en la SIECA, con el propósito de acelerar la solución de conflictos y dar más certeza a los trámites al fijarse plazos.

Ha constituido además preocupación de la SIECA y de los Consejos Ejecutivo y Económico Centroamericano, la mejor forma de reglamentar las propias gestiones de los órganos al respecto a además, la participación que los intereses particulares

pudieran tener cuando se vieran afectados por el proceso. El Consejo Económico, por Resolución número 40, adoptada durante su Séptima Reunión Ordinaria, que se efectuó en Agosto de 1967, encomendó a la SIECA la preparación de un proyecto de reglamento. Al efecto, dispuso, que la SIECA debía:

"Preparar en consulta con los Gobiernos, un proyecto de reglamento en el que figuren las normas correspondientes a tal procedimiento, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Económico en su próxima Reunión previo estudio y consideración por parte del Consejo Ejecutivo".

Durante su Octava Reunión Ordinaria, celebrada en el mes de Noviembre de 1967, el Consejo conoció el proyecto que la SIECA preparó, habiendo decidido a continuación, que pasara al Consejo Ejecutivo, el que lo estudió con la asesoría de un grupo de trabajo constituido por Abogados y Economistas versados en integración económica. El informe del referido grupo de trabajo fué objeto de consideración por parte del Consejo Ejecutivo en su XXXIII Reunión Ordinaria, durante la cual decidió apoyar el proyecto. Es oportuno dejar sentado, que el referido grupo de trabajo dejó en su dictamen expresa constancia de que no existía inconveniente alguna para que el proyecto pudiera ser aprobado mediante Reglamento, sin requerir la firma de un convenio internacional especial.

El Consejo Económico Centroamericano aprobó el reglamento comentado, en su resolución, ya mencionada en otra parte de este trabajo, número 50 de fecha 27 de Marzo de -

1968, denominándolo "Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos".

No haremos, en atención a evitar un trabajo demasiado extenso, un estudio exhaustivo y pormenorizado del mecanismo establecido en el citado reglamento, sino, simplemente, nos limitaremos a hacer algunas observaciones y a poner de manifiesto el progreso funcional y de otros aspectos conexos, pero también importantes, que se logró con la emisión y puesta en vigencia del mismo.

Estimamos importante citar a este respecto, dos párrafos del Acta Vigésimotercera, correspondiente a la Decimoquinta Reunión Extraordinaria del Consejo Económico Centroamericano, celebrada en el Banco Central de Reserva, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, el 27 de Marzo de 1968, que corresponde precisamente a la que contiene la Resolución número 50 ya referida. Se señala en la citada Acta, lo siguiente: (237)

"A continuación se llevó a cabo un debate general durante el cual los miembros del Consejo destacaron la importancia de que la integración económica centroamericana cuente con normas que reglamenten los artículos XXII y XXVI del Tratado General, XIII del Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, y demás disposiciones análogas contenidas en los convenios de integración económica. Se expresó que en esta forma se establecerían de manera precisa, los procedimientos a seguir en la tramitación de los conflictos que se suscitan con motivo de la aplicación o interpretación de dichos instrumentos. Concluido el anterior debate general, el Consejo entró a analizar el proyecto en cuestión. Señaló, en primer término, que el mismo, al estable

cer con precisión y claridad los procedimientos para ventilar - los conflictos del Mercado Común, además de ordenar una valiosa experiencia acumulada tanto por el Consejo Ejecutivo como por - el Consejo Económico, constituye suficiente garantía para que - los sectores privados puedan defender adecuadamente sus intereses. Hubo consenso, asimismo, en que los trámites contemplados en todas las instancias marchan a la par con el dinamismo que - caracteriza al Mercado Común y que los negocios demandan, en es - pecial, el arreglo directo contemplado en el proyecto, el cual podría caracterizarse como una preinstancia".

El Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos, sis - tematiza en normas más o menos precisas, la experiencia de los órganos, de los Estados partes y de los intereses privados en - materia de arreglo de controversias. Este documento tiene el - rasgo singular de consagrar la obligatoriedad del agotamiento - de la vía directa entre las partes en conflicto, dándole a la - SIECA, en este aspecto, una participación de carácter técnico, administrativo y de vigilancia, lo que está asegurado en el ar - tículo 12, en las normas contenidas del artículo 15 al 30, 37, 43, 44, 45 y 52 del Reglamento.

El artículo 2 del Reglamento hace referencia a la compe - tencia material de los organismos encargados de resolver los - conflictos, que deben ser los que se susciten con motivo de la interpretación de las normas de los instrumentos de integración económica, no pudiendo aplicarse los procedimientos previstos en el Reglamento cuando en algún instrumento de la integración eco

nómica se señale un trámite distinto, ni cuando el conflicto de ba resolverse por medio de arbitraje. A esto último hace referencia el párrafo final del artículo 4.

El procedimiento contenido en el Reglamento solo se aplica cuando se refiere a la interpretación o aplicación de los "instrumentos de integración económica centroamericana", debiéndose entender por tales, conforme el artículo 1º del Reglamento, únicamente los tratados, convenios, protocolos o acuerdos suscritos y vigentes en los Estados Centroamericanos y cuya administración corresponde al Consejo Ejecutivo del Tratado General. De este se advierte, que se han excluido las recomendaciones y las resoluciones, aún cuando emanen de los organismos del proceso de integración centroamericana y además, quedan también excluidos todos aquellos instrumentos que no tienen por objeto llevar a la práctica la unión económica de Centroamérica, es decir, en cierta forma, aquellos cuya administración no corresponde al Consejo Ejecutivo.

Formalmente, la competencia en la solución de los conflictos corresponde al Consejo Ejecutivo en primera instancia, al Consejo Económica en segunda instancia, y así el conflicto no se pudiera resolver por los medios previstos en el Reglamento, al Tribunal Arbitral, como tercera instancia. A esto hacen referencia los artículos 31, 32, 46 y 4 del Reglamento.

Conforme los términos de los artículos 3 y 4, el procedimiento establecido en el Reglamento es obligatorio, tanto para los Estados, como para los organismos centroamericanos. A este efecto, conforme el artículo 1º, únicamente se entiende por "Parte" o "Partes", los Estados entre los que ha surgido un con

flicto y que buscan su solución de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento. De conformidad con la definición anterior entendemos, que las personas privadas o personas estatales que no sean el Estado mismo, no pueden poner en marcha el procedimiento establecido en el Reglamento, aunque si pueden provocar que lo haga el Estado a que pertenecen, conforme los términos del artículo 32 y participar además, en las deliberaciones y formación de las resoluciones en los términos y con las limitaciones a que hace referencia el artículo 11, cuyo tenor es el siguiente:

"Solo podrán comparecer ante los Consejos Ejecutivo o Económico en las sesiones que éstos celebren para resolver conflictos las personas designadas por los Jefes de las delegaciones que acrediten las partes.

Las personas naturales comparecerán por sí o por medio de mandatario. Las personas jurídicas podrán hacerlo a través de su representante o de apoderado.

La personería, en todo caso, se considerará suficientemente acreditada por el solo hecho de que el Jefe de la Delegación oficial testifique su carácter.

Lo dispuesto en este artículo no impedirá que puedan hacer acto de presencia en las sesiones los representantes de las Asociaciones de carácter público o privado, siempre que así lo acuerden los Consejos.

En relación a la obligatoriedad del procedimiento, el artículo 4 señala:

"La solución de todo conflicto debe buscarse mediante -

arreglo directo entre las partes, y si aquélla no se logra re o no fuere posible de acuerdo con algunos de los instrumentos de la integración económica, se acudirá, por su orden, al Consejo Ejecutivo y al Consejo Económico.

Si este último Consejo no resolviera el conflicto, las partes en el mismo podrán someterlo al arbitraje, de conformidad con el artículo XXVI del Tratado General.

Los procedimientos establecidos en este Reglamento no serán aplicables cuando el conflicto deba ser resuelto por medio de arbitraje".

El carácter sucesivo y obligatorio de un arreglo conforme los términos del Reglamento, es enfatizado por el artículo 5 al señalar:

"El arreglo directo y las demás formas de solución de conflictos previstas en el artículo precedente tienen carácter sucesivo y obligatorio. Por consiguiente, las partes en conflicto no podrán eludirlas acudiendo directamente a las inmediatas superiores".

La obligatoriedad del procedimiento no impide, tal como se establece en el artículo 6, que las Partes, si así lo desean, puedan, en cualquier estado del procedimiento, volver a la fase del arreglo directo, lo cual en el fondo es la aplicación normal de una regla general de tipo procesal, según la cual los conflictos pueden solucionarse por arreglo directo entre las partes.

Las sentencias o fallos resolutorios que se dicten conforme el procedimiento establecido por el Reglamento, las que siempre se emiten en forma de resoluciones, tienen el carácter de una nor



ma individualizada, que solo vale para el caso planteado y debe versar únicamente sobre los puntos planteados por las partes en conflicto. En este supuesto, la jurisprudencia de los Consejos y los arreglos de las partes, que en suma constituyen la jurisprudencia del Derecho de la Integración, se erigen en fuente in directa del Derecho Comunitario Centroamericano, ya que sirven únicamente de precedente para que los Consejos, si lo estiman conveniente puedan fundar sus resoluciones en otras que se hubieren tomado con anterioridad. A lo anterior hace referencia el artículo 7, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Los conflictos que se sometan a los Consejos deberán resolverse con absoluta imparcialidad y objetividad, sin relacionarse con otras cuestiones pendientes o con el cumplimiento de compromisos anteriores.

La resolución, por lo tanto, deberá versar únicamente sobre los puntos planteados por las partes en conflicto y solamente valdrá para el caso que la hubiese motivado. Esto último, sin embargo, no será obstáculo para que los Consejos puedan fundar sus resoluciones en otras que hubieran tomado con anterioridad".

El artículo 7 transcrito, indudablemente complementa al 38, que hace referencia a las fuentes del Derecho Centroamericano de Integración.

El artículo 8 del Reglamento trata de destacar el grado de independencia que deben de tener los miembros de los Consejos cuando conozcan de un conflicto y dicten resolución para resolverlo, lo cual constituye una afirmación del carácter comunitario

de los órganos. Atendiendo a su importancia estimamos conveniente citar textualmente el mismo:

"Cuando los Consejos del Tratado General conozcan de un conflicto, sus miembros deberán actuar con prescindencia de toda consideración derivada de su nacionalidad, dado el carácter centroamericano de los mencionados órganos".

Con este precepto estimamos que se hace una reminiscencia del artículo XIII del Convenio de creación de la Corte de Justicia Centroamericana (238), suscrito en Washington el 20 de Diciembre de 1907, cuyo tenor literal en lo conducente, es el siguiente:

"La Corte de Justicia Centroamericana representa la conciencia nacional de Centroamérica y en virtud tal, los Magistrados que compongan el Tribunal no podrán considerarse inhibidos del ejercicio de sus funciones por el interés que puedan tener en algún caso en cuestión las Repúblicas a donde se derive su nombramiento".

Con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento trata de reforzarse, aún más, la posición de independencia de los miembros de los Consejos, en este caso, respecto a los intereses privados que estén interesados en un conflicto.

De conformidad con el artículo 9 del citado Reglamento, ningún acuerdo o resolución que se adopte, ya sea con ocasión de un arreglo directo o en las instancias previstas, puede contravenir el orden jurídico o los principios en que descansa el Programa de Integración Económica Centroamericana. El mecanismo de esto requiere una explicación. En efecto, si la resolución emana de alguno de los Consejos o del Tribunal Arbitral y ha causado estado, -

estimamos que no es factible alegar su nulidad, ya que no podría plantearse ningún recurso, no solo por inexistencia de un organismo competente para conocer de él, sino porque el mismo orden jerárquico de los tratados en materia de integración impide en cierta forma que la cuestión sea conocida o ventilada a nivel nacional a través de Cortes o Tribunales estatales, salvo en el caso, en que si creemos que es posible, que el Ministerio de Economía estatal deniegue a su nacional la protección que éste pueda solicitarle de conformidad con el artículo 32 del Reglamento. Aún en este caso, algunos consideran discutible, si un recurso de amparo podría prosperar <sup>(239)</sup>. Si existiera el Tribunal o Corte de Justicia Centroamericana, a la que tantas veces hemos hecho referencia, la que indudablemente tendría la misión de controlar la legalidad del sistema de integración, podría conocer ésta de un recurso de tal naturaleza. En el caso de que la violación provenga de un acuerdo de las partes por arreglo directo, si es factible poder plantear ante los Consejos el examen de la validez del acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo XXIV del Tratado General y 28 del Reglamento, que asigna a la Secretaría Permanente (SIECA) el deber de dar cuenta a los Estados de los acuerdos violatorios para que si lo estiman conveniente, lo sometan al Consejo Ejecutivo.

Conforme los términos del artículo 15 del Reglamento, cuando se suscite un conflicto con motivo de la aplicación o interpretación de las disposiciones de los Tratados, convenios, protocolos o acuerdos suscritos y vigentes en los Estados centroamericanos relativos a la integración económica del área, las partes

deberán acudir, obligatoriamente y en primer término, al arreglo directo, salvo en los casos en que los mismos instrumentos determinen otro procedimiento. El arreglo directo no supone una actividad de los Consejos y por tal circunstancia omitimos hacer consideraciones mayores sobre el mismo, ya que lo que nos interesa especialmente, es aquello que represente una actividad singular de los Consejos instituidos por el Tratado General.

Conforme los términos del artículo 31 del Reglamento, el órgano competente para conocer en primera instancia de los conflictos es el Consejo Ejecutivo y conoce en los casos siguientes:

- 1) Cuando no haya sido posible un arreglo directo entre las partes o que el conflicto no sea susceptible de arreglo directo según los términos de los instrumentos de integración correspondientes;
- 2) Cuando a juicio de los Estados que no hubieren intervenido en el arreglo directo, o de la Secretaría Permanente (SIECA), en su caso, se hubiere violado en aquél el ordenamiento jurídico de la integración económica centroamericana o los principios en que ésta descansa.

Ante el Consejo Ejecutivo el derecho de acción corresponde únicamente a los Estados, sean que tengan interés directo en el caso o que sean requeridos por alguna persona natural o jurídica que tenga interés en que se le resuelva el conflicto. En uno y otro caso, al tenor del artículo 32 del Reglamento, que hace referencia a lo comentado, el planteamiento del caso debe hacerse por medio del Ministerio de Economía del Estado respectivo, a través de la SIECA que lo lleva al seno del Consejo Ejecutivo en su sesión más próxima. Es oportuno hacer la aclaración de que al te-

nor del artículo 1º del Reglamento, debe entenderse por Ministerio de Economía, el organismo que a nivel de cada país tiene a su cargo los asuntos de integración económica.

El Reglamento que comentamos, no contiene disposición alguna que haga referencia al número de votos que deben concurrir para que el Consejo Ejecutivo pueda adoptar una resolución al respecto de un conflicto, por lo que creemos que la regla aplicable es la contenida en el artículo XXI del Tratado General, que señala que sus resoluciones deben tomarse por mayoría de votos del total de los miembros del Consejo, es decir, por 3 votos como mínimo.

A los mecanismos de notificación y vigencia de las resoluciones que al respecto de solución de conflictos dicte el Consejo Ejecutivo hacen referencia los artículos 43 y 44 del Reglamento, estableciendo éste último, a los miembros de los Consejos, el deber de no esperar el plazo que se fije en la resolución, para tomar todas las medidas que sean necesarias a fin de que las resoluciones produzcan sus efectos en los respectivos países.

Las resoluciones que al respecto de la solución de conflictos dicte el Consejo Ejecutivo, al causar estado, devienen directa e inmediatamente obligatorias para las partes, lo que hace destacar el carácter supranacional de la competencia. El fundamento de la obligatoriedad de sus resoluciones deviene de las especiales funciones que le están asignadas en los artículos XXI y XXII del Tratado General.

No obstante la extensión y eficacia que fundadamente puedan tener las resoluciones, que al respecto de solución de conflictos

pueda dictar el Consejo Ejecutivo, en algunos casos, por razones especiales de temor a que se rompa el equilibrio político - entre los Estados miembros del Programa de integración, el Consejo Ejecutivo puede verse limitado a dictar resoluciones no imperativas o no definitivas, tal como sucedió en el caso de su - resolución número 103, la primera que dictó en aplicación del - Reglamento, en Julio de 1968 (240).

Omitimos toda consideración respecto a los fundamentos jurídicos de las resoluciones que a este respecto dicte el Consejo Ejecutivo y el Consejo Económico, a lo que hacen referencia los artículos 38 y 51 del Reglamento, por habernos referido ya a dicha cuestión al tratar lo referente a las fuentes del Derecho Comunitario Centroamericano. A este respecto, solo señalarmos:

- 1) Que el artículo 38 es la primera y única disposición que señala cuales son las fuentes del Derecho de la integración económica centroamericana;
- 2) que el citado precepto impide la posibilidad de aplicación - de los Derechos nacionales, aunque se admita la aplicación de - los principios generales del Derecho y de la Ciencia Económica;
- 3) que el precepto citado omite citar expresamente, como fuente, a la equidad, no obstante que la misma ha sido reiteradamente - aplicada en la solución de muchos conflictos. Sin embargo, la - misma podría considerarse incluida dentro de los principios generales del Derecho y utilizarse a efecto de hacer efectivo el principio de la plenitud hermética del Derecho.

El conocimiento en segunda instancia, en la resolución de

los conflictos, corresponde al Consejo Económico, a quien el artículo 46 del Reglamento le asigna una competencia para conocer en revisión. Al efecto, el precepto citado limita la citada competencia en los casos siguientes:

- a) Cuando la resolución viole disposiciones expresas de cualquier instrumento de la integración económica;
- b) Cuando verse sobre materias respecto de las cuales aún no se hubiera formulado una política regional;
- c) Cuando por medio de la resolución, el Consejo Ejecutivo hubiera interpretado por primera vez una disposición de los instrumentos de integración económica y hubiera mérito para creer que tal interpretación es errónea;
- d) Cuando la resolución sea contradictoria con otras que anteriormente hubiera adoptado dicho órgano o el Consejo Económico.

Conforme al párrafo final del precepto citado, el Consejo Económico conocerá también de todos aquellos conflictos que el Consejo Ejecutivo no hubiera podido resolver.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento, el Consejo Económico solo puede actuar a petición de la parte o partes agraviadas, quienes, además, deben solicitar la revisión dentro de un plazo específicamente determinado, - siempre que se dé uno de los motivos de interposición del recurso de revisión, que son los que taxativamente refiere el artículo 46 antes comentado. Además, la resolución que dicte el Consejo Económico como consecuencia del recurso, de conformidad con el artículo 51, debe circunscribirse a los puntos que hubieran sido expresamente planteados por la parte o partes agraviadas.

El trámite de esta segunda instancia es similar al de la primera, pero en virtud de que pueden suscitarse alegaciones y rendirse pruebas, tal como se dispone en el artículo 50, puede calificarse que técnicamente más que una revisión es una apelación, con la característica de que solo es procedente en casos taxativamente determinados.

En cuanto a la técnica de votación para adoptar resolución válida, en virtud de que el Reglamento no contiene disposición al respecto, debe considerarse que debe adoptarlas el Consejo Económico atendiendo a la regla contenida en el último párrafo del artículo XXI del Tratado General, el que para mejor comprensión citamos textualmente:

"Antes de decidir un asunto el Consejo Económico determinará por unanimidad si deberá ser resuelto con el voto concurrente de todos sus miembros o por simple mayoría".

El comentario que hicimos respecto al Consejo Ejecutivo, en cuanto al ejercicio de lo que calificamos una verdadera competencia supranacional en este campo de la solución de conflictos, es totalmente aplicable al Consejo Económico, ya que también sus resoluciones en este aspecto, al causar estado, devienen directa e inmediatamente obligatorias para las partes.

Es indudable que el Reglamento comentado significa, en todo caso, una superación y un perfeccionamiento de la situación anterior al inicio de su vigencia, por cuanto hace más difícil la acción unilateral de los Estados y el empleo de medidas retardatorias, asegurando además, que las controversias o conflictos se resolverán conforme a las normas y principios de un Derecho -



Comunitario y en una forma más expedita, lo cual, no solo es un anhelo general, sino, quizás, lo más indicado, atendiendo a la organización institucional y funcional actual, para la solución de los conflictos que se presenten.

Si como consecuencia de la actuación de los Consejos, Ejecutivo y Económico, no se encontrara solución a los conflictos, las partes pueden someterlos a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVI del Tratado General. El tratamiento del procedimiento de arbitraje excede los límites de nuestro estudio, ya que nuestro tema básico es el análisis de las competencias que en la solución de conflictos tienen los órganos comunitarios permanentes: el Consejo Ejecutivo y el Consejo Económico. En vía de aclaración, solo señalaremos, que por el procedimiento del arbitraje jamás se ha resuelto un conflicto dentro del programa de integración económica centroamericana, ya que - la constitución de tal Tribunal es engorrosa y nada acorde con la celeridad con que deben resolverse los conflictos.

En el curso de este trabajo, reiteradas veces hemos insistido acerca de la necesidad de la constitución de un Tribunal o Corte Centroamericana de Justicia, de carácter permanente, constituida por personalidades idóneas y con absoluta independencia respecto a la voluntad e instrucciones de los Estados miembros, y finalmente, con competencias supranacionales limitadas a resolver únicamente los aspectos jurídicos tendientes a mantener la legalidad del sistema comunitario centroamericano, es decir, tenga a su cargo todo lo relativo a la interpretación y aplicación de los instrumentos del programa de integración económica y reso

luciones de los órganos instituidos. La preocupación sobre este aspecto ya se ha puesto de manifiesto y entre otros documentos y antecedentes, consta claramente en el punto Tercero del Acta Vigesimaltercera correspondiente a la Decimoquinta Reunión Extraordinaria del Consejo Económico Centroamericano, ya mencionada en líneas anteriores, en la que se señala:

"En atención a las responsabilidades que el Tratado General asigna a los Consejos Económico y Ejecutivo, particularmente en sus artículos XX, XXI y XXVI, el Consejo decidió que la Secretaría Permanente se dirija a la Secretaría de la ODECA para solicitarle los informes y documentos sobre los trabajos que se han venido efectuando con base en la Resolución XV emitida por los Ministros de Relaciones Exteriores, en su tercera reunión ordinaria celebrada en Managua en Diciembre del año pasado y que se refiere a la creación de una comisión ad hoc de Juristas que se encargaría de preparar "un texto sobre el establecimiento de un tribunal o Comisión Centroamericana para resolver los problemas de interpretación y aplicación de los tratados de integración económica". El Consejo Económico estimó necesario conocer los trabajos de la referida Comisión de Juristas, ya que los mismos, por su naturaleza, pueden influir en el desenvolvimiento futuro del programa de Integración Económica Centroamericana y, por consiguiente, en el quehacer que los instrumentos jurídicos de dicho Programa ponen a cargo del Consejo Económico y Ejecutivo, especialmente en lo que se refiere a la obligación de resolver

los conflictos que se suscitan con motivo de la aplicación o interpretación de los tratados centroamericanos sobre la materia".

Es indudable, que al entrar en vigor el Tratado de creación del Tribunal o Corte Centroamericana de Justicia, a que hemos hecho referencia, el comentado Reglamento sobre Procedimientos para Resolver Conflictos, pierda su vigencia, ya que lógicamente dicho Tratado, por ser general a todo el programa de integración económica centroamericana, derogaría todas las disposiciones que sobre solución de conflictos estuvieran contenidas en otros tratados, convenios y protocolos relativos al mismo proceso de integración, en cuanto se opusieran al mismo, lo cual conllevaría la derogación del citado Reglamento y también quedarían asimismo derogados los artículos XXVI del Tratado General y XIII del Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, que son los pilares fundamentales sobre los que se asienta el vigente Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos.

Dejamos planteado hasta aquí, lo que actualmente es el ejercicio de la competencia de los órganos creados por el Tratado General, para la solución de controversias. En tanto el Mercado Común Centroamericano no realice, en su desarrollo, los avances institucionales que las nuevas etapas de la integración le han de exigir, es conveniente, además de lo que ya se expuso en líneas anteriores, que mediante una adecuada reforma de los términos del Tratado General, o mediante la celebración de un convenio especial, se dote a los respectivos órganos comunitarios, en forma clara y precisa, de nuevas competencias, que les permi-

tan, en forma más decidida y directa, participar en la solución de las controversias que por la aplicación del Tratado General y los diversos protocolos y convenios existentes, puedan surgir entre los diversos Estados miembros, entre éstos y los particulares y otras organizaciones internacionales y aún, entre los particulares entre sí, los que han de tener, indudablemente, - acceso directo a los órganos poseedores de las competencias jurisdiccionales. Es conveniente, en la etapa actual que vive el proceso de integración centroamericana, que se fijen con precisión los diversos grados de participación, que en la solución de las controversias, ha de tener cada uno de los órganos comunitarios. Se ha de fijar también, con la necesaria claridad, el grado de eficacia que habrán de tener las decisiones que a este respecto se dicten, porque no escapa a la atención de ningún es tudioso de éstos problemas, la necesidad de que dichas decisiones sean no solo de cumplimiento obligatorio, sino que además, sean susceptibles de ejecutarse con la eficacia que es necesaria.

Las ideas expuestas anteriormente tendrán validez, en tan to el desarrollo económico e institucional del Mercado Común - Centroamericano permita la creación, en forma permanente e inde pendiente de los Estados miembros, del Tribunal o Corte de Justicia al que ya hemos hecho referencia, que goce de competencias amplias, claras y precisas para conocer y decidir sobre los varios problemas que el desarrollo del programa integracionista - centroamericano planteará en el futuro, no solo entre los Estados miembros del Programa de integración, sino entre los parti-

culares, entre los Estados y las organizaciones internacionales con las que trabee contacto en relación a las cuestiones de integración, o finalmente, entre los Estados y los particulares. Habrá de garantizarse, además, que los fallos que dicte gozarán de una ejecución inmediata y total, sin más exigencias que la simple presentación de los mismos, por parte de los interesados, ante los Tribunales de los Estados miembros. La creación, funcionamiento y ejecución de fallos de este Tribunal, necesariamente supone, las correspondientes reformas y adaptaciones de las Constituciones de los Estados miembros, porque actualmente, ninguna de las Constituciones de los Estados Centroamericanos admite, ni en su tenor, ni en su espíritu, la posibilidad de actuación de un Tribunal comunitario. La concepción actual, a nivel de las Constituciones centroamericanas, es atribuir a los respectivos tribunales nacionales la competencia exclusiva de juzgar y ejecutar lo juzgado, respecto de las cuestiones judiciales y litigiosas que se sucedan dentro del respectivo territorio nacional.

La realización de los cambios planteados, en concreto la creación del Tribunal en mención, requiere, previamente, un cambio en el enfoque político del proceso integracionista y en la actitud política de los Gobiernos respecto del Programa y perspectiva del esfuerzo integracionista, lo que indudablemente ya se puso en evidencia, en parte, entre otros, al formularse la Declaración de los Presidentes de América, en la que los Presidentes de los Estados miembros del Mercado Común Centroamericano, se comprometieron a armonizar la legislación básica necesaria para el proceso de integración económica (241).

G) La competencia para velar por la integridad del ordenamiento comunitario.

La actuación, tanto del Consejo Ejecutivo, como del Consejo Económico Centroamericano, en el arreglo de las controversias, a que se hizo referencia en el punto anterior, pone de manifiesto una cierta capacidad de los órganos comunitarios para asegurar la fiel y estricta observancia de las normas jurídicas por las que se rige la integración económica centroamericana. Hasta el momento únicamente se ha hecho referencia a aquellos casos en los que la controversia, diferencia o conflicto, solo pueden ser objeto de conocimiento por parte de los órganos comunitarios, si se produce una iniciativa previa de las partes involucradas o directamente interesadas en la controversia.

Interesa ahora destacar, lo que actualmente es el ejercicio de la competencia que estudiamos. Se trata, no precisamente de los casos en que es necesario que los Estados o partes interesadas en una controversia o conflicto provoquen la actuación de los órganos comunitarios, sino exactamente, aquellos casos en los que esa actuación se da por iniciativa de los propios órganos comunitarios. Indudablemente, la actuación de los órganos por propia iniciativa, es una consecuencia del papel que se les ha asignado a los órganos, y las amplias potestades que tienen para desempeñarlo. En el caso del Consejo Económico, la posibilidad de actuación está implícita en las funciones que le confieren los artículos XX y XXI del Tratado General. En el caso del Consejo Ejecutivo, por lo establecido en el artículo XXII del mismo Tratado General. En el caso de la SIECA, por las am-

plias potestades que se le asignan en el artículo XXIV del Tratado General (242).

El funcionamiento del mecanismo establecido en el artículo XXVI del Tratado General y el desarrollo del mismo contenido en el Reglamento sobre Procedimiento para la Solución de Conflictos, exige: 1) que debe existir una diferencia, controversia o conflicto entre dos o más partes; y 2) que la acción que promueva el arreglo a nivel institucional ha de provenir de las propias partes.

El conocimiento y resolución de las controversias que los Estados no elevan a conocimiento de los órganos y el tratamiento de aquellas situaciones, susceptibles no de traducirse en una controversia o conflicto, exige actuaciones singulares de los órganos, sin que para ello sea necesario que se provoque, mediante una expresa solicitud, la actuación de los mismos. Nos puede arrojar luz a este respecto, el caso planteado en la Primera Reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en el mes de Julio de 1962, en el que al discutirse el punto 5º de la Agenda referente al "orden en que se está cumpliendo el Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y el Protocolo de Managua" y partiendo de lo expuesto en una Nota de Secretaría, en la que señalaba el caso de la modificación por parte de Nicaragua de los aforos correspondientes a determinadas subpartidas arancelarias, ya equiparadas por el Protocolo (243). En dicha oportunidad, el Representante de Nicaragua expresó la opinión, de que antes de considerar la procedencia o improcedencia de la medida tomadas por su Gobierno, se discutiera si está o no dentro de la atribución -

de la Secretaría Permanente, presentar ante el Consejo Económico un asunto como el que se suscitó, sin que previamente lo solicitara alguno de los Estados miembros que se considerasen - afectados. Los representantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, adoptaron la posición de estimar que la presentación ante el Consejo Ejecutivo de un asunto como el que se discutía, estaba dentro de las atribuciones de la SIECA, de conformidad con el Tratado General. Con la posición antes indicada, adoptada por los Representantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, en el curso de la votación respectiva, se reconoció explícitamente la capacidad de la SIECA para llamar la atención hacia - la observancia por parte de un estado miembro de sus obligaciones adquiridas bajo un Tratado. No obstante, es obvio, que un órgano al que se ha investido de la responsabilidad de velar - por la correcta aplicación de un Tratado, pueda y deba tomar - iniciativas de la naturaleza de la que se ha mencionado. A partir del precedente indicado, en las notas y dictámenes de la - SIECA figuran, con cierta frecuencia, iniciativas encaminadas a salvaguardar la integridad del ordenamiento comunitario centroamericano.

Algunas observaciones sobre casos especiales que se han - presentado, facilitará la comprensión y caracterización de la - competencia bajo análisis.

Uno de estos casos, es el que se originó con motivo de no haber tomado El Salvador las medidas requeridas para establecer un régimen transitorio de equiparación progresiva de gravámenes a la leche en polvo, según lo estipulado en el capítulo I del -



Protocolo de San José (1962) al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo XIV del Convenio últimamente mencionado. La objeción de El Salvador consistía, en que, previamente a la vigencia de los aforos de equiparación progresiva, debía darse cumplimiento al establecimiento del sistema de cuotas de importación desde terceros países, al que hace referencia el Capítulo II del Protocolo. A este respecto, la SIECA dictaminó, sosteniendo que el sistema de cuotas establecido por el Protocolo no constituye una condición que suspenda la vigencia de los aforos de equiparación progresiva, y que por lo tanto, debe aplicarse desde que el instrumento entró en vigor. Sobre este asunto el Consejo Ejecutivo adoptó, por mayoría de votos, la resolución número 41, la que al efecto dice:

"El Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración Económica Centroamericana,

RESUELVE:

1º.- Que la vigencia de los aforos de equiparación progresiva acordados para la leche en polvo en el Protocolo de San José, no está supeditada a la fijación de cuotas de importación de terceros países para este producto, a que se refiere el mismo instrumento.

2º.- Que dichos aforos deberán aplicarse conforme lo establecido en el artículo XVI del Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación (Protocolo de San José)".

El asunto llegó a conocimiento del Consejo Económico Centroamericano, el cual ratificó la resolución número 41 del Consejo Ejecutivo, mediante su resolución número 38.

Un caso más, lo provocó el sistema cambiario implantado por el Gobierno de Costa Rica a partir del 2 de Enero de 1967, por motivo de serios problemas de balanza de pagos y de las condiciones fiscales imperantes, sin haber tomado previamente los pasos preventivos que para estas situaciones prevé el párrafo 3º del artículo X del Tratado General, el que al efecto señala:

"En caso de dificultades graves de balanza de pagos que afectaren o pudieran afectar las relaciones monetarias de pagos entre los Estados signatarios, el Consejo Ejecutivo, de oficio o petición de una de las partes, estudiará inmediatamente el problema en colaboración con los Bancos Centrales, a fin de recomendar a los Gobiernos signatarios una solución satisfactoria compatible con el mantenimiento del régimen utililateral de libre comercio".

La adopción, sin consulta, del sistema cambiario, provocó de inmediato la reacción de los órganos centroamericanos competentes. Tuvo lugar una Reunión del Consejo Económico Centroamericano y el Consejo Monetario Centroamericano, de la cual emanó el acuerdo siguiente:

"1º.- Cuando por razones de defensa de la balanza de pagos, cualquiera de los Estados miembros del Tratado General se vea obligado a implantar restricciones de tipo cambiario, las medidas correspondientes no deberán afectar -

en modo alguno el funcionamiento eficiente e ininterrumpido del Mercado Común Centroamericano.

2º.- La aplicación de un sistema de tipos de cambio diferenciales en las transacciones de Costa Rica o del resto de Centroamérica, contenido en el nuevo régimen cambiario en vigencia en ese país a partir del 2 de Enero del año en curso, afecta al funcionamiento del Mercado Común Centroamericano al alterar de modo desfavorable las condiciones en que ha venido operando el libre comercio de los productos originarios de sus territorios.

3º.- Por las razones expuestas, en la aplicación del nuevo régimen cambiario y demás medidas que llegaran a adoptarse en este campo en Costa Rica, deberán quedar exceptuadas las transacciones comerciales que se realicen entre ese país y los demás países miembros del Mercado Común. - En consecuencia, en dichas transacciones deberá aplicarse de manera general el tipo de cambio oficial declarado ante la Cámara de Compensación Centroamericana.

4º.- Los pagos correspondientes a las transacciones entre Costa Rica y el resto de Centroamérica seguirán efectuándose como hasta ahora, a través de la Cámara de Compensación Centroamericana.

5º.- Los problemas de pago surgidos con motivo del establecimiento del nuevo régimen cambiario en Costa Rica, - deberán resolverse de conformidad con los lineamientos del presente acuerdo. En tal sentido, la Delegación de Costa Rica gestionará la revisión de los pagos pendientes

para darles una solución adecuada dentro del ininterrumpido funcionamiento del libre comercio y del sistema cen  
troamericano de compensación.

62.- El Consejo Económico y El Consejo Monetario declaran, que es necesario que los demás países de Cent  
roamé  
rica presten la más amplia colaboración a Costa Rica pa  
ra contribuir a la mejor solución de los problemas fis  
cales y de balanza de pagos que afronta ese país. Asimismo, el Consejo Monetario Centroamericano pondrá en acción todos los medios a su alcance para facilitar a las autoridades de Costa Rica la cooperación financiera nacional e internacional que sea necesaria en las presentes circunstancias.

72.- La Delegación de Costa Rica manifiesta: a) que las medidas tomadas por el Banco Central de Costa Rica fueron aprobadas con carácter de emergencia en defensa de la estabilidad económica y de sus reservas monetarias internacionales, con base en las atribuciones que le concede el artículo 97 de su Ley Orgánica y tomando en cuenta las disposiciones del artículo III del Tratado General. b) - que por las razones expuestas y considerando: i) la firme decisión de Costa Rica de fortalecer y mantener los postulados del Programa de Integración Económica Cent  
roamerica  
na; ii) que el mantenimiento de las restricciones cambiarias aprobadas entorpecería de hecho la marcha normal del programa de integración; iii) las amplias manifestaciones de solidaridad expresadas por los otros países, suscriben ad-referendum la anterior resolución y se comprometen a -

gestionar la inmediata adopción de las medidas necesarias para que el normal funcionamiento del Mercado Común no se interrumpa.

82.- El Gobierno y el Banco Central de Costa Rica comunicarán a los Gobiernos y a los Bancos Centrales de los demás países miembros del Tratado General, las medidas que hayan adoptado para dar cumplimiento a los acuerdos aquí consignados, el martes 10 de Enero de 1967, o antes si fuera posible. Entre tanto los Gobiernos y Bancos Centrales de los demás países miembros se abstendrán de tomar, con referencia a las materias tratadas en la presente Reunión, cualesquiera medidas que puedan perjudicar el eficiente e ininterrumpido funcionamiento del Mercado Común Centroamericano.

92.- El Consejo Económico y el Consejo Monetario acuerdan celebrar una segunda Reunión conjunta en San José el 18 de Enero de 1967, si fuere necesario, a fin de examinar el desarrollo de los acontecimientos y adoptar las medidas complementarias que puedan requerirse".

La segunda Reunión prevista, ya no se celebró, en virtud de que Costa Rica comunicó a los demás países miembros que el acuerdo antes indicado ya se había ratificado y también, que ya se habían adoptado las medidas que la situación planteada requería.

De la lectura de la resolución transcrita, se llega a comprender fácilmente, el grado de disciplina común a que se han sometido voluntariamente los Estados, por virtud del Tratado General y de los demás instrumentos que rigen el Programa de integra

ción económica de Centroamérica, en la conducción de los asuntos económicos internos de cada Estado. Se puede destacar, que Costa Rica no ejerció ninguna acción tendiente a hacer valer aspectos que tuvieran relación con lo que podría denominarse - "Excepción de jurisdicción interna", es decir, que el asunto - fuera de la exclusiva competencia de la jurisdicción interna, lo que en otra época y circunstancias, hubiera sido alegado in dudablemente.

Otro caso interesante, es el que se originó como consecuencia de la aplicación en el año 1967, por parte de Nicaragua de su Ley de Licencias Comerciales, promulgada el 9 de Febrero de 1961. El Consejo Ejecutivo analizó dicha Ley en su Vigésimo-séptima Reunión, celebrada en Julio de 1967, habiéndose basado la discusión en un documento elaborado por la SIECA, en el que se contenía su opinión jurídica sobre la compatibilidad de la - citada Ley con el ordenamiento jurídico de la integración. Según la Ley, las mercancías que procedían de los demás mercados del área no podían consignarse a personas que previamente no hu bieran obtenido la licencia. En opinión de la SIECA se carecía de razón legal para aplicar la Ley al comercio intra-centroamericano, por no tratarse éste de un comercio de importación y en consecuencia, la Ley era violatoria del Tratado General, por im plicar una restricción del libre comercio. Entre otras alegaciones Nicaragua señaló, que tenía conocimiento de que en los - otros países existían disposiciones similares a las que él aplicaba. Finalmente, después del intercambio de alegaciones, el - Consejo Ejecutivo adoptó la resolución número 84, la que en su

parte conducente, señala:

"RESUELVE:

1.- Que la Secretaría General realice un estudio sobre la situación que sobre este particular priva en cada uno de los países, a fin de determinar la naturaleza general del problema.

II.- Que el Gobierno de Nicaragua suspenda la aplicación de la Ley de Licencias Comerciales a las importaciones - centroamericanas.

III.- Que el Consejo Ejecutivo, dentro de un plazo de tres meses tome una resolución definitiva sobre el particular, sobre las base del estudio que presente la SIECA".

La parte de esta resolución que ahora nos interesa, es la sección II, en la que se ordena la suspensión de la aplicación de una ley nacional, por considerarse que la misma es incompatible con el ordenamiento comunitario centroamericano.

En cumplimiento de la resolución del Consejo Ejecutivo, aún cuando no se derogó la ley de Licencias Comerciales, el Ministerio de Economía de Nicaragua dirigió, en su oportunidad, instrucciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y éste a la Dirección General de Aduanas, a los efectos de que se suspendiese - la aplicación de dicha Ley, en lo que se refiere a las importacioones centroamericanas.

La competencia bajo comentario, o sea la referencia de velar por la integridad del ordenamiento comunitario, es ejercida - en la actual práctica centroamericana, por los tres órganos creados por el Tratado General, a saber, el Consejo Ejecutivo, el Con

sejo Económico Centroamericano y la Secretaría Permanente (SIECA), ya sea en forma individual o en forma conjunta, sin que en las actuaciones se excluya la posibilidad de participación de órganos creados por otros Instrumentos, tal como en el caso comentado anteriormente, en el que intervino el Consejo Monetario Centroamericano. Generalmente, las iniciativas parten de la SIECA, quien se vale para el desempeño de esta función, de dos eficaces medios, - como son, por una parte, sus facultades de inspección y de obtención de información, y por la otra, la de interpretación, todo - dentro de las extensísimas funciones que le atribuye el artículo XXIV del Tratado General. Es sobre la base de los dictámenes y - opiniones emitidas por la SIECA, que el Consejo Económico Centroamericano y el Consejo Ejecutivo, generalmente, discuten y resuelven actualmente, acerca de las medidas más convenientes a tomar - para salvaguardar la integridad del ordenamiento comunitario.

Para concluir este trabajo, nos permitiremos hacer la consideración final siguiente.

En el futuro, a medida que se vayan superando las diversas etapas de desarrollo del Mercado Común Centroamericano, y se vayan planteando, cada vez con más rigor, nuevas y más complicados problemas y conflictos, surgirá la necesidad de crear un sistema de salvaguarda del ordenamiento comunitario, no sólo más efectivo, sino que manifieste mayor grado de coordinación, entre los órganos que participan en tal labor. Al efecto, se planteará la situación de ser insuficientes las formas de actuación individual o conjunta, si no va unido a las mismas una efectiva y real posibilidad en los órganos comunitarios, de imponer, a cada una de las partes que participan en el Programa, sus decisiones, y eventualmente, de ejer-



cer las acciones eficaces correspondiente, si se manifestara - negativa o resistencia para cumplir las decisiones comunitarias. En la etapa actual que vive la integración económica centroamericana, el cumplimiento de las decisiones comunitarias, por parte de los Estados miembros, en cierta forma es voluntaria, sobre la base de un convencimiento acerca de su obligatoriedad y del convencimiento sobre la necesidad de que haya una fuente común de - decisiones. La complicación de los problemas que en el futuro se presenten, exigirá, que esté expresamente regulada la preeminencia de los órganos comunitarios y la eficacia de sus resoluciones.

Lo anterior, está íntimamente vinculado al problema de la - existencia de toda una organización cuyos órganos tengan competencias supranacionales perfectamente definidas. Sobre ésto ya hemos hecho comentarios en líneas anteriores y solo señalaremos aquí, - que su establecimiento y futura actuación, supone un cambio de la mentalidad política con que se enfoque el proceso integracionista centroamericano, el que en última instancia ha de permitir una reforma substancial de las respectivas Constituciones, a efecto, de que dentro del marco de la estructura legal fundamental de cada - país centroamericano, se permita, no solo el funcionamiento y actuación de órganos con más fuertes y definidas competencias supranacionales, sino que los mismos puedan adoptar sus decisiones con absoluta independencia, sin consideración de intereses estrictamente nacionales, y con plena capacidad de poderlas hacer respetar e imponer, o en su caso, de poder poner en funcionamiento o - que se pueda poner, en funcionamiento, el aparato jurisdiccional adecuado, que pueda conocer la infracción o negativa de cumpli-

miento, y eventualmente, imponer la sanción que el caso amerite.

Sabemos perfectamente, que para llegarse a las etapas y estados de perfeccionamiento institucional y funcional sugeridos, tendrán que superarse dentro del ámbito centroamericano, no solo evidentes problemas de incomprensión, sino la resistencia de grupos e intereses, a quienes de ninguna manera les conviene que se escapen a los controles estrictamente nacionales, una serie de - problemas y situaciones a los que ellos están vinculados y sobre cuya solución favorable a sus intereses pueden influir, si los - mismos se resuelven, dentro de los estrechos marcos de las autoriidades y del ámbito territorial nacional.

La superación de las etapas comentadas, permitirá, en defi-nitiva, que se estructure a cabalidad en Centroamérica un verdadeero Derecho Comunitario.

## CONCLUSIONES

- 1) La aparición de los grandes fenómenos de organización internacional, han determinado situaciones de verdadera limitación de la soberanía de los Estados, en muchos aspectos. En la época actual, la soberanía clásica de los Estados está en un proceso de debilitante debido al desarrollo alcanzado por las organizaciones internacionales y los diversos procesos de integración, lo cual tampoco significa, en modo alguno, su desaparición. Si bien es cierto, que la soberanía absoluta del Estado ha perdido vigencia, también lo es, que las diversas modalidades de organización de la comunidad internacional y los procesos de integración y sus diversas modalidades: económica, social, cultural y política, son aún débiles como para constituir una fuerza eficaz de control o de dominio de los Estados, los que sin embargo, han sufrido mengua en todos aquellos aspectos de expresión de un poder absoluto.

La aparición del "interés general" ha determinado un cambio de mentalidad y orientación, no solo en sectores doctrinales, sino en la mente de políticos y estadistas, quienes han llegado a comprender que el aislamiento es perjudicial, que el desarrollo exige colaboración y supone interdependencia y que el dominio de la técnica y de la ciencia, solo puede lograrse bajo un programa de asistencia mutua entre los Estados, con intereses, problemas y características análogas. Plantear hacia realidades estos nuevos principios, supone un cambio en la concepción que se tenía de la soberanía y una aceptación de la -

existencia de un "interés general" o de un "interés comunitario".

La doctrina de la soberanía que inspira los ordenamientos constitucionales de los Estados Centroamericanos, debe formularse, en forma tal, que responda, en forma adecuada, a las necesidades del proceso integracionista.

- 2) Todo proceso de integración debe ser voluntario, de derecho y planeado.

Como proceso voluntario, debe ser el resultado de la libre concertación de los intereses de los Estados participantes y de las fuerzas, económicas y sociales, que lo impulsan y orientan.

Como proceso de derecho, lo que supone la existencia de un orden jurídico, debe ser el resultado del predominio de las normas jurídicas que encuadran el juego de las fuerzas participantes en el proceso. Esto supone, que a dichas normas les corresponde la función de fijar el marco para la acción de los sujetos del proceso y limitar las competencias de los órganos comunes creados. Esto supone también, el funcionamiento de un mecanismo jurisdiccional que controle la legalidad de los actos jurídicos dictados, e interprete las normas jurídicas creadas.

La afirmación de que el proceso de integración debe ser planeado, parte de la idea de que es siempre un fenómeno complejo, en el que deben conciliarse intereses nacionales y re-

gionales diversos, que a veces pueden resultar contradictorios, y en el que no caben acciones incoherentes y aisladas, sino que por el contrario, se requiere una aproximación gradual y sistemática a las metas fijadas.

- 3) Aceptamos, absolutamente, la idea de la existencia del Derecho Comunitario como un Derecho científicamente autónomo y como consecuencia, independiente del Derecho Internacional.

Se destacan, como notas características del Derecho Comunitario, las de ser:

- a) de elaboración y contenido pragmático;
- b) un Derecho operativo;
- c) un Derecho transitorio;
- d) un Derecho flexible.

Un Derecho Comunitario debe caracterizarse, además:

- 1) Por tener la misma significación en todos los Estados miembros, lo cual supone, que su interpretación y aplicación deben ser unitarias;
  - 2) por tener la misma fuerza obligatoria en todos los Estados miembros. Esto significa, que los efectos del Derecho Comunitario tienen que ser iguales en todos los ordenamiento jurídicos y vincular por igual a todos los Estados miembros;
  - 3) por representar una categoría jurídica invariable dentro de todos los Estados miembros, lo cual supone, que los Estados miembros no puedan, unilateralmente, ni directa o indirectamente, - modificarlo o abrogarlo.
- 4) El proceso de integración centroamericana está regido en la actualidad por un número considerable de Tratados, Convenios, -

Acuerdos y Protocolos. Fundamentalmente dos factores han condicionado este proceso. De una parte, la determinación de realizarlo en forma gradual y progresiva; de otra, el criterio eminentemente pragmático con que se han enfocado los cambios requeridos al efecto.

La fuente primordial del Derecho Comunitario Centroamericano no está constituida por la gama de instrumentos referidos, los que constituyen su medio de creación formal y escrita por excelencia, aprotando la mayoría de las normas que integran el ordenamiento jurídico comunitario centroamericano. La modificación y derogación de las normas de este ordenamiento se realiza empleando el mismo método, es decir, en términos generales, los tratados.

Al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, puede calificársele como el instrumento constitutivo básico y central del programa de integración económica centroamericana, ya que establece para dicho proceso, el sistema institucional básico y porque contiene el orden normativo alrededor del cual giran la gran mayoría de los demás instrumentos, tanto los anteriores, como los posteriores a él, completando sus disposiciones, perfeccionándolas o extendiendo su ámbito de aplicación a otros campos cubiertos por el programa de integración.

- 5) Para poder suscribir los Tratados y participar como miembro en el actual programa de integración económica centroamericana, se requiere:
  - a) Ser Estado;
  - b) Estar situado en Centro América;

- c) depositar en forma el instrumento de ratificación;
  - d) mantener un régimen económico que no sea incompatible con el Tratado General y con los demás instrumentos que rigen el programa.
- 6) Los instrumentos que regulan la integración económica centroamericana, no están abiertos, ni contemplan la posibilidad de que a ellos se adhieran terceros Estados ajenos al área centroamericana. No solo no está prevista una posible adhesión, sino tampoco podría entenderse que ello es posible por el mero hecho de no existir, en algunos instrumentos, disposición contraria al respecto. En cuanto a la participación de la República de Panamá, se han expresado opiniones oficiales diversas, en las que se manifiesta que se vería con simpatía su participación, pero ello no solo no se ha traducido en nada concreto, sino que creemos, que en todo caso sería preciso, la negociación y suscripción de un Tratado o Acuerdo especial de Asociación.
- 7) Varios de los instrumentos que rigen el programa de integración económica centroamericana, introducen ciertas limitaciones a la capacidad de contratar de los Estados miembros, con el fin indudable de salvaguardar con ello la integridad del marco normativo creado por los tratados de integración económica y además, - salvaguardar los intereses centroamericanos. Estas limitaciones afectan, indudablemente, a la soberanía de los Estados, en cuanto a su libertad de contratación. Entre estas limitaciones, cabe mencionar: 1) la "cláusula centroamericana de excepción"; y 2) el compromiso de no suscripción unilateral con países no cen

troamericanos, de tratados que afecten los "principios de la - integración económica centroamericana".

8) Una manifestación concreta del principio de equidad, dentro del programa de integración económica centroamericana, se tiene en el llamado principio de "desarrollo equilibrado" o "desarrollo armónico", el que encuentra su fundamento, en la aspiración de los Estados centroamericanos de obtener, a través del proceso - integracionista, un desarrollo al mismo tiempo individual y con junto.

9) Dentro del programa de integración económica centroamericana, - el órgano administrativo por excelencia es el Consejo Ejecutivo, el que por tal motivo, está llamado a centralizar y concontrar - la potestad reglamentaria, aunque ésto tiene, en la realidad, no torias e importantes excepciones, en consideración a la atribución de esa función al Consejo Económico Centroamericano.

El Consejo Ejecutivo, no está investido de funciones norma tivas discrecionales, sino que por el contrario, le son atribuídas en forma expresa, y únicamente pueden ejercitarse orientadas hacia fines determinados, es decir, en forma limitada, ya que en el ejercicio de tal función habrá de contraerse a establecer dis posiciones jurídicas que complementen las normas establecidas o para viabilizar o garantizar su ejecución.

La práctica comunitaria pone de manifiesto, que el Consejo Económico Centroamericano participa de manera activa en el proce so de preparación y emisión de reglamentos, lo que creemos que se ha debido, a una falta de reconocimiento de la libertad de acción



que el Consejo Ejecutivo necesita para el cumplimiento adecuado de las funciones que le están asignadas, o a una inadecuada interpretación de las disposiciones que regulan sus competencias.

Debe rectificarse la práctica y fortalecerse la posición del Consejo Ejecutivo, definiéndose, clara y ampliamente, sus funciones y las facultades que se le otorgan para el ejercicio de las mismas, restituyéndosele además, la plena competencia reglamentaria que le corresponde, a efecto de que pueda cumplir a cabalidad, la función de ejecutor y administrador del programa de integración económica centroamericana y asimismo, esté en condiciones de dictar reglamentos que puedan gozar de la calificación de verdaderas decisiones comunitarias unilaterales y autoejecutables.

- 10) Dentro del marco institucional establecido por el Tratado General, la capacidad para actuar y generar normas de carácter obligatorio la comparten, el Consejo Ejecutivo y el Consejo Económico Centroamericano. No obstante, en el proceso de formación de los actos comunitarios, intervienen otros órganos e instituciones, como son, la SIECA y el ICAITI.

Desde un punto de vista más bien formal, pueden distinguirse dos clases de actos comunitarios: las Resoluciones y las Recomendaciones. Ninguno de los dos, tiene mención precisa dentro del contexto del Tratado General y tampoco, una indicación respecto a efectos y eficacia de los mismos. Esta imprecisión, constituye una laguna legal que debe resolverse, no sólo dando le denominación a los distintos tipos de actos que puedan rea-

lizar los órganos comunitarios, sino fijándoles, cierta amplitud y precisión simultáneas, sus efectos, y el grado de eficacia que puedan o deban tener.

Dentro del Derecho Comunitario Centroamericano, son las Resoluciones las que configuran fuente de nuevos derechos y obligaciones. Las Recomendaciones, no tienen fuerza jurídica obligatoria, solo se formulan con carácter general, y tienen por objeto, generalmente, que los Estados miembros hagan o se abstengan de hacer algo en interés de la marcha normal de la integración económica centroamericana, adoptando, en su orden interno, determinadas medidas de carácter sustantivo o de procedimiento.

- 11) La supranacionalidad, es una condición básica en la estructuración del derecho dinámico que un proceso de integración requiere. Atribuye individualidad jurídica a la organización o comunidad a la que se aplique. En su caracterización, tal condición, no debe referirse al órgano mismo, sino a la competencia o competencias que se atribuyan a los órganos. No obstante la falta de un criterio doctrinal uniforme, respecto a lo que caracteriza a la supranacionalidad y sus efectos, podemos señalar los siguientes rasgos típicos: la existencia y actuación de órganos, independientes de los propios de los Estados, con competencia y capacidad para tomar decisiones jurídicamente obligatorias, de validez erga omnes, capaces de afectar las relaciones exteriores y asuntos internos de los Estados participantes, y aún a los particulares, sin que para ello se requiera, en el seno del órgano que toma la decisión, ni el voto unánime de los miembros, ya que pue

de bastar el de la mayoría, ni la ratificación o aprobación, -  
previa a su vigencia de los organismos legislativos de los Es-  
tados.

- 12) El concepto de supranacionalidad supone, en definitiva, la trans  
ferencia de ciertos derechos de soberanía por parte de los esta-  
dos miembros del convenio o tratado constitutivo, en favor de -  
los órganos comunitarios.

Es en el concepto de supranacionalidad, en donde debe fi-  
jarse la íntima esencia del Derecho comunitario, ya que puede -  
considerarse, que jurídicamente, la supranacionalidad es la cau-  
sa de éste y es en virtud de su existencia, que puede explicarse  
y realizarse todo el complejo mecanismo de un derecho comunita-  
rio, así como también, las principales características funciona-  
les de éste.

- 13) El desarrollo, en todos los aspectos, que la comunidad internacio-  
nal necesita, y en concreto el ámbito regional centroamericano, -  
únicamente podrá lograrse si se admite y estimula la creación de  
organizaciones en las que actúen órganos con competencias suprana-  
cionales, manifestadas éstas en los campos clásicos del poder pú-  
blico (legislativo, ejecutivo y judicial) y con personalidad jurí  
dica propia e independencia funcional respecto de los Estados -  
miembros.

En el concepto de supranacionalidad, radica apreciable por-  
ción de la magnitud del complejo problema jurídico que comporta -  
el proceso integracionista centroamericano. Sin la aplicación óp-  
tima del criterio de supranacionalidad, es absolutamente inapli-

~~cable e inoperante, la definitiva implantación en el ámbito cen-~~  
~~troamericano, de un derecho comunitario, eficaz, dinámico y per-~~  
~~durable.~~

En el derecho comunitario centroamericano, es necesario -  
que se reunan, simultáneamente, las tres características siguien-  
tes:

- a) Sistema institucional y órganos comunitarios, con efectivas,  
amplias y claras competencias supranacionales, en la que los  
mismos sean además depositarios, de la dinámica que necesaria-  
mente debe tener el proceso de integración centroamericano. -  
El fortalecimiento de las competencias supranacionales es una  
necesidad, como el único medio de afianzar el derecho comuni-  
tario centroamericano y de realizar, eficazmente, la integra-  
ción económica.
- b) Jerarquía estructural superior y autónoma del derecho comuni-  
tario, tanto en su concepción sustantiva, como en la adjetiva.
- c) Garantía de control del derecho comunitario, respecto de la -  
jurisdicción constitucional de los Estados vinculados por los  
tratados que formen el marco legal del proceso integracionis-  
ta.

Esta debe ser la meta del programa integracionista centro-  
americano y la etapa final a que políticamente debe aspirarse  
en la función integradora.

- 14) La salvaguarda de la integridad del ordenamiento comunitario cen-  
troamericano supone una más efectiva labor de coordinación entre  
los órganos comunitarios que participen, y una posibilidad efec-  
tiva de que dicten resoluciones con plena eficacia en todo el ám-

bito territorial centroamericano, no solo en cuanto a la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de los Estados, organizaciones internacionales o personas individuales o jurídicas implicadas en el proceso integracionista, sino en cuanto a la posibilidad de poner en funcionamiento, en caso de negativa o resistencia, el mecanismo jurisdiccional adecuado, que haga respetar la integridad de la decisión. La afirmación definitiva de la competencia supranacional de los órganos comunitarios, constituye una cuestión de urgencia en el desarrollo del derecho comunitario centroamericano y solo ellas darán eficacia y sentido a la genuina aspiración de unidad e integridad en la concepción, aplicación e interpretación del derecho comunitario centroamericano.

- 15) Todo movimiento de integración económica y en concreto el movimiento de integración centroamericana, debe contar en su estructura, con una Corte o Tribunal de Justicia, de carácter permanente y funciones claras y precisas, no solo para desarrollar tales normas y a fijarles sus alcances, sino para realizar la función de interpretar y aplicar, en forma también clara y precisa, las normas comunitarias, en caso de conflicto entre los Estados miembros, entre éstos y los particulares u organizaciones internacionales implicadas, o entre los particulares entre sí. En relación a este Tribunal, deberá regularse adecuadamente, el acceso directo mismo, con capacidad procesal para demandar o ser demandadas, de las personas individuales o jurídicas que estén implicadas en alguna cuestión relacionada con el proceso de integración, reconociéndose con ello, su carácter de sujetos de derecho,

tendencia a la que se orientan las modernas doctrinas y prácticas internacionales; además, debe reconocérseles ampliamente a estas mismas personas, el derecho de petición y acceso directo ante los órganos que dirigen el programa de integración económica, a efecto, de que puedan plantear y hacer valer en forma directa sus derechos.

La creación de este Tribunal, supone la necesidad de realizar las correspondientes reformas y adaptaciones constitucionales, que permitan en definitiva, su creación, funcionamiento y ejecución de fallos.

- 16) Desde el inicio de los esfuerzos integracionistas centroamericanos, se hizo patente la necesidad, de la existencia de un cen-tro de coordinación de la integración jurídica, formado con delegados gubernamentales capaces, que tomara bajo su responsabilidad, velar por que se hiciera realidad el anhelo de unificación o uniformidad, o atendiendo a circun-stancias especiales im-perantes, por lo menos, la armonización de las disposiciones legales de los Estados Centroamericanos, dándose prioridad en esta labor, a aquellas normas que incidan directamente en el actual proceso de integración; debe corresponderle asimismo, impedir, en lo posible, que las nuevas leyes nacionales se singularicen precisamente por su diversidad. Este esfuerzo de unificación o armonización jurídica, necesariamente ha de empezar por la fase de crea-ción, en unos aspectos, y consolidación, en otros, de la conciencia de su necesidad, dentro de los amplios grupos profesionalmente vinculados al mundo de lo jurídico; asimismo, debe prolongarse hacia aquellos sectores políticos responsables y participantes en

la labor de creación legislativa.

Es prudente y recomendable, que en la labor de negociación y formulación de los tratados y demás instrumentos jurídicos de la integración, los delegados gubernamentales responsables de tal labor se hagan acompañar y admitan una asesoría efectiva, de Abogados especializados en Derecho Comunitario, y principalmente, permitan que éstos tengan una participación real en la formulación de los proyectos de convenios o tratados correspondientes, a efecto de que tales documentos no adolezcan de defectos de técnica jurídica, u originen, después de su negociación, suscripción y aprobación, conflictos legales innecesarios.

- 17) Las Universidades Centroamericanas y los diferentes Institutos científicos especializados, así como las Academias o Asociaciones de Derecho Internacional y Comparado regionales, deben dar preferente atención e impulso al estudio del Derecho Comunitario, procurando habituar a sus miembros al manejo de las nuevas técnicas del citado Derecho, a efectos de que en el futuro, una depurada doctrina y técnica jurídica fundamenten correctamente la elaboración de los tratados correspondientes y la interpretación y aplicación de los mismos, con lo cual se facilitará, el desarrollo jurídico y político comunitario y el desenvolvimiento armónico de un progreso económico-social en el área centroamericana.

CITAS

- (1) Tribunal Internacional de Justicia: dictamen de 11 de Abril de 1.949 sobre "Reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas".----- Texto del dictamen en: García Arias, Luis: "Corpus Iuris Gentium", Zaragoza, España, 1968, p. 717-718.
- (2) Reuter, Paul: "Instituciones Internacionales". Bosch, Barcelona, España, 1.959, p. 98.
- (3) El régimen de los extranjeros era, de largo tiempo atrás, - objeto de disposiciones bilaterales contenidas en los tratados de establecimiento. El derecho moderno conoce aún este género de tratados, cuyos efectos se extienden con frecuencia por la cláusula de la nación más favorecida. El desarrollo del sistema consiste, precisamente, en que dentro del derecho moderno se hacen esfuerzos para asegurar a los particulares derechos frente a su propio Estado y no solamente frente a un Estado Extranjero, lo cual ha tenido logros verdaderamente positivos y valiosos. Este movimiento se ha desarrollado universalmente bajo el nombre de "protección de los derechos del hombre". Esta protección supone dos condiciones: a) que los derechos del hombre sean definidos en reglas aceptadas por los Estados; y b) que exista un mecanismo internacional de sanción. Si la segunda condición no existiera, no quedarían para sancionar estas ----- reglas, más que las meramente de derecho común, básicamente, la protección diplomática. En una protección internacional completa y eficaz de los derechos del hombre, no hay lugar para una soberanía absoluta de los Estados, lo cual explica, por qué no se ha logrado una protección perfecta de los mismos.



No obstante, existe una inclinación general a dar esa protección. Pueden citarse como ejemplos: el mecanismo internacional de los Convenios del Trabajo (el que está muy lejos de ser el procedimiento más perfecto de protección) y, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas, que puede ser el origen de un desenvolvimiento, consuetudinario o convencional, a nivel internacional, de largo alcance.

(4) La institución de la protección diplomática se manifiesta -- cuando los derechos de un nacional han sido violados por un Estado extranjero, caso en el cual el Estado del ofendido -- puede tomar sobre sí el hecho y la causa de su nacional, "endosando" su reclamación. Esta institución se caracteriza por singulares particularidades:

a) El Estado de la víctima es absolutamente libre de endosar la causa de su nacional; si lo hace puede atenerse a reclamaciones por la vía diplomática, cuyas formas y tono determina a su voluntad, pudiendo atenerse a fortiori a procedimientos como el arbitraje, o aún, a medidas coactivas. Consideraciones de política general juegan en esto un papel primario; b) si hay "endoso", la diferencia queda reducida a una diferencia entre Estados, en la que, salvo excepciones, el particular ofendido no desempeña ningún papel, ya que su reclamación ha sufrido las transformaciones jurídicas necesarias para convertirse en una reclamación del Estado; c) si acuerda una reparación al Estado de la víctima, ésta carece de título directo para obtener el beneficio de la reparación. Lo que el particular obtenga en definitiva, es un asunto puramente interno entre su Estado y él.

Una seria deficiencia de este sistema es que, si los derechos del particular son violados por su propio Estado, - aquel no goza de ninguna protección internacional.

(5) Ya se ha dejado asentado que ésta sanción no existe en el de recho internacional actual más que a título excepcional. Pueden citarse como ejemplos:

a) ciertas jurisdicciones internacionales que han -- permitido a particulares hacer valer directamente sus dere-- chos contra los Estados de que han sido víctimas. Pueden men-- cionarse: 1) Tribunal Internacional de Fresas (Convenio XII de La Haya, 1.947. No puesto en vigor); 2) Tribunal de Justicia Centroamericano (Convenio de Washington de 20 de Diciembre de 1.947. En vigor durante diez años; 3) Tribunales Arbitrales Mixtos (en vigor por virtud del artículo 344 del Tratado de Versalles, durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial; 4) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuyo actual funcionamiento es motivo de un -- estudio y una atención especial.

b) El ejercicio del llamado "derecho de petición", - el que ha funcionado en aplicación de convenios particulares concertados después del primer conflicto mundial, para garantizar en ciertos Estados derechos de minorías de raza, de -- lengua o de religión. Este derecho se ejercía ante el Consejo de la Sociedad de las Naciones.

c) El caso de la imposición directa de deberes a particulares por ciertas reglas de derecho internacional. Generalmente, la violación de éstos deberes son sancionados por

las autoridades nacionales de los Estados. El único ejemplo destacado de sanción por un procedimiento internacional se tiene, en el juicio de criminales de guerra realizado por el Tribunal militar internacional de Nuremberg.

- (6) Acerca de estos aspectos, véase: García Amador, Francisco V.: - "Principios de derecho internacional que rigen la responsabilidad", edición de la Escuela de Funcionarios Internacionales, Madrid, 1963 capítulos II y III; y, Friedmann, Wolfgang: "La nueva estructura del derecho internacional", Editorial F.Trillas, S.A., México D.F., 1967, pp. 245 y 271.
- (7) Carta de la Organización de los Estados Americanos: suscrita el 30 de Abril de 1948, en la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia. Enmendada por el Protocolo de Reformas, conocido como "Protocolo de Buenos Aures", suscrito en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 15 al 27 de Febrero de 1967. \_\_\_\_\_ Organización de los Estados Americanos: "Carta de la Organización de los Estados Americanos". Serie sobre Tratados número 1-C, OEA, Documentos oficiales, OEA/Ser.A/2 (español) Rev. Unión Panamericana, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1968.
- (8) Esta orientación se evidencia claramente del texto del artículo 20., párrafo 60. de la Carta de las Naciones Unidas, el que literalmente dice:
- "La Organización hará que los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales".

Las Naciones Unidas evidencia una clara pretensión de tener la representación de la Comunidad Internacional. \_\_\_\_\_ García Arias, Luis: Ob.cit., p.21. También: "Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia". Publicación de la Oficina de Información Pública de las Naciones Unidas. Nueva York, 1964, p.4.

- (9) Constantinesco, Leontín: "Las relaciones del derecho comunitario con el derecho de los Estados miembros de la CEE". En "Derecho de la Integración", número 2, Abril, 1968, INTAL, Buenos Aires, Argentina, - p.51.
- (10) Jiménez de Arechaga, Eduardo: "Curso de Derecho Internacional Público" Tomo I. Centro de Estudiantes de Derecho, Montevideo, Uruguay, 1959, pp. 181 y Sigs.
- (11) Catalano, Nicola: "Manual de Derecho de las Comunidades Europeas". - INTAL-BID, Buenos Aires, Argentina, 1966, p. 725.
- (12) Friedmann, Wolfgang: "Ob. cit., p. 122.
- (13) En el caso South Carolina v. United States, decidido en 1905, que resume un siglo de opiniones judiciales de los Estados Unidos, se dijo:  
  
"Tenemos en esta República un sistema dual de gobierno, nacional y estadual, que opera cada uno dentro del mismo territorio y sobre las mismas personas a pesar de lo cual actúan sin colidirse porque sus funciones son diferentes. Hay ciertas materias sobre las cuales el Gobierno Nacional tiene absoluto control y ninguna acción de los Estados puede interferir en ellas y hay otro, en las cuales el Estado es soberano y respecto de ellas el Gobierno Nacional carece de poderes. Preservar el equilibrio entre estos dos gobiernos y mantener cada uno en su esfera propia es el pe-

culiar deber de todas las Cortes".\_\_\_\_\_ Citado por: Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho de la Integración Latinoamericana". Ensayo de sistematización. Ediciones DEPALMA, Buenos Aires, Argentina, 1969, p. 916.

- (14) Constantinesco, Leontín: Ob. cit., p. 51.
- (15) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho de la Integración Latinoamericana", ob. cit., p. 533.
- (16) Hay, Peter: "Federalism and supranational Organizations". University of Illinois Press., Urbana, 1966, p. 62.
- (17) García Arias, Luis: ob. cit., p. 21.
- (18) Ibidem., p. 144.
- (19) Ibidem., p. 192.
- (20) Ibidem., p. 211.
- (21) Ibidem., p. 244.
- (22) Ibidem., p. 182.
- (23) Ibidem., p. 196.
- (24) Ibidem., p. 227.
- (25) Ibidem., p. 233.
- (26) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: -  
"Organizaciones Internacionales no Americanas", Instrumentos constitucionales. Washington, D.C., 1964, pp. 57, 141, 157, 173, 337, 371.
- (27) Ibidem., 193.
- (28) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: -  
"Problemática Jurídica e Institucional de la Integración de América Latina", Ensayo de Sistematización. Edición provisional. Washington, D.D., 1967, pp. 632, 633.
- (29) Ibidem., p. 633.

- (30) Citado en: Hay, Peter: ob. cit., p. 43.
- (31) Pescatore, Pierre: "Distribución de Competencias y de poderes entre los Estados miembros y las Comunidades Europeas". Estudio de las relaciones entre las Comunidades y los Estados miembros. En: "Derecho de la Integración", número i, Octubre 1967. INTAL, p. 148.
- (32) Ibidem., pp. 148-149.
- (33) Hallstein, Walter: "La Comunidad Europea-Nuevo Orden Jurídico". En: "Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional", publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1967, p. 20.
- (34) Catalano, Nicola: "La Posición del Derecho Comunitario dentro del Derecho de los Estados Miembros". Informe al Seminario de Brujas, Bélgica, 1965. Contenido en "Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional": Ob. cit., pp. 191-192.
- (35) Zea Hernández, Germán: Discurso de inauguración de la Mesa Redonda que para tratar el "Problema Constitucional" en el proceso de Integración de América Latina, se celebró en el mes de Febrero de 1967 en Bogotá, Colombia. \_\_\_\_\_ Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: Informe de la Secretaría General. - Washington, D.C., 1967, p. 45.
- (36) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho de la Integración Latinoamericana", ob. cit., p. 908.
- (37) Pescatore, Pierre: Ob. cit., p. 147.
- (38) Ibidem., p. 147.
- (39) Hallstein, Walter: Ob. cit., p. 23.

- (40) Corte de Justicia de las Comunidades Europeas: Jurisprudencia. Sentencia de 5 de Febrero de 1963, caso Van Gend, número 26-62. Texto en: "Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional", publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: Ob. cit., p. 47.
- (41) Corte de Justicia de las Comunidades Europeas: Jurisprudencia, sentencia de 15 de Julio de 1964, caso COSTA-ENEL, número 6-64. Texto en: "Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional", publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: Ob. cit., pp. 57-58.
- (42) Comisión Jurídica del Parlamento Europeo: Informe sobre: "La Primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho de los Estados Miembros". Contenido en "Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional". Problemas Jurídicos e Institucionales de la Integración Europea. Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Ob. cit., pp. 111-116.
- (43) Lagrange, Maurice: "La primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho Nacional", informe al Seminario de Brujas, Bélgica, 1965. Contenido en: "Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional", publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, Ob. cit., p. 158.
- (44) Catalano, Nicola: "La posición del Derecho Comunitario dentro del Derecho de los Estados Miembros", informe al Seminario de Brujas, Bélgica, 1965. Contenido en "Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional", publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, Ob. cit., pp. 187-191.
- (45) Gaudet, Miguel: "Información sumaria sobre la "cuestión constitucional" en los seis Estados Miembros de las Comunidades Europeas". Trabajo presentado a la Mesa Redonda sobre "La integración de América Latina y la Cuestión Constitucional", celebrada en Bogotá, Colombia,

del 6 al 8 de Febrero de 1967. \_\_\_\_\_ Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: Informe de la Secretaría General. Ob. cit., pp. 75-76.

- (46) Mesa Redonda sobre "La Integración de América Latina y la Cuestión Constitucional". Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 6-8 Febrero 1967. \_\_\_\_\_ Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: Informe de la Secretaría General. Ob. cit. pp. - 25-26.

- (47) Consúltense anexo número Uno.

- (48) Respecto al Derecho Constitucional vigente a la fecha de suscripción de los primeros instrumentos que regulan el actual Programa de integración económica centroamericana, de los cuales los primeros en el tiempo fueron suscritos el 10 de Junio de 1958, correspondiendo al Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica y al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, nos limitaremos a hacer la observación siguiente:

En Nicaragua se encontraba vigente el precepto constitucional citado.

En Guatemala estaba en vigencia la Constitución emitida el 2 de - Febrero de 1956, la que se inició el 1º de Marzo del mismo año. -

El artículo 4º de la Citada Constitución señalaba:

"Guatemala, fiel a un ferviente ideal, mantiene como suprema aspiración patriótica el restablecimiento de la Unión Centroamericana y se esforzará por lograrlo total & parcialmente sobre bases justas y populares, que garanticen el respeto a los derechos fundamentales del hombre. Mientras tanto cultivará -



relaciones fraternales con los otros Estados que formaron la disgregada Federación".

En Honduras estaba en vigencia la Constitución emitida el 19 de Diciembre de 1957 y en vigencia desde el 21 del mismo mes y año. El artículo 10º de esta Constitución establecía:

"Honduras es un Estado disgregado de la República de Centro - América. En consecuencia, reconoce como una necesidad primordial volver a la unión con uno ó más Estados de la antigua Federación. A este efecto queda facultado el Poder Legislativo - para ratificar los tratados que tiendan a realizarla parcial ó totalmente, siempre que se propongan de manera justa y democrática".

En El Salvador se encontraba en vigencia la Constitución emitida el 7 de Septiembre de 1950 y en vigencia desde el 14 del mismo mes y año. El artículo 9º de esta Constitución señalaba:

"Siendo El Salvador una parte de la Nación Centroamericana, es tá obligado a propiciar la reconstrucción total ó parcial de - la República de Centro América. El Poder Ejecutivo, con aprobación del Legislativo, podrá realizarla en forma federal ó unitaria, sin necesidad de autorización o ratificación de una Asamblea Constituyente, siempre que se respeten los principios repúblicanos y democráticos en el nuevo Estado, y que se garanticen plenamente los derechos esenciales de los individuos y asociaciones".

En Costa Rica se encontraba vigente la misma Constitución actualmente en vigor, a excepción de la reforma a la que se hace referencia en otra parte de este mismo trabajo.

En consecuencia, la situación constitucional y básicamente la -

vocación centroamericanista, se encontraba recogida en las Constituciones en forma similar a como se encuentra en las actualmente vigentes.\_\_\_\_\_. Las tres Constituciones últimamente mencionadas, ya derogadas, pueden consultarse sus textos en la forma siguiente:

- a) Constitución de Guatemala: "Constitución y Códigos de la República de Guatemala", segunda edición, 1957. Recopilación de Hector A.Cruz. Editorial San Antonio, Guatemala, C.A.
- b) Constitución de El Salvador: Gallardo, Ricardo: "Las Constituciones de El Salvador", Tomo II, Derecho Constitucional Salvadoreño, volumen 14, tomo II de "Las Constituciones Hispanoamericanas", publicadas bajo la dirección de Manuel Fraga Iribarne. Madrid, 1961, pp. 803 a 859.

- (49) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: - "Instrumentos relativos a la integración Económica de América Latina", Washington, D.C., 1964, p. 1 y sigs.
- (50) Una lista indicativa y textos de los diversos Tratados, Convenios y Protocolos, pueden consultarse en: Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Instrumentos relativos a la Integración Económica en América Latina", Ob. cit.
- (51) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: - "Instrumentos relativos a la Integración Económica en América Latina". Ob. cit., p. 17.
- (52) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho de la Integración Latinoamericana". Ob. cit., pp. 96 a 98.
- (53) Citado por: Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho de la Integración Latinoamericana". Ob. cit., -

p. 960.

(54) Ibidem., p. 961.

(55) Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala: "Pactos con el resto de Centro América". Colección de Tratados de Guatemala, volumen I, Guatemala, Julio de 1939, p. 296.

(56) Ibidem., p. 304.

(57) Normas de igual ó similar contenido se encuentran en los Tratados siguientes: 1) Tratado de Amistad y Comercio entre Costa Rica y Guatemala, celebrado con fecha 28 de Diciembre de 1871, principalmente en los artículos 5, 7, 8, 11, 15, 14, 19: nunca estuvo vigente por falta de ratificación u canje (p. 300 a 304); 2) Tratado General de Paz y Amistad entre Costa Rica y Guatemala, de fecha 15 de Mayo de 1895, principalmente en los artículos 6, 7, 9, 10, 13, 27 (p. 311 a 320); 3) Tratado de Amistad y Alianza entre Honduras y Guatemala, de fecha 19 de Julio de 1845, principalmente en los artículos 2, 7, 8 (p. 324 a 326); 4) Tratado de Amistad y Alianza entre Honduras y Guatemala, de fecha 12 de Diciembre de 1848, principalmente sus artículos 7, 8, 10 (p. 327 a 330); 5) Tratado de Amistad, Comercio y Extradición entre Honduras y Guatemala, de fecha 17 de Julio de 1880, principalmente los artículos 2, 6, 7, 9 (p. 337 a 343); 6) Tratado General entre Honduras y Guatemala, de fecha 10 de Marzo de 1895, principalmente los artículos 2, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 30, 33, 56 (p. 347 a 375); 7) Tratado de Amistad y Alianza entre Nicaragua y Guatemala, de fecha 24 de Julio de 1839 (p. 376 a 379); 8) Tratado de Paz y Amistad entre Nicaragua y Guatemala, de fecha 17 de Marzo de 1854, principalmente los artículos 2, 7, 8, 15 (p. 379 a 382); 9) Tratado de Paz, Amis-

tad y Comercio, celebrado entre Guatemala y Nicaragua, con fecha 20 de Septiembre de 1862, principalmente los artículos 2, 5, 6, 7, 13 (p. 382 a 384); 10) Tratado de Paz, Amistad y Comercio entre Nicaragua y Guatemala, de fecha 13 de Febrero de 1874, principalmente los artículos I, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV (p. 385 a 388); 11) Tratado General de Amistad, Comercio, Navegación y Extradición, celebrado entre Guatemala y Nicaragua con fecha 27 de Diciembre de 1883, principalmente los artículos 2, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 23, 34, 37 (p. 388 a 394); 12) Convenio firmado entre Guatemala y Nicaragua el 23 de Agosto de 1895, que modifica el Tratado suscrito el 13 de Febrero de 1874, principalmente los artículos 2, 6, 8, 9: no fué canjeado pero tiene singular importancia, por establecer una zona de libre comercio y el propósito de uniformar la política exterior y lograr la unidad política. Muchos otros de los Tratados mencionados en esta cita contienen cláusulas en los que se recojen idénticos propósitos, (p. 397 a 399); 13) Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, suscrito entre Guatemala y Nicaragua el 23 de Enero de 1899, principalmente los artículos VII, IX, X, XII, XVI, XVII, XVIII (p. 400 a 402); 14) Tratado de Amistad, Comercio, Reciprocidad de Títulos Académicos y goce de derechos civiles, suscrito entre Guatemala y Nicaragua, el 7 de Noviembre de 1904, principalmente los artículos I, II, V, VI, VII, VIII, IX (p. 403 a 406); 15) Convención Comercial entre Guatemala y Nicaragua, suscrita el 10 de Septiembre de 1924, principalmente los artículos I, II, III, VI: nunca estuvo en vigor, (p. 406 a 408); 16) Tratado de Paz y Armonía entre El Salvador y Guatemala, suscrito el 14 de Julio de 1839, principalmente los artículos 1, 3, 8 (p. 409 a 410); 17) Convenio de Paz entre Guatemala y El Salvador, suscrito el 13 de Mayo de 1840, principalmente el

preámbulo (p. 412 a 413); 18) Convenio sobre derechos de importación por los puertos de ambos países, suscrito entre El Salvador y Guatemala y aceptado el 28 de Octubre de 1842, principalmente los artículos 1, 2, 3 (p. 419 a 420); 19) Tratado de Amistad y Alianza entre Guatemala y El Salvador, suscrito el 4 de Abril de 1845, principalmente el preámbulo y los artículos 1, 3, 7, 8, (p. 420 a 422); 20) Tratado de Paz y Amistad suscrito entre El Salvador y Guatemala el 17 de Agosto de 1853, principalmente los artículos 7,8 (p. 423 a 424); 21) Tratado de Amistad y Alianza, suscrito entre El Salvador y Guatemala el 24 de Enero de 1872, principalmente el preámbulo y artículos 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13 (p. 426 a 430); 22) Tratado de Amistad y Alianza suscrito entre El Salvador y Guatemala el 8 de Mayo de 1876, principalmente los artículos 1, 5, 6, 7, 13 (p. 435 a 438); 23) Tratado General suscrito entre Guatemala y El Salvador, el 6 de Mayo de 1885, principalmente los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 21, 22, 23, 30, 32, 33 (p. 441 a 447); 24) Tratado de Paz y Amistad suscrito entre El Salvador y Guatemala el 15 de Noviembre de 1890, principalmente los artículos 5, 8, 12, 15, 17 (p. 449 a 453); 25) Tratado de Amistad y Alianza suscrito entre Guatemala y El Salvador el 23 de Abril de 1907, principalmente los artículos I, III, XI (p. 455 a 457); También se encuentran normas inspiradas en similares principios en Tratados Multilaterales, tales como los siguientes: 1) Pacto de Unión Centroamericana, suscrito entre Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras el 17 de Febrero de 1872, principalmente los artículos 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 23, 28 (p. 18 a 26); 2) Tratado de Paz preparatorio de unión entre las cinco repúblicas de Centro América, suscrito el 28 de Febrero de 1876, principalmente

los artículos 1, 3, 7, 9, 11 (p. 28 a 32); 3) Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Unión, suscrito entre Guatemala, El Salvador y Honduras, el 12 de Septiembre de 1885, principalmente los artículos - 1, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 25, 30 (p. 34 a 39); 4) Tratado de Paz, - Amistad y Comercio entre Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, suscrito el 16 de Febrero de 1887, principalmente el preámbulo y artículos 1, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 26, 27, - 28, 30 (p. 40 a 48); 5) Convención Consular entre Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, suscrita el 16 de Febrero de 1887 (p. 52 a 55); 6) Convención Postal y Telegráfica entre Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, suscrito el 7 de Febrero de 1889 (p. 55 a 69); 7) Pacto de Unión Provisional de los Estados de Centro América, de fecha 15 de Octubre de 1889: no se llevó a efecto (p. 69 a 79); 8) Tratado General de Paz y Amistad, Arbitraje, Comercio, etc, suscrito entre Guatemala, El Salvador, - Honduras y Costa Rica el 25 de Septiembre de 1906, principalmente - preámbulo y artículos 5, 7, 8, 14, 15, 16, 23, 24 (p. 121 a 131); También tienen singular importancia el Tratado General de Paz y - Amistad, suscrito por las cinco Repúblicas Centroamericanas el 20 de Diciembre de 1907, en el curso de la Conferencia de la Paz Centroamericana, especialmente los artículos IV, VI, VII, VIII, IX, X (p. 135 a 139); También la serie de Convenciones suscritas en el - curso de la misma Conferencia, dentro de las cuales se destaca la relativa al establecimiento de una Corte Centroamericana, suscrita el 20 de Diciembre de 1907 (p. 140 a 145); También, el Tratado General de Paz y Amistad suscrito por los cinco países centroamericanos en Washington el 7 de Febrero de 1923, principalmente los artículos II, VI, VII, VIII, IX, X, XIV (p. 201 a 206); "Pactos con el

Resto de Centro Améroca", colección de Tratados de Guatemala, volumen I, ob. cit.; y artículo I de la "Convención sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales": "Pactos Multilaterales Centroamericanos y Regionales", Tratados y Convenciones Internacionales vigentes para Guatemala, volumen III, Enero de 1960, compilado por José Luis Mendoza, p. 49.

(58) Fernández-Shaw, Felix: "La Integración de Centroamérica". Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1965, pp. 123 a 128.

(59) Ibidem., p. 137 a 143.

(60) Constitución Política de la República de Costa Rica. Consultar inciso d) del Anexo número Uno.

(61) Citados ambos en: Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho de la Integración Latinoamericana". Ob. cit., p. 963.

El Tratado entre Costa Rica y Guatemala, puede consultarse en: - "Pactos con el resto de Centro América". Colección de Tratados de Guatemala, volumen I, Guatemala, Julio de 1939. Publicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala, pp. 311 a 320.

(62) Disposiciones similares figuran en: artículo 3 del Tratado de 1 de Diciembre de 1845, entre Costa Rica y El Salvador; artículos 5 y 7 del Tratado de 28 de Diciembre de 1871, entre Costa Rica y Nicaragua; artículo 7 del Tratado de 15 de Mayo de 1895, entre Costa Rica y Guatemala; artículo IV del Tratado General de Paz y Amistad de 20 de Diciembre de 1907, suscrito por los cinco países centroamericanos y, en el de la misma naturaleza de 7 de Febrero de 1923.

Los textos correspondientes pueden consultarse en: Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho de la In-

tegración Latinoamericana". Ob. cit., p. 963. Respecto a los Tratados en los que es parte Guatemala, consúltese lo indicado en cita (57) supra.

(63) Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala: "Pactos con el resto de Centro América". Colección de Tratados de Guatemala, volumen I. Ob. cit., p. 295.

(64) De igual ó parecido tenor son: el artículo 12 del Tratado de 14 de Agosto de 1868, entre Nicaragua y Costa Rica; el artículo 8 del Tratado de 28 de Diciembre de 1871, entre Costa Rica y Guatemala, y el artículo XXII del Tratado entre Costa Rica y Honduras, de 28 de Septiembre de 1895. Citados por: Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho de la Integración Latinoamericana". Ob. cit., p. 964. En la mayoría de los Tratados en los que es parte Guatemala se incluyen pactos similares: consultar Tratados mencionados en Cita Número (57) supra.

(65) Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala: "Pactos con el resto de Centro América". Colección de Tratados de Guatemala, volumen I. Ob. cit., p. 295.

(66) Sobre esta materia versan: el artículo 9 del Tratado de 1850 entre Honduras y Costa Rica y el artículo 22 del Tratado de Comercio de 1868 entre Nicaragua y Costa Rica. Citados en: Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derechos de la Integración Latinoamericana". Ob. cit., p. 964. En la mayoría de los Tratados en los que es parte Guatemala se establecen pactos similares: consultar Tratados mencionados en Cita Número (57) supra.

(67) Análogas estipulaciones figuran en: artículo 11 del Tratado entre -



Honduras y Costa Rica de 1850; artículo 15 del Tratado entre Guatemala y Costa Rica de 1871; artículo 4 del Tratado entre Guatemala y Costa Rica de 1876; artículo 9 del Tratado entre Guatemala y Costa Rica de 1895; artículo 8 del Tratado entre Honduras y Costa Rica de 1895; artículo 9 del Tratado entre El Salvador y Costa Rica de 1895; artículo 7 del Tratado General, firmado por los cinco países centroamericanos, el 20 de Diciembre de 1907; artículo I de la Convención sobre el ejercicio de Profesiones Liberales, suscrito en Washington el 7 de Febrero de 1923. Consúltese: Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho de la Integración Latinoamericana". Ob. cit., p. 964. Cláusulas similares se contienen en la mayoría de los Tratados referidos en Cita, Número (57) supra; y en "Pactos Multilaterales Centroamericanos y Regionales", Tratados y Convenciones Internacionales vigentes para Guatemala, volumen III, Ob. cit., p. 49.

- (68) Instituto para la Integración de América Latina (INTAL): Prólogo a la obra de Nicola Catalano: "Manual de Derecho de las Comunidades Europeas", ob. cit., p. IX.
- (69) Ibidem. p. XIII.
- (70) Rocco: "Principi di diritto Commerciale", p. 74. Consultar nota número 2 de la obra "Manual de Derecho de las Comunidades Europeas", de Nicola Catalano, ob. cit., p. 10.
- (71) Catalano, Nicola: "Manual de Derecho de las Comunidades Europeas", Ob. cit., pp. 9 a 11 y 725.
- (72) Hallstein, Walter: "La Comunidad Europea-Nuevo orden jurídico". Ob. cit., pp. 18-19.

- (73) Comisión Jurídica del Parlamento Europeo: Informe sobre "La Primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho de los Estados Miembros". Ob. cit., pp. 104, 111.
- (74) Lagrange, Maurice: "La Primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho Nacional". Ob. cit., pp. 157-158.
- (75) Corte de Justicia de las Comunidades Europeas: Jurisprudencia, sentencia de 15 de Julio de 1964, caso COSTA-ENEL, número 6-64. Ob. cit., pp. 57-58.
- (76) Ramirez, Roberto: "La Integración Jurídica Centroamericana", Tegucigalpa, Honduras, Junio 1966.
- (77) Gonzalez Camacho, Ricardo: Anexo a nota de la Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana. - SIECA/ CE XVII/77, 25 de Agosto de 1965.
- (78) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: - "Instrumentos relativos a la Integración Económica en América Latina". Ob. cit., p. 25.
- (79) Fonseca, Gautama: Carta personal dirigida al Dr. Alfredo Martínez Moreno, fechada en Guatemala el 30 de Mayo de 1966. Citada en "Aspectos Jurídicos de las Integraciones Económicas": Ante-proyecto - de ponencia de Alfredo Martínez Moreno al Quinto Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, celebrado en Santiago de Compostela, España, en Octubre de 1966. \_\_\_\_\_ Publicación de la Secretaría General, Madrid-Zaragoza, 1966, p. 6.
- (80) Martínez Moreno, Alfredo: "Aspectos Jurídicos de las Integraciones Económicas". Ante-Proyecto de ponencia al Quinto Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, celebrado en

Santiago de Compostela, España, del 3 al 12 de Octubre de 1966.

Publicación de la Secretaría General, Madrid-Zaragoza, 1966, p.6-7.

- (81) Sobre éstos y otros casos, consultar cita número (5) supra.\_\_\_\_\_
- Texto del Estatuto de la Corte de Justicia Centroamericana en: "Pactos con el resto de Centro América, Colección de Tratados de Guatemala, Volumen I, publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Guatemala, Julio de 1939, pp. 140 a 145.\_\_\_\_\_ Puede - consultarse además: Martínez Moreno, Alfredo: "La Conferencia de - Washington de 1907 y la Corte de Justicia Centroamericana", Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, San Salvador, 1958.
- (82) Martínez Moreno, Alfredo: "Aspectos Jurídicos de las Integraciones Económicas". Ob. cit., pp. 6-7.
- (83) Su texto en: "Pactos con el resto de Centro América", colección de Tratados de Guatemala, Volumen O. Ob. cit., pp. 135-139.
- (84) Villagrán Kramer, Francisco: "Los instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana", en "Derecho de la Integración", número 3, Octubre 1968. INTAL, Buenos Aires, Argentina, p. 39.
- (85) Fonseca, Gautama: "Las fuentes del Derecho Común Centroamericano". En "Derecho de la Integración", número 1, Octubre 1967. INTAL, p.53.
- (86) Este beneficio está contenido en el Protocolo al Convenio Centroameriicano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial (Protocolo de - Trato Preferencial a Honduras), suscrito el 23 de Setiembre de 1966 y en vigor a partir del 23 de Marzo de 1969.
- (87) Consultar a este respecto, los documentos siguientes: 1) "Carta de - San Salvador", constitutiva de la Organización de Estados Centroamericanos, de fecha 14 de Octubre de 1951; 2) La "Declaración de la An

Antigua Guatemala", que contiene una declaración de principios de -  
convivencia centroamericana y constituye la Resolución III aprobada  
en la I Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores, ce-  
lebrada en la Antigua Guatemala, del 17 al 24 de Agosto de 1955; 3)  
La "Declaración conjunta de Cuatro Gobernantes Centroamericanos" -  
(los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua),  
suscrita en Septiembre de 1963; 4) La "Declaración de Centroamérica"  
de fecha 19 de Marzo de 1963, aprobada en la Reunión de Presidentes  
de Centroamérica, Estados Unidos y Panamá, realizada en San José de  
Costa Rica.\_\_\_\_\_ Textos en: Fernandez-Shaw, Felix: "La Inte-  
gración de Centroamérica" Ob. cit., pp. 123 a 128, 133-134, 177-179  
164-170, respectivamente.

- (88) Constantinesco, Leontín: "Las relaciones del Derecho Comunitario con  
el Derecho de los Estados Miembros de la CEE". Ob. cit., p.52.
- (89) Constantinesco, Leontín: "Las relaciones del Derecho Comunitario con  
el Derecho de los Estados Miembros de la CEE". Ob. cit., p. 56.
- (90) Para hacerlas se han tenido en cuenta factores de diversa naturaleza  
tales como la influencia que sobre el Derecho positivo ejercen las -  
reglas emanadas de la autoridad pública, las prácticas consuetudina-  
rias, la acción de los jueces o de la doctrina, el sistema empleado  
para fijar las normas, etc. La diversidad de criterios clasificato-  
rios ha originado que se hable de fuentes escritas o no escritas, de  
fuentes directas o indirectas, y fuentes principales o accesorias, -  
de fuentes materiales y formales, etc.
- (91) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "De-  
recho de la Integración Latinoamericana". Ob. cit., p.965.
- (92) Textos de todos, a excepción del último, en: "Instituto Interamerica

no de Estudios Jurídicos Internacionales: "Instrumentos relativos a la Integración Económica en América Latina". Ob. cit., 17-28, - 57-62, 36-43, 28-35, 1-13, respectivamente. \_\_\_\_\_ Texto de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos en: Fernandez Shaw, Felix: "La Integración de Centroamérica". Ob. cit., pp. 137-143.

- (93) Perdió gran parte de su validez y vigencia al entrar en vigor el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, debido a que la mayoría de sus disposiciones fueron incorporadas a éste.

El Tratado General de Integración Económica Centroamericana - fué suscrito en Managua, Nicaragua, el 13 de Diciembre de 1960 por El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. En vigor para El Salvador, Nicaragua y Guatemala, desde el 4 de Junio de 1961.; para Honduras desde el 27 de Abril de 1962 y para Costa Rica, desde el 9 de Noviembre de 1963.

- (94) Villagrán Kramer, Francisco: "Los instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana". Ob. cit., pp. 42-43.

- (95) La lista detallada de los mismos, consúltese en el Anexo número - Dos de este trabajo.

- (96) Fonseca, Gautama: "Las Fuentes del Derecho Común Centroamericano". Ob. cit. p., 55.

- (96-A) Expresión de las afinidades y del deseo de considerar a Panamá como parte integrante de Centroamérica se encuentran en los documentos siguientes:

1) Resolución número 3, de la Primera Reunión de Municipalidades - Centroamericana, aprobada el 14 de Mayo de 1958 en la ciudad de - Quezaltenango, en la que se expresó:

"Primero: Declarar de manera categórica y definitiva que la República de Panamá es parte del Istmo Centroamericano.

Segundo: Solicitar del Gobierno de la República de Panamá que ésta sea incorporada a la Organización de Estados Centroamericanos (O.D.E.C.A.)".

2) La Resolución número 6, aprobada el 30 de Junio de 1960, en la ciudad de Sonsonate, República de El Salvador, durante la Segunda Asamblea General de Municipalidades, en la que se resolvió lo siguiente:

"Modificar la Resolución número 3 de la Primera Reunión de Municipalidades Centroamericanas, cuya parte resolutive deberá leerse:

"Primero. Declarar de manera categórica y definitiva que la República de Panamá es parte de la nación centroamericana; y SEGUNDO: Recomendar a la Secretaría General de la O.D.E.C.A. que invite al Ilustrado Gobierno de Panamá a incorporarse a la Organización de Estados Centroamericanos".

Desde el inicio de los esfuerzos integracionistas centroamericanos se trató también de incorporársele y expresión de esto es la resolución número 80, aprobada el 1 de Septiembre de 1959, en San José, Costa Rica, durante la VI Reunión Ordinaria del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, en la que no obstante, se dejan entrever ciertas dudas. Al efecto, en la misma se resuelve:

"1. Incorporar a la República de Panamá al Programa de Integración Económica del Istmo Centroamericano e invitar a su Gobierno a que mientras se lleven a cabo los estudios que permitan decidir finalmente sobre su incorporación plena al Comité, participe en todas sus actividades como si fuera miembro del mismo y

a integrarse de inmediato como miembro del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial y de la Escuela Superior de Administración Pública de América Central;

2. Solicitar a la Secretaría que haga estudios sobre los efectos de la plena participación de Panamá en el Programa de Cooperación Económica y de su posible adhesión a los Tratados y Convenios firmados por los cinco Gobiernos y presente un informe al Séptimo Período de Sesiones del Comité".

Durante la negociación y firma de los primeros tratados de integración Panamá no participó, aunque en actos políticos posteriores se manifestó la conveniencia y deseo centroamericano respecto a su participación. Expresión de ésto lo tenemos en la denominada "Declaración de Centroamérica", aprobada el 19 de Marzo de 1963, en la Reunión de Presidentes de Centroamérica, Estados Unidos y Panamá, celebrada en San José, Costa Rica, en la que en un interesante párrafo se señala:

"Los Presidentes de Centroamérica ratifican su aspiración a que la República de Panamá participe más estrechamente en el movimiento de Integración Económica, y el Presidente de Panamá declara que su Gobierno reitera su apoyo en todos sus alcances al Programa de Integración Económica de Centroamérica. También declara que está dispuesto a iniciar de inmediato negociaciones con los Gobiernos miembros del Tratado General de Integración Económica en su conjunto, con miras a concertar un convenio especial que facilite la asociación de su país a dicho Programa".

Los textos de los documentos citados pueden consultarse en: Fernández-Shaw, Felix: "Panamá y sus relaciones Centroamericanas", Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, España, 1964, pp. 209 y siguientes.

(97) Sobre este aspecto es interesante citar un criterio fuertemente afirmado en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio contenido en las resoluciones números 36 y 37 de 3 y 20 de Septiembre de 1962, respectivamente, dictadas en el mismo período de Sesiones de la Conferencia de las Partes Contratantes. En la primera se señala:

"La adhesión al Tratado por parte de los Estados Latinoamericanos implica necesariamente la compatibilidad técnica y económica de sus regímenes respectivos con el Tratado de Montevideo".

En la parte resolutive de la misma resolución se afirma:

"Que por los fundamentos expuestos, no procede aceptar el depósito de instrumentos de adhesión de ningún país que mantenga un régimen económico incompatible con el Tratado de Montevideo".

En la segunda resolución, se declara:

"Que existe una incompatibilidad absoluta entre el sistema económico de Cuba y el Tratado de Montevideo".

En consecuencia de la declaración anterior, en otra parte de la misma Resolución, se señala:

"No procede aceptar el depósito del instrumento de adhesión de la República de Cuba al Tratado de Montevideo, mientras perdure su actual régimen económico".

Unos meses antes de dictarse las resoluciones anteriores, en la VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Punta del Este, Uruguay, del 22 al 31 de Enero de 1962 - (véase los Considerandos y la parte declarativa de la Resolución VI) se afirmaba que:



"La adhesión de cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano",

lo cual hace pensar, dejando de lado los ingredientes fuertemente políticos del problema, que también se estima que existe una incompatibilidad entre la calidad de miembro de la Organización de Estados Americanos y el establecimiento de un régimen político, económico y social, basado en la doctrina marxista-leninista.

(98) Este tipo de mecanismo está establecido en instrumentos tales como los siguientes:

- a) Artículo XXX del Tratado General de Integración Económica Centroamericana;
- b) Artículo XXVIII del Tratado Multilateral de Libre Comercio e integración Económica;
- c) Artículo XV del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación;
- d) Artículo 38 del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.

En cuanto al Tratado General de Integración Económica, es oportuno hacer la salvedad, que en el citado artículo XXX se establece que la vigencia se iniciará hasta ocho días después del depósito del tercer instrumento de ratificación.

Fórmulas distintas se establecen en instrumentos tales como los siguientes:

- 1) Tratado de Asociación Económica entre las Repúblicas de Honduras, Guatemala y El Salvador, en cuyo artículo XXXI se señala, que el Convenio entrará en vigor a partir de la fecha del canje de los respectivos instrumentos de ratificación; en cuanto a los países centroamericanos que no lo suscribieron, a partir del depósito del respectivo instrumento de ratificación.

Lo anterior supone, que en tanto no depositen sus instrumentos de ratificación los tres Estados que inicialmente suscribieron el Tratado, la vigencia del mismo no se indica.

- 2) Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, en cuyo artículo XII se establece, que el Convenio - entrará en vigor en la fecha en que se deposite el último instrumento de ratificación.

En la Mayoría de los instrumentos suscritos después del Tratado General, tal como sucede en el artículo 237 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el que es uno de los más recientes, por haber sido suscrito el 1 de Junio de 1968, se recoge una fórmula idéntica a la contenida en éste, salvo en algunos, en los que se exige el depósito de los instrumentos de ratificación de los cinco estados, tal como se establece en el artículo 43 del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial.

- (99) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. - "Seminario sobre aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Centroamericana", Centro de Altos Estudios Internacionales, Universidad de Miami, 17 al 21 de Agosto de 1964. \_\_\_\_\_ Informe de la Secretaría General, p. 8.
- (100) Segundo Congreso Jurídico Centroamericano. San José, Costa Rica, - 1964. Recomendaciones, resoluciones y acuerdos del Congreso: Resolución número II.
- (101) Una interesante forma de solución constitucional, un tanto parecida a la expuesta, se encuentra recogida en el artículo 121 inciso 4) - de la Constitución de Costa Rica, como consecuencia de la reforma -

que a la misma se introdujo en virtud de la Ley número 4123 de 30 de Mayo de 1968. Costa Rica es el único Estado centroamericano que ha introducido reformas a su Constitución a efecto de poder recoger y resolver, la variada problemática que plantea la recepción y vigencia de un ordenamiento jurídico comunitario.\_\_\_\_\_ Consulte se el texto constitucional en Anexo número Uno de este trabajo.

- (102) Segundo Congreso Centroamericano de Congresos, Managua, Nicaragua, 29 de Enero al 2 de Febrero de 1968: Resolución número XXXIV.
- (103) Novena Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, celebrada en Guatemala del 25 al 31 de Enero de 1966.\_\_\_\_  
\_\_\_\_ Informe: doc. E/CN. 12/CCE/351/Rev. 1, pp. 60-61.
- (104) Acerca de los fundamentos de la propuesta, véase: "La Inflexibilidad del Arancel Uniforme de la Integración Económica", Nota de Secretaría. Doc. SIECA/CEC-VII-O/D.T. 4, 25 de Julio de 1967. La propuesta fué considerada en el curso de la Primera Reunión Conjunta del Consejo Económico, el Consejo Monetario y los Ministros de Hacienda de Centroamérica, celebrada en Managua, en Noviembre de 1967, en relación con un documento preparado por la propia SIECA denominado: "Primer borrador del Proyecto de Protocolo para aplicar en Forma Flexible el Arancel Uniforme Centroamericano (SIECO/CEC/CMCA/MH-1. D.T. 7), que recogía los lineamientos acordados por el Consejo Económico Centroamericano en su Octava Reunión Ordinaria. Después de deliberarse sobre las dificultades de índole constitucional, la Reunión fué de parecer, respecto a la materia mencionada, que no creía en la viabilidad de la primera de las citadas alternativas - en el sentido de que las modificaciones a los gravámenes uniformes que autoricen los órganos legislativos entren en vigor mediante simple

resolución del Consejo Económico -, ya que aparentemente aún no ha llegado la hora de dotar a los órganos regionales de una facultad tan marcadamente supranacional. Por lo mismo, estuvo de acuerdo en que la vigencia de los niveles arancelarios que en su oportunidad fije el Consejo Económico debe depender de la emisión de un Acuerdo o Resolución del Poder u Organismos Ejecutivo de cada país. \_\_\_\_\_  
Acta de la Reunión Conjunta, publicada por la SIECA, p. 36.

(105) Ver numeral 2) de la letra E) del Anexo Número Dos. \_\_\_\_\_

El Texto del Convenio Constitutivo de la Cámara de Compensación - Centroamericana puede consultarse en: "Instrumentos relativos a la Integración Económica en América Latina", publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Ob. cit., pp. 105 a 111. \_\_\_\_\_ El Consejo Monetario Centroamericano está - integrado por los Presidentes de los Bancos Centrales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y el Gerente del Banco Central de Costa Rica, en calidad de miembros titulares. Cada Banco Central designa en forma permanente, entre sus altos funcionarios ejecutivos, un miembro suplente del Consejo.

(106) El Texto del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica puede consultarse en: "Instrumentos relativos a la Integración Económica en América Latina", publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Ob. cit. pp. 95 a 104.

(107) El texto del Convenio de Compensación y de Créditos Recíprocos entre los Bancos Centrales miembros de la Cámara de Compensación Centroamericana, puede consultarse en: "Instrumentos relativos a la Integración Económica de América Latina", publicación del Instituto Inter-

americano de Estudios Jurídicos Internacionales. Ob. cit., pp. 111 a 118.

- (108) El texto del Convenio Constitutivo del Consejo Superior Universitario, puede consultarse en: "La Integración de Centro América", - de Felix Fernandez-Shaw, ob. cit., pp. 929 a 931.
- (109) El texto de las disposiciones constitucionales vigentes pueden consultarse en anexo número uno de este estudio, principalmente, los artículos 170, incisos 13) y 14), 172, 189 inciso 12), 213, 246 de la Constitución de Guatemala; 9, 47 inciso 29º., 78 inciso 12º de la Constitución de El Salvador; 6, 26, 201 inciso 26º de la Constitución de Honduras; 148 inciso 8), 150, 195 inciso 8) de la Constitución de Nicaragua y 121, inciso 4), 140 inciso 10) de la Constitución de Costa Rica.
- (110) Lupinacci, Julio Cesar: "El "status de miembro de la ALALC", estudio contenido en: Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, - 1965/1966, dedicado a la ALALC y a los problemas jurídicos de la - integración económica latinoamericana. Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966, pp. 97-129.
- (111) A este respecto tiene interés citar la opinión de Sereni, quien - considera siempre admisible la investigación por parte de la organización o de sus miembros, para verificar si el Estado aspirante a miembro está munido de los requisitos necesarios para ser calificado como Estado sujeto de Derecho Internacional y para cumplir - las responsabilidades puestas a cargo de los miembros. Cita como - ejemplo la no admisión, en el período entre las dos guerras mundiales, de la Ciudad Libre de Dantzig, en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a consecuencia de una opinión negativa de la -

Corte Permanente de Justicia Internacional, respecto de la idoneidad de la Ciudad libre de Dantzig para desarrollar las funciones propias de los miembros de aquella organización. \_\_\_\_\_ Sereni, - Angelo Piero: "Le Organizzazioni Internazionali", 1959, p. 58.

- (111-A) Consultar a este respecto, las disposiciones siguientes, contenidas en los Tratados y Convenios más importantes no suscritos inicialmente por todos los Estados centroamericanos:
- a) artículo XXXIII del Tratado General de Integración Económica - Centroamericana;
  - b) artículo XXX del Tratado de Asociación Económica entre las Repúblicas de Honduras, Guatemala y El Salvador;
  - c) artículo 35 del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.
- (112) Fernandez-Shaw, Felix: "La Integración de Centro América". Ob. cit. p. 142. \_\_\_\_\_ El texto de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), puede consultarse también en: Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional: Anuario, número 4, Noviembre de 1963, Guatemala, Centro América, pp. 55 a 60.
- (113) Consultar al efecto, la enumeración contenida en el numeral 3) letra j) de la cita número (94), supra.
- (114) El texto de este Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, puede consultarse en: "Derecho de la Integración", número 32, Octubre 1968, publicación de INTAL. Ob. cit., p. 154-181.
- (115) Fonseca, Gautama: "Las Fuentes del Derecho Común Centroamericano", ob. cit., p. 56.

(116) Ibidem. p. 57.

(117) Este tipo de normas se encuentran en instrumentos tales como los siguientes:

- a) Artículo 39 del Protocolo al Convenio Sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración;
- b) artículo 45 del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial;
- c) artículo 236 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

(118) Ejemplo de esto lo tenemos en los instrumentos siguientes:

- a) Artículo XVIII del Protocolo de San José al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación;
- b) artículo IV del Protocolo de San Salvador al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación.

(119) El "Reglamento sobre procedimiento para Resolver Conflictos", fué aprobado por Resolución número 50 adoptada por el Consejo Económico Centroamericano, en su Decimoquinta Reunión Extraordinaria, celebrada en San Salvador, El Salvador, el 27 de Marzo de 1968. El acta correspondiente fué certificada y comunicada a los Estados Miembros con fecha 30 de Marzo de 1968. El reglamento entró en vigencia el 7 de Abril de 1968.

(120) Consultar los preceptos siguientes:

- 1) Artículo XXVI del Tratado General de Integración Económica Centroamericana;
- 2) Artículo XXV del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica;
- 3) Artículo XXIX del Tratado de Asociación Económica entre las Repú-

blicas de Honduras, Guatemala y El Salvador;

4) Artículo XIII del Convenio Centroamericano sobre Equiparación - de Gravámenes a la Importación;

5) Artículo XI del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centro-americanas de Integración;

6) Artículo 235 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

(121) Fonseca, Gautama: "Las Fuentes del Derecho Común Centroamericano", ob. cit., p. 58.

(122) La Resolución número 64 fué dictada por el Consejo Ejecutivo en su vigesimacuarta Reunión, en Noviembre de 1966.

(123) Al informe le corresponde el registro siguiente: SIECA/Ce-XXII/ - D.T.3. Contiene un análisis sobre costos, gastos de ventas, impues- tos y utilidades de la fábrica de licores de Costa Rica, del que - resulta que los impuestos que se pagaban por los licores en Costa Rica eran de hecho inferiores al 80% establecido por la Ley 2035 - de 1956, que es precisamente la que fué objeto de interpretación.

(124) La Resolución número 58 fué dictada por el Consejo Ejecutivo en su vigésimatercera Reunión, en Octubre de 1966.

(125) El texto de la Resolución número 72 del Consejo Ejecutivo, puede - consultarse en página 313, infra, letra F), Capítulo II, Título - III.

(126) Organizaciones representativas de la iniciativa privada, han mani- festado su oposición a la creación de un Tribunal Centroamericano de Justicia, creado especialmente para resolver los conflictos que se originen del proceso de integración, por considerarlo inoperante



y perjudicial para el Mercado Común Centroamericano. Dentro de las mismas se encuentra, la Federación de Cámaras y Asociación Internacional Centroamericana (FECAICA), quien se dirigió oficialmente a los Gobiernos Centroamericanos, comunicándoles su posición: Diario "El Gráfico", de Guatemala, de fecha 22 de Febrero de 1969.

En la IV Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), que se celebró en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, del 27 de Enero al 2 de Febrero de 1969, se conoció un proyecto de Tratado de creación del Tribunal Centroamericano de Justicia, elaborado por una Comisión ad-hoc de juristas, indudablemente como paso previo a una suscripción futura del Tratado de creación.

(127) Citado en "Derecho Comunitario Centroamericano", publicación del - Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. San José, Costa Rica, 1968, p. 335.

(128) La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, aprobó su proyecto sobre "Derechos de los Tratados", en su XIV período de sesiones, del 24 de Abril al 28 de Junio de 1962 y lo revisó nuevamente en su XVIII período de sesiones del 3 de Mayo al 9 de Julio - de 1965.

(128-A) Las Naciones Unidas convocó una Conferencia internacional, la que se denominó "Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los tratados", reunida en Viena y en la que se adoptó la Convención respectiva denominada "Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados", con fecha 22 de Mayo de 1969, habiéndose suscrito el Acta co rrespondiente con fecha 23 del mismo mes y año.

En la Convención referida no se adoptó la audaz forma de modificación de tratados a que hacía referencia el artículo 38 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, sino que por el contrario, se adoptó la forma tradicional de modificación que supone la celebración de un nuevo convenio. Los artículos 39, 40 y 41 de la citada Convención hace referencia a ésto. El texto de los mismos es el siguiente:

Artículo 39. Norma general concerniente a la enmienda de los Tratados.

"Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. - Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la parte II, salvo en la medida en que el tratado disponga otra cosa".

Artículo 40. Enmienda de los tratados multinacionales.

"1. Salvo que el Tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes.

2. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los Estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar:

a) en la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta;

b) en la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado.

3. Todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada.

4. El acuerdo en virtud del cual se enmienda el tratado no obli

gará a ningún Estado que sea ya parte en el tratado pero no llegue a serlo en ese acuerdo; con respecto a tal Estado se aplicará el apartado b) del párrafo 4 del artículo 30.

5. Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado después de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado, será considerado, de no haber manifestado ese Estado una intención diferente:

- a) parte en el tratado en su forma enmendada; y
- b) parte en el tratado no enmendado con respecto a toda parte - en el tratado que no esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado".

Artículo 41. Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes únicamente.

"1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas:

- a) Si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado; o
- b) si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición de que:
  - i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones; y
  - ii) no se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del tratado en su conjunto.

2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1

el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y la modificación del tratado que en ese acuerdo se disponga".

El texto en idioma español del Acta final de la citada Conferencia y el de la Convención sobre el Derecho de los Tratados, pueden consultarse en "Revista Española de Derecho Internacional, número 2, año 1969, publicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, pp. 427 y siguientes.

- (129) Nos referimos, principalmente, al reciente conflicto bélico que se produjo entre las Repúblicas de El Salvador y Honduras (segundo se mestre de 1969), en el que según declaraciones oficiales vertidas e informaciones periodísticas dadas, se llegaron a producir hechos que dejan mucho que desear respecto al tradicional lazo de hermandad y amistad que se afirma existe y ha existido entre los cinco países centroamericanos. Las intervenciones de conciliación y arreglo llevadas a cabo por las organizaciones regionales: Organización de Estados Americanos (OEA) y Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), no han tenido resultados positivos, lo cual pone de manifiesto la debilidad de las mismas para lograr un arreglo político entre Estados en conflicto.
- (130) Las disposiciones constitucionales centroamericanas aplicables al ejercicio de la función jurisdiccional y marco constitucional dentro del cual se ejerce, es el siguiente:
- 1) Artículos 1, 143, 240 párrafos 1 y 2, 263, 246 de la Constitución de Guatemala;
  - 2) Artículos 4, 9, 47 inciso 13), 80, 81, 95, 96, 169, 220 de la Constitución de El Salvador;
  - 3) Artículos 4, 6, 7, 210 párrafo 1, 222, 230, 234, 235, 236, 237, -

246, 248 de la Constitución de Honduras;

4) Artículos 148 inciso 1), 179, 209, 229, 230, 324 de la Constitución de Nicaragua;

5) Artículos 3, 9, 10, 152, 153, de la Constitución de Costa Rica.

El texto de las disposiciones citadas pueden consultarse en -  
Anexo número uno de este trabajo.

(131) Sobre disposiciones constitucionales referentes al ejercicio de la función jurisdiccional en los Estados Centroamericanos consultar -  
cita número (130), supra.

Referente al trámite para la reforma de las Constituciones políticas de los Estados Centroamericanos, consúltense los preceptos siguientes:

1) Artículo 266 de la Constitución de Guatemala;

2) Artículo 222 de la Constitución de El Salvador;

3) Artículo 342 de la Constitución de Honduras;

4) Artículos 326, 327, 328 de la Constitución de Nicaragua;

5) Artículos 7, 195, 196 de la Constitución de Costa Rica.

(132) Jiménez de Aréchaga, Eduardo y Felipe H. Paolillo: "Contralor de -  
la legalidad de los actos comunitarios. Interpretación unitaria -  
del Derecho de Integración", proyectos y posibilidades en la ALALC.  
En "Derecho de la Integración", número 1, Octubre 1967. INTAL, Buenos Aires, Argentina, p. 28.

(133) Ibidem., p. 28.

(134) Ibidem., pp. 28, 29, 31.

(135) Lagrange, Maurice: "La interpretación unitaria del Derecho de las -  
Comunidades Europeas. Aspecto de la acción prejudicial". En "Dere-

cho de la Integración", número 3, Octubre de 1968. INTAL, Buenos Aires, Argentina, p. 59.

- (136) La facultad de anulación está contenida en el artículo 173 del Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE), el que textualmente dice:

"El Tribunal de Justicia ejercerá control de legitimidad sobre los actos del Consejo y de la Comisión distintos a las recomendaciones e informes. A este fin tendrá atribuciones para pronunciarse acerca de los recursos por incompetencia, violaciones de las normas sustanciales, violaciones del presente Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o por abuso o desviación de poder, a propuesta de un Estado miembro, del Consejo o de la Comisión.

Cualquier persona física o jurídica podrá presentar, en idénticas condiciones, recursos contra las decisiones adoptadas al respecto y contra las decisiones que, aún teniendo la apariencia de norma o decisión tomada respecto a otras personas, se refieren directa ó individualmente a ella.

Los recursos previstos en el presente artículo se deberán presentar en el plazo de dos meses, a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al que recurre o, a falta de éste, desde el día en que en recurrente haya tenido conocimiento de aquel".

- (137) A este procedimiento se refiere el artículo 184, del Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE), el que textualmente refiere:

"Ante la presunción de que una controversia se refiera a una norma del Consejo o de la Comisión, cada parte podrá valerse, aún -

después de transcurrido el plazo previsto por el artículo 173, apartado 3, de los medios previstos en el artículo 173, apartado 1, para invocar ante el Tribunal de Justicia lo inaceptable de la citada norma".

(138) Lagrange, Maurice: "La interpretación unitaria del Derecho de las Comunidades Europeas. Aspecto de la Acción Prejudicial". Ob. cit., p. 60.

(139) Por su importancia, conviene citar el texto del artículo 177 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, el cual es el siguiente:

"El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse en vía prejudicial:

- a) Acerca de la interpretación del presente Tratado;
- b) Acerca de la validez y de la interpretación de los actos realizados por los organismos rectores del Mercado Común.
- c) Acerca de la interpretación de los Estatutos de los organismos creados por actos del Consejo, cuando esté previsto en los propios Estatutos.

Cuando una cuestión de esta índole se someta a una jurisdicción de alguno de los Estados miembros, dicha jurisdicción podrá pedir, en el caso en que lo considere necesario para dictar sus sentencias, un dictamen sobre este punto, al Tribunal de Justicia y que ella se pronuncia sobre la cuestión.

Cuando una cuestión de esta índole se someta a juicio ante una jurisdicción nacional, contra cuyas decisiones no se pueda presentar recurso jurisdiccional en el derecho interno, dicha jurisdicción quedará obligada a dirigirse al Tribunal de Justicia".

(140) Esta afirmación encuentra clara ratificación entre otros:

- 1) En el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, principalmente en sus artículos 5 y 23 y especialmente el artículo 47. Un comentario sobre este último precepto puede consultarse en página 288 infra, Título III, Capítulo II, letra C), apartado a);
- 2) En el artículo 4 del Protocolo de San Salvador al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración. Un comentario a la norma contenida en este precepto puede consultarse en página 289 infra, Título III, Capítulo II, letra C), apartado a);
- 3) En el párrafo final del artículo V del Tratado General, en el que claramente se señala que es el Consejo Ejecutivo el que debe establecer, mediante reglamento, el procedimiento a seguir para determinar el origen de la mercancía que gozará de los beneficios estipulados - en el mismo Tratado General;
- 4) En el artículo 177 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en cuyo párrafo 2º se señala:

"El Consejo Ejecutivo decidirá a la mayor brevedad posible respecto de las resoluciones del Comité Arancelario y dichas decisiones serán de aplicación obligatoria, en lo sucesivo, en todos los Estados signatarios en la forma y plazos que se señalen en el reglamento uniforme".

Evidentes actuaciones reglamentarias del Consejo Ejecutivo se encuentran en sus resoluciones números 1, 15, 17, 26, 36, 42 y 71. Comentarios a la 26 y 42 pueden consultarse en página 290 y 291, infra, Título III, Capítulo II, letra C), apartado a).

- (141) Villagrán Kramer, Francisco: "Los instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana". Ob. cit., p. 46.



- (142) A este respecto pueden consultarse los preceptos siguientes:
- a) Artículo IX del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración;
  - b) Artículos 7 y 25 del Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, suscrito en San Salvador, el Salvador, el 29 de Enero de 1963.
- (143) Fonseca, Gautama: "Las Fuentes del Derecho Común Centroamericano", Ob. cit., p. 60.
- (144) El párrafo 3º del artículo XXI del Tratado General, dice:
- "Antes de decidir un asunto el Consejo Económico determinará - por unanimidad si deberá ser resuelto por el voto concurrente de todos sus miembros o por simple mayoría".
- (145) Una exigencia de tal naturaleza está contenida, por ejemplo, en el artículo XII del Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración (Segundo Protocolo de Managua), de fecha 16 de Noviembre de 1967.
- (146) Texto del "Reglamento sobre Procedimientos para Resolver Conflictos", en "Derecho de la Integración", número 3, Octubre 1968. INTAL, Buenos Aires, Argentina, pp. 146-153.
- (147) Ver cita anterior.
- (148) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho Comunitario Centroamericano". San José, Costa Rica, 1968, p. 383.
- (149) Los artículos del Tratado de Roma que hacen referencia a esto (nos referimos al Tratado que creó la Comunidad Económica Europea), son

los siguientes:

1) El artículo 189, dice:

"Para el cumplimiento de sus tareas y de acuerdo con las condiciones previstas en el presente Tratado, el Consejo y la Comisión establecerán normas y orientaciones, adoptarán decisiones y formularán recomendaciones o dictámenes.

La norma tendrá valor general. Será obligatoria en todas sus partes y directamente aplicable a cada uno de los Estados miembros.

Las orientaciones afectarán al Estado miembro a quien se dirija, por lo que se refiere al resultado que se debe alcanzar y dejará a salvo la competencia de los órganos nacionales en lo que hace referencia a la forma y los medios.

La decisión será obligatoria en todas sus partes para los destinatarios a que se dirija.

Las recomendaciones y los dictámenes no tendrán fuerza de obligar".

2) El artículo 190 establece:

"Las normas, orientaciones y decisiones del Consejo y de la Comisión serán razonados y harán referencia a las propuestas o dictámenes obligatoriamente requeridos para la ejecución del presente Tratado".

El texto del Tratado creador de la Comunidad Económica Europea, puede consultarse en: "Organizaciones Internacionales no Americanas", publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales Ob. cit., p. 515.

- (150) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho Comunitario Centroamericano". Ob. cit., p. 386.
- (151) El texto de esta resolución número 84 del Consejo Ejecutivo y un comentario a la misma puede consultarse en página 348, infra, Título III, Capítulo II, Letra G), en el apartado en el que se analiza la participación de la Secretaría Permanente (SIECA) en el ejercicio - de la competencia para velar por la integridad del ordenamiento comunitario.
- (152) Se refiere a la Comisión Centroamericana de Integración Industrial, cuyas funciones están actualmente a cargo del Consejo Ejecutivo, - conforme a lo dispuesto en el artículo XXII del Tratado General.
- (153) A esta participación hacen referencia los artículos 4, 11, 34, 34 y 50 del citado Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos.
- (154) El texto del artículo IX del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, es el siguiente:
- "Las personas Naturales o jurídicas que tengan interés en que - alguna planta sea incorporada al presente Régimen deberán presentar a la Secretaría de la Comisión Centroamericana de Integración Industrial la solicitud correspondiente acompañando la información que se requiera sobre el particular.
- Cuando la Secretaría disponga de suficientes elementos de - Información, dará cuenta de la solicitud a la Comisión. Si a juicio de ésta el proyecto responde a los objetivos de este Convenio, la solicitud será sometida a dictamen del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial o de cualquier otra persona o entidad que la propia Comisión considere -

competente. El dictamen deberá recaer sobre los aspectos tecnológicos y económicos del proyecto, y, en particular, sobre las perspectivas de mercado y correrá a expensas de los interesados.

A base del dictamen, la Comisión decidirá sobre el proyecto y, en caso de considerarlo viable, someterá a los gobiernos de los Estados contratantes las recomendaciones que estime pertinentes sobre la celebración del protocolo que ampare la industria de que se trate y sobre las condiciones que convenga estipular.

Cuando el proyecto se refiera a una planta comprendida en una industria que ya se encuentre amparada por un protocolo, la Comisión estará facultada para declarar de conformidad con los términos del protocolo correspondiente y de acuerdo con lo dispuesto por el presente artículo, la inclusión de la planta en los beneficios del presente Régimen, comunicándolo así a los gobiernos de los Estados Contratantes".

El texto íntegro del Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, puede consultarse en: "Instrumentos relativos a la Integración Económica en América Latina", publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Ob. cit., pp. 57-62.

(155) El texto de la Resolución número 71 del Consejo Ejecutivo y un comentario adicional a la misma, puede consultarse en páginas 295, infra, Título III, Capítulo II, Letra D).

(156) Esta resolución número 18 se adoptó en la Cuarta Reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en Mayo de 1963.

(157) La Resolución número 20 fué adoptada por la Sexta Reunión del Con-

sejo Ejecutivo, celebrada en Setiembre de 1964.

- (158) Esta Resolución número 59 se tomó en la Vigésimatercera Reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en Octubre de 1966.
- (159) La Resolución número 63 se dictó en la Vigésimacuarta Reunión del Consejo Ejecutivo, en Noviembre de 1966.
- (160) Se adoptó la Resolución número 64, en la Vigésimacuarta Reunión del Consejo Ejecutivo, en Noviembre de 1966.
- (161) El Consejo Ejecutivo dictó la Resolución número 6, en su Segunda - Reunión, en Diciembre de 1962.
- (162) El Consejo Ejecutivo dictó su Resolución número 12, en su Tercera - Reunión, en Enero de 1963.
- (163) El Consejo Ejecutivo dictó su Resolución número 54, en su Vigésima segunda Reunión, en Septiembre de 1966.
- (164) El Consejo Ejecutivo dictó su Resolución número 58, en su Vigésima-tercera Reunión, en Octubre de 1966.
- (165) La Resolución número 71 se dictó en la Vigésimaquinta Reunión del - Consejo Ejecutivo. Ver cita número (155) supra.
- (166) El Consejo Ejecutivo dictó la Resolución número 50 en su Decimanovena Reunión, en Noviembre-Diciembre de 1965.
- (167) Las Resoluciones 41 y 42 fueron dictadas en la Decimaséptima Reunión del Consejo Ejecutivo, en Agosto-Septiembre de 1965.
- (168) El Consejo Ejecutivo dictó la Resolución número 7 en su Segunda Reunión, en Diciembre de 1962; la Resolución número 37 la dictó en su Decimasexta Reunión, en Julio de 1965.

(169) El Consejo Ejecutivo dictó la Resolución 68 en su Vigésimacuarta - Reunión, en Noviembre de 1966.

(170) El texto literal del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, es el siguiente:

"1.- La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

- a) Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
- b) La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
- c) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
- d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.

2.- La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren"

El texto del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia puede consultarse en:

- 1) Garcia Arias, Luis: "Corpus Luris Gentium". Ob.cit., p. 660.;
- 2) Naciones Unidas: "Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia". Oficina de Información Públi-

ca de las Naciones Unidas, Nueva York, 1964, pp. 49-73.

- (171) Fonseca, Gautama: "Las Fuentes del Derecho Común Centroamericano". Ob. cit., p. 62.
- (172) Ibidem., p. 62.
- (173) En su acción juzgativa, la Corte Internacional de Justicia debe - considerarla. Consultar texto del artículo 38 del Estatuto de la citada Corte en cita número (170), supra.
- (174) Pescatore, Pierre: "Distribución de competencias y de poderes entre los Estados miembros y las Comunidades Europeas". Ob. cit., p. 147.
- (175) Constantinesco, Leontin: "La Supranacionalidad de las Comunidades Europeas", estudio contenido en: Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/66, dedicado a la ALALC y a los problemas jurídicos de la integración económica latinoamericana. Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966, p. 51.
- (176) Ibidem., p. 56.
- (177) Ibidem., p. 58.
- (178) Ambos citados en: "Cases and Materials of the Law and Institutions of the Atlantic Area", publicación de Eric Stein y Peter Hay. Ann. Arbor, Michigan, 1963, pp. 46-47.
- (179) De Visscher, Paul: "La CECA et les Etats membres", Rapport au - Congrès de Stresa. Citado en: "Manual de Derecho de las Comunidades Europeas", de Nicola Catalano. Ob. cit., p. 716.
- (180) Schacht Aristeguieta, Efrain: "El Derecho de Desarrollo de los Estados". Anteproyecto de ponencia al Séptimo Congreso del Instituto

Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, celebrado en Buenos Aires, Argentina, del 3 al 12 de Agosto de 1969. \_\_\_\_\_

Publicación de la Secretaría General, Madrid, 1969, p. 7, 23.

(181) Ibidem., p. 13

(182) Catalano, Nicola: "Manual de Derecho de las Comunidades Europeas". Ob. cit., Introducción y pp. 715 y sigs.

(183) Es éste el elemento fundamental, que continúa siendo invocado por quienes insisten en clasificar las Comunidades Europeas entre las uniones internacionales, y sobre todo, en afirmar que el carácter particular de la estructura de dichas Comunidades (poder normativo autónomo, sometimiento directo de los subditos de los Estados miembros y acceso de ellos a la jurisdicción comunitaria), no basta para sustraer los tratados de la CECA y los de la CEE y EURATOM del ámbito del Derecho Internacional.

(184) A través de un análisis de la Jurisprudencia de la Corte de Justicia, Lagrange llega a las mismas conclusiones, en un trabajo titulado: "L'ordre juridique de la CECA vu à travers la jurisprudence de sa Cour de Justice", contenido en Rev. du droit publ. et de la science pol. en France et a l'etranger, 1958, p. 841.

(185) Citado en "Introducción al Nuevo Derecho Europeo", de Segrelles - Chillida. Madrid, 1962, p. 67.

(186) Citado en: "Manual de Derecho de las Comunidades Europeas", de Nicola Catalano. Ob. cit., p. 723.

(187) Catalano, Nicola: "Manual de Derecho de las Comunidades Europeas". Ob. cit., p. 724.

(188) Constantinesco, Leontin: "La supranacionalidad de las Comunidades



Europeas". Ob. cit., p. 53.

(189) Ibidem, pp. 67-68.

(190) Ibidem., p. 51.

(191) Citado por Leontin Constantinesco, en "La Supranacionalidad de las Comunidades Europeas". Ob. cit., pp.51-52.

(192) Citado por Nicola Catalano, en "Manual de Derecho de las Comunidades Europeas". Ob. cit., p. 717.

(193) Citado por Leontin Constantinesco, en " La Supranacionalidad de las Comunidades Europeas". Ob. cit., p. 52.

(194) Hallstein, Walter: "La Comunidad Europea-Nuevo orden jurídico". Ob. cit., p. 4.

(195) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: Jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, - contenida en: "Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional. Problemas Jurídicos e institucionales de la Integración - Europea". Ob. cit., Caso COSTA-ENEL, número 6-64, de 15 de Julio de 1964, pp. 60-77.

(196) Ibidem. pp. 60-77.

(197) Hallstein, Walter: "La Comunidad Europea-Nuevo orden Jurídico". Ob. cit., pp. 19-23.

(198) Kunz, Josef L.: "Supranational Organs", American Journal of International Law, October, 1952, p. 697.

(199) Constantinesco, Leontin: "La Supranacionalidad de las Comunidades Europeas". Ob. cit., p. 53.

- (200) Rosenstiel, Francis: "El Principio de la Supranacionalidad", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967, pp. 23, 24, 28, 29, 32, 33, 56, 57, 76, 95, 139.
- (201) Pescatore, Pierre: "Distribución de competencias y de poderes entre los Estados miembros y las Comunidades europeas". Ob. cit., p. 148.
- (202) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional". Ob. cit., pp. 108-116.
- (203) Citado por Francis Rosenstiel, en: "El Principio de la Supranacionalidad". Ob. cit., p. 120.
- (204) Ibidem., p. 120.
- (205) Schuman, Robert: Prologo a la obra de Paul Reuter sobre la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA). París, 1953.
- (206) Lagrange, Maurice: "La Primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho Nacional". Ob. cit., pp. 157-159.
- (207) Tamames, Ramón: "El Mercado Común Europeo". Colección Biblioteca - Universitaria de Economía, Guadiana de Publicaciones, S.A., Madrid, España, 1968, pp. 62-63.
- (208) Schacht Aristeguieta, Efraín: "El Derecho de Desarrollo de los Estados". Ob. cit., p. 12.
- (209) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Problemática Jurídica e Institucional de la Integración de América Latina". Ob. cit., p. 425.
- (210) El Tribunal Internacional de Justicia, en su dictamen de 11 de Abril de 1949 sobre "Reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas". Ob. cit., p. 12.

nes Unidas", ante las interrogantes: a) En el caso de que un agente de las Naciones Unidas, en el ejercicio de sus funciones, sufra un daño en condiciones de naturaleza a comprometer la responsabilidad de un Estado, ¿tiene la Organización de las Naciones Unidas calidad para presentar contra el Gobierno de iure o de facto responsable una reclamación internacional con vistas a obtener la reparación de los perjuicios causados, a) a las Naciones Unidas...?; y - b) la Organización de las Naciones Unidas ¿tiene calidad para presentar ... una reclamación internacional con vistas a obtener la - reparación de los perjuicios causados... b) a la víctima o a sus - causahabientes?. Ante éstas interrogantes, el Tribunal Internacional de Justicia, afirma lo siguiente:

"La pregunta que se formula es la de saber si la Organización está calificada para presentar una reclamación contra el Estado demandado a fin de obtener reparación en razón de ese daño o si, por el contrario, ese Estado, de no ser Miembro de la Organización, puede objetar que la Organización no está calificada para presentar una reclamación. A tal respecto, el Tribunal opina que cincuenta Estados, que representan una amplísima mayoría de los Miembros de la Comunidad internacional, - tenían el poder, conforme al Derecho Internacional, de crear una entidad que goza de personalidad internacional objetiva - y no sencillamente una personalidad sólo reconocida por ellos, - así como calidad para presentar reclamaciones internacionales.

En consecuencia, el Tribunal llega a la conclusión de que ha lugar a contestar afirmativamente a la pregunta I a) y b), sea o no Miembro de las Naciones Unidas el Estado de mandado".

\_\_\_\_\_García Arias, Luis:"corpus Iuris Gentium". ob. cit.,

pp. 721-722.

- (211) En este criterio coincidimos, en cierta forma, con el sostenido por el Departamento Jurídico de la Organización de los Estados Americanos en el Memorándum que presentara a la Mesa Redonda sobre la "Integración de América Latina y la Cuestión Constitucional", celebrada en la Universidad Nacional de Colombia del 6 al 8 de Febrero de 1967. \_\_\_\_\_ Informe de la Secretaría General del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Ob. cit., pp. 51-71.
- (212) Zea Hernández, Germán: Discurso de inauguración de la Mesa Redonda sobre la "Integración de América Latina y la Cuestión Constitucional", celebrada en la Universidad Nacional de Colombia del 6 al 8 de Febrero de 1967. \_\_\_\_\_ Informe de la Secretaría General del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Ob. cit., p. 45.
- (213) Villagrán Kramer, Francisco: "Aspectos Sociales y políticos de la Integración Centroamericana". Estudio contenido en: "Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Económica Centroamericana", publicación del Colegio de Abogados de Guatemala. Imprenta EROS, Guatemala Centro-América, 1967, pp. 34-35-88.
- (214) Villagrán Kramer, Francisco: "Los instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana". Ob. cit., pp. 45, 39.
- (215) Quiñonez Amézquita, Mario: "Estado Actual de la Integración Centroamericana y sus aspectos jurídico-políticos". Estudio contenido en: "Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Económica Centroamericana", publicación del Colegio de Abogados de Guatemala, ob. cit., pp. 105-123-35-145.

- (216) García Laguardia, Jorge Mario: "El Tratado General. Aspectos Constitucionales". Estudio contenido en: "Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Económica Centroamericana", publicación del Colegio de Abogados de Guatemala, ob. cit., 151-153.
- (217) Brewer-Carias, A.R.: "Los problemas jurídicos de la Integración Latinoamericana". Conferencia pronunciada el 30 de Septiembre y 2 de Octubre de 1968, en Madrid, durante un curso sobre "Organizaciones Políticas y Económicas Interamericanas", organizado por el Instituto de Cultura Hispánica, la Asociación Internacional de Derecho Comparado y la Facultad Internacional para la enseñanza del Derecho Comparado.
- (218) Departamento de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos: Memorandum presentado a la Mesa Redonda sobre "La Integración de América Latina y la Cuestión Constitucional", celebrada en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 6-8 de Febrero de 1967.  
\_\_\_\_\_ Informe de la Secretaría General del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, ob. cit., pp. 61-62.
- (219) La Resolución "Unión Pro-paz", dictada en 1950, se destaca como ejemplo de una audaz interpretación de la Carta, ya que al dictarla la Asamblea General de las Naciones Unidas, se atribuyó facultades que no se conforman a las que expresa y exclusivamente le atribuye el artículo 12.
- (220) El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, fué suscrito en la Conferencia Interamericana para el mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el 2 de Septiembre de 1947. Ver artículos 6, 7, 8, 11.

(221) La Carta de la Organización de Estados Americanos, fué suscrita en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, el 30 de Abril de 1948. El 27 de Febrero de 1967, se firmó en Buenos Aires, Argentina, un Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos. Ver antiguos artículos 39 a 47 y vi-  
gentes, del 59 al 67.

(222) En la opinión consultiva sobre "Reparación de Daños sufridos al Ser-  
vicio de las Naciones Unidas", contenida en dictamen de 11 de Abril  
de 1949, el Tribunal Internacional de Justicia declaró:

"Según el Derecho Internacional, la Organización debe ser consi  
derada como teniendo esos poderes que, aunque no estén expresa-  
mente anunciados en la Carta, por una consecuencia necesaria, -  
han sido conferidos a la Organización en cuanto esenciales al -  
ejercicio de sus funciones. Este principio de Derecho se ha apli-  
cado a la Organización Internacional del Trabajo por el Tribunal  
Permanente de Justicia Internacional en su opinión consultiva nú-  
mero 13 del 23 de Julio de 1926 y debe serlo a las Naciones Uni-  
das".\_\_\_\_\_ Texto en: García Arias, Luis: "Corpus Iuris -  
Gentium". Ob. cit., p. 720.

(223) En la experiencia europea existen también numerosos ejemplos. La Cor  
te de Justicia de las Comunidades, en varias ocasiones, ha resuelto  
el asunto por vía de la interpretación. En una oportunidad declaró:

Se puede, sin incurrir en una interpretación demasiado amplia, -  
aplicar la regla de interpretación que está generalmente acepta-  
da tanto en el Derecho Internacional como en el Derecho Interno,  
según la cual, las normas establecidas por un tratado internacio-  
nal o por el derecho de un país, constituyen normas sin las cua-

les las primeras carecerían de sentido o sería imposible su - aplicación razonable y efectiva".

En otros casos, ha empleado la vía de llenar lagunas de los Tratados Constitutivos de las Comunidades. Un caso ilustrativo a este respecto fué el originado de un recurso interpuesto contra la recomendación 1/61 de la Alta Autoridad de la CECA, que obligaba a los Estados miembros a adoptar cierta legislación sobre tarifas y condiciones del transporte. En esta oportunidad, sostuvo la Corte, que - la Alta Autoridad tiene la facultad para exigir a dichos Estados el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el artículo 70 del Tratado de París, aún cuando el artículo 5º se refiere solo a la Comunidad y sus instituciones y no específicamente a la Alta Autoridad. En la práctica del Consejo de la CEE, también se ha llenado la lagunas del Tratado de Roma, con la misma consecuencia de complementarse las competencias. \_\_\_\_\_ Hay, Peter: "Federalism and supra-national organizations". Ob. cit., pp. 187-188.

(224) En el Seminario sobre "Aspectos Jurídicos e Institucionales de la - Integración Centroamericana", realizada en el Centro de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, del 17 al 21 de - Agosto de 1964, bajo los auspicios del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, se señaló:

"Los problemas que, respecto al desarrollo de la integración - económica centroamericana, se originan de ajustar la celebración, aprobación y ratificación de los tratados a las formalidades tradicionales, y la forma de superar dichos problemas mediante el - establecimiento de un sistema jurídico especial para los instrumentos centroamericanos menos formalista, que simplifique su en-

trada en vigor. Se investigarían asimismo, las fórmulas y procedimientos idóneos de ejecución de los instrumentos, acuerdos o decisiones que inciden sobre la integración centroamericana".  
Texto en: Informe de la Secretaría General del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, 1964, p. 8.

Además, el Segundo Congreso Jurídico Centroamericano, recomendó: "Que se reconozcan las diferencias de rango que existen en los instrumentos que regulan el sistema de integración económica, - reservando la ratificación legislativa para los tratados básicos y estableciendo procedimientos más acelerados para los Protocolos de detalle y normas de menor rango".\_\_\_\_\_ Recomendaciones, Resoluciones y Acuerdos del Congreso, San José de Costa Rica, - 1964, Resolución número II.\_\_\_\_\_ En el mismo sentido, la resolución número XXXIV del Segundo Congreso Centroamericano de Congresos, celebrado en Managua, Nicaragua, del 29 de Enero al 2 de Febrero de 1968.

- (225) Informes de la Comisión de Derecho Internacional (C.D.I.), 1966. - Asamblea General, Naciones Unidas, Documentos Oficiales número 9 - (A/6309/Rev. 1).\_\_\_\_\_ Consultar también lo manifestado en citas - números (128) y (128-A), supra.
- (226) Consúltense los informes de la Comisión de Derecho Internacional - mencionados en cita número (225), supra, que contienen comentarios a los artículos 22 y 54 del Proyecto elaborado por la misma, respectivamente.

A ambas situaciones se hace referencia en la aprobada Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (consultar cita número - (128-A), supra. Respecto a la entrada en vigor provisional de trata



dós, el artículo 24 dice lo siguiente:

Artículo 24. Entrada en vigor.

- "1. Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores.
2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de to dos los Estados negociadores en obligarse por el tratado.
3. Cuando el consentimiento de un Estado en obligarse por un - tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la en- trada en vigor de dicho tratado, éste entrará en vigor con re- lación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado dis- ponga otra cosa.
4. Las disposiciones de un tratado que regulen la autenticación de su texto, la constancia del consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cues- tiones que se susciten necesariamente antes de la entrada en vi- gor del tratado se aplicarán desde el momento de la adopción de su texto".

Respecto al problema de la suspensión de la aplicación de un trata- do, los artículos 57 y 58 de la Convención hacen referencia al mis- mo. Al efecto, el artículo 57 señala:

Artículo 57. Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes.

- "La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una parte determinada:
- a) conforme a las disposiciones del tratado; o
  - b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las -

partes previa consulta con los demás Estados contratantes".

El artículo 58 dice:

Artículo 58. Suspensión de la aplicación de un tratado multilateral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente.

"1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y sólo en sus relaciones mutuas:

a) si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado; o

b) si tal suspensión no está prohibida por el tratado, a condición de que:

i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud al tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones; y

ii) no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.

2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del párrafo 1 el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se proponen suspender".

(227) El Tratado que creó la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), autoriza su reforma por decisión unánime del Consejo de Ministros, sin exigir ningún acto posterior de aprobación o ratificación que requiera el consentimiento del órgano parlamentario o legislativo del Estado.

Los Tratados de París y de Roma, en diversas disposiciones y - para distintos tipos de reformas, confieren a las Instituciones de las Comunidades competencias al efecto.

- (228) Aún cuando el Consejo Ejecutivo tenía ya preparado el Reglamento, su tramitación estaba pendiente de la entrada en vigor del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, - lo que se realizó para los cinco países, el 23 de Marzo de 1969.
- (229) Véase Acta número 27 de la Vigésimoséptima Reunión del Consejo Ejecutivo, Julio de 1967, San José, Costa Rica. \_\_\_\_\_ Referente al procedimiento, véase, Documento SIECA/CE XXVII/D.T. 25, de 21 de Julio de 1967, p. 23-24.
- (230) La propuesta fué considerada en el curso de la Primera Reunión Conjunta del Consejo Económico Centroamericano, el Consejo Monetario y los Ministros de Hacienda de Centroamérica, celebrada en Managua, Nicaragua, en Noviembre de 1967, en relación con un documento preparado por la SIECA, denominado "Primer Borrador del Proyecto de Protocolo para marchar en forma flexible el Arancel Uniforme Centroamericano", que recogía lineamientos acordados por el Consejo Económico Centroamericano en su 8ª Reunión Ordinaria. Después de deliberar se sobre las dificultades de índole constitucional, se señaló:
- "La reunión fué de parecer, respecto a la materia mencionada, - que no creía en la viabilidad de la primera de las citadas alternativas - en el sentido de que las modificaciones a los gravámenes uniformes que autoricen los órganos legislativos, entren en vigor mediante simple resolución del Consejo Económico -, ya que aparentemente aún no ha llegado la hora de dotar a los órganos regionales de una facultad tan marcadamente supranacional. Por -

lo mismo estuvo de acuerdo en que la vigencia de los niveles - arancelarios que en su oportunidad fije el Consejo Económico - debe suspender de la emisión de un Acuerdo o Resolución del Poder u Organismo Ejecutivo de cada país, razón por la cual prestaba su apoyo al procedimiento contenido en la alternativa B. mencionada": Acta de la Reunión Conjunta, publicada por la - SIECA, p. 36. \_\_\_\_\_ Respecto a otros fundamentos y aspectos de la propuesta, véase: "La inflexibilidad del Arancel Uniforme de la Integración Económica", Nota de Secretaría, Doc. SIECA/CEC-VII-O/D.T. 4, de 25 de Julio de 1967.

(231) Las amplias y variadas funciones encomendadas a la Secretaría Permanente (SIECA), están contenidas en el artículo XXIV del Tratado General, el que literalmente dice:

"La Secretaría velará por la correcta aplicación entre las partes contratantes, de este Tratado, del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana, del Convenio sobre Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, del Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, de los tratados económicos vigentes entre cualesquiera de las Partes contratantes, y de todos los demás convenios suscritos o que se suscribieren que tengan por objeto la integración económica centroamericana y cuya interpretación no esté específicamente encomendada a algún otro organismo.

La Secretaría velará por el cumplimiento de las resoluciones del Consejo Económico Centroamericano y del Consejo Ejecutivo creados por este Tratado y ejercerá, además, las funciones - que le delegue el Consejo Ejecutivo. Los reglamentos que normarán sus funciones serán aprobados por el Consejo Económico.

La Secretaría tendrá también a su cargo la realización - de los trabajos y estudios que le encomienden el Consejo Ejecutivo y el Consejo Económico Centroamericano. En el desempeño - de estas funciones aprovechará los estudios y trabajos realiza dos por otros organismos centroamericanos e internacionales y procurará, en lo pertinente, su colaboración".

- (232) Leer comentario y observaciones a la resolución número 42 del Consejo Ejecutivo, en página 291, supra.
- (233) Fernandez-Shaw, Felix: "La integración de Centro-América". Ob. cit., p. 78.
- (234) Los demás instrumentos por los que se rige la Integración económica Centroamericana establecen, con ligeros variantes, el mecanismo citado. Tenemos algunos ejemplos, en los siguientes: Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica, artículo XXV; Tratado de Asociación Económica entre las Repúblicas de Honduras, Guatemala y El Salvador, artículo XXIX; Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, artículo XI; Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, artículo XIII.
- (235) Las dos resoluciones transcritas fueron aprobadas con el voto favorable de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Costa Rica sostuvo otra - posición y Honduras se reservó el derecho de apelar. Véase acta de - la Vigésimonovena Reunión del Consejo Ejecutivo, Setiembre de 1967, o. 34.
- (236) "Problemas del Mercado Común". Documento SIECA/CEC-VII-O/D.T. 3, 27 de Julio de 1967, p. 27-31.

- (237) Acta Vigésimotercera, correspondiente a la Decimoquinta Reunión - Extraordinaria del Consejo Económico Centroamericano, celebrada en San Salvador, El Salvador, el 27 de Marzo de 1968. Texto en: "Derecho de la Integración", número 3, Octubre 1968. INTAL, Buenos Aires, Argentina, p. 147.
- (238) Secretaría de Relaciones Exteriores de Guatemala: "Pactos con el Resto de Centro América". Colección de Tratados de Guatemala, volumen I. Publicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, - Guatemala, Julio de 1939, p. 142.
- (239) Bertrand Galindo, Francisco: "Breve análisis del Reglamento sobre procedimientos para resolver conflictos". Estudio contenido en: - "Derecho de la Integración", número 4, Abril 1969. INTAL, Buenos Aires, Argentina, p. 157.
- (240) El texto de la resolución número 103 del Consejo Ejecutivo, puede consultarse en: "Derecho de la Integración", número 3, Octubre - 1968. INTAL, Buenos Aires, Argentina, p. 153-154.
- (241) Declaración de los Presidentes de América, Reunión de Jefes de Estado Americanos, Punta del Este, Uruguay, 12 al 14 de Abril de - 1967. \_\_\_\_\_ Unión Panamericana, Washington, D.C., 1967, p. 8.
- (242) El artículo XX del Tratado General faculta al Consejo Económico Centroamericano para "dirigir la integración de las economías centroamericanas y coordinar la política, en materia económica de los Estados contratantes". El artículo XXI otorga al mismo Consejo Económico Centroamericano, la siguiente competencia: "En caso de que no haya acuerdo, se recurrirá al Consejo Económico Centroamericano, a -

fin de que éste llegue a una resolución definitiva al respecto".

En relación al Consejo Ejecutivo, el artículo XXII del Tratado General establece:

"El Consejo Ejecutivo dictará las medidas que sean necesarias a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos mediante este Tratado y de resolver los problemas que se susciten con motivo de la aplicación de sus disposiciones. Asimismo, podrá suponer a los Gobiernos la suscripción de los convenios multilaterales que adicionalmente se requiera para alcanzar los fines de la integración económica de Centroamérica, inclusive una unión aduanera entre sus territorios.

El Consejo Ejecutivo asume para las Partes contratantes, las funciones encomendadas a la Comisión Centroamericana de Comercio en el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana y en el Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, así como las encomendadas a la Comisión Centroamericana de Integración Industrial en el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, y las atribuciones y deberes de las comisiones mixtas de los tratados bilaterales vigentes entre las Partes contratantes".

Refiriéndose a la Secretaría Permanente (SIECA), el artículo XXIV del Tratado General, señala básicamente sus funciones. El texto de este precepto puede consultarse en cita número (231), supra.

(243) La Nota de la Secretaría, figuran en el documento SIECA/CE-I/D.T.4.-

## A N E X O S

### ANEXO NUMERO UNO:

Las disposiciones constitucionales que en una u o tra forma y en mayor o menor grado tienen relación con el problema de la soberanía y de la distribución y ejercicio de competencias en los diversos Estados centroamericanos, siguiendo un orden por países, es la siguiente:

a) Constitución de la República de Guatemala, emitida el 15 de Septiembre de 1965 y en vigencia desde el 5 de Mayo de 1966.----- Publicación del Ministerio de Gobernación, Departamento de Recopilación de Leyes, Edición de 1965:

Artículo 1º. "Guatemala es una Nación libre, soberana e independiente, organizada para garantizar a sus habitantes el goce de la libertad, la seguridad y la justicia. Su sistema de Gobierno es republicano y democrático representativo. Delega el ejercicio de su soberanía en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entre los cuales no hay subordinación.

Ninguna persona, grupo o entidad puede arrogarse la soberanía de la Nación!

Artículo 2º. "Guatemala como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones fraternales de cooperación y solidaridad con los demás Estados que formaron la Federación, y fiel al ideal patriótico que la inspiró tomará todas las medidas justas y pací-



ficas que conduzcan a la realización total o parcial de la unión de Centroamérica".

Artículo 3º. "Guatemala ejerce plena soberanía y dominio sobre su territorio que comprende: suelo, subsuelo, plataforma continental, aguas territoriales y el espacio sobre las mismas, y se extiende a los recursos naturales y a las riquezas que en ella existen, sin perjuicio de la libre navegación marítima y área de conformidad con la ley y lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales".

Artículo 6º. "Se considera también guatemaltecos naturales a los nacionales por nacimiento de las demás repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifiestan ante su autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos, bilaterales o multilaterales".

Artículo 127, párrafo 1º. "Es potestad del Estado la emisión de moneda y su regulación con el objeto de crear y mantener condiciones monetarias, cambiarias y crediticias favorables al desarrollo de la economía nacional".

Artículo 143. "El ejercicio del poder público está sujeto a las disposiciones contenidas en la Constitución y en las leyes".

Artículo 144. "El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República, salvo las limitaciones que establezca la Cong

titución, los tratados internacionales y las normas del derecho internacional general aceptadas por Guatemala".

Artículo 145, párrafo 3º. "La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución".

Artículo 156. "La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República".

Artículo 170. "Corresponde también al Congreso:

- 1º.- Decretar, reformar y derogar las leyes.
- 13º.- Aprobar, antes de su ratificación, con el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, cuando: a) afecten a las leyes vigentes para las que esta Constitución requiere la misma mayoría de votos; b) afecten al dominio de la nación o establezcan la unión parcial o total de Centroamérica; c) obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por ciento del presupuesto de ingresos ordinarios, o cuando el monto de la obligación sea indeterminado; d) constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales; e) contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional.
- 14º.- Aprobar, antes de su ratificación con el voto de la mayoría absoluta del total de diputados que integran el Congreso, los Tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, cuando: a) afecten leyes vigentes,

salvo el caso del literal a) del inciso anterior, o que se refieran a la organización internacional.

Artículo 172. "Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos institucionales son nulas ipso jure".

Artículo 189. "Son funciones del Presidente de la República:

- 2º.- Cumplir y hacer que se cumplan la Constitución y las leyes.
- 4º.- Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu.
- 6º.- Participar en la formación de las leyes, mediante la presentación de proyectos al Congreso por conducto de los Ministros de Estado.
- 11º.- Con exclusividad, dirigir la política internacional de la República y celebrar, ratificar y denunciar los Tratados, convenios o arreglos internacionales.
- 12º.- Someter a la consideración del Congreso, antes de su ratificación, los tratados, convenios o arreglos a que se refieren los incisos 13º y 14º del artículo 170 de esta Constitución, así como los contratos y concesiones sobre servicios públicos que otorgue el ejecutivo, previo dictamen del Consejo de Estado.

Artículo 213. "Son Atribuciones del Consejo de

Estado: 3) opinar sobre los tratados, convenios y demás areglos internacionales que requieran la aprobación del Congreso, previamente a la consideración de éste".

Artículo 240, párrafos 1º y 2º. "La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales de justicia el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.

La función judicial se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales de jurisdicción ordinaria o privativa".

Artículo 246. "Los Tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalce sobre cualquier ley o tratado internacional.

En casos concretos, en cualquier instancia y en casación, antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear la inconstitucionalidad total o parcial de una ley y el tribunal deberá pronunciarse al respecto. Si declarase la inconstitucionalidad, la sentencia se limitará a establecer que el precepto legal es inaplicable al caso planteado y será transcrita al Congreso".

Artículo 263. "La Corte de Constitucionalidad conocerá de los recursos que se interpongan contra las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad".

Artículo 266. "El Congreso de la República y el Consejo de Estado, reunidos en Asamblea, podrán decre

tar, de plano, con el voto de dos terceras partes del total de los integrantes de ambos cuerpos, las reformas a la Constitución que sean necesarias para que Guatemala que de organizada como parte de la unión total o parcial de Centro América. En la misma forma podrán decretar las reformas que tiendan a la reincorporación de Belice al territorio nacional.

Para cualquiera otra reforma constitucional, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto de las dos terceras partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, señalando el artículo o los artículos que hayan de revisarse, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente".

Artículo 267. "No podrá decretarse la reforma de los artículos 14, inciso 4º; 33, 166, inciso 10; 182 y 185 ni de ninguno de los que se refieren al principio de no reelección para el ejercicio de la Presidencia de la República. Tampoco podrá suspenderse los efectos de tales artículos, ni restárseles en forma alguna su efectividad y vigor".

Artículo 268. "El Congreso convocará a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, la que deberá quedar instalada dentro de los noventa días siguientes a la fecha de su convocatoria.

En la convocatoria se insertarán el artículo o artículos cuya reforma se hubiere acordado".

b) Constitución Política de El Salvador, emitida el 8 de Enero de 1962.----- Publicación de la Secretaría de

Información de la Presidencia de la República. Edición  
1962, San Salvador, República de El Salvador.

Artículo 1º. El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo y está limitada a lo honesto, justo y conveniente a la sociedad".

Artículo 4º. El Gobierno se compone de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que actuarán independientemente dentro de sus facultades, las cuales son indelegables y colaborarán en el ejercicio de las funciones públicas".

Artículo 9º. "Ninguno de los poderes constituidos podrá celebrar o aprobar tratados o convenciones en que de alguna manera se altere la forma de gobierno establecida, o se menoscabe la integridad del territorio o la soberanía del Estado".

Artículo 10º. "Siendo El Salvador una parte de la Nación Centroamericana, está obligada a propiciar la reconstrucción total o parcial de la República de Centro América. El Poder Ejecutivo, con aprobación del Legislativo, podrá realizarla en forma confederada, federal o unitaria, sin necesidad de autorización o ratificación de una Asamblea Constituyente, siempre que se respeten los principios republicanos y democráticos en el nuevo Estado y que se garanticen plenamente los derechos esenciales de los individuos y de las asociaciones".

Artículo 12º, inciso 4º. Son salvadoreños por nacimiento: 4º) los originarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante

la autoridad competente su voluntad de ser salvadoreños".

Artículo 14º. "La nacionalidad salvadoreña se pierde por adquisición voluntaria de otra.

Los salvadoreños por nacimiento que se naturalicen en país extranjero, recobrarán aquella calidad al solicitarlo ante la autoridad competente, probando dos años consecutivos de residencia en el país después de su regreso. Sin embargo, si se hubieran naturalizado en alguno de los Estados que formaron la República Federal de Centro América, recobrarán su calidad de salvadoreños por nacimiento, al domiciliarse en El Salvador y solicitarlo ante autoridad competente".

Artículo 15º. "Podrá regularse por medio de tratados la condición de los salvadoreños y demás centroamericanos que adopten la nacionalidad de cualquiera de los Estados que formaron la República Federal de Centro América, para el efecto de que conserven su nacionalidad de origen".

Artículo 36. "El Poder Legislativo reside en una Asamblea Legislativa".

Artículo 47º. "Corresponde a la Asamblea Legislativa :

- 12) Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes secundarias;
- 13) Erigir jurisdicciones y establecer cargos a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, para que los funcionarios respectivos conozcan en toda clase de causas criminales, civiles, mercantiles o laborales; y a propuesta del Poder Ejecutivo, para que conozcan en toda clase de asuntos contencioso-administrativos;

- 19º) Establecer y regular el sistema monetario nacional, y resolver sobre la admisión y circulación de la moneda extranjera;
- 29º) Ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados o denegar su ratificación. En ningún caso podrá ratificar los tratados o convenciones en que se restrinjan o afecten de alguna manera las disposiciones constitucionales. Para la ratificación de todo tratado o pacto por el cual se someta a arbitraje cualquier cuestión relacionada con los límites de la República, será necesario el voto de las tres cuartas partes, por lo menos, de los Diputados electos;
- 30º) Conceder o negar permiso a los salvadores para que acepten cargos diplomáticos o consulares que deban ser ejercidos en El Salvador. Se exceptúa el caso de representaciones diplomáticas o consulares de los Estados que formaron la República Federal de Centro América, en el cual no habrá necesidad de licencia.

Artículo 50º. "Tienen exclusivamente iniciativa de ley los Diputados, el Presidente de la República por medio de sus Ministros y la Corte Suprema de Justicia".

Artículo 59º. "Para interpretar, reformar o derogar las leyes se observarán los mismos trámites que para su formación".

Artículo 61º. "Siempre que un proyecto de ley que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto interpretar, reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la Re



pública, no podrá discutirse sin oír previamente la opinión de aquel Tribunal, quien deberá emitirla dentro del mismo o del siguiente período de sesiones, según la importancia, urgencia o extensión del proyecto".

Artículo 78º. "Corresponde al Poder Ejecutivo:

- 1º) Mantener ileso la soberanía de la República y la integridad del territorio;
- 3º) Sancionar, promulgar y publicar las leyes, y hacerlas ejecutar;
- 12º) Celebrar tratados y convenciones internacionales, someterlas a la ratificación de la Asamblea Legislativa y vigilar su cumplimiento".

Artículo 80º. "Todos los decretos, órdenes y resoluciones que el Poder Ejecutivo emita, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulas y no deberán ser obedecidas aunque se den a reserva de someterlas a la aprobación del Poder Legislativo".

Artículo 81º. "El Poder Judicial será ejercido por la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y los demás Tribunales que establezcan las leyes secundarias. Corresponde a este poder la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal, mercantil y laboral, así como en las otras que determine la ley".

Artículo 95º. "Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los Tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Poderes, contraria a los preceptos constitucionales".

Artículo 96º. "La Corte Suprema de Justicia será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano".

Artículo 150, párrafo 1º. "Todos los hombres son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no se podrá establecer restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión".

Artículo 196º. "Nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que previamente haya establecido la ley".

Artículo 220º. "Los principios, derechos y obligaciones establecidas por esta Constitución no pueden ser alteradas por las leyes que regulen su ejercicio.

La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público primará sobre el interés privado".

Artículo 221º. "Toda persona puede pedir Amparo ante la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que le otorga la presente Constitución".

Artículo 222º. "La reforma de esta Constitución solo podrá acordarse por los dos tercios de votos de los representantes electos a la Asamblea Legislativa. En la resolución que se adopte, se puntualizará el artículo o artículos que hayan de reformarse y se incluirá el proyecto correspondiente. La resolución y proyecto de reformas se publicarán en el Diario Oficial y volverán a tomarse

en consideración en la Asamblea Legislativa siguiente. Si ésta los ratifica, se convocará una Asamblea Constituyente para que, si lo tuviere a bien, decrete las reformas".

c) Constitución Política de la República de Nicaragua, emitida el 1º de Noviembre de 1950 y en vigencia desde el 6 del mismo mes y año.----- Publicación de la Imprenta Nacional, Managua D.N., 1966:

Artículo 1º. Nicaragua es un Estado unitario, libre, soberano e independiente".

Artículo 6º, párrafo 1º. "La soberanía y el territorio son indivisibles e inalienables. Sin embargo, podrán celebrarse tratados que tiendan a la unión con una o varias repúblicas de la América Central; o que tengan por objeto la construcción, saneamiento, operación y defensa de un canal interoceánico a través del territorio nacional".

Artículo 9º. "Nicaragua proscribe la guerra de agresión y la intervención en los asuntos de otros Estados. Acoge los principios de la Carta del Atlántico, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los principios de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, aprobados en la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá. Reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos, el arbitraje como medio de resolver los conflictos internacionales y los demás principios que forman el Derecho Internacional Americano para la Organización de la Paz".

Artículo 18º. "Son naturales:

- 4) Los naturales de las demás repúblicas de la América Central residentes en Nicaragua, que manifestaren personalmente ante la autoridad competente el deseo de ser nicaragüenses, siempre que exista la reciprocidad en el país de origen y hasta donde ésta se extienda".

Artículo 21º, inciso 1). "La nacionalidad nicaragüense se pierde:

- 1) Por nacionalización voluntaria en país extranjero, que no sea de la América Central. El nicaragüense natural que así la perdiere recobrará su calidad de nicaragüense, si en cualquier tiempo volviere a Nicaragua".

Artículo 127º, párrafo 1º. "El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso compuesto de dos Cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado".

Artículo 148º. "Corresponde al Congreso en Cámaras separadas:

- 1) Decretar, reformar, interpretar y derogar las leyes;
- 8) Aprobar o desechar los tratados celebrados con naciones extranjeras. Los tratados a que se refieren los artículos 5º y 6º, necesitarán para su aprobación de dos tercios de votos;
- 13) Fijar la unidad monetaria y las condiciones de la moneda nacional, previo dictamen del respectivo organismo técnico".

Artículo 149º. "También corresponde al Congreso en Cámaras separadas, a iniciativa del Poder Ejecutivo:

- a) Habilitar y cerrar puertos y establecer aduanas marítimas y terrestres, o dictar las reglas con que debe hacerlo el Ejecutivo".

Artículo 150º. "Las facultades del Poder Legislativo son indelegables, excepto las de legislar en los ramos de Fomento, Policía, Asistencia Social, Salubridad Pública, Guerra, Educación Pública, Agricultura y Trabajo, Hacienda y Economía, que podrán ser delegadas en el Poder Ejecutivo para que las ejerza en receso del Congreso. La facultad delegada de legislar en Hacienda no comprende la de crear impuestos, ni la de modificar las partidas del Presupuesto General de Gastos; sin embargo podrá el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, crear contribuciones o impuestos con carácter general, cuando hubiese estallado una guerra civil o internacional en que participe la República, dando cuenta al Congreso en su próxima reunión".

Artículo 160º. "Corresponde al Congreso en Cámaras Unidas:

8) Conocer de las reformas parciales a la Constitución Política y de las Leyes Constitucionales".

Artículo 161º. "Tienen derecho de iniciativa en la formación de las leyes y resoluciones o declaraciones legislativas, los Diputados y el Poder Ejecutivo. También lo tienen, en asuntos de su incumbencia, el Poder Judicial representado por la Corte Suprema de Justicia y el Poder Electoral representado por el Tribunal Supremo Electoral".

Artículo 179º. "Siempre que un proyecto de ley que no proceda de la Corte Suprema de Justicia tenga por objeto dictar, reformar o derogar disposiciones que tengan relación con los Códigos Civil, Penal, de Comercio, de Minas o de Procedimientos Civil o Penal, no podrá dis-

cutirse sin oír la opinión de aquel Tribunal, que habrá de emitirla dentro del término que se señale la Cámara de Diputados tomando en cuenta la tensión, importancia o urgencia del proyecto, sin que este término pueda ser menor de quince días. Vencido este término podrá procederse a la discusión del proyecto de ley aún sin la opinión del Tribunal Supremo".

Artículo 191º. "Corresponde al Presidente de la República con relación al Poder Legislativo:

- 6) Presentar, por medio de los Ministros de Estado, iniciativa de leyes y someter los tratados y contratos que necesiten aprobación legislativa;
- 7) Sancionar y publicar los actos legislativos, o usar de la facultad del veto con arreglo a la Constitución;
- 9) Emitir leyes en receso del Congreso, en uso de la delegación legislativa".

Artículo 195º. "Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa:

- 2) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes;
- 3) Reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y con esta misma restricción, dictar decretos, resoluciones e instrucciones pertinentes;
- 5) Dirigir las relaciones exteriores, nombrar los Agentes Diplomáticos y Consulares de la República, recibir los Agentes Diplomáticos y admitir a los Cónsules de otras Naciones;
- 8) Celebrar tratados y cualesquiera otras negociaciones diplomáticas y ratificarlas, previa aprobación del Poder Legislativo;

- 14) Vigilar la moneda nacional;
- 20) Habilitar puertos o cerrarlos, crear, trasladar o suprimir aduanas, de acuerdo con las reglas que dicte el Congreso".

Artículo 209º. "La justicia se administra en nombre de la República por el Poder Judicial. . Este será ejercido por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, el Tribunal Superior del Trabajo y los Jueces y demás funcionarios que la Constitución y las leyes determinen".

Artículo 229º. "Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, además de las atribuciones ya expresadas:  
19) Concurrir al Congreso, por medio de su Presidente o de otro de los Magistrados, a tomar parte en la discusión de los proyectos de ley que ella presentare, o que tengan por objeto dictar, reformar o derogar los Códigos Civil, Penal, de Comercio, de Minas o de Procedimientos Civil o Penal, o cualquier otro proyecto referente a la materia judicial".

Artículo 230º. "La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los Tribunales de Justicia".

Artículo 324º. "La Constitución es la Ley Suprema de la República. No tendrán valor alguno las leyes, decretos, reglamentos, órdenes, disposiciones, pactos o tratados que se opusieren a ella o alteraren de cualquier modo sus prescripciones".

Artículo 326º. "La Constitución y Leyes Constitucionales podrán ser reformadas total o parcialmente".

Artículo 327º. "La reforma parcial se sujetará a los trámites siguientes:

- 1) La iniciativa de reformas de uno o más artículos, deberá presentarse, con una exposición de motivos, a la Cámara de Diputados, en sesiones ordinarias, respaldada con la firma de diez Diputados por lo menos;
- 2) Leída por dos veces con intervalos de tres días, la Cámara resolverá, por mayoría absoluta de votos, si se toma o no en consideración la iniciativa de reforma;
- 3) En caso afirmativo, la Mesa Directiva la pasará a una Comisión Especial integrada por cinco Representantes, dos de los cuales corresponderán al partido de la minoría. Esta Comisión deberá emitir dictamen en el término de ocho días;
- 4) El dictamen y la iniciativa serán discutidos conjuntamente en dos debates de acuerdo con las reglas ordinarias;
- 5) Si la Cámara al aprobar o rechazar el dictamen, acoge la iniciativa de reforma se pasará ésta a la Cámara del Senado, la cual seguirá para su pronunciamiento, los mismos trámites ordenados para la Cámara de Diputados;
- 6) Si la Cámara del Senado se pronuncia también a favor de la reforma, invitará a la de Diputados para formar Congreso en Cámaras Unidas;
- 7) El Congreso en Cámaras Unidas nombrará una Comisión Especial de su seno para que redacte el proyecto de ley de reforma en un término de ocho días. La Comi-



sión redactora estará integrada por cinco Diputados y dos Senadores, correspondiendo tres miembros de ella, al partido de la minoría. El proyecto de ley de reforma será discutido en dos debates y su aprobación requerirá mayoría absoluta de votos;

- 8) El proyecto así aprobado pasará al Poder Ejecutivo.

El Presidente de la República, al iniciarse la próxima legislatura, lo devolverá al Congreso con una exposición de motivos, aceptándolo, rechazándolo o bien proponiendo reformas;

- 9) Si el proyecto fuere aceptado, el Congreso enviará los autógrafos al Poder Ejecutivo para su publicación. En caso de rechazo o de reforma, el proyecto será nuevamente discutido en dos debates por el Congreso en Cámaras Unidas, todo en sus primeras sesiones;

- 10) Los autógrafos del proyecto, tal como fuere nuevamente aprobado por la mayoría absoluta del Congreso en Cámaras Unidas, pasará al Poder Ejecutivo para su publicación".

Artículo 3282. "La reforma total de la Constitución solo podrá decretarse pasados diez años de su vigencia, por una Asamblea Constituyente, después que el Congreso Nacional declare que ha lugar a la reforma, siguiendo los trámites establecidos en los ordinales del 1) al 6) inclusive, del artículo anterior.

El Congreso Nacional queda disuelto por el hecho mismo de pronunciarse en favor de la reforma".

d) Constitución Política de la República de Costa Rica, emitida el 7 de Noviembre de 1949 y en vigencia desde el 8 del mismo mes y año.----- Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1968:

Artículo 2º. "La soberanía reside exclusivamente en la Nación".

Artículo 3º. "Nadie puede arrogarse la soberanía; el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la Patria".

Artículo 6º. "El Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva en el espacio aéreo de su territorio y en sus aguas territoriales y plataforma continental, de acuerdo con los principios de Derecho Internacional y con los tratados vigentes".

Artículo 7º. "Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la organización política del país, requerirán aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una Asamblea Constituyente convocada al efecto" (Así reformado por ley Número 4123 de 30 de Mayo de 1968).

Artículo 9º. "El Gobierno de la República es popu

lar, representativo, alternativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias".

Artículo 10º. "Las disposiciones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo contrarias a la Constitución serán absolutamente nulas, así como los actos de los que usurpen funciones públicas, y los nombramientos hechos sin los requisitos legales.

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por votación no menor de dos tercios del total de sus miembros, declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones del Poder Legislativo y de los decretos del Poder Ejecutivo.

La ley indicará los tribunales llamados a conocer de la inconstitucionalidad de otras disposiciones del Poder Ejecutivo".

Artículo 14º. "Son costarricenses por naturalización:

- 2) Los nacionales de los otros países de Centro América, de buena conducta y con un año de residencia en la República por lo menos, que manifiesten ante el Registro Civil su decisión de ser costarricenses.
- 4) Los centroamericanos, españoles e iberoamericanos que no lo sean por nacimiento y los demás extranjeros que hayan estado domiciliados en Costa Rica por el término mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de naturalización, de acuerdo con los requisitos que indique la ley".

Artículo 68º. "No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores.

En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense".

Artículo 105º. La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa".

Artículo 121º. "Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:

- 1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el Capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;
- 4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos.

Los tratados públicos y convenios internacionales que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, , con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros.

No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos autoricen de modo expreso tal derivación. (Así reformado por ley Número 4123 de

30 de Mayo de 1968).

- 17) Determinar la ley de la unidad Monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y medidas. Para Determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea deberá recabar previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación monetaria;
- 20) Crear los tribunales de justicia y los demás organismos para el servicio nacional".

Artículo 123º. "Durante las sesiones ordinarias, la iniciativa en la formación de las leyes corresponde a cualquiera de los miembros de la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo, por medio de los Ministros de Gobierno".

Artículo 129º, párrafo 4º. "La ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior; y contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario".

Artículo 130º. "El Poder Ejecutivo lo ejercen en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores".

Artículo 140º. "Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:

- 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento;
- 5) Ejercer iniciativa en la formación de las leyes, y el derecho de veto;
- 10) Celebrar convenios, tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea Legislativa, o por una Asamblea Constituyente,

cuando dicha aprobación la exija esta Constitución.

Los protocolos derivados de dichos tratados públicos o convenios internacionales que no requieran aprobación legislativa, entrarán en vigencia una vez promulgados por el Poder Ejecutivo". (Así reformado por Ley Número 4123 de 30 de Mayo de 1968).

12) Dirigir las relaciones internacionales de la República.

Artículo 152º. "El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley".

Artículo 153º. "Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, de trabajo y contencioso-administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario".

Artículo 195º. "La Asamblea Legislativa podrá reformar parcialmente esta Constitución, con absoluto arreglo a las siguientes disposiciones:

- 1) La proposición en que se pida la reforma de uno o más artículos debe presentarse a la Asamblea en sesiones ordinarias, firmada al menos por diez Diputados.
- 2) Esta proposición será leída por tres veces con intervalos de seis días, para resolver si se admite o no a discusión;
- 3) En caso afirmativo, pasará a una Comisión nombrada

por mayoría absoluta de la Asamblea, para que dictamine en el término de ocho días;

- 4) Presentado el dictamen, se procederá a su discusión por los trámites establecidos para la formación de las leyes; dicha reforma deberá aprobarse por votación de no menos de los dos tercios del total de los miembros de la Asamblea;
- 5) Acordado que procede la reforma, la Asamblea preparará el correspondiente proyecto, por medio de una Comisión bastando en este caso la mayoría absoluta para aprobarlo;
- 6) El mencionado proyecto pasará al Poder Ejecutivo; y éste lo enviará a la Asamblea con el Mensaje Presidencial al iniciarse la próxima legislatura ordinaria, con sus observaciones, o recomendándolo;
- 7) La Asamblea Legislativa, en sus primeras sesiones, discutirá el proyecto en tres debates, y si lo aprobare por votación no menor de dos tercios de votos del total de miembros de la Asamblea, formará parte de la Constitución y se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia".

Artículo 196º. La reforma general de esta Constitución, solo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente convocada al efecto. La ley que haga esa convocatoria deberá ser aprobada por votación no menor de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa y no requiere sanción del Poder Ejecutivo".

e) Constitución de la República de Honduras, contenida en Decreto número 20 de la Asamblea Nacional Constituyente, emitida el 3 de Junio de 1965 y en vigencia desde el 6 del mismo mes y año.----- Lito. "Aristón", Tegucigalpa, D. C.:

Artículo 1º. Honduras es un Estado soberano e independiente, constituido como República democrática, para asegurar el goce de la libertad, la justicia, el bienestar social y económico y la superación individual y colectiva de sus habitantes".

Artículo 2º. "La Soberanía reside originalmente en el pueblo y de éste dimanen todos los Poderes públicos, los que serán ejercitados por el Estado".

Artículo 3º. "Los funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley.

Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo, y acarrea responsabilidades".

Artículo 4º. "El Gobierno es republicano, democrático y representativo: se ejerce por los Poderes complementarios e independientes: legislativo, Ejecutivo y Judicial y se fundamenta en el principio de la integración nacional.

La integración implica la participación de todos los sectores políticos, económicos y sociales en la administración pública, principio éste que las autoridades deben respetar, a fin de asegurar y fortalecer la nacionalidad hondureña y hacer viable el progreso de Honduras, basado en la estabilidad política y la conciliación nacional".



Artículo 5º, numeral 3º. "Pertenece a Honduras:

3º.- También pertenecen al Estado de Honduras y están sujetos a su jurisdicción y control, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial en una extensión de doce millas náuticas y el lecho y el subsuelo de la plataforma submarina, zócalo continental e insular, y otras áreas submarinas adyacentes a su territorio fuera de la zona del mar territorial y hasta una profundidad de doscientos metros o hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes, más allá de este límite, permita la explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo.

En los casos a que se refieren los tres párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y solo podrán otorgarse concesiones por el Gobierno de la República a los particulares o sociedades civiles o mercantiles constituidas o incorporadas conforme a las leyes hondureñas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes. Tratándose del petróleo y de otros hidrocarburos, una ley especial determinará la forma en que podrá llevarse a cabo la explotación de esos productos, y de otros similares".

Artículo 6º. "Ninguna autoridad puede celebrar pactos, tratados o convenciones u otorgar concesiones que lesionen la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por traición a la Patria. En -

cualquier tiempo podrá deducirse la responsabilidad consiguiente a quienes lo hayan celebrado o contribuido a su ejecución".

Artículo 7º. "Cualquier tratado o convención que celebre el Poder Ejecutivo referente al territorio nacional o a la organización política del país requerirá la aprobación del Congreso Nacional, por votación no menor de tres cuartas partes de sus miembros".

Artículo 9º. "Honduras es un Estado disgregado de la República Federal de Centro América. En consecuencia, reconoce como una necesidad primordial volver a la unión con uno o más Estados de la Antigua Federación. A este efecto, queda facultado el Poder Legislativo para ratificar los tratados que tiendan a realizarla total o parcialmente, siempre que se propongan de manera justa y democrática".

Artículo 10º. "Honduras hace suyos los principios y prácticas del Derecho Internacional que procedan a la solidaridad humana, al respeto de la soberanía de los pueblos y al afianzamiento de la paz y la democracia universales".

Artículo 157º. "La Universidad Nacional es una institución autónoma con personalidad jurídica. Goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la enseñanza superior y la educación profesional; contribuirá a la investigación científica, a la difusión general de la cultura y cooperación al estudio de los problemas nacionales.

La ley y sus estatutos fijarán su organización,

funcionamiento y atribuciones.

El Estado podrá autorizar la fundación de Universidades particulares, oyendo para tal efecto la opinión razonada de la Universidad Nacional Autónoma.

Solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académico otorgados y reconocidos por la Universidad Nacional Autónoma, y los otorgados por otras universidades creadas de conformidad con la ley.

Solo las personas que ostenten título válido podrán ejercer actividades profesionales".

Artículo 165, párrafo 1º. El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados que serán elegidos por sufragio directo. El Congreso Nacional se reunirá en la Capital de la República ordinariamente el veintiseis de Mayo de cada año, sin necesidad de convocatoria, fecha en la cual será su solemne instalación, y clausurará sus sesiones el veintiseis de Octubre del mismo año".

Artículo 181º. "Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes:

- 4º.- Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes;
- 26º.- Aprobar o improbar los tratados y convenciones que el Ejecutivo haya celebrado. Pero en los tratados sobre intercambio comercial celebrados con otros países, siguiendo el sistema de listas de artículos, podrá el Ejecutivo, si conviniera a los intereses de la Nación, poner en práctica las modificaciones a tales listas, por el mero canje de notas de cancillería, cuando así se hubiere estipulado en el tra-

tado respectivo;

- 30º.- Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional y el patrón de pesas y medidas;
- 31º.- Establecer impuestos, contribuciones y otras cargas públicas;
- 38º.- Habilitar puertos y crear y suprimir aduanas;
- 39º.- Cuerpos libres e iniciativa del Poder Ejecutivo;
- 40º.- Reglamentar el comercio marítimo, terrestre y aéreo".

Artículo 183º. "Las Facultades del Poder Legislativo son indelegables, excepto las que se refieren a dar posesión a altos funcionarios del Estado".

Artículo 190º. "El Poder Ejecutivo se ejercerá por un ciudadano que se denominará Presidente de la República, y en su defecto, por uno de los tres Designados electos".

Artículo 201º. "El Presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del país.

Son sus atribuciones:

- 1º.- Dirigir la política del Estado y representarlo;
- 24º.- Dirigir las relaciones exteriores. Nombrar los Representantes Diplomáticos y Funcionarios Consulares de la República que deberán ser hondureños por nacimiento, a menos que se tratase de cargo ad-honorem o de representaciones conjuntas de Honduras y otros Estados Centroamericanos;
- 26º.- Celebrar tratados, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Nacional, y verificar el canje o el depósito del instrumento de ratificación;
- 27º.- Celebrar cualquiera otra clase de convenios de orden

Económico y cultural;

- 32º.- Participar en la formación de las leyes, presentando proyectos al Congreso Nacional, por medio de los Secretarios de Estado;
- 33º.- Sancionar las leyes que emita el Congreso Nacional, con esta expresión: "Por Tanto, Ejecutese". Usar el veto en los casos que corresponda y promulgar las disposiciones legislativas que no necesiten sanción del Ejecutivo, con la siguiente expresión: "Por Tan to, Publíquese".
- 35º.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes expidiendo los reglamentos y órdenes conducentes, sin alterar el espíritu de aquellas".

Artículo 210, párrafo 1º. "El Poder Judicial se ejerce por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones y los Juzgados que la ley establezca".

Artículo 222º. "Es facultad privativa de las Corte s y demás Tribunales de Justicia juzgar y ejecutar lo juzgado. A ellos corresponde la aplicación de las leyes en casos concretos que legalmente se sometan a su conocimiento".

Artículo 230º. "La Corte Suprema de Justicia, además de las atribuciones que la Ley le confiere, ejercerá las siguientes:

- 3º.- Conferir el Título de Abogado y autorizar a quienes lo hayan obtenido para el ejercicio del Notariado;
- 11º.- Declarar la inconstitucionalidad de las leyes, en la forma y casos previstos en esta Constitución".

Artículo 234º. "Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, de acuerdo con lo que establecen los artículos siguientes".

Artículo 235º. "A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas".

Artículo 236º. "La declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquella, podrán solicitarse por todo el que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo:

- 1º.- Por vía de acción, que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia;
- 2º.- Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y
- 3º.- También el Juez o Tribunal que conociere en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad, antes de dictar resolución. En este caso y en el previsto por el numeral anterior, se suspenderán los procedimientos, elevándose las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia".

Artículo 237. "El fallo de la Corte Suprema de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto, y solo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado".

Artículo 239º. "Tienen exclusivamente la iniciativa de ley los Diputados, el Presidente de la República

por medio de los Secretarios de Estado y la Corte Suprema de Justicia en asuntos de su competencia.

Cuando el Congreso estime necesaria la emisión de una ley, podrá nombrar una Comisión de su seno para elaborar el proyecto correspondiente".

Artículo 241º. "Todo proyecto de ley, al aprobarse por el Congreso Nacional, se pasará al Poder Ejecutivo, a más tardar dentro de tres días de haber sido votado, a fin de que éste le de su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley".

Artículo 245º. "No será necesaria la sanción, ni el Poder Ejecutivo podrá poner el veto en los actos y resoluciones siguientes:

7º.- En los tratados o contratos <sup>u</sup>que impruebe el Congreso Nacional".

Artículo 246º. "Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel Tribunal. La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso Nacional le señale.

Esta disposición no comprende las leyes de orden político, económico y administrativo".

Artículo 248º. "La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el periódico oficial "La Gaceta".

Podrá sin embargo, restringirse o ampliarse en la

nisma ley el plazo de que habla este artículo y ordenarse, en casos especiales, otra forma de promulgación".

Artículo 249º. "El Estado por medio de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo, con el auxilio de un organismo superior de planificación económica y demás organismos técnicos competentes, formulará y ejecutará el desarrollo económico y social que tendrá por objetivos esenciales alcanzar el más alto nivel de vida y el mayor grado de justicia social para todos los hondureños.

La dirección y coordinación de la política económica general del Estado corresponde al Poder Ejecutivo.

Las Secretarías de Estado y los organismos autónomos y semiautónomos y demás dependencias públicas, ajustarán sus programas, proyectos y actividades a la política económica y social que determine el Estado".

Artículo 250º. "El sistema económico de Honduras debe inspirarse en principios de eficiencia en la producción y de justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacionales, fundamentándose en la coexistencia armónica de los factores productivos, de las instituciones económico-privadas que caracterizan el sistema de libre empresa, de los sindicatos de trabajadores, de las empresas públicas, privadas y de economía mixta, de la propiedad privada y municipal y de otras asociaciones e instituciones económicas reconocidas por la ley".

Artículo 251º. "El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares. Pero el Estado, por razones de orden público e interés social, podrá reservarse el ejercicio de determinadas indus



trias básicas, explotaciones y servicios de interés público y dictar leyes y medidas económicas, fiscales y de seguridad pública, para encauzar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada, toda vez que tal intervención signifique aumentar la riqueza nacional, corregir el deficiente funcionamiento de la economía, o asegurar los beneficios económicos para el mayor número de los habitantes del país.

La acción del Estado dentro de la economía se manifestará por medio de la aplicación de medidas de política económica definidas y contenidas en leyes de la República".

Artículo 252º. "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Estado reconoce y garantiza las libertades de consumo, ahorro e inversión, ocupación, iniciativa, comercio, empresa y otras libertades que tiendan a reforzar el sistema de libre comercio y competencia dentro del territorio nacional. La ley determinará los requisitos y forma en que tales libertades serán garantizadas".

Artículo 258, párrafo 1º. "La ley podrá conceder un tratamiento preferencial o reservar determinados campos de inversión al capital hondureño en atención al interés nacional".

Artículo 259º. "El derecho de emisión monetaria corresponderá exclusivamente al Estado, que lo ejercerá por medio del Banco Central de Honduras, institución autónoma de servicio público, que se regirá por su ley orgánica y sus reglamentos.

El régimen bancario, monetario y crediticio será determinado por la ley.

El Estado por medio del Banco Central, tendrá a su cargo la formulación y desarrollo de la política monetaria, crediticia y cambiaria del país".

Artículo 260º. El Estado ordenará sus relaciones económicas externas sobre las bases de la cooperación internacional, la integración económica centroamericana y el respeto a los tratados y convenios que suscriba, en lo que no se opongan al interés nacional".

Artículo 263º. "Se prohíben los monopolios en favor de personas individuales o jurídicas de carácter particular.

El Estado limitará el funcionamiento de empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional, la producción de una o más ramas agropecuarias e industriales, o de una misma actividad comercial o de servicio. Una ley determinará lo relativo a esta materia".

Artículo 264º. No se consideran monopolios particulares los privilegios temporales que se concedan a los inventores, descubridores o autores en concepto de derecho de propiedad científica, literaria o comercial, patentes de invención o marcas de fábrica".

Artículo 342º. "Las reformas a esta Constitución podrán decretarse por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo

ratificarse por la siguiente Legislatura Ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia.

En ningún caso la reforma de los artículos 4, 192, 193, 196 y el presente, podrá realizarse por el procedimiento anterior"

-----

ANEXO NUMERO DOS

INTEGRACION ECONOMICA.

A) Libre Comercio.

- 1) Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración económica Centroamericana, suscrito en Tegucigalpa, Honduras, el 10 de Junio de 1958. Su vigencia se inició el 2 de Junio de 1959. En vigor en los cinco países centroamericanos.
- 2) Tratado de Asociación Económica entre las Repúblicas de Honduras, El Salvador y Guatemala, suscrito en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 6 de Febrero de 1960. En vigor para los tres países.
- 3) Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrito en Managua, Nicaragua, el 13 de Diciembre de 1960. Su vigencia se inició el 4 de Junio de 1961. En vigor para los cinco países centroamericanos.
- 4) Instrumento de adhesión de Costa Rica al Tratado General, suscrito en San José, Costa Rica, el 23 de Julio de 1962.
- 5) Reglamento del Consejo Ejecutivo del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, aprobado en Guatemala, en su Primera Reunión del 9 al 12 de Julio de 1962.
- 6) Protocolo al Tratado General, que comprende la lista de los artículos sujetos a regímenes transitorios de excepción al libre comercio entre Costa Rica y cada

uno de los demás Estados miembros, suscrito en Tegucigalpa, Honduras, el 16 de Noviembre de 1962. Su vigencia se inició el 9 de Noviembre de 1963. En vigor para los cinco países centroamericanos.

B) Equiparación Arancelaria.

- 1) Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito en San José, Costa Rica, el 1 de Septiembre de 1959. Su vigencia se inició el 29 de Septiembre de 1959. En vigor para los cinco países centroamericanos.
- 2) Protocolo sobre Preferencia Arancelaria Centroamericana al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito en San José, Costa Rica, el 1 de Septiembre de 1959.
- 3) Protocolo de Managua al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito en Managua, Nicaragua, el 13 de Diciembre de 1960. Su vigencia se inició el 4 de Junio de 1961. En vigor para los cinco países centroamericanos.
- 4) Protocolo por el que Costa Rica se adhiere al Protocolo de Managua sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito el 31 de Julio de 1962. Su vigencia se inició el 26 de Diciembre de 1963. En vigor en los cinco países centroamericanos.
- 5) Protocolo de San José al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito en San José, Costa Rica, el 31 de Julio de 1962. Su vigencia se inició el 29 de Abril de 1964. En vi-

gor en los cinco países centroamericanos.

- 6) Protocolo de San Salvador al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito en San Salvador, El Salvador, el 29 de Enero de 1963. Su vigencia se inició el 11 de Octubre de 1964. En vigor para los cinco países centroamericanos.
- 7) Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), suscrito en Antigua Guatemala, Guatemala, el 13 de Diciembre de 1963. Su vigencia se inició el 6 de Febrero de 1965. En vigor para Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
- 8) Protocolo de Guatemala al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito en Guatemala, Guatemala, el 1 de Agosto de 1964. Su vigencia se inició el 4 de Mayo de 1967. En vigor para Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.
- 9) Segundo Protocolo de San Salvador al Convenio sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito en San Salvador, El Salvador, el 5 de Noviembre de 1965. Su vigencia se inició el 14 de Octubre de 1967. En vigor para Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
- 10) Acuerdo Especial Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación de Tejidos de Rayón y otras Fibras Artificiales o Sintéticas, suscrito en San Salvador, el 7 de Febrero de 1965. Su vigencia se inició el 27 de Enero de 1968. En vigor para los



cinco países centroamericanos.

- 11) Tercer Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que garantiza el libre comercio al papel y a los envases de vidrio entre Nicaragua y los demás países, suscrito en San Salvador, El Salvador, el 12 de Octubre de 1966. Su vigencia se inició el 20 de Enero de 1968. En vigor en todos los países centroamericanos, a excepción de Honduras.
- 12) Protocolo al Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación y al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración (Sistema Especial de Promoción de Actividades Productivas), llamado Segundo Protocolo de Managua, suscrito en Managua, Nicaragua, el 16 de Noviembre de 1967. Su vigencia se inició el 23 de Marzo de 1969. En vigor en todos los países centroamericanos a excepción de Honduras.
- 13) Protocolo de San José al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Medidas de Emergencia de Defensa de la Balanza de Pagos), suscrito en San José, Costa Rica, el 1 de Junio de 1968. En vigencia desde el 9 de Noviembre de 1968. En vigor para todos los países centroamericanos a excepción de Costa Rica.

C) Desarrollo Industrial Integrado.

- 1) Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, suscrito en Tegucigalpa, Honduras, el 10 de Junio de 1958. Su vigencia se inició

el 4 de Junio de 1961. En vigor para los cinco países centroamericanos.

2) Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, suscrito en San José, Costa Rica, el 31 de Julio de 1962. Su vigencia se inició el 23 de Marzo de 1969. En vigor para los cinco países centroamericanos.

3) Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, suscrito en San Salvador, El Salvador, el 29 de Enero de 1963. Su vigencia se inició el 26 de Febrero de 1965. En vigor para Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

4) Segundo Protocolo al Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, suscrito en San Salvador, El Salvador, el 5 de Noviembre de 1965. Su vigencia se inició el 27 de Enero de 1968. En vigor en los cinco países centroamericanos.

5) Protocolo al Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial (Protocolo sobre Trato Preferencia a Honduras), suscrito en Managua, Nicaragua, el 23 de Septiembre de 1966. Su vigencia se inició el 23 de Marzo de 1969. En vigor para los cinco países centroamericanos.

D) Desarrollo Agrícola y Pecuario Integrado.

1) Protocolo Especial sobre Granos (Protocolo de Limón), suscrito en Limón, Costa Rica, el 28 de Octubre de 1965. Su vigencia se inició el 14 de Octubre de 1967. En vigor para los cinco países centroamericanos.



- 2) Acuerdo sobre el Reglamento de Registro Genético de Ganado, suscrito por los Ministros de Agricultura de Centroamérica, el 5 de Noviembre de 1965.

E) Régimen Financiero.

- 1) Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, suscrito en Managua, Nicaragua, el 13 de Diciembre de 1960. Su vigencia se inició el 8 de Mayo de 1961. En vigor en los cinco países centroamericanos.
- 2) Convenio Constitutivo de la Cámara de Compensación Centroamericana, suscrito en Tegucigalpa, Honduras, el 28 de Julio de 1961. Inició sus operaciones el 1 de Octubre de 1961, con la participación de los Bancos Centrales de Guatemala, El Salvador y Honduras. El Banco Central de Nicaragua se adhirió el 1 de Mayo de 1962 y el Banco Central de Costa Rica el 16 de Junio de 1963.
- 3) Instrumento de adhesión de Costa Rica al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, suscrito en San José, Costa Rica, el 23 de Julio de 1962.
- 4) Convenio de Compensación y de Créditos Recíprocos entre los Bancos Centrales Miembros de la Cámara de Compensación Centroamericana y el Banco de México, S.A., suscrito en México D.F., el 27 de Agosto de 1963. En vigor para los Bancos Centrales participantes.
- 5) Acuerdo para el Establecimiento de la Unión Monetaria Centroamericana, suscrito en San Salvador, El

Salvador, el 25 de Febrero de 1964. En vigor para los cinco Bancos Centrales.

- 6) Constitución del Fondo Centroamericano de Integración Económica, Año 1965.
- 7) Estatuto del Fondo Centroamericano de Integración Económica, de fecha 20 de Abril de 1965.
- 8) Convenio de Préstamo AID y Banco Centroamericano (Fondo CA). Abril de 1965
- 9) Declaración de Política del Banco Centroamericano. Año 1965.

F) Transportes y Comunicaciones.

- 1) Acuerdo Regional para la Importación Temporal de Vehículos por carretera, suscrito en San Salvador, el 8 de Noviembre de 1956. Su vigencia se inició conforme depósito en cada país. En vigor en los cinco países centroamericanos.
- 2) Acuerdo Centroamericano sobre Circulación por Carretera, suscrito en Tegucigalpa, Honduras, el 10 de Junio de 1958. Su vigencia se inició el 18 de Diciembre de 1959. En vigor para los cinco países centroamericanos.
- 3) Acuerdo Centroamericano sobre Señales Viales Uniformes, suscrito en Tegucigalpa, Honduras, el 10 de Junio de 1958. Su vigencia se inició conforme depósito de cada país. En vigor para los cinco países centroamericanos.
- 4) Convenio Constitutivo de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea -COCESNA-, sus

crito en Tegucigalpa, Honduras, el 26 de Febrero de 1960. En vigor para los cinco países centroamericanos.

- 5) Tratado sobre Telecomunicaciones entre Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, suscrito en Managua, Nicaragua, el 29 de Abril de 1966. Su vigencia se inició el 18 de Noviembre de 1966. En vigor para Guatemala, El Salvador y Honduras. Costa Rica depositó su instrumento de ratificación el 18 de Enero de 1968.

G) Seguridad Social.

- 1) Convenio Multilateral de Seguridad Social, suscrito en San José, Costa Rica, el 14 de Octubre de 1967. Fué suscrito también por Panamá.

H) Protección a la Propiedad Industrial.

- 1) Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda), suscrito en San José, Costa Rica, el 1 de Junio de 1968. Nicaragua depositó su instrumento de ratificación el 6 de Enero de 1969, siendo el único que lo ha hecho. Su vigencia no se ha iniciado.

I) Integración Educativa.

- 1) Acuerdo de Creación de la Confederación de Universidades de Centroamérica y del Consejo Superior Universitario Centroamericano, aprobado en el Primer Congreso Universitario Centroamericano, celebrado en San Salvador, El Salvador, el 20 de Septiembre de 1948.
- 2) Declaración de Principios acerca de los Fines y Funciones de la Universidad Contemporánea y en especial

de las Universidades de Centroamérica, aprobada en el Primer Congreso Universitario Centroamericano, celebrado en San Salvador, El Salvador, del 15 al 24 de Septiembre de 1948.

- 3) Carta de las Universidades Latinoamericanas, aprobada en el Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas, celebrado en Guatemala, 24 de Septiembre de 1949.
- 4) Convenio de las Universidades Centroamericanas para la Integración Regional de la Educación Superior Centroamericana, suscrito en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 2 de Diciembre de 1961.
- 5) Convenio de las Universidades Centroamericanas para el Fomento de Intercambio de Profesores, Investigadores, Estudiantes, Graduados y Personal Administrativo, suscrito en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 2 de Diciembre de 1961.
- 6) Plan para la Integración Regional de la Educación Superior Centroamericana. Se incluyen acuerdos y resoluciones aprobadas en la Segunda Reunión Extraordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano, celebrada en San José, Costa Rica, el 22 y 23 de Junio de 1961, con modificaciones introducidas en la Sexta Reunión Ordinaria, celebrada en Guatemala, del 1 al 4 de Diciembre de 1961:
  - a) Recomendaciones para las Universidades Centroamericanas aprobadas por el Consejo Superior Universitario Centroamericano, en cuanto al establecimiento de los Estudios Generales.

- b) Requisitos mínimos para el establecimiento de cur  
sos postgraduados.
  - c) Acuerdos concretos del Consejo Superior Universi-  
tario para la Integración de la Educación Supe-  
rior en el nivel pregraduado y postgraduado.
  - d) Acuerdo para la unificación de los títulos y gra-  
dos que las Universidades Centroamericanas expi-  
den.
  - e) Acuerdo del Consejo Superior Universitario Cen-  
troamericano en cuanto a la especialización de  
las revistas que actualmente publican las Univer-  
sidades Centroamericanas.
  - f) Criterios que deben presidir la formulación de  
las Leyes Generales para las Universidades Priva-  
das.
  - g) Relaciones entre el Plan de Integración Educativa  
y el Plan de Integración Económica del Istmo Cen-  
troamericano.
  - h) Autorización para que la Secretaría Permanente re  
alice gestiones a favor del Plan de Integración.
  - i) Estudios sobre la población universitaria y la de  
manda de Profesionales.
  - j) Estructura, funciones y procedimiento de la Comi-  
sión Coordinadora del Plan de Integración Regio-  
nal.
- 7) Convenio Centroamericano sobre Unificación Básica de  
la Educación, suscrito en San Salvador, El Salvador,  
el 22 de Junio de 1962. En vigor para los cinco paí-  
ses centroamericanos.

- 8) Convenio sobre el Ejercicio de Profesiones Universitarias y reconocimiento de Estudios Universitarios, suscrito en San Salvador, El Salvador, el 22 de Junio de 1962. En vigor para Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala. Abroga los tratados centroamericanos sobre la materia suscritos en 1902, 1923 y 1942.
- 9) Bases Fundamentales de la Organización del Consejo Superior Universitario Centroamericano, aprobadas en la VII Reunión Ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano, celebrada en San José, Costa Rica, del 13 al 15 de Diciembre de 1962.

J) Integración Política.

- 1) Carta de la Organización de Estados Centroamericanos -ODECA-, llamada también Nueva Carta de San Salvador, suscrita en Panamá el 12 de Diciembre de 1962. Su vigencia se inició el 30 de Marzo de 1965. En vigor para los cinco países centroamericanos. Se encuentra en actual proceso de reforma.
- 2) Convenio de Constitución del Consejo Centroamericano de Defensa, suscrito en Guatemala, el 14 de Diciembre de 1963.
- 3) Protocolo para la incorporación de Panamá a los órganos subsidiarios de la ODECA: Consejo Centroamericano de Trabajo y Previsión Social, Consejo Centroamericano de Salud Pública y Consejo Centroamericano de Turismo, suscrito en San Salvador, El Salvador, el 16 de Junio de 1966, y depositados en Septiembre del mismo año.

K) Organizaciones Centroamericanas.

- 1) Convenio para la Creación de un Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria -OIRSA-, suscrito en San Salvador, El Salvador, el 29 de Octubre de 1953. En vigor para los cinco países centroamericanos, México y Panamá.
- 2) Convenio Básico del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-, suscrito en Guatemala, el 17 de Diciembre de 1953. En vigor para los cinco países centroamericanos y Panamá.
- 3) Convenio para el Establecimiento del Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial -ICAITI-, suscrito en Julio de 1955. La Institución se estableció el 20 de Enero de 1956 en la ciudad de Guatemala, Guatemala. En vigor para los cinco países centroamericanos.
- 4) Convenio para el Establecimiento de la Escuela Superior de Administración Pública América Central -ESAPAC-, suscrito en Guatemala el 22 de Febrero de 1957. Transformada en Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP-, por convenio suscrito en San José, Costa Rica, el 17 de Febrero de 1967. En vigor para los cinco países centroamericanos y Panamá, el que se adhirió al mismo el 26 de Abril de 1961.

L) Otros instrumentos y documentos importantes.

- 1) Estatutos de Constitución de la Asociación Centroamericana de Cooperación Intermunicipal, aprobados

- como Resolución número 7 en la Primera Reunión de Municipalidades Centroamericanas, celebrada en Quezaltenango, Guatemala, del 13 al 17 de Mayo de 1958.
- 2) Reglamento del Primer Congreso Centroamericano de Congresos, aprobado como resolución IV el 10 de Diciembre de 1962, en el Primer Congreso Centroamericano de Congresos, celebrado en la ciudad de Guatemala, Guatemala.
  - 3) Carta Centroamericana de Trabajo, aprobada por resolución XXII del Primer Congreso Centroamericano de Congresos, celebrado en la ciudad de Guatemala, Guatemala, del 9 al 14 de Diciembre de 1962.
  - 4) Declaración de Centroamérica, aprobada el 19 de Marzo de 1963, en la Reunión de Presidentes de Centroamérica, Estados Unidos y Panamá, celebrada en San José, Costa Rica.
  - 5) Declaración Conjunta de Cuatro Gobiernos Centroamericanos, suscrita por los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en Septiembre de 1963.

FUENTES:

- 1) Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA): nómina de instrumentos Multilaterales de la Integración Económica Centroamericana.
- 2) SIECA: Centroamérica: Resumen y estado actual de los Tratados al 26 de Enero de 1968 (I y II). En "Derecho



de la Integración", número 3, Octubre de 1968. INTAL, pp. 181 a 198.

- 3) SIECA: Resumen y estado actual de los Tratados de Integración Económica Centroamericana, al 14 de Marzo de 1969. Estudio presentado a la Reunión de Abogados Latinoamericanos, celebrada en San José, Costa Rica, del 18 al 23 de Marzo de 1969.
- 4) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Derecho de la Integración Latinoamericana". Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1969.
- 5) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Instrumentos relativos a la Integración Económica en América Latina", Washington, D.C., 1964.
- 6) Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales: "Instrumentos relativos a la Integración Económica en América Latina", 2ª Edición. Washington, D.C., 1968.
- 7) Villagrán Kraner, Francisco: "Los instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana", Anexo. Estudio contenido en "Derecho de la Integración", número 3, Octubre de 1968. INTAL, Buenos Aires, Argentina, pp. 54 a 58.
- 8) Villagrán Kraner, Francisco: "Aspectos Sociales y Políticos de la Integración Centroamericana", Anexo. Estudio contenido en "Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Económica Centroamericana", publicación del Colegio de Abogados de Guatemala, Guatemala, 1967, pp. 91-94.

- 9) Fernández-Shaw, Félix: "La Integración de Centroamérica". Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1965.
  - 10) Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala: "Pactos Multilaterales Centroamericanos y Regionales". Tratados y Convenciones Internacionales vigentes para Guatemala, Volumen III, Guatemala, Enero de 1960.
-

BIBLIOGRAFIA

ALEMANN, Roberto T.: "Los conceptos jurídico-económicos de preferencia, zona de libre comercio, unión aduanera, asociación económica, comunidad económica, mercado común y unión económica", en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966. Dedicado a la ALILA L C y a los problemas jurídicos de la integración Latinoamericana, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966.

ALVAREZ GILARDOUI, Alvaro: "Un ejemplo de integración económica en América Latina: El proyecto Salto Grande en el Río Uruguay", en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966.

ARAGAO, José María: "Integración, dependencia y desarrollo: reflexiones en torno de "Subdesarrollo y estancamiento en América Latina". En "Revista de la Integración", número 1, noviembre 1967. I N T A L, Buenos Aires, Argentina, 1967.

ARGUETA FIGUEROA, Hugo Enrique: "Los incentivos fiscales en la Integración Económica Centroamericana. Las implicaciones jurídicas del Convenio", contenido en

"Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Económica Centroamericana", publicación del Colegio de Abogados de Guatemala, imprenta Eros, Guatemala, Centro América, 1967.

ASOCIACION GUATEMALTECA DE DERECHO INTERNACIONAL: Revista anual números 3 y 4 de Enero de 1959 y Noviembre de 1963 respectivamente. Centro Editorial "José de Pineda Ibarra" del Ministerio de Educación Pública, Guatemala, Centro América.

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (A L A L C):  
"Mecanismo de las negociaciones". CEP/Repartido 1007.1. Secretaría, 28 de Mayo de 1968. En "Derecho de la Integración", número 3, Octubre de 1968, I N T A L. Buenos Aires, Argentina.

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (A L A L C):  
"Anuario de los países de A L A L C, 1ª. Edición. Editora: Instituto de Publicaciones y Estadísticas, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1966.

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (A L A L C):  
Establecimiento de un mecanismo profesional para resolver las controversias entre las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. Resolución 165 (CNI - 1 / III - E) del Consejo de Ministros. En "Derecho de la Integración", número 1, Octubre 1967. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (A L A L C):

Reglamento de un mecanismo provisional para resolver las controversias entre las Partes Contratantes. Resolución 126 del Comité Ejecutivo Permanente. En "Derecho de la Integración", número 1, Octubre 1967, I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (A L A L C): Proyecto de Protocolo para la solución de controversias. Resolución 172 (CNI - I/III - E) del Consejo de Ministros. En "Derecho de la Integración", número 1, Octubre 1967, I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (A L A L C): Aproximación de las legislaciones nacionales. Documento A L A L C/CM - II/ VI - E / dc. 8. Secretaría, 21 de Agosto de 1967. En "Derecho de la Integración", número 2, Abril 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (ALALC): Aproximación de las legislaciones. Documento A L A L C/ Resolución 193 (CNI - II/VI - E) del 2 de Setiembre de 1967, del Consejo de Ministros. En "Derecho de la Integración", número 2, Abril 1968, I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

BALASSA, Bela: "La Teoría de la Integración Económica Latinoamericana", Fondo de Cultura Económica, México, 1966.

BALASSA, Bela: "Hacia una teoría de la integración económica". En "Integración de América Latina. Experiencia

ciencia y perspectivas". Edición preparada por Miguel S. Wionczek. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION: Documentos y estudios varios. (mimeografiados).

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID): "Factores para la Integración Económica Latinoamericana". Fondo de Cultura Económica, México, 1966.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID): "Aspectos financieros de la integración económica", Caracas, Venezuela, Abril de 1963.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID): "Hacia un programa de integración fronteriza colombo-ecuatoriana", Washington, 1966.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID): "La Educación avanzada y el desarrollo de América Latina", Washington, 1965.

BERMEJO GONZALEZ, Julio Roberto: "La Integración: Factor de Desarrollo. La Integración Centroamericana". Trabajo presentado a la Sociedad de Estudios Internacionales. Madrid, España, Abril de 1969.

BERMEJO GONZALEZ, Julio Roberto: "La Supranacionalidad en el Mercado Común Centroamericano". Memoria de Graduación presentada en la Escuela Diplomática de España, Promoción 1967-69. Madrid, España, Junio de 1969.

BERTRAND GALINDO, Francisco: "Breve Análisis del Reglamento sobre Procedimientos para Resolver Conflictos". Documento presentado como colaboración a las discusiones de la IV Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en San Salvador, El Salvador, en Febrero de 1969. En "Derecho de la Integración", número 4, Abril de 1969. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

BERTRAND GALINDO, Francisco; CASTRILLO ZELEDON, Mario y VILLAGRAN KRAMER, Francisco: "Procedimientos para Resolver Conflictos", Memorandum del Departamento de Integración de la Facultad de Derecho, Universidad de El Salvador, San Salvador, 10 de Enero de 1968. En "Derecho de la Integración", número 3, Octubre de 1968, I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

CAHIER, Philippe: "Derecho Diplomático Contemporáneo". Ediciones Rialp, S.A., Madrid, España, 1965.

CATALANO, Nicola: "Manual de Derecho de las Comunidades Europeas", I N T A L, Buenos Aires, Argentina, 1966.

CATALANO, Nicola: "Aspectos ideológicos, económicos, políticos y jurídicos de la integración económica europea", en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966.

CATALANO, Nicola: "La posición del Derecho Comunitario dentro del Derecho de los Estados Miembros". Informe

al Seminario de Brujas, 1965. Contenido en "Problemas Jurídicos e Institucionales de la Integración Europea. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional". Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1967.

CARIAS, M.V.: "La Integración Económica Centroamericana", Editorial Universitaria, San Salvador, El Salvador, 1964.

CARDENAS, Emilio J.: "Hacia un Derecho Comunitario Latinoamericano". En "Derecho de la Integración", número 1, Octubre 1967. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

CARDENAS, Emilio J. y PEÑA, Félix: "Los acuerdos subregionales y el Tratado de Montevideo". En "Derecho de la Integración", número 2, Abril 1968, I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio: "La crisis constitucional de las Naciones Unidas". Colección de estudios internacionales, Serie F. Problemas actuales, número 2. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, España, 1966.

CHILLIDA, Segrelles: "Introducción al Nuevo Derecho Europeo". Madrid, España, 1962.

CENTROAMERICA. SEGURIDAD SOCIAL: Convenio Multilateral de Seguridad Social, suscrito por los Gobiernos del



Mercado Común Centroamericano y Panamá, en San José, Costa Rica, el 14 de Octubre de 1967. En "Derecho de la Integración", número 3, Octubre 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS (CEMLA):

"Coordinación de la Banca Central de América Latina", México, 1965.

CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS (CEMLA):

"Los Mercados de Capitales en América Latina": México, 1966.

COLEGIO DE ABOGADOS DE GUATEMALA: "Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Económica Centroamericana", imprenta Eros, Guatemala, Centro América, 1967.

COLOM ARGUETA, Manuel y PANCIANO Leonel: "Necesidad de un convenio centroamericano que contenga una carta social del trabajador de Centro América", contenido en "Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Económica Centroamericana", publicación del Colegio de Abogados de Guatemala, imprenta Eros, Guatemala, Centro América, 1967.

COMITE DE COOPERACION ECONOMICA DEL ISTMO CENTROAMERICANO (Diversas Reuniones): Conclusiones e Informes.

COMITE INTERAMERICANO DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO:

(CIAP) "La Reforma Monetaria Internacional y América Latina". Informe del Grupo de Expertos al CIAP.

Unión Panamericana, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C., 1966.

COMISION DE DERECHO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS:

Actas y Conclusiones de diversas reuniones.

COMISION JURIDICA DEL PARLAMENTO EUROPEO: "La Primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho de los Estados Miembros". Informe al Parlamento Europeo. Contenido en: "Problemas Jurídicos e Institucionales de la Integración Europea. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional". Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1967.

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (C E P A L): "El proceso de industrialización en América Latina". Naciones Unidas, Nueva York, 1965.

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA (C E P A L): "Estudio económico de América Latina, 1965", Santiago, Chile, 1966.

CONGRESO JURIDICO CENTROAMERICANO (Segundo): San José, Costa Rica, 1964: Resoluciones, Acuerdos y Recomendaciones.

CONGRESO CENTROAMERICANO DE CONGRESOS (Segundo). Managua, Nicaragua, 29 de Enero al 2 de Febrero de 1968: Resoluciones.

CONSEJO ECONOMICO CENTROAMERICANO; Actas de diversas reuniones.

niones, Resoluciones, Recomendaciones y Reglamentos dictados en ejercicio de sus funciones.

CONSEJO ECONOMICO CENTROAMERICANO: Reglamento sobre Procedimiento para Resolver Conflictos, Anexo del Acta Vigésimotercera, de la Décimoquinta Reunión, celebrada en San Salvador, El Salvador el 27 de Marzo de 1968. En "Derecho de la Integración", número 3, Octubre, 1968, I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

CONSEJO EJECUTIVO DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA: Actas de diversas Reuniones, Resoluciones, Recomendaciones y Reglamentos dictados en el ejercicio de sus funciones.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, Instituto Francisco de Vitoria: Revista Española de Derecho Internacional, números 1 y 2, año 1969.

CONSTANTINESCO, Leontino: "La supranacionalidad de las Comunidades Europeas", en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966.

CONSTANTINESCO, Leontino: "Las relaciones del Derecho Comunitario con el Derecho de los Estados Miembros de la C E E". En Derecho de la Integración, número 2, Abril 1968, I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

CORTE DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: "Jurisprudencia". En "Problemas Jurídicos e Institucionales

- de la Integración Europea. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional. Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1967.
- DELL, Sidney: "Bloques de Comercio y Mercados Comunes", Fondo de Cultura Económica, México, 1965.
- DELL, Sidney: "Apreciaciones sobre el funcionamiento del Tratado de Montevideo". En "Integración de América Latina. Experiencias y perspectivas". Edición preparada por Miguel S. Wionczek. Fondo de Cultura Económica. México, 1964.
- DERINGER, Arved: "El sistema de la competencia en la Comunidad Económica Europea". En "Derecho de la Integración", número 2, Abril 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.
- DEUTSCH, K.W., BURRELL, S.A., KANN, R.A., LEE Jr. M., LICHTERMAN, M., LINDGREN, R.E., LOEWENHEIM, F.L., VAN WAGENEN, R.W.: "Integración y Formación de Comunidades Políticos. Análisis sociológico de experiencias históricas". Buenos Aires, Argentina, 1966.
- DE VISSCHER, Charles: "Teorías y realidades en Derecho Internacional Público". Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1962.
- DIAZ, Ramón P. y RODRIGUEZ GIGENA, Eusebio: "Los países de menor desarrollo relativo", IV, 1965/1966, Monte -

video, República Oriental del Uruguay, 1966.

DUVERGER, Maurice: "Sociología Política". Demos-- Biblioteca de Sociología. Ediciones Ariel, S.A., Barcelona, España, 1968.

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR: "Centroamérica: movilidad de personas". Documento presentado por el Departamento de Integración a la IV Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, que se celebró en San Salvador en Febrero de 1969. En "Derecho de la Integración", número 4, Abril 1969. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

FERNANDEZ-SHAW, Félix: "La Integración de Centroamérica", Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, España, 1965.

FERNANDEZ-SHAW, Félix: "Panamá y sus relaciones Centroamericanas". Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, España, 1964.

FONSECA, Gautame: "Las fuentes del Derecho Común Centroamericano". En "Derecho de la Integración", número 1, Octubre 1967. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

FONSECA, Gautame: "La Evolución Institucional en el Mercado Común Centroamericano". Publicación mimeografiada. Tegucigalpa, D.C., Honduras, Junio de 1965.

FRESARD RIOS, Roberto: "El Tratado que creó la Corpora --

ción Andina de Fomento", en "Derecho de la Integración", número 3, Octubre de 1968, I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

FRIEDMANN, Wolfgang: "La nueva estructura del Derecho Internacional". Editorial F. Trillas, S.A., México, D.F., 1967.

FUENTES IRUZOZQUI, Manuel: "La Integración Económica de América Latina". Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, España, 1967.

GALLARDO, Ricardo: "Las Constituciones de El Salvador" Tomo II, Derecho Constitucional Salvadoreño, volumen 14, tomo II de "Las Constituciones Hispanoamericanas", Publicación bajo la dirección de Manuel Fraga Iribarne, Madrid, España, 1961.

GARCIA AMADOR, F.V.: "Principios de Derecho Internacional que rigen la responsabilidad". Ediciones de la Escuela de Funcionarios Internacionales, Madrid.

GARCIA AMADOR, F. V.: "La Integración Latinoamericana", en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966. Dedicado a la A L A L C y a los problemas jurídicos de la integración económica latinoamericana, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966.

GARCIA AMADOR, F.V.: "Introducción al estudio del Derecho Internacional contemporáneo". Ediciones de la Escuela de Funcionarios Internacionales. Madrid, 1959.

GARCIA AMADOR, F.V.: "Responsabilidad del Jurista Lati-

noamericano frente a la Integración", Separata de -  
"Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales  
les, Cuarta Epoca, vol. V, año 1966, número 5°. Universidad  
versidad de Chile. Editorial Jurídica de Chile, 1967.

GARCIA ARIAS, Luis: "Corpus Iuris gentium", Zaragoza, -  
España, 1968.

GARCIA BAUER, Carlos: "El Procedimiento ex-exquo et bono",  
en Revista de la Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional,  
anual, número 3, Enero de 1959.

GARCIA LAGUARDIA: "El Tratado General. Aspectos Constituciones  
cionales", contenido en "Aspectos Jurídicos e Instituciones  
cionales de la Integración Económica Centroamericana",  
publicación del Colegio de Abogados de Guatemala, Imprenta  
ta Eros, Guatemala, Centro América, 1967.

GARCIA REINOSO, Plácido: "Aspectos jurídicos de la Asociación  
ción Latinoamericana de Libre Comercio", en Anuario Uruguayo  
guayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966, Montevideo  
deo, República Oriental del Uruguay, 1966.

GARCIA REYNOSO, Plácido: "El Mercado Común Latinoamericano",  
no", Banco Nacional de México, México, 1959.

GAUDET, Michel: "Información sumaria sobre la "cuestión  
constitucional", en los seis Estados Miembros de las  
Comunidades Europeas", en "Mesa Redonda sobre la Integración  
gración de América Latina y la cuestión constitucional  
nal", Universidad Nacional, Bogotá, Colombia, 6-8 de  
Febrero 1967. Informe de la Secretaría General. Pu-

blicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales.

GONZALEZ DEL VALLE, Jorge: "Sistema de Pagos y Comercio intercentroamericano". En "Integración de América Latina. Experiencias y perspectivas". Edición preparada por Miguel S. Wionczek. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

GRONDONA, Mariano: "La integración en el contexto histórico-filosófico del siglo XX". En "Revista de la Integración", número 1, noviembre de 1967. I N T A L, Buenos Aires, Argentina, 1967.

HADWEN, Jonh G y KAUFMANN Johan: "Como decide la O.N.U." Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967.

HALLSTEIN, Walter: "La Comunidad Europea-Nuevo Orden Jurídico". Contenido en: "Problemas Jurídicos e Institucionales de la Integración Europea. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional". Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1967.

HALLSTEIN, Walter: "La Unificación de Europa". I N T A L- B I D, Buenos Aires, Argentina, 1966.

HASS, E.B., SCHMITTER Ph. c: "The pobitics of economics in Latin American regionalism; the Latin American - Free Trade Association After your years of operation", Denver, University. Social Science Fundation and Graduate School of International Studies, 1965.



HAY, Peter: "Federalism and supranational Organizations".

University of Illinois Press., Urbana, 1966.

HERRARTE, Alberto: "La Unión de Centroamérica, tragedia y esperanza". Ensayo político-social sobre la realidad de Centro América. 2ª Edición. Colección documentos número 26. Centro Editorial "José de Pineda Ibarra", del Ministerio de Educación Pública, Guatemala C. A., 1964.

HERRARTE, Alberto: "La jurisdicción Doméstica y las Naciones Unidas", en Revista de la Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional, anual, número 4, Noviembre de 1963. Centro Editorial "José de Pineda Ibarra", del Ministerio de Educación Pública, Guatemala, Centro América.

HERRERA, Felipe: "El Banco Interamericano de Desarrollo y la Integración Económica de América Latina". En "Integración de América Latina. Experiencias y perspectivas". Edición preparada por Miguel S. Wionczek. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

HIRSCHMAN, A.O.: "La estrategia de desarrollo económico", Fondo de Cultura Económica, 2ª Edición, México, 1964.

HOUIN, Roger: "Problemas jurídicos planteados por el establecimiento de las sociedades comerciales en la C E E". En "Derecho de la Integración", número 1, Octubre 1967. I N T A I, Buenos Aires, Argentina.

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE DERECHO COMPARADO: "Bole-

tín", Tegucigalpa, Honduras.

INSTITUTO HISPANO-LUSO-AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL:

Ante-Proyectos de Ponencias a diversos Congresos. Publicaciones de la Secretaría General, Madrid.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES:

"Problemática Jurídica e Institucional de la Integración de América Latina", ensayo de sistematización. Edición Provisional. Washington, D.C., 1967.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES:

"Derecho Comunitario Centroamericano". Ensayo de Sistematización. Impreso por Trejos Hnos., San Jose, Costa Rica, A.C., 1968.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES:

"Mesa Redonda sobre la Integración de América Latina y la cuestión constitucional". Universidad Nacional de Bogotá, Colombia, 6-8 de Febrero de 1967. Informe de la Secretaría General. Washington, D.C., 1967.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES:

"Derecho de la Integración Latinoamericana", ensayo de sistematización. Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1969.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES:

"Seminario sobre Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio", Montevideo, 18-22 Octubre 1965. Informe de la Secretaria General. Washington, D.C. 1966.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES: "Reunión sobre la Enseñanza e Investigación de la Problemática Jurídica e Institucional de la Integración Latinoamericana", Buenos Aires, 25-29 Noviembre 1965. Informe de la Secretaria General. Washington, D. C., 1966

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES: "Mesa Redonda de Profesores de Derecho Internacional del Hemisferio Occidental", San José, Costa Rica, Marzo 31 - Abril 5, 1963. Informe Final. Washington, D. C. 1963.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES: "Seminario sobre Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Centroamericana", Centro de Altos Estudios Internacionales, Universidad de Miami, 17-21 Agosto 1964. Informe de la Secretaría General. Washington, D. C. 1964.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES: "El Sistema Interamericano. Estudio sobre su desarrollo y fortalecimiento". Ediciones del Centro de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos del Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, 1966.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES: "Instrumentos relativos a la Integración Europea. Tratado que establece la Comunidad Económica Europea y otros instrumentos". Washington, D. C., 1965.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES: "Instrumentos relativos a la Integración Europea. Tratado que establece la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y otros instrumentos". Washington, D.C., 1965.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES: "Instrumentos relativos a la Integración Europea. Tratado que establece la Comunidad Europea de Energía Atómica y otros instrumentos". Washington, D.C., 1965.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTUDIOS JURIDICOS INTERNACIONALES: "Problemas Jurídicos e Institucionales de la Integración Europea. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional". Washington, D.C., 1967.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA: "Economía", Revista, 1964-1965, Guatemala.

INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA (I N T A L): "Boletín de Integración", Buenos Aires, Argentina, 1965-1966 - 1967 - 1968.

INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA (I N T A L): "Derecho de la Integración", números 1, 2, 3 y 4 de Octubre de 1967, Abril de 1968, Octubre de 1968, y Abril de 1969 respectivamente, Buenos Aires, Argentina.

INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA (I N T A L):

"Revista para la Integración". Número 1 a 4, Noviembre 1967, Mayo 1968, Noviembre 1968, Mayo 1969, respectivamente. Buenos Aires, Argentina.

I

INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA (I N T A L):

"La aproximación de las legislaciones y el proceso de integración económica". Editorial de "Derecho de la Integración", número 2, Abril 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA (I N T A L):

"La flexibilidad del Tratado de Montevideo y la integración Económica en la ALA IL C". Editorial de "Derecho de la Integración", número 4, Abril, 1969. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

JENKS, C. Wilfred: "El Derecho Común de la Humanidad", Editorial Tecnos, Colección de Ciencias Sociales, serie de Relaciones Internacionales. Madrid, España, 1968.

JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo: "Las normas del Tratado de Montevideo que prevén su evolución hacia un Mercado Común, en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966.

JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo: "Derecho Constitucional de las Naciones Unidas", comentario teórico-práctico de la Carta. Ediciones de la Escuela de Funcionarios Internacionales. Madrid, España, 1958.

JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo y PAOLILLO, Felipe H. "Contratos de la legalidad de los actos comunitarios. Interpretación unitaria del Derecho de Integración". En "Derecho de la Integración", número 1, Octubre 1967. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

JIMENEZ DE ARECHAGA, Eduardo: "Curso de Derecho Internacional Público", Tomo I. Centro de Estudiantes de Derecho, Montevideo, Uruguay, 1959.

KESTLER FARNES, Max: "El Poder y el Derecho en el proceso de integración de la Comunidad Internacional", en Revista de la Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional, número 4, Noviembre de 1963. Centro Editorial "José de Pineda Ibarra" del Ministerio de Educación Pública, Guatemala, Centro América.

KITAMURA, Hiroshi: "La teoría económica y la integración económica de las regiones subdesarrolladas". En "Integración de América Latina. Experiencias y perspectivas". Edición preparada por Miguel S. Wianczek. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

LAGOS, Gustavo: "El rol político de las organizaciones económicas regionales en América Latina". En "Revista de la Integración", número 1, Noviembre de 1967. I N T A L, Buenos Aires, Argentina, 1967.

LAGRANGE, Maurice: "La interpretación unitaria del derecho de las Comunidades Europeas. Aspecto de la acción prejudicial", en "Derecho de la Integración", número 3,

Octubre de 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

LAGRANGE, Maurice: "La Primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho Nacional". Informe al Seminario de Brujas, 1965. Contenido en "Problemas Jurídicos e Institucionales de la Integración Europea. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional". Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C. 1967.

LAMBERT, Jacques: "América Latina. Estructuras sociales e instituciones políticas". Demos-Colección de Ciencia Política. Ediciones Ariel, S.A., Barcelona, España, 1964.

LARIS CASILLAS, Jorge: "La Integración Económica Latinoamericana", México, 1960.

LOUSSOUARU, Iván: "El derecho de establecimiento en la Comunidad Económica Europea", en "Derecho de la Integración", número 3, Octubre de 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

LUPINACCI, Julio César: "El "status" de miembro de la A L A L C," en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966.

MAGARIÑOS DE MELLO, Mateo: "Naturaleza y caracteres jurídicos del Tratado de Montevideo y de la A L A L C", en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV,

1965/1966, Montevideo, República Oriental de Uruguay, 1966.

MAGARIÑOS, Gustavo: "Apreciaciones sobre el funcionamiento del Tratado de Montevideo". En "Integración de América Latina. Experiencias y perspectivas". Edición preparada por Miguel S. Wionczek. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

MARTINEZ MORENO, Alfredo: "Aspectos Jurídicos de las Integraciones Económicas". Ante-Proyecto de Ponencia al Quinto Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, Santiago de Compostela 3-12 Octubre 1966. Publicación de la Secretaría General, Madrid-Zaragoza, 1966.

MAROTTA RANGEL, Vicente: "Los conflictos entre el Derecho interno y los Tratados Internacionales". Ante-Proyecto de Ponencia al Sexto Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, Caracas-Mérida, 3-12 Octubre 1.967. Publicación de la Secretaría General, Madrid-Zaragoza, 1967.

MAYOBRE, J.A., HERRERA, Felipe, SANZ DE SANTAMARIA, Carlos y PREBISH, Raúl: "Hacia la Integración Acelerada de América Latina. Propositiones a los Presidentes Latinoamericanos". Fondo de Cultura Económica, México, 1965.

MEADE, J.E.: "Problemas de la Unión Económica", Aguilar, Buenos Aires, Argentina, 1957.



MILLAN, J.A.: "La Integración Económica Centroamericana y su influencia en la expansión industrial de México, México, 1963.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA: "Proyecto de bases de la Comunidad Centroamericana. Documento presentado a los Ministros de Relaciones Exteriores del Istmo Centroamericano, en Diciembre de 1963. Publicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Guatemala, C.A., 1964.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA: "Proyecto de Carta de la Comunidad Centroamericana". Proyecto elaborado por Guatemala y presentado al Consejo Ejecutivo de la O D E C A. Publicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guatemala, C.A., 1965.

MIKESELL, Raymond F.: "El financiamiento externo e integración Latinoamericana". En "Integración de América Latina. Experiencias y perspectivas". Edición preparada por Miguel S. Wianczek. Fondo de Cultura Económica. México, 1964.

MENGOUÏ, Luigi: "La libre circulación de la mano de obra en la C E E". En "Derecho de la Integración", número 1, Octubre 1967. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

MOLINA ORANTES, Adolfo: "La Operación Panamericana", en Revista de la Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional, anual, número 3, Enero de 1959. Centro Editorial José de Pineda Ibarra", del Ministerio de

Educación Pública, Guatemala, Centro América.

MOSCARELLA, Joseph: "La Integración Económica Centroamericana". En "Integración de América Latina. Experiencias y perspectivas", Edición preparada por Miguel S. Wionczek. Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

MUNCH, Fritz: "Competencia de las Jurisdicciones Nacionales. Su función en la aplicación del Derecho Comunitario". Informe al Seminario de Brujas, 1965. Contenido en: "Problemas Jurídicos e Institucionales de la Integración Europea. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional". Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1967.

MYRDAL, G.: "Solidaridad o desintegración", 2ª. Edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1963.

MYRDAL, Gunnar: "Solidaridad o desintegración", Fondo de Cultura Económica, 2ª. Edición, México, 1963.

NACIONES UNIDAS: "Expansión del Comercio y Cooperación Económica entre Países en Desarrollo". Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. Ginebra, 1966.

NACIONES UNIDAS: "Hacia una nueva Política Comercial en Pro del Desarrollo". Informe del Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Nueva York, 1964.

ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA-1962);

"Carta Constitutiva", en Revista de la Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional, anual, número 4, Noviembre de 1963. Centro Editorial "José de Pineda Ibarra" del Ministerio de Educación Pública, Guatemala, Centro América.

ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA): Acta final de la Segunda Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la O D E C A, San José, Costa Rica, 21-26 de Noviembre 1966. Publicación de la Secretaría de la República, Boletín número 983. Guatemala, 29 Noviembre de 1966.

ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA): Acta final de la Tercera Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en Managua, Nicaragua, 11-15 de Diciembre 1967. Publicación mimeografiada de la Secretaría General.

ORGANIZACION DE ESTADOS CENTROAMERICANOS (ODECA): Acta final de la Primera Conferencia Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrada en la ciudad de Guatemala, 25-30 Octubre de 1965. Editorial del Ejército, Ministerio de la Defensa Nacional. Guatemala, Diciembre 1965.

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS: "El Régimen de las Inversiones Privadas en el Mercado Común Centroamericano y en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Antecedentes para un estudio sobre "trato común" ". Unión Panamericana, Secretaría General.

Washington, D.C., 1964.

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS: "Declaración de los Presidentes de América". Reunión de Jefes de Estados Americanos, Punta del Este, Uruguay, 12 al 14 de Abril de 1967. Unión Panamericana, Washington, D.C., 1967.

ORREGO VICUÑA, Francisco: "Las reformas constitucionales en relación con el principio de supranacionalidad", contenido en "Examen crítico de los proyectos de reforma constitucional", Escuela de Derecho, Universidad de Chile, Octubre de 1965.

PAOLILLO, Felipe H.: "Estructura orgánica de la A L A L C", en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966.

PAOLILLO, Felipe H.: "Repartición de competencias y poderes entre la A L A L C y los Estados Miembros". En "Derecho de la Integración", número 2, Abril 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

PEREZ PEREZ, Alberto: "Mecanismos de excepción a las disposiciones generales del Tratado de Montevideo", en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966.

PERROUX, François: "¿Quién integra? ¿En beneficio de

quién se realiza la integración?", número 1, noviembre de 1967, I N T A L, Buenos Aires, Argentina, 1967.

PESCATORE, Pierre: "Distribución de competencias y de poderes entre los Estados Miembros y las Comunidades Económicas". En "Derecho de la Integración", número 1, Octubre 1967. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

PONTAZA, Oscar: "El Sistema Financiero en el Desarrollo Centroamericano". Tesis Doctoral, Universidad de Madrid, 1965. Editorial Martí, Guatemala.

PONCE, V., Manuel Angel: "Análisis jurídico de la sistemática técnico-formal del Tratado de Managua", contenido en "Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Económica Centroamericana", publicación del Colegio de Abogados de Guatemala, imprenta Eros, Guatemala, Centro América, 1967.

PREBISCH, Raúl: "Los obstáculos al Mercado Común Latinoamericano". En "Integración de América Latina. Experiencias y perspectivas". Edición preparada por Miguel S. Wionczek. Fondo de Cultura Económica. México, 1964.

QUÍÑONEZ AMEZQUITA: "Estado actual de la Integración centroamericana y sus aspectos jurídico-políticos", contenido en "Aspectos Jurídicos e Institucionales de la Integración Económica Centroamericana", publicación del Colegio de Abogados de Guatemala, Imprenta Eros, Guatemala, Centro América, 1967.

RENOUVIN, Pierre; DUROSSELLE, Jean Baptiste: "Introducción a la Política Internacional". Ediciones Rialp, S.A., Madrid, España, 1968.

RAMIREZ, Roberto: "La Integración Jurídica Centroamericana". Tegucigalpa, Honduras, Junio 1966.

REUTER, Paul: "Instituciones Internacionales". Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1959.

REUTER, Paul: "Derecho Internacional Público". Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1962.

RODRIGUEZ LARRETA, Daniel: "Papel del sector empresarial en el desenvolvimiento de la A L A L C", en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966

ROSENSTIEL, Francis: "El Principio de Supranacionalidad. Ensayo sobre las relaciones de la Política y el Derecho". Instituto de Estudios Políticos, Madrid, España, 1967.

ROSTOW, W. W.: "Las etapas del Crecimiento Económico". Fondo de Cultura Económica, México, 1961.

RUDA, José María: "Principios de Derecho Internacional relativos a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados". Ante-Proyecto de Ponencia al Séptimo Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, Buenos Aires, 3-12 Agosto, 1969. Publicación de la Secretaría General, Madrid,

1969.

RUIZ MORALES, José Miguel: "La integración económica Iberoamericana, perspectivas y realidades". Discurso de ingreso de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Barcelona, 19 de Abril de 1968. Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, España, 1968.

SANCHEZ-COVISA, Joaquín: "La A L A L C y la Integración Económica Latinoamericana". Publicación de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Landívar de Guatemala, Año II, número 13. Junio de 1967.

SARDA, Juan: "Uniones Aduaneras y Uniones Económicas", Aguilar, Madrid, España, 1953.

SCHACHT ARISTEGUIETA, Efraim: "El Derecho de Desarrollo de los Estados". Ante-proyecto de Ponencia al Séptimo Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, Buenos Aires, 3-12 Agosto 1969. Publicación de la Secretaría General, Madrid, 1969.

SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (S I E C A): Documentos de la Reunión de los Presidentes de Centroamérica, celebrada el 5 de Julio de 1968 en San Salvador, El Salvador. Publicaciones de S I E C A, Guatemala, Julio de 1968.

SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (S I E C A): "Resumen y

Estado Actual de los Tratados de Integración Económica Centroamericana". Documento presentado a la Reunión de Abogados Latinoamericanos, San José, Costa Rica, 18-23 de Marzo de 1969. Guatemala, 14 de Marzo de 1969.

SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (S I E C A): Nómina y estado de vigencia de los Instrumentos Multilaterales de la Integración Económica Centroamericana. Publicación mimeografiada.

SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (S I E C A): "5 años de labores en la Integración Económica Centroamericana". Publicación de S I E C A, 12 de Octubre de 1966.

SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (S I E C A): Quinto Compendio Estadístico Centroamericano. Publicación de S I E C A, Septiembre de 1967.

SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (S I E C A): informe final de la Reunión del grupo de trabajo sobre Procedimiento para Resolver Conflictos. Documento SIECA/CE-GT, REG. CONF/INF, Guatemala 20 de Febrero de 1968. En Derecho de la Integración" número 3, Octubre 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (S I E C A): Convenio Cen -



troamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda), de 1 de Junio de 1968. En "Derecho de la Integración", número 3, Octubre 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (S I E C A): Resumen y estado actual de los Tratados. Documento: SIECA/JURID/2-68, Guatemala, 26 de Enero de 1968. En "Derecho de la Integración", número 3, Octubre 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (S I E C A): Cuadro del Estado de los Tratados a Junio de 1968. En "Derecho de la Integración", número 3, Octubre de 1968. INTAL, Buenos Aires, Argentina.

SEPULVEDA, César: "Las fuentes del Derecho Internacional Americano". Una encuesta sobre los métodos de creación de reglas internacionales en el Hemisferio occidental. Editorial Parrúa, S.A., México, 1969.

SEPULVEDA, César: "Dictamen sobre el anteproyecto de Convenio Centroamericano para la Protección de Marcas, Nombres Comerciales y Anuncios y para la Represión de la Competencia Desleal, preparado por la SIECA, y contenido en documento: SIECA/CE-XXVII/D.T. 9-A, Guatemala, 20 de Mayo de 1967. En "Derecho de la Integra-

ción", número 4, Abril 1969. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

SCHROEDER, Juan Bautista: "Relaciones entre la A L A L C y la Alianza para el Progreso", en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966.

SIDJANSKI, Dusan: "Dimensiones Institucionales de la Integración Latinoamericana". I N T A L-B I D, Buenos Aires, Argentina, 1967.

SKINNER KLEE, Jorge: "Integración Centroamericana y régimen de legalidad", contenido en "Aspecto Jurídicos e Institucionales de la Integración Económica Centroamericana", imprenta Eros, Guatemala, Centro América, 1967.

SOHIER, Marc: "Función del Ejecutivo Nacional y del Legislador Nacional en la Ejecución del Derecho Comunitario". Informe al Seminario de Brujas, 1965. Contenido en: "Problemas Jurídicos e Institucionales de la Integración Europea. Relaciones entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional". Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1967.

STEIN, Eric: "Hacia la Supremacía del Tratado-Constitución por Mandato Judicial en la Comunidad Económica Europea". Contenido en: Problemas Jurídicos e Institucionales de la Integración Europea. Relaciones

entre el Derecho Comunitario y el Derecho Nacional.  
Publicación del Instituto Interamericano de Estudios  
Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1967.

TAMAMES, Ramón: "El Mercado Común Europeo". Guadiana  
de Publicaciones, S.A., Biblioteca Universitaria de  
Economía, número 3. Madrid, España, 1968.

TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA:  
en Revista de la Asociación Guatemalteca de Derecho  
Internacional, anual, número 4, Noviembre de 1963.  
Centro Editorial "José de Pineda Ibarra" del Ministe-  
rio de Educación Pública, Guatemala, Centro América.

URCUYO RODRIGUEZ, Vicente: "La integración económica  
de Centro América. Su origen y evolución." Conferen -  
cia pronunciada en el acto de inauguración de la Feria  
de Muestras Hispanoamericanas de Sevilla. Sevilla,  
16 de Abril de 1968. Ediciones Cultura Hispánica, Ma-  
drid, España. 1968.

VARELA PARACHE, Manuel: "Organización Económica Interna-  
cional". Facultad de Ciencias Políticas y Económicas.  
1967-68.

VERDROSS, Alfred: "Derecho Internacional Público", Agui-  
lar, Madrid, España, 1969.

VILLAGRAN KRAMER, Francisco: "Aspectos Jurídicos e Ins-  
titucionales de la Integración Centroamericana", con-  
tenido en "Aspectos Jurídicos e Institucionales de la

Integración Económica Centroamericana", publicación del Colegio de Abogados de Guatemala, Guatemala, Centro América, 1967.

VILLAGRAN KRAMER, Francisco: "Principales reglas de conexión y de conflicto del Derecho Internacional Privado Guatemalteco", contenido en Revista de la Asociación Guatemalteca de Derecho Internacional, anual, número 3, Enero de 1959. Centro Editorial "José de Pineda Ibarra", del Ministerio de Educación Pública, Guatemala, Centro América.

VILLAGRAN KRAMER, Francisco: "Los Partidos Políticos y Organizaciones Obreras ante la Integración Centroamericana", Revista número 40-41 de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1966.

VILLAGRAN KRAMER, Francisco: "Controles de legalidad e impugnación de los actos de los órganos de la Integración Centroamericana". Documento presentado como colaboración a las discusiones de la IV Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, celebrado en San Salvador, El Salvador, en Febrero de 1969. En "Derecho de la Integración", número 4, Abril 1969. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

VILLAGRAN KRAMER, Francisco: "Los instrumentos legales de la integración económica centroamericana", en "Derecho de la Integración", número 3, Octubre de 1968.

I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

VIEIRA, Manuel Adolfo: "La cláusula de la Nación más favorecida y el Tratado de Montevideo", en Anuario Uruguayo de Derecho Internacional, IV, 1965/1966, Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1966.

VINER, Jacobo: "Comercio Internacional y desarrollo Económico", Editorial Tecnos, S.A., Madrid, España, 1961.

WIONCZEK, Miguel S.: "La historia del Tratado de Montevideo". En "Integración de América Latina". Experiencias y perspectivas". Edición preparada por Miguel S. Wionczek. Fondo de Cultura Económica. México, 1964.

AMADEO, Mario: "Por una Convivencia Internacional. Bases para una comunidad hispánica de Naciones". Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, España, 1956.

CABALEIRO, Ezequiel: "Los Tratados Internacionales". Estudio General de Navarra. Ediciones Rialp, S.A., Madrid, España, 1962.

DIENA, Julio: "Derecho Internacional Público". Casa Editorial Bosch, Barcelona, España, 1948.

PASTOR REDRUEJO, José Antonio: "La Jurisprudencia del Tribunal Internacional de la Haya. Sistematización y Comentarios". Estudio General de Navarra, Ediciones Rialp, S.A., Madrid, España, 1962.

SERENI, Angelo P.: "Le Organizzazioni Internazionali", 1959.

CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio: "Soberanía del Estado y Derecho Internacional". Editorial Tecnos, Madrid, España, 1969.

CONSTITUCIONES, LEYES, TRATADOS, ACUERDOS,

CONVENCIONES Y PROTOCOLOS

CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA, O E A, Documentos Oficiales O E A/Ser. A/2 (español). 2ª Edición 1961. Publicación bajo la dirección de la División Jurídica General, Departamento de Asuntos Jurídicos. Unión Panamericana, Washington, D.C.

CARTA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS, REFORMADA POR EL PROTOCOLO DE BUENOS AIRES EN 1967. Serie sobre Tratados, número 1-3. Unión Panamericana, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos. Washington, D.C., 1968.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA DE 2 DE FEBRERO DE 1956. Contenido en "Constitución y Códigos de la República de Guatemala, segunda edición, 1957.

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1965. Departamento de Recopilación de Leyes, publicaciones del Ministerio de Gobernación. Tipografía Nacional, Guatemala, C.A., 1965.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DE 19 DE DICIEMBRE DE 1957. Decreto número 21 de la Asamblea Nacional Constituyente. Tipografía Nacional, Tegucigalpa,

D.C., Honduras.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL HONDURAS DE 3 DE JUNIO DE 1965. Decreto número 20 de la Asamblea Nacional Constituyente. Tipo-Lito, "Ariston", Tegucigalpa, D.C., Honduras.

CONSTITUCION POLITICA DE EL SALVADOR, DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1950. Contendida en "Gallardo, Ricardo: Las Constituciones de El Salvador", Tomo II, Derecho Constitucional Salvadoreño, volumen 24, tomo II de "Las Constituciones Hispanoamericanas", publicadas bajo la dirección de Manuel Fraga Iribarne, Madrid, España, 1961, pp. 803 a 859.

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, DE 8 DE ENERO DE 1962. Decreto número 6 de la Asamblea Constituyente. Publicaciones de la Secretaría de Información de la Presidencia de la República. Edición 1962. San Salvador, República de El Salvador, Centro América.

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, DE 24 DE OCTUBRE DE 1950, CON LAS REFORMAS VIGENTES. Imprenta Nacional, Managua, D.N., Julio de 1966.

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1949. Imprenta Nacional, San José Costa Rica, 1968.

CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCION DE LA PROPIE-

DAD INDUSTRIAL (marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda), suscrito en San José, Costa Rica el 1 de Junio de 1968. Texto: "Derecho de la Integración", número 3, Octubre 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

CONVENIO MULTILATERAL DE SEGURIDAD SOCIAL, suscrito por los Gobiernos del Mercado Común Centroamericano y Panamá, en San José, Costa Rica, el 14 de Octubre de 1967. Texto: "Derecho de la Integración", número 3, Octubre 1968. I N T A L, Buenos Aires, Argentina.

"INSTRUMENTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION ECONOMICA" EN AMERICA LATINA", publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1964.

"INSTRUMENTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA". Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales, Washington, D.C., 1968.

"INSTRUMENTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION EUROPEA". Tratado que establece la Comunidad Económica Europea y otros instrumentos". Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1965.

"INSTRUMENTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION EUROPEA". Tratado que establece la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y otros instrumentos. Publicación del Ins-



Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1965.

"INSTRUMENTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION EUROPEA". Tratado que establece la Comunidad Europea de Energía Atómica y otros instrumentos. Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1965.

"ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO AMERICANAS", Instrumentos Constitucionales. Publicación del Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Washington, D.C., 1964.

"PACTOS CON EL RESTO DE CENTRO AMERICA". Colección de Tratados de Guatemala, volumen I. Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tipografía Nacional, Guatemala, C.A., Julio de 1939.

PACTOS CON PAISES AMERICANOS. Colección de Tratados de Guatemala, volumen II- parte primera. Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tipografía Nacional, Guatemala, C.A., Febrero de 1943.

PACTOS MULTILATERALES CENTROAMERICANO Y REGIONALES. Tratados y Convenciones Internacionales vigentes para Guatemala, volumen III. Ministerio de Relaciones Exteriores. Tipografía Nacional, Guatemala, C.A., Enero de 1960.

PACTOS CON PAISES EUROPEOS Y ASIATICOS. Colección de

tratados de Guatemala, volumen III. Publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tipografía Nacional, Guatemala, C.A. 1944.

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA. Publicación de las Naciones Unidas. Oficina de Información Pública, Nueva York. Septiembre, 1964.